ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Acta 076

SUMARIO:

04 DE JULIO DE 2008

CAPÍTULOS	TEMA
I	CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
II	INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
III	LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.
IV	HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
V	CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE MAYORÍA Y MINORÍAS, PRESENTADOS POR LA MESA CONSTITUYENTE No. 8 DE JUSTICIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, PARA EL PRIMER DEBATE DE LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES REFERENTES A: JUSTICIA ORDINARIA, SERVICIOS NOTARIALES Y REGISTRAL Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.
VI	CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AMNISTÍAS E INDULTO A: AMNISTÍAS 3.1 SEÑOR CARLOS ALBERTO SIMBAÑA ROMERO. 3.2 CORONEL (SP) CARLOS ARBOLEDA HEREDIA. 3.3. VARIOS CIUDADANOS DEL CANTON VINCES. 3.4. DOCTORA WILMA SALGADO TAMAYO. 3.5. ABOGADO LUIS VILLACIS GUILLÉN. 3.6. EX PRESIDENTE GUSTAVO NOBOA BEJARANO. INDULTO 3.7 INDULTO A LAS PERSONAS QUE TRANSPORTAN PEQUEÑAS CANTIDADES DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES.
VII	DESIGNACIÓN DE UN MIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Acta 076

VIII VOTACIÓN DE LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES PRESENTADOS PARA SEGUNDO DEBATE, REFERENTES A: 5.1 DE LA NATURALEZA Y EL AMBIENTE. 5.2 DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.

IX CLAUSURA DE LA SESIÓN

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Acta 076

ÍNDICE:

CAPÍTULOS	TEMA	PÁGINAS
I	Constatación del quórum.----------	2
II	Instalación de la sesión.----------	2
III	Lectura del Orden del Día.----------	2
IV	Himno Nacional de la República del Ecuador.--	3
V	Conocimiento dc los Informes de Mayoría y Minoría, presentados por la Mesa Constituyente No. 8 de Justicia y Lucha contra la Corrupción, para el Primer Debatc de los textos constitucionales referentes a: Justicia Ordinaria, Servicios Notariales y Registral y Garantías Constitucionales. ----------	4
	Lectura del Informe de Mayoría presentado por la Mesa No. 8 dc Justicia y Lucha contra la Corrupción.----------	4
	Lectura del Informc de Minoría presentado por los asambleistas Catalina Ayala, Mae Montaño y Vicente Taiano, respecto de Justicia Ordinaria-Función Judicial.----------	27
	Continuación de la lectura del Informc de Minoría presentado por los asambleístas Catalina Ayala, Mac Montaño y Vicente Taiano, respecto de Justicia Ordinaria - Función Judicial.----------	28
	Lectura del Informe de Minoría presentado por los asambleistas Catalina Ayala, Mae Montaño y Vicente Taiano, respecto de Notarios Públicos y Registradores de la Propiedad y Mercantil.----	39
	Intervenciones de los asambleístas:	
	Estcvcs Rafael.----------	28,56

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Acta 076

Vega Fernando ---------- 46

Asume la dirección de la sesión el asambleísta César Rodríguez, Segundo Vicepresidente de la Asamblea Constituyente.---------- 50

Reasume la dirección de la sesión el asambleísta Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea Constituyente.---------- 50

Montaño Mae---------- 51,54
Alvarado Rosana---------- 53,132
Mendoza Tito Nilton---------- 60,64,71, 92
Godoy Gina---------- 61,101
Rivera Gabriel---------- 63
Lucio-Paredes Pablo---------- 66
Correa Santiago---------- 69,71
Regalado Rory---------- 73
Roldós León---------- 76
Andino Mauro---------- 79
Rodríguez César---------- 83
Logroño Julio---------- 86
Romo María Paula---------- 91,131
Chacón Sergio---------- 97
Acosta Diana---------- 103

Asume la dirección de la sesión la asambleísta Aminta Buenaño, Primera Vicepresidenta de la Asamblea Constituyente.---------- 107

Masaquiza Vicente---------- 108
Hernández Luis---------- 111
Hurtado Lenin---------- 113

Reasume la dirección de la sesión el asambleísta Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea Constituyente.---------- 116

De la Torre Rosa Elena---------- 117
Abril Jaime---------- 117

El señor Presidente declara en receso a la sesión.---------- 121

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Acta 076

El señor Presidente reinstala la sesión.---------- 122

López Nelson---------- 122
Bohórquez Ximena---------- 126
Chávez Hólger---------- 128
Pavón Andrés---------- 136

VI Conocimiento y resolución de las solicitudes de amnistías e indulto a: Amnistías 3.1 Scñor Carlos Alberto Simbaña Romero. 3.2 Coronel (sp) Carlos Arboleda Heredia. 3.3 Varios ciudadanos del Cantón Vinces. 3.4 Doctora Wilma Salgado Tamayo. 3.5 Abogado Luis Villacis Guillén. 3.6 Ex presidente Gustavo Noboa Bejarano. Indulto 3.7 Indulto a las personas que transportan pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. ---------- 139

Intervenciones de los asambleístas:

Romo María Paula---------- 139,202, 213
Roldós Martha---------- 144,158
Rosado Gissel---------- 146,163, 165
Hurtado Lenin---------- 147,148
Esteves Rafael---------- 147,154, 159
Peñafiel Marisol---------- 150
Taiano Vicente---------- 160
De la Cruz Pedro---------- 161,165

Asume la dirección de la sesión la asambleísta Aminta Buenaño. Primera Vicepresidenta de la Asamblea Constituyente.---------- 163

Falconi Pamela---------- 165

Reasume la dirección de la sesión el asambleísta Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea Constituyente.---------- 168

Cisneros Francisco---------- 168
Rivera Gabriel---------- 170

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Acta 076

Viteri Leonardo---------- 173
Ruiz Jaime---------- 175
Mendoza Tito Nilton---------- 178,193
Acosta Alberto---------- 181,213
Escala Jorge---------- 187,191
Pavón Andrés---------- 189
Ponce Roberto---------- 190
Chuji Mónica---------- 191
Darquea Gustavo---------- 194
Logroño Julio---------- 195
López Fernando---------- 198
Chávez Hólger---------- 201,203
Alvarado Rosana---------- 204
Panchana Rolando---------- 209

El señor Presidente declara en receso y reinstala la sesión.---------- 214

Lectura y votación de la Resolución mediante la cual se confiere amnistía al Señor Carlos Alberto Simbaña Romero.---------- 214

Lectura y votación de la Resolución mediante la cual se concede amnistía al señor Coronel (sp) Carlos Arboleda Heredia.---------- 218

Lectura y votación de la Resolución mediante la cual se concede amnistía a varios ciudadanos del Cantón Vinces.---------- 219

Intervención de la asambleísta Sotomayor Fanny.---------- 222

Continuación de la votación de la Resolución mediante la cual se concede amnistía a varios ciudadanos del cantón Vinces.---------- 224

Lectura y votación de la Resolución mediante la cual se le concede amnistía a la Doctora Wilma Salgado Tamayo.---------- 224

Lectura y votación de la Resolución mediante la cual se le concede amnistía al Abogado Luis Villacís Guillén.---------- 226

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Acta 076

Intervención del asambleísta Mendoza Tito Nilton.---------- 227

Rectificación de la votación de la Resolución mediante la cual se le concede amnistía al Abogado Luis Villacís Guillén.---------- 227

Lectura y votación de la Resolución mediante la cual se le concede amnistía al ex Presidente Gustavo Noboa Bejarano.---------- 228

Lectura y votación de la Resolución mediante la cual se les concede indulto a las personas que transportan pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.----- 232

VII Designación de un miembro del Directorio del Banco Central. (Lectura de la comunicación enviada por el señor Presidente de la República, en la que propone el nombre para miembro del Directorio del Banco Central del Ecuador).---------- 235

Votación para la designación de la economista Karina de Lourdes Sáenz Quintuña, como miembro del Directorio del Banco Central del Ecuador.---------- 236

VIII Votación de los textos constitucionales presentados para Segundo Debate, referentes a: De la Naturaleza y el Ambiente. De la Función Ejecutiva. ---------- 237

Intervención del Asambleísta Aguirre Jorge.---- 237

Lectura y votación de los textos constitucionales De la Naturaleza y el Ambiente.---------- 238

Intervención del asambleista Gustavo Darquea. 244

Lectura y votación de los textos constitucionales De la Función Ejecutiva.---------- 245

Intervención de la asambleísta Kronfle Maria Cristina.---------- 247

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Acta 076

Continuación de la lectura y votación de los textos constitucionales De la Función Ejecutiva. ---------- 247

IX Clausura de la sesión.---------- 258

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Acta 076

En el Centro Cívico "Ciudad Alfaro", ubicado en la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí, a las ocho horas cuarenta y dos minutos del día cuatro de julio del año dos mil ocho, se instala la sesión de la Asamblea Constituyente, dirigida por su Presidente, asambleísta Fernando Cordero Cueva.----------

En la Secretaría actúa el doctor Francisco Vergara Ortiz, Secretario de la Asamblea Constituyente.----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Buenos días. Solicitamos a los señores asambleístas, que verifiquen que sus tarjetas electrónicas se encuentren insertas en sus curules. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Buenos días asambleístas. No logramos aún romper esta barrera de menos de cuarenta personas, puntualmente. Espero que lo consigamos con la ayuda de todos ustedes. Verifique, señor Secretario, presentes en la sala, a las ocho y treinta de la mañana. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Siendo las ocho horas treinta, señor operador, verifique la presencia de los asambleístas. Treinta y siete asambleístas presentes, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Treinta y ocho. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Treinta y ocho. Señor operador, presente el reporte a la Secretaría, por favor. Señor operador, tenga la gentileza de verificar nuevamente el quórum. El Asambleísta está aquí en la curul veinte y no salió registrado. Verifique la tarjeta, por favor. ----------

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Acta 076

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, verifique si tenemos quórum. ----------

I

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor operador, verifique los asambleístas que se encuentran presentes. Estamos listos, señor Presidente, tenemos quórum. ----------

II

EL SEÑOR PRESIDENTE. Instalo la sesión. Señor Secretario, informe al Pleno, el Orden del Día. ----------

III

EL SEÑOR SECRETARIO. "Por disposición del señor Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea Constituyente y de conformidad con el artículo 7, numeral 6 y artículo 25 del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, se convoca a las y los asambleístas, a la Sesión 76 del Pleno a realizarse el viernes 4 de julio de 2008, a las 08H30, en la Sala de Sesiones del Centro Cívico "Ciudad Alfaro", ubicado en el cantón Montecristi, provincia de Manabí, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Himno Nacional de la República del Ecuador; 2. Conocimiento de los Informes de Mayoría y Minorías, presentados por la Mesa Constituyente No. 8 de Justicia y Lucha contra la Corrupción, para el Primer Debate de los textos constitucionales, referentes a: Justicia Ordinaria, Servicios Notariales y Registral y Garantías Constitucionales; 3. Conocimiento y resolución de las Solicitudes de Amnistías e Indulto a: Amnistías Señor Carlos Alberto Simbaña Romero. Coronel en servicio pasivo Carlos Arboleda Heredia. Varios ciudadanos del cantón Vinces. Doctora Wilma Salgado Tamayo.

Abogado Luis Villacís Guillén. Ex presidente Gustavo Noboa Bejarano. Indulto Indulto a las personas que transportan pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas y estupefacientes; 4. Designación de un miembro del Directorio del Banco Central; 5. Votación de los textos constitucionales presentados para Segundo Debate, referentes a: 5.1 De la Naturaleza y el Ambiente. 5.2 De la Función Ejecutiva". Hasta ahí el texto de la convocatoria propuesta. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Informe al Pleno, si tenemos solicitudes de cambio del Orden del Día. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Solicitudes de cambio del Orden del Día, de conformidad con el Reglamento, no hemos recibido, señor Presidente. Solo para información, me permito poner en su conocimiento, que hemos recibido una del asambleísta Hólger Chávez. En vista de que se ha recibido pasadas las ocho horas treinta, que es la hora de la convocatoria, ha solicitado se la haga conocer el día de mañana. Nada más, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. El día lunes, porque mañana es una sesión extraordinaria, no podemos tener cambio del Orden del Día. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Así es, señor Presidente, para el día lunes. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Primer punto, señor Secretario. ----------

IV

EL SEÑOR SECRETARIO. "1. Himno Nacional de la República del

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Acta 076

Ecuador. ----------

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Segundo punto, señor Secretario. ----------

V

EL SEÑOR SECRETARIO. "2. Conocimiento de los Informes de Mayoría y Minorías, presentados por la Mesa Constituyente N° 8 de Justicia y Lucha contra la Corrupción, para el Primer Debate de los textos constitucionales, referentes a: Justicia Ordinaria, Servicios Notariales y Registral y Garantías Constitucionales". Hasta ahí el segundo punto, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Proceda, señor Secretario. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. En este momento, señor Presidente. "Asamblea Constituyente. Mesa Constituyente N° 8. Justicia y Lucha contra la Corrupción. Informe de Mayoría. Temas Constitucionales: I. Informe General. a). De la Función Judicial. b). De los Servicios Notarial y Registral. c). De las Garantías Constitucionales. II. Textos Constitucionales: a). De la Función Judicial. b). De los Servicios Notarial y Registral; c). De las Garantías Constitucionales. III. Nombre y Firma de los y las Asambleístas. Asambleísta Ponente: Fernando Vega. Montecristi, 27 de junio de 2008. I. Informe General. La Mesa Constituyente No. 8 de "Justicia y Lucha contra la Corrupción" elaboró la siguiente propuesta constitucional, que abarca el desarrollo de la Función Judicial, los Servicios Notariales y Registral y las Garantías

Constitucionales. El articulado se elaboró a partir de las diversas demandas ciudadanas que exigían cambios en la administración de justicia y que se materializaron en las opiniones receptadas en las mesas itinerantes realizadas en las distintas ciudades del país, en las propuestas escritas y en las visitas recibidas en la Mesa. Estos insumos sirvieron para que quienes suscribimos el presente informe ratifiquemos nuestro compromiso de transformar la justicia en el Ecuador, garantizando que esta cumpla con su cometido y asegure el cumplimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Hemos incluido en la presente propuesta un nuevo catálogo de garantías constitucionales que brindará las herramientas necesarias para que la ciudadanía pueda acudir directamente a los órganos de administración de justicia a demandar el cumplimiento de sus derechos fundamentales. A continuación encontrarán los fundamentos y el articulado de la propuesta de transformación de la Función Judicial, que complementa los principios judiciales aprobados en el Pleno de la Asamblea Constituyente. a). De la Función Judicial. Los artículos de este capítulo abarcan las normas generales sobre la Función Judicial, su organización y funcionamiento y la justicia ordinaria. La presente propuesta se construyó a partir de las demandas ciudadanas y de las visitas de las autoridades de las principales Instituciones del Estado, como son: La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio Fiscal, la Contraloría, la Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia, y la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. Cabe resaltar que la propuesta pretende resolver la situación actual de la Función Judicial, la misma que presenta una serie de deficiencias normativas y estructurales que le impiden cumplir su noble cometido de proteger los derechos e intereses de las personas que acuden a los jueces para resolver sus litigios. Si no logramos que la Función Judicial sea el espacio en que brille la justicia, nada habremos

hecho para poner en funcionamiento el real Estado Constitucional de Derecho, ya que la injusticia, la corrupción y la impunidad son flagelos tan graves como la pobreza, la exclusión y la desigualdad económica y social. El ánimo que guía esta propuesta es promover una profunda reorganización de la Función Judicial. Con toda claridad, debemos dejar sentado que, estas disposiciones deberán ir acompañadas de un marco legal secundario que apoye este proceso de resarcimiento de la administración de justicia. En el presente articulado se recogen varias normas generales que son parte de la tradición constitucional ecuatoriana y que están encaminadas a fortalecer la independencia de los jueces; su dedicación a tiempo completo a la tarea de juzgar, la sujeción absoluta a sus sentencias a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley; y el claro señalamiento de su responsabilidad por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley. Nos interesa destacar que entre estas normas generales se han incorporado varias que son nuevas y están encaminadas a garantizar que niñas, niños y adolescentes dispongan de legislación, procedimientos y operadores de justicia especializados. Es importante señalar que se ha incluido una disposición constitucional destinada a frenar los posibles abusos del litigio judicial, ya que a los abogados patrocinadores se los hace solidarios con sus representados en el pago de costas judiciales, indemnizaciones por daños y perjuicios y multas, conforme a la ley. En lo que tiene que ver con la estructura y atribuciones, se señala que la Función Judicial está compuesta por órganos jurisdiccionales, órganos auxiliares, órganos administrativos y órganos autónomos. Los órganos jurisdiccionales son: La Corte Nacional de Justicia, las cortes de apelación, los tribunales y jueces que establezca la ley, y los jueces de paz. El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administrativo y disciplinario de la Función

Judicial; los servicios notariales y registrales son los órganos auxiliares; y la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son los órganos autónomos. Asimismo se ha incorporado importantes reformas en la justicia ordinaria, como se destaca a continuación: a). Se modifica el nombre de algunos órganos de la administración de justicia. La máxima instancia de la justicia ordinaria será la Corte Nacional de Justicia y en cada provincia existirá una Corte de Apelación. b). Se diferencia con claridad las atribuciones de la Corte Nacional de Justicia y la del Consejo de la Judicatura, a fin de permitir que los jueces se dediquen con exclusividad a dictar sentencias. c). La Corte Nacional de Justicia, estará integrada por dieciocho Magistrados y su Presidente, quienes durarán nueve años en sus funciones, se renovarán por tercios cada tres años y serán designados por el Consejo de la Judicatura, previo concurso de oposición y méritos, el mismo que se someterá a impugnación, contraloría social, equidad y paridad de género. d). Para dar seguridad a la carrera judicial, todos los ministros en el nivel de cortes de apelación, deberán provenir del ejercicio de la judicatura. e). Para promover una adecuada motivación de los fallos emitidos por la Corte Nacional de Justicia se contemplan procedimientos que permitirán guiar la organización de la jurisprudencia obligatoria y las condiciones que se debe reunir para apartarse de ella. Esto busca no solamente consolidar el sistema de precedentes judiciales obligatorios, sino también dar los pasos adecuados para la evolución jurisprudencial necesaria en un Estado Constitucional del Derecho. f). Se disminuye a diez el número de años de ejercicio de la profesión, necesarios para ser candidato a magistrado de la Corte Nacional de Justicia, con miras a generar un cambio generacional en la Función Judicial. g). En concordancia con el principio de garantizar la justicia a los grupos de atención prioritaria, se prescribe que en cada cantón exista al menos un juzgado especializado en familia, niñez y adolescencia, así como uno

para adolescentes infractores, y que en las localidades donde existe un centro de rehabilitación social se cree al menos un juzgado de garantías penitenciarias. h). Finalmente, se fortalecen nuevos procedimientos de selección para magistrados, ministros, jueces y demás funcionarios judiciales, quienes deberán aprobar un curso de formación general y especial y pasar pruebas teóricas, prácticas y psicológicas. Todas estas modificaciones acompañan las demás contempladas en los artículos presentados con anterioridad. b). De los Servicios Notarial y Registral. La democratización de nuestra sociedad exige que el Estado se haga presente en el registro de todo espacio jurídico. Carece de sentido que se mantenga una dimensión semiprivada en el registro público de derechos, obligaciones y bienes de la más diversa índole, desde los bienes hipotecarios hasta los sucesorios. Y aún carece de menos sentido que se privilegie un sistema de cooptación elitista, en vez de un sistema racionalizado de espacios públicos. En los sistemas democráticos, el resguardo de esa información y la fe pública es asumida directamente por el Estado, como el garante de la custodia y la seguridad jurídica. Al mismo tiempo, se debe facilitar el acceso más amplio posible para que la ciudadanía pueda hacer uso de este servicio. No hay ningún argumento que pueda justificar la situación actual, donde se produce una delegación privatista de las funciones notarial y registral. El mantenimiento de dicha función de la manera en que se regula en la actualidad supone un inútil privilegio que reporta millonarios beneficios a sus usufructuarios, y ninguno para la sociedad. El actual sistema notarial y de registros, adopta una de las figuras más extremas de la elitización de dicha función, derivada del derecho romano de la "Múnera Pública". Esta figura, a diferencia del funcionario público, actuaba a nombre y por cuenta propia o de terceros, y no de la Administración Pública; es decir, ejercía una función pública, pero no era un funcionario público, y la realizaba mediante delegación como fedatario

público. Esta fórmula suponía un auténtico privilegio para los delegatarios que asumían dicha ocupación. Este funcionamiento, del que deriva nuestro sistema actual, ha generado privilegios extremos en el Ecuador, muy diferentes de otras formas que se dan en varias partes del mundo, como son los funcionarios públicos especiales, la privatista anglosajona, los funcionarios públicos judiciales o la de notariado administrativo. Aunque la vigencia del sistema derivado del derecho romano en diferentes Estados es amplia, no deja de ser un indicio de que las cuotas de poder y los privilegios aún persisten en el mundo, y de cómo de nuestra obligación es intentar diluirlos en pos de sistemas más eficaces y útiles para las mayorías. Desde este punto de vista, el actual sistema romano de notariado, no es el más conveniente en una Constitución que proyecta una nueva visión democrática y progresista. Así, el articulado propuesto supone una recuperación de estas funciones públicas por parte del Estado, creando un servicio notarial y registral público integrado en un sistema de información nacional registral, desconcentrado, en el cual los notarios y los registradores se incorporan como funcionarios públicos remunerados por el Estado. De esta manera, por medio del nuevo estatuto que determina el marco constitucional, el notario y el registrador ejercerán su función desde la legitimidad que les confiere ser parte de la Administración Pública y, al mismo tiempo, el Estado se manifestará capaz de otorgar los servicios a los que está obligado. c) De las Garantías Constitucionales. La Mesa 8 de Acceso a la Justicia y Lucha contra la Corrupción, de la Asamblea Constituyente asumió la competencia delegada por la Mesa 1 de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales, de redactar los artículos concernientes a las garantías constitucionales que se presentan en este informe. La Constitución de 1998 reconoce como el más alto deber del Estado el "respetar y hacer respetar los derechos humanos", principio que debía ser la puerta para el desarrollo de las

garantías constitucionales que hicieran efectivos los derechos. No obstante, pese a que la Constitución actual reconoce como garantías al amparo, habeas corpus y habeas data, estos mecanismos no han cumplido totalmente con su cometido. De allí nace la necesidad de ampliarlos y acercarlos a la ciudadanía, para que ésta se vea provista de herramientas cercanas y adecuadas que le permitan reclamar acciones de protección de sus derechos fundamentales. En este sentido, se han desarrollado dentro del capítulo de garantias constitucionales las normativas; de politicas públicas, prestación de bienes y servicios públicos; de participación ciudadana; y las jurisdiccionales. Las garantías normativas, también llamadas en la doctrina como garantías politicas, protegen los derechos constitucionales para que éstos no puedan ser vulnerados por otras normas jurídicas, precautelándolos de todos los órganos de poder público con potestad normativa. Las garantías de políticas públicas y servicios públicos someten a todos los órganos del poder público a respetar, promover y desarrollar los derechos humanos; por tanto, estos tienen la obligación de formular, implementar, ejecutar, evaluar y controlar las politicas y servicios públicos que garanticen estos derechos. Estas se complementan con las garantías de Participación Ciudadana que incluyen la participación de la ciudadanía, los pueblos y nacionalidades en la planificación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas donde se garanticen sus derechos. Las garantías jurisdiccionales, que eran las únicas contempladas en la actual Constitución, amplían su catálogo incluyendo entre ellas a la acción de acceso a la información pública, la acción por incumplimiento y el recurso extraordinario de amparo. La presente propuesta de garantías jurisdiccionales inicia con principios y reglas mínimas, que deberán aplicarse con miras a combatir las restricciones formalistas que han hecho ineficaces las acciones en el Ecuador, específicamente el amparo. Cabe resaltar, que el Ecuador ha

mantenido la tradición de regular los procedimientos de las garantías en la Constitución; desde esta perspectiva, ahora se añade un artículo específico y común a las acciones con el fin de volverlas sencillas, ágiles, sumarias y eficaces para la protección de derechos. De esta forma, las Normas Comunes a las Acciones Constitucionales establecen la legitimación activa popular, la competencia de los jueces, las reglas de procedimiento, la audiencia, las pruebas, la sentencia, la apelación, el seguimiento, las sanciones por incumplimiento y la remisión de las sentencias a la Corte Constitucional. Es importante destacar que no será indispensable el patrocinio de abogado para proponer estas acciones. En virtud de ello, la Acción de Amparo detallada en el artículo 3 amplía el objeto de protección a situaciones en las que la vulneración resulte de la aplicación de una norma jurídica general; cuando se derive de la falta o deficiente prestación de bienes y servicios públicos; o cuando la violación proceda de un particular y el agraviado se encuentre en estado de indefensión, discriminación o subordinación. En el Habeas Corpus también existen cambios trascendentales, como son su interposición ante el juez y ya no ante el alcaldc, así como su ampliación a toda forma arbitraria de privación de la libertad, la cual puede ser también causada por un particular. Se regula el habeas corpus judicial para los casos en que la privación arbitraria de la libertad haya sido establecida dentro de un proceso penal; y para la desaparición forzada, en los casos en que se desconozca el lugar de la privación. En este sentido, el articulado recoge estándares internacionales de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador, del 24 de abril de 1997, en su capítulo 7 establece que: "El Estado debe implementar inmediatamente las medidas necesarias, en virtud del artículo 2 de la Convención Americana, para garantizar que cada persona detenida bajo la autoridad del Estado sea objeto de una

pronta supervisión judicial. Pronto, en este caso, significa tan rápido como sea posible, y en cualquier caso antes de las 24 horas de la detención." En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-8/87 (El Habeas Corpus bajo Suspensión de Garantías), del 30 de Enero de 1987, establece en sus párrafos 30 y 35 que: "Las garantías deben ser no solo indispensables sino judiciales. Esta expresión no puede referirse sino a medios judiciales idóneos para la protección de tales derechos, lo cual implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepción". "El habeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición y la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes." En la propuesta se eleva la Acción de Acceso a la Información Pública a rango constitucional, la que anteriormente se encontraba como una garantía legal en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En la propuesta, el Habeas Data se amplió a la protección de los datos genéticos y de los archivos de datos personales. El titular tendrá derecho a conocer la finalidad, propósito, origen y destino de su información y podrá interponerlo sin importar si la información se halla en forma electrónica o manual. Asimismo, en el caso de datos sensibles, el titular podrá pedir que se adopten medidas de seguridad adecuadas. Se ha incluido la Acción por Incumplimiento que garantiza la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, y la ejecución de

sentencias o informes de cortes u organismos internacionales de derechos humanos, que no sean ejecutables por las vías de apremio ordinarias. Con ello, las autoridades, funcionarios administrativos o particulares deberán acatar estas decisiones, que antes no tenían garantía de ejecución. Finalmente se incluye el Recurso Extraordinario de Amparo, que tiene por objeto precautelar aquellos derechos humanos protegidos en la Constitución que sean vulnerados por acción u omisión en sentencias o autos definitivos. Esta nueva figura es una innovación en el Ecuador; no obstante se encuentra en todos los países del área andina y en otros países latinoamericanos y europeos. Esta acción complementa la protección de los ciudadanos contra cualquier acto de violación de sus derechos, como es la Acción de Amparo en contra de actos u omisiones de autoridades públicas; ahora podrá interponerse contra decisiones judiciales cuando se vulnere el debido proceso u otro derecho constitucional. Cabe señalar que en el Ecuador no se contaba con un recurso que garantice el derecho a la protección judicial en estos casos, vulnerándose así el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) que establece que: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." Es importante mencionar que en un Estado Constitucional de Derecho, todas las autoridades públicas deben estar sometidas a la Constitución, lo que incluye a los jueces. Pese a que ellos se encontraban sometidos al ordenamiento jurídico, no existía ningún recurso para la ciudadanía contra sus actos en el caso de que éstos vulneraran derechos fundamentales. Una vez que entre en vigencia la Constitución, los jueces, además de ser los garantes de la Constitución,

serán los llamados a procurar la protección de los derechos humanos y estarán sometidos al control de constitucionalidad. II. Textos Constitucionales. a) De la Función Judicial. Capítulo 5. Sección primera. Principios y Normas Generales. Normas Generales de la Justicia Ordinaria. Artículo (1).- Los jueces, servidores judiciales y demás operadores de justicia, actuarán garantizando el principio de la debida diligencia en la administración de justicia. Artículo (2).- Las normas y procedimientos de la administración de justicia garantizarán el derecho de protección a las victimas, testigos y otras personas que intervienen en el proceso penal. Artículo (3).- Los niños, niñas y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada en la Función Judicial, así como a operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia por materia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores de la ley penal. Artículo (4).- Los magistrados, ministros y jueces administrarán justicia sujetándose a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Artículo (5).- Los magistrados, ministros, jueces y servidores judiciales no podrán ejercer la abogacía ni desempeñar otro empleo público o privado, excepto la docencia universitaria fuera del horario de trabajo. Los magistrados, ministros y jueces no podrán ejercer funciones de dirección en los partidos políticos, participar como candidatos en procesos de elección popular, ni realizar actividades de proselitismo político ni religioso. Artículo (6).- Los jueces, ministros y magistrados serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley. Artículo (7).- Los actos generados por cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados ante los correspondientes órganos de la Función Judicial, en la forma que

determinc la ley. Artículo (8).- Las partes procesalcs y sus abogados patrocinadores, cuando litiguen maliciosa y temerariamentc, generen obstáculos o dilaten de manera innecesaria los procesos, pagarán solidariamente las costas judiciales, así como una indemnización por los daños y perjuicios causados y serán sancionados con una multa por los gastos ocasionados a la administración de justicia, además de otras sanciones, según lo determine la ley. Sección Segunda. De la Organización y Funcionamiento. Artículo (9).- La Función Judicial está compuesta por órganos jurisdiccionales, órganos auxiliares, órganos administrativos y órganos autónomos. Su estructura, funciones, atribuciones y competencias estarán determinadas por la Constitución y la ley. Artículo (10).- Los órganos jurisdiccionales, encargados de administrar justicia, de conformidad con las atribuciones y competencias determinadas en la Constitución y la ley son: 1. La Corte Nacional de Justicia. 2. Las Cortes de Apelación. 3. Los Tribunales y Jueces que establezca la ley. 4. Los Jueces de Paz. Artículo (11).- El órgano de gobierno, administración y disciplina de la Función Judicial es el Consejo de la Judicatura. La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio notarial, el servicio de registros, los martilladores, los depositarios y los demás que determine la ley. Son órganos autónomos de la Función Judicial la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado. Sección tercera. Justicia Ordinaria. Corte Nacional de Justicia. Artículo (12).- Competencias: La Corte Nacional de Justicia tendrá las siguientes funciones: 1.- Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás recursos que establezca la ley. 2.- Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración. 3.- Enjuiciar a los funcionarios del Estado que según la Constitución y la ley gocen de fuero. 4.- Podrán presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia en las materias afines a su actividad. 5.-

Ejercer, además, las demás funciones y atribuciones que determine la Constitución y las leyes. La Corte Nacional de Justicia tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional y su sede estará en la ciudad de Quito. Artículo (13).- Composición: La Corte Nacional de Justicia estará integrada por 18 magistrados y el Presidente. Los Magistrados se organizarán en salas especializadas, conforme lo determine la ley. Los magistrados de la Corte Nacional de Justicia serán designados para un período de 9 años. No podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años. Cada Sala contará con el número de Conjueces y de Asesores Jurídicos que determine el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con el número de causas que tenga pendientes de resolución cada Sala y conforme a la ley. Los Asesores Jurídicos y los Conjueces tendrán el mismo régimen de incompatibilidad de los Magistrados, y serán nombrados conforme a la ley por el Consejo de la Judicatura. Articulo (14).- Representación: Los magistrados de la Corte Nacional de Justicia elegirán de entre sus miembros un presidente que será el representante legal de la Función Judicial y durará en sus funciones tres años. En cada Sala se elegirá un presidente, que durará en sus funciones un año y podrá ser reelecto. Las funciones y atribuciones de estos presidentes, serán determinadas por la ley. Artículo (15).- Procedimientos, criterios y elaboración de sentencias: Las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto de derecho serán jurisprudencia obligatoria para todos los jueces y tribunales. El Magistrado ponente para cada sentencia será designado mediante sorteo, según el procedimiento que determine la ley. El Magistrado ponente deberá observar la jurisprudencia obligatoria establecida de manera precedente. Para cambiar el criterio jurisprudencial obligatorio, el Magistrado ponente se sustentará en razones jurídicas motivadas que la justifiquen, y su fallo deberá ser

aprobado por unanimidad en la sala. Artículo (16).- Requisitos para ser Magistrado de la Corte Nacional de Justicia: Para ser magistrado de la Corte Nacional de Justicia, se requerirá: 1. Ser ecuatoriano por nacimiento. 2. Hallarse en goce de los derechos políticos. 3. Tener el título de abogado expedido o convalidado por una de las universidades legalmente reconocidas en el país. 4. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura, o la docencia universitaria en ciencias jurídicas, por un lapso mínimo de diez años. 5. Los demás requisitos de idoneidad que fije la ley. Artículo (17).- Procedimiento de designación.- Los magistrados de la Corte Nacional de Justicia serán elegidos por el Consejo de la Judicatura de conformidad con los procedimientos que determine la Constitución y la ley, que contemplará concurso de oposición y méritos, impugnación, contraloría social, equidad y paridad de género. Artículo (18).- De las Cortes de Apelación, Tribunales y Juzgados. Existirán Cortes de Apelación en cada provincia, las mismas que estarán integradas por el número de ministros necesarios para atender las causas. Todos estos ministros provendrán de la carrera judicial. Los ministros se organizarán en salas especializadas en las materias que tengan correspondencia con las de la Corte Nacional de Justicia. Existirán los tribunales y juzgados que determine el Consejo de la Judicatura, de conformidad con las necesidades de la población de acceder a la justicia, y de acuerdo con la ley. En cada cantón existirá al menos un juzgado especializado en familia, niñez y adolescencia y uno para adolescentes infractores. En las localidades donde exista un centro de rehabilitación social existirá, al menos, un juzgado de garantías penitenciarias, conforme a la ley. Artículo (19).- Los requisitos y procedimientos para designar ministros de las cortes de apelación, jueces y demás servidores de la Función Judicial los determinará la ley, deberá contemplar concurso de oposición y méritos, impugnación, contraloría social y equidad de

género. Articulo (20).- Salvo los magistrados de la Corte Nacional de Justicia y los vocales del Consejo de la Judicatura, los demás servidores judiciales al entrar al servicio deberán aprobar un curso de formación general y especial y pasar pruebas teóricas, prácticas y psicológicas. Artículo (21).- Todo servidor judicial tiene derecho a permanecer en el desempeño de sus cargos mientras no exista una causa legal para ser separado. Todos los servidores judiciales estarán sometidos a evaluación individual periódica en su rendimiento, de acuerdo a parámetros técnicos que elabore el Consejo de la Judicatura. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos, serán reemplazados. Artículo (22).- La ley determinará la organización, el ámbito de competencia, el funcionamiento de estos órganos judiciales y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia, en el marco de la Constitución. Artículo (23).- No se reconoce la existencia de ningún fuero o privilegio especial. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Civil Nacional serán juzgados por la justicia ordinaria en aplicación del principio de unidad jurisdiccional. Las faltas que fueren de carácter disciplinario o administrativo serán sometidas a sus propias normas de procedimiento, respetando los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso. Sección Sexta. Servicio Notarial y Registral. Artículo (24).- 1. Los servicios notariales y registrales son públicos y estarán integrados en un sistema de información nacional registral de la propiedad y de otros negocios jurídicos, que será regulado mediante ley. 2. En cada cantón o distrito metropolitano habrá el número de notarios y registradores de la propiedad y de lo mercantil que determine el Consejo de la Judicatura. 3. El Consejo de la Judicatura determinará la remuneración de los notarios, registradores y del personal auxiliar de estos servicios. De igual modo, fijará las tasas que deban satisfacer los usuarios por dichos servicios, y establecerá el sistema de cobrarlos. Los valores recuperados por concepto de tasas ingresarán al Presupuesto

General del Estado y a la Función Judicial conforme lo determine la ley. 4. La ley establecerá las cauciones que tienen que rendir notarios y registradores, previo al desempeño de sus cargos. Artículo (25).- Para ser notario o registrador, se requerirá tener el título de abogado o de doctor en jurisprudencia, expedido o convalidado por una de las universidades legalmente reconocidas en el país, probidad y experiencia. El Consejo de la Judicatura nombrará a los notarios y registradores previo concurso público de oposición y méritos, sometido a impugnación y contraloría social. Los notarios y registradores en el desempeño de sus cargos estarán sujetos a procesos de evaluación periódica, debiendo establecerse estándares de rendimiento y pueden ser destituidos por las causales señaladas en la ley. Disposiciones Transitorias: Primera.- El personal administrativo que actualmente labora en las cortes, tribunales y juzgados militares y de policía, previa evaluación, podrán formar parte de la Función Judicial. Segunda.- Los sistemas informáticos, datos públicos, gestión de información y demás recursos de los servicios notariales y registrales ingresarán al patrimonio de la Función Judicial. El Estado, pagará justa indemnización en los casos en los que se demuestre que no se ha amortizado el costo de la inversión. No se cuantificará para fines indemnizatorios, la información pública contenida en los archivos de las notarías, registros de la propiedad y mercantiles, ya que son de dominio público. Tercera.- A partir de la aprobación de la Constitución los períodos de nombramiento de los notarios y registradores se declararán concluidos, debiendo someterse en el plazo de un año a concursos públicos de oposición y merecimientos para ocupar esos cargos; mientras tanto permanecerán en sus funciones hasta ser legalmente sustituidos. Cuarta.- A partir del día en que entre en vigencia la presente Constitución, se prorroga en sus funciones a los vocales del Consejo de la Judicatura por sesenta (60) días y a los Magistrados de la

Corte Suprema de Justicia por ciento veinte (120) días. Los Ministros Jueces, Notarios y Registradores, también serán prorrogados en sus cargos por ciento ochenta (180) días. Dentro de los términos señalados se llevará a cabo el nuevo proceso de selección y designación con las reglas y requisitos establecidos en esta constitución y en las disposiciones establecidas para el efecto por la Asamblea Constituyente que tendrán su fundamento en un concurso de oposición y merecimientos con impugnación y veeduría ciudadana. En la conformación de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura, se respetará la paridad y equidad de género. Se garantiza la estabilidad de los funcionarios y empleados de la actual Corte Suprema de Justicia, Cortes Supcriores y Tribunales Distritales, los que serán reubicados en cargos de similar jerarquía y remuneración en la Corte Nacional de Justicia, Cortes de Apelación y Tribunales, respectivamente. c) De las Garantías Constitucionales. Título ( ). De las Garantías de los Derechos. Artículo 1. Clasificación.- Los derechos humanos tienen las siguientes garantías: normativas, de políticas públicas, de prestación de bienes o servicios públicos, de participación ciudadana y jurisdiccionales. Capítulo I. De las Garantías Normativas. Artículo 2. Garantías normativas.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de subordinar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas, a los derechos previstos en esta Constitución, Tratados, Declaraciones y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de los pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas y los actos del poder público podrán atentar contra el contenido esencial de los derechos humanos. Capítulo II. Políticas Públicas, Servicios Públicos y Participación Ciudadana. Artículo 3. Políticas públicas y servicios públicos.- La formulación,

implementación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garantizan los derechos humanos, se regulará de acuerdo a las siguientes disposiciones: 1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos deberán estar directamente encaminadas a hacer efectivos todos los derechos humanos y el buen vivir, sin desmedro de los derechos de la naturaleza. Deberán ser formuladas a partir del principio de solidaridad. 2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con violar los derechos humanos en casos particulares, la política o prestación deberá replantearse o adoptarse medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. 3. El Estado garantizará el presupuesto, así como su distribución equitativa y solidaria para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos enmarcados en el buen vivir. Artículo 4. Participación Ciudadana.- En la planificación, en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas se garantizará la participación de los ciudadanos, pueblos y nacionalidades. Capítulo III. De las Garantías Jurisdiccionales. Sección primera. Normas comunes a las acciones constitucionales. Artículo 5.- Las garantías jurisdiccionales, salvo que se determine lo contrario en esta Constitución, se regirán de conformidad con los siguientes principios y normas: 1.- De la Legitimación Activa Popular.- Cualquier persona, grupo de personas, nacionalidad o pueblo podrá proponer las acciones previstas en esta Constitución. 2.- Competencia.- Es competente el juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión. Si hubiere más de un juez, la competencia se decidirá mediante sorteo. Salvo la excusa o recusación, el juez que deba conocer acciones constitucionales no podrá inhibirse. 3.- Reglas de Procedimiento.- Serán aplicables las siguientes normas de procedimiento: a. El procedimiento será sencillo, rápido y

eficaz. b. Son hábiles todos los días y horas. c. Podrán ser propuestas oralmente o mediante escrito, sin formalidades, y sin necesidad de citar la norma constitucional infringida. Si se propone oralmente, se deberá elaborar un acta. d. Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto u omisión. e. No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho. f. El juez tiene la obligación de impulsar de oficio los procesos. g. No será indispensable el patrocinio de un abogado para proponer la acción. h. El juez que sin justificación legal no tramite el proceso dentro de los plazos constitucionales o legales, será sancionado administrativamente, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que haya lugar. 4.- Audiencia.- Presentada la acción, el juez convocará inmediatamente a una audiencia pública; en la que se escuchará al accionante, a la autoridad de la que haya emanado el acto o sea responsable de la omisión y a quienes soliciten ser escuchados. 5.- Pruebas.- En cualquier momento del proceso, el juez puede ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabar las mismas, sin que por ello se afecte el debido proceso o se dilate injustificadamente la resolución del caso. Cuando el juez ordene la práctica de pruebas deberá establecer el plazo en el cual se receptará la prueba. Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por el accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información. 6.- Sentencia, Apelación y Seguimiento.- El juez resolverá la causa mediante sentencia. En caso de constatarse la violación de derechos humanos, el juez deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse. Las sentencias de primera instancia podrán ser

apeladas ante la sala especializada de la Corte de Apelaciones. La apelación se concederá únicamente en el efecto devolutivo. Los procesos judiciales sólo finalizan con la ejecución integral de la sentencia o resolución. El juez de primera instancia es competente para ejecutar la sentencia. Al efecto, el juez tomará todas las medidas previstas en el ordenamiento jurídico para la ejecución de las sentencias y la reparación integral del daño, incluso mediante el uso de la fuerza. 7.- Sanción.- Cuando se incumpla la sentencia o resolución por parte de un funcionario o empleado público, el juez ordenará la destitución del cargo o empleo, con respeto del debido proceso, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que haya lugar. Sólo mediante sentencia se dispondrá la destitución, que será comunicada a la Contraloría General del Estado y a la autoridad que tenga competencia para hacerla efectiva. Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución, se hará efectiva la responsabilidad determinada en la ley. 8.- Remisión a la Corte Constitucional.- Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte Constitucional. Artículo. 6.- Medidas cautelares.- Se puede solicitar y ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar, impedir o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho humano. Estas medidas también se pueden solicitar cuando exista riesgo de desaparición, destrucción u ocultamiento de información relevante. El juez podrá continuar la causa hasta dictar sentencia. Presentada la petición, de encontrar que es fundada, el Juez ordenará inmediatamente la medida cautelar mediante resolución. Sección segunda. De la acción de amparo. Artículo 7.- La acción de amparo tiene por objeto la protección directa y eficaz de los derechos reconocidos en esta Constitución, salvo los protegidos por otra acción constitucional. La acción de amparo se podrá interponer en los siguientes supuestos: a) Cuando exista una violación de derechos

constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, incluso cuando sea la consecuencia de la aplicación de una ley, reglamento o cualquier otra norma de carácter general. b) Contra políticas públicas cuando exista falta o deficiente prestación de bienes y servicios públicos, cuya consecuencia sea la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales. c) Cuando la violación proceda de un particular, el amparo se podrá interponer si la violación del derecho provoca daño grave, si el particular presta servicios públicos impropios, actúa por delegación, o si el afectado se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. Sección tercera. De la acción de habeas corpus. Artículo 8.- El habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Inmediatamente de interpuesta la acción, el juez convocará a una audiencia que deberá realizarse dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la cual se debe presentar la orden o el parte de detención con las formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que sustentan la medida. Se escuchará a la persona detenida o a quien la represente. El juez ordenará la comparecencia de la persona privada de la libertad o amenazada con la privación de ella, de la autoridad a cuya orden se encuentre el detenido, el Defensor Público y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurre la amenaza o se halle privado de la libertad el recurrente. El juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la finalización de la audiencia. En caso de verificarse cualquier forma de tortura se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuere aplicable. El juez deberá remitir el expediente a

la Fiscalía General del Estado para que inicie la investigación penal correspondiente. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la inmediata libertad. La resolución que ordena la libertad será cumplida inmediatamente por los responsables de los centros de privación de libertad, sin que sea admisible ningún tipo de observación o excusa. En cualquier momento del proceso, el juez puede adoptar las medidas que considere necesarias para garantizar la libertad y la integridad del accionante, incluso con el apoyo de la fuerza pública. Artículo 8.- Habeas corpus judicial.- Perdón. Artículo 9.- Habeas corpus judicial.- Cuando la orden de privación de la libertad ha sido dispuesta dentro dc un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la sala especializada de la Corte de Apelaciones. Artículo 10.- Desaparición Forzada.- Cuando se desconozca el lugar dc la privación de la libertad y existan indicios sobre la intervención de algún funcionario público o cualquier otro agente del Estado o personas o grupos de personas que actúen con su autorización, apoyo o permisibilidad, el juez deberá convocar a audiencia al máximo representante de la Policía Nacional y al Ministro competente. Después de escucharlos, se adoptarán las medidas necesarias para ubicar a la persona y a los responsables de la privación de la libertad. Sección Cuarta. De la acción de acceso a la información pública. Artículo 11.- La acción tiene por objeto garantizar el acceso a la información pública, cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no es completa o fidedigna. La acción puede ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter de la información deberá ser declarada con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de conformidad con la ley. Sección Quinta. Del habeas data. Artículo 12.- Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer la

existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas sea en forma manual o electrónica. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad o propósito, el origen y destino de su información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización del titular de ellos o de la ley. El titular de los datos podrá solicitar el acceso al archivo al responsable, sin costo y de ser necesario, con la compañía de un técnico; así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación cuando se trate de datos no pertinentes o violatorios de los derechos constitucionales. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por el mismo interesado, se exigirá la adopción de las correspondientes medidas de seguridad. Si el responsable del banco o archivo de datos personales no atendiere la solicitud de la persona interesada, ésta podrá deducir la acción ante el juez competente, quien en un proceso sencillo y breve establecido por la ley, tramitará la demanda y resolverá lo que proceda. Si de cualquier manera se le hubiera causado perjuicio, el afectado podrá demandar la correspondiente indemnización al responsable del banco o archivo de datos personales. Sección Sexta. De la Acción por Incumplimiento. Artículo 13.- La acción por incumplimiento tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, cualquiera sea su naturaleza y jerarquía, así como el cumplimiento de sentencias o informes de cortes u organismos internacionales de derechos humanos, que no sean ejecutables por las vías de apremio ordinarias. Esta acción se interpondrá ante la Corte Constitucional, siempre que la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de

hacer o no hacer, clara, expresa y exigible, de modo que se pueda individualizar la decisión, la conducta o la prestación debida; y que el incumplimiento de la obligación sea evidente. Sección Séptima. Del recurso extraordinario de amparo. Artículo 14.- El recurso extraordinario de amparo procede contra sentencias o autos definitivos en los que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en esta Constitución, se interpondrá ante la Corte Constitucional, en el efecto devolutivo. Este recurso procede si es que se han agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia del titular del derecho constitucional violado. Cuando el recurso extraordinario de amparo sea presentado para obstaculizar la justicia, retardar la ejecución de la sentencia o como otra instancia más, el juez que conozca deberá rechazar el recurso y, si es el caso, sancionar al infractor de conformidad con la ley". Hasta ahí el articulado propuesto adjunto al informe de mayoría. "III. Nombre y Firma de los Asambleístas que Suscriben el Informe de Mayoría". Procedo a leer los informes de minoría. "De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, remitimos a usted el Informe de Minoría de la asambleísta Catalina Ayala, Mac Montaño y Vicente Taiano, respecto a: Justicia Ordinaria -Función Judicial. Debemos señalar que dicho informe ha sido entregado el día de hoy a través de la Secretaría de la Mesa. Por la atención que se sirva dar a la presente, nos suscribimos de usted, cordialmente". "De nuestra consideración: En conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, nos permitimos hacerle llegar el informe de minoría respecto de Justicia Ordinaria - Función Judicial. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Doctor Esteves. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Señor Presidente, el informe de minoría no lo tengo yo, al menos, cn el faile correspondiente a esta parte. No sé si los demás asambleístas lo tengan. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Por favor verifiquen; caso contrario, que la Secretaría les distribuya. ¿Si tienen? Parece que algunos tienen y otros no. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Está a continuación del informe de mayoría, después de las firmas se encuentran los informes de minoría. Tenemos el informe de minoria de Catalina Ayala, Mae Montaño, Vicente Taiano. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. ¿Verificaron si están disponibles para todos? De no les proveerán. Continúe, señor Secretario. A los señores asambleístas que les falte, que Secretaria les facilite, por favor. Continúe.----------

EL SEÑOR SECRETARIO. "En conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, nos permitimos hacerle llegar el informe de minoría respecto de Justicia Ordinaria-Función Judicial. Sobre el artículo 4: Consideramos que en este artículo debió agregarse que se administrará justicia sujetándose a los instrumentos internacionales de derechos humanos debidamcntc ratificados por el Ecuador. Por ejemplo, hay muchos países que no han suscrito el Estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional, por lo tanto, dicho instrumento jurídico no forma parte del ordenamicnto jurídico de estos países. Sobre el artículo

6: Lo determinado en este articulo ya fue aprobado en segundo debate por el pleno de la Asamblea Nacional, por lo que, debe ser eliminado. Sobre el artículo 8: Este artículo es atentatorio para el libre ejercicio de la abogacía. No estamos de acuerdo con que se establezca que los profesionales del derecho sean responsables solidariamente de las costas judiciales y las indemnizaciones por los daños y perjuicios y que sean sancionados con una multa cuando se hubiese declarado litigado de manera maliciosa y temeraria; o que se diga que generan obstáculos o dilatan los procesos, por las siguientes razones: -está confirmado que se han repartido los informes de minoría, señor Presidente- 1. En materia penal, el juez determina que la denuncia es temeraria cuando el acusador la ha planteado, aun sabiendo que no existe delito y es sancionada con la condena en costas, tal como lo establece el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal. Además, el artículo 294 el Código Penal tipifica los delitos contra la actividad judicial. 2. El abogado está en la obligación de presentar todos los recursos de los que legalmente se ve asistido para defender los intereses de sus clientes y es el juez ante quien se tramita la causa quien debe desecharlos, cuando no sean procedentes. Quien se vea afectado puede presentar una queja ante el Consejo Nacional de la Judicatura para que proceda con el expediente e investigación respectivos. 3. Este tipo de disposiciones pueden ocasionar que los jueces presionen a los abogados amenazándolos con calificar sus actuaciones de temerarias y maliciosas alegando que han pretendido dilatar o generar obstáculos durante el proceso. Por lo argumentado este artículo debe ser suprimido. Sobre el artículo 10: Aquí se pretende cambiar la denominación de la actual Corte Suprema de Justicia, lo cual no tiene fundamento lógico ni jurídico, salvo el de buscar la desjerarquización de este órgano ante la inminente instauración de una Todopoderosa Corte Constitucional. Las reformas que necesita el país no deben ser cosméticas a nivel de

inventarse nuevos nombres para las instituciones, sino en crear mecanismos idóneos para que éstas funcionen acorde a las expectativas de la sociedad. Proponemos que se mantenga la actual denominación de Corte Suprema de Justicia, con lo cual el artículo debería quedar de la siguiente manera: Artículo (10).- Los órganos jurisdiccionales, encargados de administrar justicia, de conformidad con las atribuciones y competencias determinadas en la Constitución y la ley son: 1. La Corte Suprema de Justicia. 2. Las Cortes de Apelación. 3. Los Tribunales y Jueces que establezca la ley. 4. Los Jueces de Paz. Sobre el artículo 11: El Consejo de la Judicatura no debe ser un órgano de gobierno pues esa no es su naturaleza, sino la de ser un órgano de administración de carácter técnico, que se encargará de administrar los recursos materiales, financieros y el personal de la Función Judicial y de verificar los procesos de gestión administrativa y de carácter disciplinario dentro de su esfera de acción. Tampoco deben ser considerados como órganos auxiliares el servicio notarial, el servicio de registros, los martilladores, los depositarios. La naturaleza de la función de los notarios no se circunscribe únicamente a la Función Judicial o a diligencias judiciales; el artículo 6 de la Ley Notarial vigente define a los Notarios como "funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los actos, contratos y documentos determinados en las leyes", y luego en el artículo 18 del mencionado cuerpo legal se detallan una serie de atribuciones y facultades de estos funcionarios, algunas de las cuales no tienen relación directa ni inmediata con procesos judiciales. Tal es el caso de la celebración de un contrato de compra venta con hipoteca como parte de un préstamo bancario o cuando una persona que antes de posesionarse en un cargo público debe rendir una declaración juramentada de su patrimonio. En estos y otros casos, la labor del notario se desenvuelve de manera ajena y extraña a los procesos judiciales, por lo cual, considero que el estatus de órgano

auxiliar es incorrecta, debe estar dentro de la Función Judicial pero como órganos autárquicos. Lo mismo se aplica para el caso de los Registros de la Propiedad y Mercantiles, cuya participación en procesos judiciales es eventual, pues la naturaleza de sus funciones abarca un radio de acción mucho más amplio. Distinto es el tema de los martilladores y depositarios, pero debe hacerse la salvedad de que la norma constitucional se está refiriendo a los martilladores y depositarios judiciales, pues fuera de la órbita jurisdiccional también existen martilladores, como en las subastas privadas, y asi mismo tenemos a los depositarios contractuales (recordemos que el depósito también es un contrato), como por ejemplo en el caso de una prenda comercial ordinaria que prevé la existencia de un depositario. El artículo 2120 del Código Civil determina que: "El depósito propiamente dicho es un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal y mueble, para que la guarde, y la restituya en especie a voluntad del depositante". Para los efectos mencionados ponemos a consideración el siguiente texto: Articulo (11).- El órgano técnico encargado de la administración y disciplina de la Función Judicial es el Consejo Nacional de la Judicatura de conformidad con la Constitución. La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares los martilladores judiciales, los depositarios judiciales, y los demás que determine la ley. Son órganos autárquicos de la Función Judicial la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado, los notarios y los registradores de la propiedad y mercantiles. Del artículo 12 en adelante: Debe cambiarse la denominación de "Corte Nacional de Justicia" por la de "Corte Suprema de Justicia" por las razones ya enunciadas. Sobre el artículo 12: Un ofrecimiento de esta Asamblea fue que la sede de la Corte Suprema sea la ciudad de Cuenca, no para desmerecer a Quito como capital sino como una forma de cumplir con los procesos de desconcentración administrativa. Es de notar que en los primeros borradores del

articulado que se presentaron a la Mesa sobre este tema, se consagraba la sede en la ciudad de Cuenca. Tras las declaraciones del Presidente y un asambleísta respecto a las encuestas se acató una orden y se dio pie atrás con lo propuesto. Y esto, con la finalidad de dar cumplimiento al carácter administrativamente descentralizado del Estado Ecuatoriano. De tal forma, la descentralización no se mantiene como un lírico enunciado, sino que se convierte en una forma de administración efectiva, real. Para ser coherentes con los planteamientos que se formulan en el debate del pleno de la Asamblea, hay que conferirle un contenido efectivo a dichos planteamientos. Máxime -si en este caso específico- provienen de un miembro de la bancada oficialista, que son los únicos que realmente tienen la posibilidad de modificar los textos que propone la mayoría de la Asamblea. La descentralización de la justicia, representado en la posibilidad de trasladar la sede de la Corte Suprema a la ciudad de Cuenca, ha sido un anhelo del pueblo azuayo. Y la forma en que se mancja la administración de justicia en este sector de la patria, acredita sobrados méritos para que así sea, pues la dirimencia de controversias con fuerza de verdad legal, se caracteriza por un manejo impecable de los orgánicos jurisdiccionales competentes en la ciudad de Cuenca. Negar tal posibilidad, constituye entonces, un verdadero despropósito. Sobre el artículo 13: No concordamos con que sea el Consejo de la Judicatura la institución que establezca el número de Conjueces que deban haber por sala, estos deben existir en un número proporcional al de los magistrados titulares de cada sala especializada. Esto va de la mano con la naturaleza misma de la función de un conjuez, que es la de suplir al magistrado principal por alguna causal de excusa o recusación. De la lectura del artículo, así como de las discusiones en la Mesa, se pretende asimilar la función del Conjuez con la de un Asesor Jurídico y eso es incorrecto pues tienen cometidos totalmente distintos: el Conjuez es un juez suplente, tal como

se mencionó anteriormente; mientras que el asesor jurídico, está para asistir y para servir de consultor en el procesamiento y despacho de las causas que lleva cada magistrado, por lo cual, no cabe la condensación ni asimilación de cargos. El nombramiento y proceso de selección de Conjueces debe hacerse conjuntamente con el de los magistrados titulares, y dentro del mismo concurso de merecimientos. Adicionalmente, no es conveniente disminuir el número de magistrados de la Corte, puesto que, eso nos va a llevar a que las causas se demoren más en el despacho. Hoy en dia, ya existen muchisimos juicios en los que todavía no ha sido dictada la sentencia. Lo que buscamos es que la administración de justicia sea ágil y eficiente pero al tomar este tipo de medidas nos alejamos cada vez más de este objetivo. La razón que se da para la disminución del número de magistrados es evitar los fallos contradictorios pero la solución a este problema ya está prevista en el ordenamiento jurídico existente. El artículo 14 de la Ley Orgánica de la Función Judicial establece que: "Artículo 14.- En los casos en que la Corte Suprema expidiere fallos contradictorios sobre un mismo punto de derecho, los Ministros Jueces y el Ministro Fiscal, que serán convocados inmediatamente después de ocurrida la discrepancia, dictarán, por mayoría de votos conformes, la disposición que será generalmente obligatoria, mientras no se disponga lo contrario por la Ley. La resolución se dará, a más tardar, dentro de los quince días de hecha la convocatoria y se publicará en el Registro Oficial". A continuación el articulo alternativo: Artículo (13).- Composición: La Corte Suprema de Justicia estará integrada por 31 magistrados. Los magistrados se organizarán en las salas especializadas, conforme lo determine la ley. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán designados para un periodo de 9 años, no podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años. Cada sala contará con un número de Conjueces proporcional al de los magistrados. Además,

existirán el cuerpo de Asesores Jurídicos que determine el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con el número de causas que tengan pendientes de resolución cada Sala y conforme a la ley. Los Asesores Jurídicos tendrán el mismo régimen de incompatibilidad de los Magistrados y Conjueces, y serán nombrados conforme a la ley por el Consejo de la Judicatura. Nota: El doctor Vicente Taiano está de acuerdo con que se reduzcan el número de magistrados a 19, por lo tanto, no participa de la parte relativa a este tema en este artículo. Sobre el artículo 14: No se determina si el Presidente de la Corte Suprema puede o no ser reelecto. Consideramos que no debe serlo, por lo que, sugerimos el siguiente texto para este artículo. Artículo 14: Representación: Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán dentro de sus miembros a un Presidente quien ejercerá la representación legal de la misma y durará en sus funciones tres años sin que pueda ser reelegido. Así mismo, en cada Sala se designará un Presidente que durará en sus funciones un año, quien podrá ser reelegido. Las funciones y atribuciones de los presidentes estarán reguladas por la Ley. Sobre el artículo 15: No estamos de acuerdo con este artículo por ser reglamentario. Esto ya se encuentra establecido en el artículo 19 de la Ley de Casación, concordante con el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Función Judicial antes mencionado, que señala: "Artículo 19.- Publicación y precedente.- Todas las sentencias de casación serán obligatoriamente publicadas en su parte dispositiva en el Registro Oficial y constituirá un precedente para la aplicación de la Ley, sin perjuicio de que dichas sentencias sean publicadas en la Gaceta Judicial o en otra publicación que determine la Corte Suprema de Justicia. La triple reiteración de un fallo de casación constituye precedente jurisprudencial obligatorio y vinculante para la interpretación y aplicación de las leyes, excepto para la propia Corte Suprema. Igualmente la Corte Suprema de Justicia podrá emitir resolución obligatoria sobre puntos de derecho respecto de

los cuales existan fallos contradictorios de las cortes superiores y tribunales distritales, aunque no le hayan llegado por la vía de casación. La Corte Suprema resolverá sobre los fallos contradictorios ya sea por su propia iniciativa o a pedido de las cortes superiores o tribunales distritales. El Presidente de la Corte Suprema emitirá un instructivo para el adecuado ejercicio de esta atribución". Sobre el artículo 17: Vuelve a tratarse el tema de la paridad de género, con lo cual estamos en absoluto desacuerdo, por cuanto si se trata de un concurso de merecimientos, lo que debe garantizarse es que lleguen los mejores, más allá de ser hombre o mujer, pues el género no puede convertirse en un mérito más. Debe procurarse un procedimiento cuyas bases garanticen igualdad de condiciones para todos, sin discrimen de género o cualquier otro. El artículo debería quedar de la siguiente manera: Articulo 17.- Procedimiento de designación.- Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por El Consejo de la Judicatura de conformidad con los procedimientos que determine la Constitución y la ley, que contemplará concurso de oposición y merecimientos con impugnación ciudadana. Este punto es muy importante porque de la conformación del comité de selección dependerá la transparencia del concurso, por lo que, debemos asegurarnos que no provengan de ninguna función del Estado porque eso sería volver a lo mismo, esto es, la injerencia política de los partidos políticos o el gobernante de turno en la designación. Para eso proponemos que este comité esté integrado por delegados provenientes de: 1. Colegios profesionales del Ecuador. 2. Universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. 3. Movimientos indígenas, afroecuatorianos y campesinos del Ecuador. 4. Organizaciones de trabajadores y servidores públicos. 5. Organizaciones de mujeres. 6. Organizaciones de jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nota: El doctor Vicente Taiano considera que la elección debe realizarse por votación

popular. Sobre el artículo 19: Este artículo recoge el mismo inconveniente distorsionador de la paridad de género, por lo cual con fundamento en lo antes argumentado, el artículo debería quedar de la siguiente manera: Artículo 19.- Los requisitos y procedimientos para designar ministros de las cortes de apelación, jueces y demás servidores de la Función Judicial los determinará la ley, que deberá contemplar concurso de oposición y méritos con impugnación ciudadana. Artículo 20: Dentro de los concursos debe contemplarse las pruebas teóricas y prácticas para todos quienes aspiren a un cargo incluyendo a los Magistrados de la Corte Suprema y a los vocales del Consejo de la Judicatura. Por lo expuesto, sugerimos la siguiente redacción para este artículo: Artículo 20.- Los aspirantes a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a vocales del Consejo de la Judicatura deberán pasar pruebas teóricas y prácticas. Los demás servidores judiciales al entrar al servicio deberán aprobar un curso de formación general y especial y pasar pruebas teóricas, prácticas y psicológicas. Sobre las Disposiciones Transitorias: Segunda: Esta disposición es confiscatoria, ya que dispone que "...los demás recursos de los servicios notariales y registrales ingresarán al patrimonio de la Función Judicial...". Esto puede interpretarse como que también debe pasar a dicha Función los bienes muebles e inmuebles de los mismos. ¡Para qué necesita el Estado llenarse de bienes y, lo que es, peor correr el riesgo de enfrentar demandas internacionales por violaciones de los Derechos Humanos? La Constitución prohíbe de manera expresa la confiscación. El artículo 22 de la Ley Notarial establece: "Artículo 22.- Los protocolos se forman anualmente con las escrituras matrices y los documentos públicos o privados que el notario autoriza e incorpora por mandato de la Ley o por orden de autoridad competente o a petición de los interesados. Los protocolos pertenecen al Estado. Los Notarios los conservarán en su poder como archiveros de los mismos y bajo su responsabilidad". Lo

único que es propiedad del Estado son los protocolos tal como se desprende de la norma antes citada y paradójicamente se mencionan cosas que no son de éste como sistemas informáticos, datos públicos, gestión de información y no se lo hace con lo que realmente le pertenece en esta transitoria. Por su parte, los artículos 9, 11 y 57 de la Ley de Registro determinan que: "Artículo 9.- Al cesar en su cargo el Registrador saliente entregará el archivo de la Oficina a su sucesor por inventario". "Artículo 11.- Son deberes y atribuciones del Registrador: b) Llevar un inventario de los Registros, libros y demás documentos pertenecientes a la Oficina, debiendo enviar una copia de dicho inventario, a la Secretaría de la Corte Superior del respectivo distrito, dentro de los primeros quince días del mes de enero de cada año; c) Llevar, con sujeción a las disposiciones de esta Ley, los libros denominados Registro de la Propiedad, Registro de Gravámenes, Registro Mercantil, Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar y los demás que determina la ley; d) Anotar en el libro denominado Repertorio los títulos o documentos que se le presenten para su inscripción y cerrarlo diariamente, haciendo constar el número de inscripciones efectuadas en el día y firmando la dirigencia". Artículo 57.- Todo interesado tiene derecho a examinar sin reserva alguna los registros, índices y archivos de las Oficinas del Registro. El Registrador está por lo tanto obligado, mediante su vigilancia, a permitir dicho examen, en cuanto no se perjudique el servicio de la Oficina, sin que con ello se cause ninguna erogación a quien lo solicite". Por lo expuesto, sugerimos eliminar esta transitoria, puesto que ya está determinada en las leyes respectivas aquello que tienen obligación los notarios y registradores de entregar al Estado una vez que dejen los cargos. Tercero: Existe una contradicción en los plazos fijados para los concursos de notarios y registradores, puesto que, en la disposición tercera se determina un plazo de un año y en la siguiente, en cambio, el

tiempo para elegirlos es de 180 días. Cuarta: En esta disposición se deja abierta la puerta para que se nombre a los Magistrados de la Corte Suprema, los vocales del Consejo de la Judicatura, Notarios y Registradores a la medida de quien está ejerciendo el poder, puesto que, al decir que el nuevo concurso se "...llevará a cabo el nuevo proceso de selección y designación con las reglas y requisitos establecidos en esta Constitución y en las disposiciones establecidas para el efecto por la Asamblea Constituyente...". Esto no puede quedar al arbitrio de la mayoría de esta Asamblea porque estaremos frente a una nueva politización de la administración de justicia. Nuevamente, volvemos en el inciso segundo a lo de la paridad de género. Esto es incorrecto por lo expuesto en reiteradas ocasiones. Atentamente, Catalina Ayala. Mae Montaño. Vicente Taiano". ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, antes de iniciar el debate, pídale al operador que verifique la presencia de los señores asambleístas y se registre la asistencia.----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Tenemos todavía un informe, señor Presidente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Continúe. Pero igual, antes de continuar con la lectura del informe, verifique la presencia de los asambleístas.---------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señores asistentes, verifiquen que estén insertas las tarjetas solo de los asambleístas que se encuentren presentes en la sala. Caso contrario, retiren las tarjetas. Las tarjetas son responsabilidad de los señores asambleístas. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Ochenta y ocho asambleístas, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. Continúe, señor Secretario.----------

EL SEÑOR SECRETARIO. "De nuestra consideración: En conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 del *Reglamento de Funcionamiento de* la Asamblea Nacional Constituyente, nos permitimos hacerle llegar el informc de minoría respecto de Notarios Públicos y Registradores de la Propiedad y Mercantil. Debemos partir del hecho de que las normas relativas a la función, actividades, estructura y remuneración de los Notarios y Registros de la Propiedad y Mercantiles, no deben estar consagradas como textos constitucionales, sino que las leyes respectivas deben regularlo. En el caso del Ecuador -que sc rige por el sistema latino, por encontrarse las raíces de nuestro sistema jurídico en el derecho romano-germánico, y que, como tal, es miembro de la Unión Internacional del Notariado- los Notariados están regidos por la Ley Notarial y los Registradores, tanto de la Propiedad como Mercantiles, por la Ley de Registro. Adicionalmente, en ninguno dc los países que integran dicha unión los Notarios son asalariados del Estado. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la fe pública como la "autoridad legítima atribuida a notarios, escribanos, agentes de cambio y bolsa, cónsules y secretarios de juzgados, tribunales y otros institutos oficiales. Para que los documentos que autorizan en debida forma sean considerados como auténticos y lo contenido en ellos sea contenido por verdadero mientras no se haga prueba en contrario". El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas dc la Universidad Nacional Autónoma de México, define "...al notariado de tipo latino, como el de nuestro país -que es igual al ecuatoriano- en el que el notario es al mismo tiempo un funcionario dotado de fe pública y un abogado que ilustra las partes, redacta el documento, lo autoriza, expide copias certificadas y conserva el original. La actuación del notario no tiene más límites que los que

marcan las leyes....". De esto se desprende que la labor del Notario va más allá de dar fe pública, ya que este funcionario brinda un servicio. Las tarifas que deben cobrar los Notarios están reguladas por el Consejo Nacional de la Judicatura y la última tabla se publicó en el Registro Oficial N° 178 del 26 de septiembre del año 2007, en la cual no se incluye ningún valor por la asesoría jurídica que estos brindan a los usuarios, quienes en muchos casos no acuden a las Notarías con abogados, lo cual significa un ahorro para el usuario y un servicio social que prestan los notarios, imbuidos de los principios y valores que destacan sus funciones, inspirados en los preceptos y enunciados de la Unión antes citada. Las personas acuden a solicitar los servicios de los Notarios por diversas razones, entre las cuales están la confianza que tienen en cada uno de ellos, por conocimiento, experiencia, probidad, idoneidad, etc. Así por ejemplo, cuando se otorga un testamento se deja expresa la voluntad sobre el manejo de los bienes después del fallecimiento de una persona y de acuerdo con la Ley Notarial y el Código Civil, el Notario está prohibido de dar copias del testamento antes de que fallezca el testador. Si no se tiene esa confianza, mal puede una persona depositar su voluntad ante cualquiera. Es de resaltar que los Notarios tienen una gran responsabilidad, desde el punto de vista civil, penal y tributario. Esta deviene de los distintos cuerpos legales a los que están sometidos, encontrándose, por ende, expuestos a ser sujetos de demandas que los pueden llevar a la destitución del cargo e inclusive a la pérdida de su libertad, el derecho más valioso que tiene el ser humano. Largo sería enumerar la serie de actos en los cuales va ligada la responsabilidad penal y pecuniaria del Notario. Fijar un sueldo a estos funcionarios sería perjudicial y terminaría con la fe pública, entre otras, por las siguientes razones: 1. Aumentaría la carga estatal porque los costos de funcionamiento de las notarías actualmente, que incluye entre muchos, los sueldos de los

empleados y la infraestructura, los asumen los Notarios y con las reformas que se pretenden implantar vía Constitucional correrían por cuenta del Estado. 2. Afectaría la eficiencia y eficacia del servicio y fomentaría la corrupción porque el Notario le va a dar igual elaborar una escritura o diez, ya que recibirá el mismo sueldo y seguramente el usuario se verá tentado a dar dinero para que se agilice su trámite. 3. Terminaría con la asesoría jurídica que prestan actualmente los Notarios porque a estos funcionarios no les importará dar un buen servicio al cliente. 4. Acabaría con la modernización de las Notarías, las cuales se convertirían muy pronto en despachos similares a los actuales juzgados no modernizados. Además, en el proyecto que ha presentado la mayoría, no se determina la forma en que se van a distribuir el trabajo entre las Notarías. Es importante resaltar que no todos los actos y contratos tienen la misma cuantía ni fojas, ni lleva el mismo tiempo su autorización. Además, los Notarios deben manejar enormes sumas de dinero, debido a que a ellos se confía el pago de los tributos que gravan los diversos actos y contratos. De ahí, un argumento más para velar por la confiabilidad al momento de escoger al Notario. Por otra parte, en lo que concierne a las registradurías, debemos reconocer que los Registros de la Propiedad y Mercantiles se han ido actualizando hasta adquirir software que permite que obtengamos certificados en menos de 24 horas, lo cual implica una gran inversión que seguramente no será compensada de manera justa por el Estado. Este seguramente no tendrá la capacidad para hacerlo ni el interés, con lo cual, a más de atentar contra la celeridad en las negociaciones, estaríamos perjudicando a los usuarios. Por lo expuesto, de ninguna manera concordamos en que este tema sea incluido en la Constitución. Sin embargo, sabiendo que la mayoría abandera una corriente distinta, nos permitimos poner a consideración del Pleno el articulado que presentamos como alternativa dentro de la Mesa, mismo que no fue

acogido.- Título. De los Registros y Notarías. Artículo.- En cada cantón o distrito metropolitano se instituirá Registros de la Propiedad, Registros Mercantiles y Notarías en función del número de habitantes. Para ser Registrador o Notario se requiere tener título de abogado expedido por una universidad legalmcnte reconocida y acreditar experiencia en el ejercicio profesional de por lo menos 5 años. Su designación se realizará previo concurso público de oposición de conformidad con la ley respectiva, estableciendo la forma de impugnar las candidaturas y fijando las correspondientes veedurías. Artículo.- Créanse el Consejo Nacional de Registro y el Consejo Nacional de Notariado, independientes el uno del otro, que serán los órganos encargados de la regulación y control de la actividad registral y notarial, en su ordcn. Su estructura y funcionamiento se regularán cn la forma que determinen sus correspondientes leyes. Artículo.- Corresponde a cada uno de dichos consejos la capacitación, calificación y evaluación periódica de los registradores y notarios; y, velará cada uno de ellos por el cumplimiento del régimen disciplinario y de aranceles. Disposición Transitoria.- En el plazo de 180 días la Función Legislativa dictará la nueva Ley de Registros y la de Notarías, en las cuales se determinará el régimen disciplinario y de aranceles, para los registradores y los notarios, en su orden, debiendo crearse la Caja Registral Nacional y la Caja Notarial Nacional, cuyos fondos y destino serán rcgulados por las leyes respectivas. Por la atención que se sirva dar a la presente, quedamos de ustedes muy agradecidos. Atentamente, Mae Montaño. Catalina Ayala. Vicente Taiano". Continúo con el siguiente Informe de Minoría. "De nuestra consideración: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente nos permitimos hacerles llegar el Informe de Minoría respecto de Garantías Jurisdiccionales. Debemos partir señalando que las garantías que se desarrollan en este articulado no

son jurisdiccionales, como se las ha llamado, sino constitucionales. Las primeras son aquellas referentes al debido proceso y las segundas constituyen mecanismos de defensa de los derechos consagrados en la Constitución. Por lo tanto, el capítulo debe denominarse De las Garantías Constitucionales. El doctor German Rojas, en su diccionario de derecho, define a las garantías constitucionales como "las que ofrece la Constitución en el sentido de que se cumplirán y respetarán los derechos que ella consagra, tanto en lo que se refiere al ejercicio de los de carácter privado como al de los de índole pública". En la Constitución debemos simplemente detallar las acciones que tienen las personas para reclamar cuando sus derechos han sido violados. El procedimiento para ejercer cada acción debe estar pormenorizadamente desarrollado en la Ley Orgánica de Control Constitucional y es lógico porque es más factible reformar la ley que la Constitución aunque ésta tenga el carácter de orgánica. Además, no deberíamos tener una Carta Magna reglamentaria como lo que se está elaborando. Un texto de 445 artículos, configura una excesiva carga normativa realmente innecesaria, tanto bajo la óptica del derecho, como del sentido común y del orden práctico de las cosas. Por lo expuesto, todo lo establecido en la Sección Primera: Normas comunes a las acciones constitucionales es materia de la Ley Orgánica del Control Constitucional, y debe suprimírsela. En la Constitución solamente debe especificarse y consagrarse los diferentes tipos de acciones constitucionales, sus características, los sujetos activo y pasivo y la naturaleza de las mismas. A continuación sugerimos los siguientes artículos: Acción de Amparo.- Artículo.- De la Acción de Amparo.- Cualquier persona, por sí misma, o por quien actúe en su nombre, podrá interponer ante el juez constitucional competente la acción de amparo para solicitar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la adopción de medidas urgentes destinadas a evitar, cesar o remediar de manera inmediata las

consecuencias de un acto y omisión ilegítimos provenientes de cualquier autoridad pública, que violen o puedan violar los derechos fundamentales consagrados en esta Constitución o en instrumentos internacionales vigentes en el Ecuador, en cuyas consecuencias amenacen de forma inminente con causar un daño grave. Esta acción también podrá ser interpuesta contra particulares que presten servicios públicos, ya sea vía concesión o delegación o contra quienes afecten grave y directamente un interés comunitario o colectivo. El procedimiento para ejercer esta acción estará regulado por la ley. Acción de Habeas Corpus.- No estamos de acuerdo con incluir el ejercicio de la acción de hábeas corpus en los casos de desaparición forzada porque ello constituye un secuestro, esto es un delito de lesa humanidad y que definitivamente no va a ser remediado vía habeas corpus. Para estos casos, existen los órganos competentes del poder público, como la Unidad Antisecuestros y las normas legales que se pueden aplicar. Tampoco consideramos procedente incorporar en el articulado, que cabe esta acción cuando la orden proviene de cualquier persona. En muchas ocasiones es necesario retener a alguien aun en contra de su voluntad por su propio bien, el de su familia y el de la sociedad en general, por ejemplo, cuando se interna a alguien en clínicas de rehabilitación porque sufre trastornos mentales o un problema de drogas o alcohol. En los casos en los cuales la persona es detenida en un centro de asistencia médica por no cancelar la factura existen otros procedimientos para que aquella pueda recuperar su libertad. Artículo.- De la Acción de Habeas Corpus.- Cualquier persona, por sí o por intermedio de un tercero, podrá interponer ante el juez constitucional competente la acción de habeas corpus, cuando hubiese sido privado de su libertad de manera ilegal, arbitraria o ilegítima por orden de cualquier autoridad pública o dentro de un proceso penal, con el fin de recuperarla de manera inmediata. El procedimiento para el

cjercicio de esta acción estará regulado en la Ley. Acción de Habeas Data.- Respecto a la acción de Habeas Data sugerimos el siguiente artículo: Artículo.- De la Acción de Habeas Data.- Cualquier persona por sí o por intermedio de un apoderado para tal efecto, podrá interponer la acción de habeas data para acceder a datos, de cualquier tipo, que tengan relación con sí misma y que reposen en registros o bancos de datos públicos o privados a fin de exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos cuando considere que se encuentran incompletos, erróneos o que afectan ilegítimamente sus derechos consagrados en esta Constitución o en instrumentos internacionales vigentes. El procedimiento para el ejercicio de esta acción estará regulado en la Ley. Acción de Acceso a la Información.- En cuanto a la acción de acceso a la información pública, no creemos conveniente agregar aquí que esta acción puede "...ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquier otra clasificación de información" porque existen ciertos informes que comprometen la seguridad del Estado y, por lo tanto, no pueden hacerse públicos. Para eso hay un tiempo en el cual deben desclasificarse ciertos archivos. Sugiero, por tanto, que este artículo quede redactado de la siguiente manera: Artículo.- De la Acción de Habeas Data.- Cualquier persona, por sí o a través de un tercero, podrá interponer la acción de acceso a la información pública, ante el juez constitucional, a fin de que ésta le sea proporcionada, en caso de que le hubiese sido negada expresa o tácitamente por la autoridad competente. Cuando la información pueda afectar a la seguridad nacional o al orden público se seguirá un procedimiento especial establecido en la Ley. El procedimiento para el ejercicio de esta acción estará regulado en la Ley. Recurso Extraordinario de Amparo. Por otra parte, el nuevo recurso extraordinario de amparo conlleva, no obstante su noble intención, el

peligro de convertirse en una cuarta instancia en el sistema procesal ecuatoriano, lo cual redundaría en un mayor caos, en procesos interminables y engorrosos, y además se replicarían los vicios de la práctica en la casación. Si lo que pretende precautelarse son los derechos constitucionales que puedan ser violentados en un proceso judicial, sugerimos que lo que debería hacerse es reformar la Ley de Casación y colocar expresamente una causal de admisibilidad que se hayan violado por acción y omisión derechos reconocidos en esta Constitución. Además, se vislumbra una grave contradicción en este recurso, pues por un lado tenemos la gravedad que significa la violación de un derecho constitucional y sin embargo de esto, el efecto del recurso es devolutivo, es decir que no se suspenden las consecuencias del mismo, lo cual no se compadece de la urgencia de evitar o reparar una violación de un derecho constitucional. En aras de la seguridad jurídica del país este recurso no debe insertarse en la Constitución ni en el ordenamiento jurídico. Atentamente, Catalina Ayala, Mae Montaño. Vicente Taiano". Hasta ahí los informes de Mayoría y Minoría, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el asambleísta Fernando Vega. ----------

EL ASAMBLEÍSTA VEGA FERNANDO. Muchas gracias, señor Presidente. Compañeros y compañeras asambleístas: A nombre de la Mesa Ocho, acabamos de escuchar los informes de Mayoría y Minoría, sobre los textos de Justicia Ordinaria, Notariado y Garantías Constitucionales. Las fuentes que nutrieron nuestro trabajo ha sido la propia y abundante experiencia y sabiduría de nuestros compañeros asambleístas de mayor cxperiencia y también la frescura innovadora de los más jóvcnes. Las Mesas itinerantes nos llevaron a varias ciudades

del país, donde pudimos recoger en vivo las demandas, las aspiraciones de la ciudadanía. También en el seno de la Asamblea hemos recibido a múltiples comisiones, con cientos de denuncias de ciudadanos víctimas de la corrupción, y con quienes la justicia ha estado en deuda. Las comisiones generales para recibir los aportes de las instituciones vinculadas con el tema de la corrupción y la justicia, así como los especialistas que nutrieron nuestras inquietudes y conocimientos, nos ayudaron a completar los insumos para este trabajo. De todo ello resultó un diagnóstico que creemos que lo compartimos íntegramente en la Mesa. Hemos constatado que en la historia del Ecuador, el tema de la justicia y la corrupción tiene una larga historia, desde la conquista, la colonia, la época republicana hasta nuestros días, y en estos últimos treinta años en especial, el tema de la injusticia y la corrupción se ha ido acumulando, se ha ido acumulando con un deterioro cada vez mayor. No hemos logrado consolidar un Estado de derecho, no existe seguridad jurídica en el país. Un país sin una justicia proba, oportuna y ágil no puede sustentarse en la democracia, y no es posible la democracia sin un Poder Judicial también sujeto a las reglas democráticas. Ante esta realidad, ha ido creciendo también en estos últimos años la esperanza de un cambio, de un anhelo por un país justo y honesto. Esta esperanza largamente represada, explica el apoyo mayoritario que esta Asamblea ha recibido en las urnas, con la encomienda de hacer el cambio ético, el cambio institucional del país, la reforma política. Creo que compartimos con todos los compañeros de la Mesa este diagnóstico. Encontramos en el Ecuador una justicia en la cual no había independencia ni calidad suficiente en el servicio judicial, para garantizar el acceso a la justicia; una justicia cautiva de los grupos de poder político y económico, que ha servido para perseguir a adversarios políticos, para crear cortinas de humo y mantener en la impunidad a los pillos; solo los pobres pagan sus penas a veces

pequeñas, en las cárceles convertidas en verdaderas mazmorras de denigración humana. De ahí que el pueblo haya perdido casi totalmente la confianza, y la justicia ha perdido credibilidad ante los ecuatorianos, y están en estándares muy abajo en el concierto latinoamericano. Tenemos pues este primer elemento del diagnóstico. Un segundo, a la ciudadanía le faltan mecanismos legales y administrativos que garanticen la justiciabilidad de los derechos, una justicia autista, burocrática, aislada de la realidad de las necesidades de la gente, enredada en la telaraña de miles de leyes en las que permanentemente se sacrifica la justicia por las formalidades, a cargo de procesos interminables y engorrosos, una justicia represada durante años y de manera especial en estos últimos. Un pueblo hambriento de justicia que no encuentra recursos legales, mecanismos de exigibilidad de los derechos, y no puede acceder a la vigilancia del control ciudadano para mejorar la justicia. Por lo tanto, este pueblo hambriento y sediento de justicia, que se convierte en un clamor que a veces no ha tenido otros oídos que Dios, cuando la gente dice, "solo hay un Dios en el cielo, porque en este mundo no hay justicia", algunos esperan que sea en la otra vida donde puedan recibir la justicia que en este mundo no han tenido. Otros dan paso a la indignación y a la cólera, para recurrir a la barbarie de hacer justicia por propia mano; otros se refugian en el manto del humor sarcástico y desengañado, como el caso de los taxista de Quito, que cuando dicen que te lleven a la Corte, dicen, "vamos al palacio de la injusticia", o en Guayaquil, "a la casa de la moneda". Ante esta realidad, ante esta crisis profunda de la justicia en el Ecuador, nuestra Mesa se propuso el siguiente objetivo como objetivo nacional de transformación, garantizar el acceso a la justicia en términos de independencia, equidad, eficiencia, oportunidad, gratuidad e interculturalidad, de manera que logremos superar los graves defectos encontrados. El proyecto ha estado dirigido pues a estos objetivos, los

textos que ahora presentamos están en la línea de lo que ya habíamos aprobado en los primeros principios que fueron aprobados casi por unanimidad en la Mesa. La premura y la aceleración de estos últimos meses no ha permitido lograr la misma unanimidad que habíamos logrado en los primeros textos, y por eso hoy se han presentado dos informes, uno de Mayoría y otro de Minoría. El eje central de este nuevo aporte de nuestra Mesa, es devolver a la ciudadanía la confianza en la administración de justicia y en la Función del Estado, de garantizar la vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y en todos los instrumentos internacionales. Ofrecer a las personas acciones para proteger y reclamar sus derechos, mecanismos para el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes, mecanismos ágiles, oportunos, expeditos, para que las personas defiendan sus derechos frente al poder estatal, frente a los poderes fácticos y frente a otros particulares, medidas que obligan al Estado a planificar sus actividades y políticas públicas teniendo en cuenta su más alta función de garantizar los derechos de las personas. Los cambios que se proponen en la administración de justicia, pretenden hacer que los jueces se dediquen exclusivamente a la tarea de administrar justicia. Qué más poder que el poder decidir sobre la vida de las personas, sobre sus bienes, sobre su libertad. Por eso hemos concedido al Consejo Nacional de la Judicatura, la función de gobernar, la función judicial para eximir a los jueces de esta distraída tarea. Garantizar la alternabilidad de los magistrados, la renovación de la Función Judicial, sangre joven también, pluralidad de criterios, porque siempre hay una tendencia en las instituciones a burocratizarse y esclerotizarse. Consagrar la presencia de la contraloría social en la selección de jueces, elegir jueces no solamente capaces, sino solamente probos, evaluar permanentemente a los funcionarios judiciales en el desempeño de sus cargos, impedir que las funciones públicas de registradores y notarios

sigan teniendo, sigan siendo un negocio privado, con tantas distorsiones e injusticias respecto de otros ciudadanos. Es un texto duro, provocativo que hay que debatir...----------

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA CÉSAR RODRÍGUEZ, SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, señor Asambleísta. -----

EL ASAMBLEÍSTA VEGA FERNANDO. Gracias, señor Presidente. ...consolidar la unidad jurisdiccional eliminando los fueros especiales, erradicar el abuso de la administración de justicia mediante el control constitucional, para que las sentencias que han violado los derechos humanos de los ciudadanos no se queden en el limbo. Un nuevo nombre para la Corte Constitucional, para ayudar a romper con el pasado de corrupción e ineficiencia y desprestigio, un nuevo nombre para un nuevo comienzo, a la misma altura que la Asamblea Nacional Legislativa, que estamos aprobando en esta Constitución. Cierto que el texto constitucional no puede hacer la revolución ética que necesita el país, pero puede contribuir para acabar con la injusticia, la impunidad, el abuso del derecho y el retardo a la administración de justicia. Agradezco a todos los compañeros asambleístas, en especial a la compañera Vicepresidenta, Gina Godoy, a Rosa Elena, quien ha sido importante en este trabajo, y a todos los compañeros tanto de la mayoría como de la minoría, que aportaron y discutieron estos temas. Como está delineada la cancha, sí... ----------

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA FERNANDO CORDERO CUEVA, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

CONSTITUYENTE. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Se terminó su tiempo. ----------

EL ASAMBLEÍSTA VEGA FERNANDO. Sí, termino, señor Presidente. ...delineada la cancha y establecidas las reglas, la tarea de la Asamblea termina con esto. Cómo jueguen los nuevos jugadores y los árbitros, será trabajo del futuro de toda la ciudadanía y de todos los miembros de la Función Judicial. Agradezco, pues, y muchas gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleista Mae Montaño. ----------

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO MAE. Colegas asambleístas, buenos días. Cuando iniciamos el trabajo en las Mesas, partimos del hecho de que si el pueblo tiene hambre de oportunidades, indiscutiblemente tiene sed de justicia, y entonces nos propusimos, independientemente de las visiones ideológico políticas de quienes conformábamos la Mesa número Ocho, que para ese entonces se llamaba de Justicia y Lucha Contra la Corrupción, porque después fue desmantelada, nos propusimos, que si en un tema, efectivamente deberíamos tener coincidencias, no solamente acuerdos sino consensos, era precisamente en los temas que habían sido asignados a la Mesa Ocho, y nos propusimos poner desde la diversidad de lo que éramos, diversidad profesional, diversidad en la edad, en las profesiones, etcétera, dar nuestro mejor aporte, y así lo hicimos en un principio. Sin embargo, poco a poco el trabajo de la Mesa fue desmantelándose y poco a poco también fueron apareciendo propuestas desde el grupo de mayoría dentro de la Mesa. Y sorprendidos porque no pudimos y no fuimos capaces de estructurar, a pesar de la calidad de los integrantes de la Mesa, no tuvimos la capacidad, vuelvo a repetir, de estructurar esos contenidos desde la

visión y desde la producción de quienes la estructurábamos. Así fue como nos fuimos alejando de la gran idea, del gran ideal y de la gran aspiración de llegar a un consenso. Y finalmente hemos tenido que armar con las piezas que salieron de la Mesa Ocho y con las piezas que han salido de otras Mesas, el rompecabezas, para encontrarnos finalmente con que los contenidos que hoy se proponen aquí no son tan inocentes; que los contenidos que se proponen aquí y que empiezan con el cambio de denominación de la Corte Suprema de Justicia, para llamarla Corte Nacional de Justicia, tienen un inmenso objetivo político, y el objetivo político es claro y es evidente, es poner a la justicia, es colocar al Poder Judicial en una real subordinación, y esta subordinación se siente cuando en alguna de las otras Mesas dijeron que la justicia constitucional no era tema de la Mesa Ocho, decidieron que la Corte Constitucional debería estar por encima de la Corte, para mí Suprema de Justicia, seguiré llamándole Corte Suprema de Justicia, no voy entrar en un análisis de derecho, se lo voy a dejar a Rafael Esteves, que lo sabe hacer de manera excelente y que también es integrante de la Mesa. Por tanto, voy a seguir con mi análisis político. Y digo, colocaron por encima de la Corte Suprema de Justicia a la Corte Constitucional y, claro, cuando seguimos analizando las otras piezas del rompecabezas, es lógico que empiezan a enlazar, empiezan a articular, y recuerdo perfectamente, en alguno de esos debates intensos que teníamos en la Mesa, cuando plantee que necesitábamos saber qué era la famosa Corte Constitucional, y ¿qué es lo que iba a hacer la famosa Corte Constitucional? Algún compañero de la Mesa, me voy a reservar el nombre, de manera sumamente sincera dijo, claro que vamos a tener una Corte Constitucional y claro que la Corte Constitucional va a estar por encima de la Corte Suprema de Justicia, porque tenemos que cuidar lo que hemos ganado en la revolución ciudadana, porque no vamos a permitir que los avances que hemos

logrado en la revolución ciudadana se pierdan. Por tanto, claro que vamos a tener una Corte Constitucional. Digno de felicitación, por fin supimos ¿qué es realmente el objetivo y la finalidad de poner un órgano que será político por la naturaleza de su designación y más aún cuando se establece un recurso extraordinario de amparo? Es vidente, es evidente, la sentencias de la Corte Suprema de Justicia ya no tendrán la condición de cosa juzgada, porque en este país nos conocemos, indiscutiblemente, la Corte Constitucional se convertirá en una cuarta instancia. Y por si fuera poco, por si fuera poco, la Transitoria Cuarta, -quiero que me la pongan ahí a la Transitoria cuarta- la Transitoria Cuarta, en un juego hermosísimo de palabras, hermoso de palabras, nos da unos plazos que, indiscutiblemente, si es que queremos respetar a la nueva Constitución, después del referéndum será imposible cumplir esos plazos. Pero claro, por ahí dice, muy, muy, pero muy elegantemente, es que designaremos a estos funcionarios, -continúe- vamos a designar, vamos a estructurar al Consejo de la Judicatura y a la Corte Suprema de Justicia, con las disposiciones establecidas en esta Constitución y en las disposiciones establecidas para el efecto por la Asamblea Constituyente. ¿Qué tiene que ver la Asamblea Constituyente después del referéndum? Entonces que nos digan la verdad. Es que lo que nos está sucediendo es que hemos caído presos del encanto de la justicia y queremos politizarla constitucionalmente. Y vuelvo a recordar, hace unos días, vuelvo a recordar lo que dije hace algunos días, lo que se pretende es subordinar a los distintos poderes del Estado, para establecer una dictadura constitucional. Necesitamos empezar a hablar con claridad, ahora que el rompecabezas, está estructurado... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Punto de orden, asambleísta Montaño. -------

LA ASAMBLEÍSTA ALVARADO ROSANA. Sí, porque se dice que aquí es

un bello y hermoso juego de palabras, entonces que se termine de leer la frase completa, porque de otra manera se asume como verdadero que esta Asamblea es la que va nominar jueces, cuando no es así, y eso se aclara leyendo la frase completa. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Yo estoy de acuerdo, no es punto de orden, les pido a todos que usemos, el punto de orden es para enrumbar el orden de la sesión, no para dar las opiniones, para eso me piden la palabra. Por favor, ayúdenme a conducir, el debate es para confrontar ideas, pero con orden, con orden. Gracias. ----------

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO MAE. Y quiero también decir, que entre las tantas ilusiones que nos mataron en el proceso de la Mesa, estaba una, y es que desde la precampaña y desde la campaña, cuando analizábamos profundamente el problema de la justicia, nos encontramos con una verdad que, particularmente a mí que no soy abogada, que no he estado en los juzgados ni en las cortes, por ejercicio profesional, me encontré con una verdad que no había sido dicha con mucha claridad en este país, porque siempre estamos generalizando, eso es verdad, y decíamos que la justicia es corrupta, y efectivamente así es; que es ineficiente, que la justicia no funciona, y en ese proceso de investigación, me encontré que sí hay un distrito judicial que está considerado el mejor distrito judicial en este país, que no lo dice Mae Montaño, que lo dicen los abogados, que lo dicen los juristas con gran experiencia, y ese es el distrito del Azuay. Y por eso nos propusimos, y por eso nos propusimos, no porque no amemos a la ciudad de Quito, amo entrañablemente a la ciudad de Quito, pero creo que la ciudad de Quito puede ser solidaria, y esa solidaridad significa también desprenderse de órganos burocráticos, porque el exceso de burocracia intoxica la ciudad de Quito, creo que Quito requiere; Quito tiene

condiciones suficientes, históricas, culturales, razones fuertes para seguir siendo la capital de este país, y yo no permitiría jamás que en un momento como este se le quite esa potestad a la ciudad de Quito. Pero sin embargo, sí creo que es beneficioso para el país, reconocer experiencias positivas y compartir y desconcentrar el poder desde la ciudad de Quito, y por eso apoyé con absoluta claridad que Manabí sea la sede...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto. ----------

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO MAE. ... de la Función Legislativa, y una vez más me ratifico en que la Corte Suprema de Justicia deberia tener como sede la ciudad de Cuenca. Y es una pena, porque efectivamente este paquetazo de artículos en donde hay tantas cosas de qué hablar, diez minutos son realmente menos que suficientes. Y simplemente termino con la inmensa reflexión de que la historia nuevamente, la historia se repite cuando queremos hacer cambios con retrocesos. Las notarías no pueden convertirse, los notarios no pueden y no deben convertirse, simplemente para rescatar lo que significa la eficiencia y la transparencia, no en órganos que no sean regulados, pero no en funcionarios públicos. Una vez más me ratifico en que estamos aquí...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó su tiempo. ----------

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO MAE. ...para defender la democracia y no a las dictaduras constitucionales. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleista Catalina Ayala. Doctor Rafael Esteves. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Gracias, señor Presidente. No voy a perder el tiempo quejándome de esta gran cantidad de articulados que nos vienen a la Mesa, y el poco tiempo que tenemos para debatirlos. Tampoco, señor Presidente, me voy a quejar porque en ese informe de la minoría están todas las idcas que yo expuse en la Mesa. Así es la vida, allí no consta mi firma y, sin embargo, quienes firmaron debieron estar aquí presentes, para debatirlos, y brillan por su ausencia, y sus suplentes también. Vamos a lo de fondo. Parece que alguien cree que le estoy haciendo sombra, yo no le hago sombra a nadie. Vamos con el artículo ocho, por favor. Rápidamente, dice, y esto, no digo ojo, oído y vista, a los abogados de todo el país, a la Federación Nacional de Abogados, a los Colegios de Abogados, a las facultades de Jurisprudencia, esto de aquí es terriblc y lo objete en la Mesa, con documentos en mano. "Las partes procesales –dice- y sus abogados patrocinadores, cuando litiguen maliciosa y temerariamente, que generen obstáculos o dilaten de manera innecesaria los procesos, pagarán solidariamente las costas judiciales, los abogados pagan -una indemnización por daños y perjuicios y serán sancionados con una multa...". Esta disposición es terriblemente ofensiva para el ejercicio de la profesión de abogado, ya los abogados no podrán litigar, entonces, van a ser perseguidos con cualquier pretexto, y lo que es peor, señor Presidente, los que aprobaron ese articulo se pasaron por alto un pronunciamiento de las Naciones Unidas. Aquí lo tengo y se los puedo dar las copias para que la lean. "El derecho se aprende estudiando pero se ejerce pensando", decía el profesor Couteur". Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada. Porque ya vamos a analizar eso, sobre el ejercicio de la profesión de abogados. Naciones Unidas, fecha, veintisiete de agosto al siete de septiembre de mil novecientos noventa. Rápidamente los artículos."15. Los abogados velarán lealmente en todo momento por los clientes". "16. Los gobiernos

garantizarán a los abogados, que puedan desempeñar todas sus funciones profesionales, sin intimidaciones, sin obstáculos, sin acosos, sin interferencias indebidas, que no sufran ni tampoco estén expuestos a persecuciones o sanciones económicas, de cualquier medida que hayan adoptado" "18. Los abogados no serán identificados con sus clientes -los abogados no serán identificados con sus clientes, lo dice las Naciones Unidas y allí se está identificando al abogado como cliente- cuando ni siquiera en el caso de injurias -en el caso de injurias- presuntamente vertidas en el curso de la defensa, son consideradas como tales". Al calor de la defensa, por la lealtad que tiene el profesional de la abogacía con su cliente, escuchen abogados del país, son más de cincuenta mil los abogados del país, eso debería borrarse, eso es una vergüenza y un atentado, un atentado contra el libre ejercicio de esta noble profesión de abogado. Entre ellas, por eso justo es eterno, blanco, que no digo de color blanco, porque el blanco no es un color. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Y muchos se ríen, dicen es de color blanco. No, señores, el blanco no es ningún color, y el negro tampoco, y el que no sabe ¡por qué?, que se ponga a estudiar. Vamos al artículo trece, Trece, por favor. "La Corte Nacional de Justicia estará integrada por dieciocho magistrados, y el Presidente. Los magistrados se organizarán en salas especializadas...". Ojo, los magistrados, los magistrados se organizarán en salas especializadas, no se puede decir esto, porque cuando yo, por ejemplo quiero concursar para magistrado de una Corte de Casación, me inscribo en el concurso para magistrado de la Sala Penal, me inscribo en el concurso para magistrado de la Sala Civil, de la Sala Laboral. Yo no me puedo inscribir para las tres salas, porque no soy un aprendiz de todo y maestro de nada; estas son salas especializadas. La especialización existía desde la primera instancia, por eso existen jueces laborales, jueces penales, jueces civiles, jueces de inquilinato, jueces de la niñez y de la adolescencia. No pueden, cuando

ya han ganado el concurso, los magistrados reunirse y decir yo voy a la Sala tal, yo voy a la Sala cual. Eso no está bien, señor Presidente, esto no está bien, señores asambleístas, cada cual tiene una cspecialización y debe inscribirse al concurso, en el concurso para magistrado de determinada Sala. Eso está mal, eso yo no lo voy a aprobar. El segundo inciso del artículo trece, esto es terrible, abogados del país, columnistas de los diarios, facultades de Jurisprudencia. Cada Sala contará con el número de Conjueces...", perfecto, los conjueces reemplazan a los jueces en caso de cxcusas o recusación. Pero ahí lc agrega también, cada Sala tendrá "Asesores Jurídicos". ¡Qué tiene que hacer un asesor jurídico de un magistrado de casación, en una Corte Suprema de Justicia o cómo se le llame? Eso es darle patente de corso a la corrupción, porque significa: Uno, que van como magistrados incompetentcs o ignorantcs en dcrecho. O, segundo, que los asesores le van a redactar los fallos y que a lo mejor los asesores con ese borrador lo andan por allí presentando. Ya hubo una denuncia hace pocos días, en que un magistrado dijo, por aquí vino alguien que me trajo un borrador en papel membretado, y se refería a un juicio de una cantidad inmensa de miles de dólares. Eso no puede aceptarse, asesores de quienes van a dictar sentencia. El que va a dictar sentencia, ¿sabe o no sabe? Si no sabe, que se vaya a su casa. Acá hay otra, vamos con el artículo quince, e queda el tiempo cortito. Dice que hay un "Magistrado ponente". No existen magistrados ponentes, existe el magistrado que elabora el primer borrador, que es otra cosa. Aquí hay otra perla, esta es terrible, en el mismo inciso, por favor, para que el pueblo lo lea, quince, inciso segundo. "El Magistrado ponente -no hay magistrados ponentes- para cada sentencia será designado mediante sorteo...". Eso es cierto. "El magistrado ponente debe observar la jurisprudencia obligatoria...". La jurisprudencia obligatoria, es la que de su nombre se desprende, obliga, aunque parezca redundante, a todo magistrado a

someterse a ella, a menos que el Congreso viva esa situación, elevando esa situación jurisprudencial a nivel de ley. Está obligado el magistrado a observar la jurisprudencia obligatoria. Pero saben ¿qué dice más acá?, inciso segundo, lean allí, por favor, más que ustedes, compañeros, al pueblo que está mirando la pantalla. "Para cambiar el criterio jurisprudencial obligatorio, -¿cómo un juez puede cambiar el criterio jurisprudencial obligatorio?, si es obligatorio, si no lo observa, comete e incurre en prevaricato, y dice allí- el Magistrado oponente se sustentará en razones jurídicas motivadas que la justifiquen, y que su fallo deberá ser aprobado por unanimidad...". Se rifan la jurisprudencia obligatoria, esto es terrible. ¿Qué Constitución estamos redactando aquí?, donde estamos poniendo estas barbaridades. Cualquiera de esos magistrados coge ese papel y lo lleva a la categoría de papel higiénico, y simplemente dice estas son mis razones y me salgo de la jurisprudencia obligatoria y yo hago lo que me da la gana. Eso está mal hecho.... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Mire usted, hay cosas trascendentales, Presidente, ya no podré hablar, me falta un minuto, aquí me quedan, tantos temas. Yo defiendo, señor Presidente, que por encima de la Corte Suprema, nadie le pueda revisar los fallos, por eso es Corte Suprema. Me vienen con aquel cuento del recurso extraordinario de amparo contra sentencias ejecutoriadas que lo conoce la Sala Constitucional, no lo puedo aceptar eso como abogado, no lo puedo aceptar. Por encima de la Corte Suprema, no existe nadie que le revise sus fallos, y si queremos que se revisen sus fallos -y termino- por dos motivos: Violación de normas reguladoras del debido proceso, y violación a los derechos humanos. Sabe ¡qué es lo que había que hacer? Sencillo, se reforma la Ley Orgánica, o la Codificación de la Ley de

Casación, y se introduce en la parte que dice: "Se puede proponer recurso de casación:... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó su tiempo. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL...Uno. Por haberse violado normas del debido proceso; Dos. Por haberse violado normas de derechos humanos. Solo se requiere -y termino- una reforma a la Codificación de la Ley de Casación, y no que un Tribunal Constitucional recoja los fallos de la Corte Suprema, se los lleve, que permanezca en la Sala Constitucional equis número de días, y esa Sala que no tiene ninguna competencia para revisar los fallos de la Corte Suprema de Justicia, o como se le llame, empieza a resolver sobre eso. Reformemos la Ley de Casación, y ahí obtenemos el mismo resultado. No se puede atentar contra el principio de la cosa juzgada, no se puede dilatar los procesos con una nueva instancia. Ahora va a existir primera instancia, segunda instancia, casación, que no es instancia y una cuarta instancia. Lo lógico es...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó el tiempo, doctor. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. ... reformar la Ley Orgánica de Casación. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Tito Nilton Mendoza. ----------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Señor Presidente: Estoy abrumado, decepcionado, y confieso que todo lo que he estudiado y aprendido en Derecho, lo que he leído; esto que están proponiendo lo destroza todo. Estoy confundido, no puedo creer, no puedo creer que

puedan proponer algo tan absurdo, tan burdo y, perdónenme la expresión, tan estúpido, y lo voy a sustentar. Cuando veía quienes firman este informe, con felicidad veo que no lo ha firmado Vicente Taiano, no lo ha firmado el doctor Rafael Esteves, no lo ha firmado la doctora Catalina Ayala ni la señora Mae Montaño. No hay punto de orden. Le ruego que no me interrumpa, señor Presidente, porque lo que tengo que decir lo voy a tratar de decir lo más concreto posible. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Me están pidiendo punto de orden. ----------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. ...pero estoy indignado como abogado, como ciudadano, por lo que se pretende hacer con este texto constitucional. Dele el punto de orden. ----------

LA ASAMBLEÍSTA GODOY GINA. Buenos días. La intención no es interrumpir. Solamente que cada Asambleísta tiene la obligación en el tiempo que le asiste para su intervención, de aportar y no de decir groserías a ningún Asambleísta. Por favor, señor Presidente. ----------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Grosería es este texto, y no es grosería hacia mí, es grosería al pueblo ecuatoriano. Si se quieren tomar la Corte de Justicia, al menos háganlo en Derecho e inteligentemente, elegantemente, pero no lo hagan tan burdamente. Señor Presidente, y me voy a referir al texto, para que vean la grosería que ustedes le están queriendo implementar al pueblo del Ecuador. Crean un supraorganismo que es el Consejo Nacional de la Judicatura, y con ese Consejo Nacional de la Judicatura, que no dice aquí cómo se designa, no dice cómo se nombra, que por supuesto ustedes los van a querer o lo van a pretender nombrar, se van a tomar las cortes del país. ¿Qué es eso de asesores? Por Dios, asesores judiciales en la Corte

Suprema de Justicia, ¿para qué? ¿Para que dicten fallos?, ¿para que cobren por las sentencias?, ¿para que dilaten los procesos? Hacen una Constitución reglamentarista, establecen reglas de procedimiento en la Constitución. Eso debe estar en la ley. Principios de procedimiento, tal vez, pero esto no es eso, señores, por Dios, Primero lo primero. La Función Judicial es tema de la Mesa Tres, que habla de las funciones del Estado. No es tema de la Mesa Ocho. La Mesa Ocho es de Justicia y de Corrupción, y por supuesto que debe hablar sobre los amparos, sobre el habeas data, sobre el habeas corpus, sobre eso deben hablar. Pero no, pero no determinar lo que es una Corte Suprema de Justicia, lo que son las cortes, ahora las quieren llamar de apelaciones. Aprobar esto, señores, sería irse contra natura. El Derecho, ¿cuáles son las fuentes del Derecho? La costumbre, la ley, la doctrina, la jurisprudencia. Aquí destrozan todo aquello y lo hacen de una manera burda, de una manera grosera. Gracias, asambleísta Gina Godoy, por decir que esto es una grosería. Porque no soy yo el grosero, yo respondo a la grosería que nos pretenden implementar constitucionalmente. Señor Presidente, aquí se subordina todo a un solo ente, a un solo órgano, que es el Consejo de la Judicatura. Los jueces, señores, deben tener dos cosas fundamentales, a más de ser honestos, a más de tener experiencia, a más de tener capacidad, a más de tener probidad. Deben tener estabilidad y deben tener independencia, y la independencia no debe ser solamente de las otras funciones del Estado; la independencia de los jueces debe ser inclusive, y esos principios debieron haberlos puesto ustedes en su Mesa, la independencia de los jueces debe ser inclusive de los inferiores hacia los superiores, y de los superiores hacia los inferiores. ¿Para qué?, para que un juez no actúe influenciado por el superior, peor ahora por un órgano administrativo disciplinario que va a ser el Consejo de la Judicatura, ya no va a ser la Corte Suprema ni los magistrados de la Corte Suprema los que influirán en los fallos

judiciales. La justicia será más corrupta con esto, porque el Consejo de la Judicatura tendrá una espada de Damocles clavada sobre cada juez, y cada juez tendrá que hacer lo que diga un simple administrador, un simple gobernante disciplinante de la justicia, que es otra cosa. Por Dios, piensen en lo que hacen, esto tenemos que rechazarlo y totalmente. La justicia no es esto, la justicia es otra cosa. Si la justicia está corrupta, está corrupta por deficiencias, está corrupta porque nos hemos formado en una cultura de corrupción, porque la cultura de corrupción en este país no está en los jueces, está en los tuétanos de los huesos de cada ciudadano, y la justicia que tiene que ser ejemplo, si está corrupta, hay otros medios para enderezarla, pero no esto. Esto es terrible, acaban con todo, señor Presidente, y perdóneme que hable en esta forma... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Nuevamente le interrumpo con un punto de orden. ----------

EL ASAMBLEÍSTA RIVERA GABRIEL. Señor Presidente, queridos colegas asambleístas: Me he visto obligado a pedir el uso de la palabra, un punto de orden, señor Presidente, muchas gracias por concedérmelo, para rechazar en este recinto constituyente, el que se diga que el pueblo ecuatoriano tiene la corrupción en los huesos. En este país, quienes tienen la corrupción en los huesos, son los que han manejado los recursos naturales, son los que han manejado el Estado, que nunca lo ha hecho el pueblo ecuatoriano. Rechazo como el que más, esas aseveraciones. El pueblo ecuatoriano, señor Presidente, no es corrupto, el pueblo ecuatoriano es digno. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señores asambleístas, el debate es exactamente eso, lo que ustedes están haciendo, pero tienen que

ordenar el uso de la palabra. Las ideas se debaten, contéstenles a los que están equivocados, pero el orden es para continuar. Cuando se está violando un procedimiento, cuando se está apartando del tema, está usando el tiempo que él tiene, de diez minutos, déjenle intervenir y contéstenle. Continúe. ----------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Le agradezco, señor Presidente. Me sorprende la forma democrática como usted está actuando, pero le agradezco, reconozco que está actuando bien. Señor Presidente, cuando yo hablo de la corrupción y hablo de la formación lamentable, y tenemos que ser honestos, señores asambleístas, si queremos cambiar las cosas, las cosas no se cambian de esta manera, esto es una cuestión, perdónenme el término, es una novelería, pero es una novelería peligrosa, contrasta con el más elemental principio de Derecho. Yo hago un llamado y, por Dios que lo hago. Yo no sé ¿quién redactó esto?, pero esto es una barbaridad jurídica, es un absurdo. Yo hago un llamado a los abogados del país, a los estudiantes de Derecho; hago un llamado a los ciudadanos y a la mayoría de ciudadanos del país, o todos, que presumimos que tenemos el más elemental de los sentidos que es el sentido común, para no aceptar esto. Por favor, rectifiquen, asesórese bien, señor Presidente de la Mesa Ocho. Primero, hablar sobre la Función Judicial, no es tema de la Mesa Ocho, es tema de la Mesa Tres. Segundo, lo que están proponiendo aquí es tan ambiguo, y no me quiero referir exactamente a cosas que dicen, como por ejemplo ésta, establecen salvedades en normas constitucionales, cuando dicen, "salvo que otra disposición constitucional diga lo contrario". ¿Señores, qué es eso? La Constitución tiene que ser coherente, precisa, clara, y las disposiciones constitucionales contenidas en una u en otra norma, no pueden estar en contraposición, peor establecer salvedades de una norma constitucional respecto de

otra, es absurdo... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto. ----------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Me descuenta, señor Presidente, todos los puntos de órdenes. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Con todos los descuentos, tenga la certeza que estamos contabilizando bien el tiempo. ----------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Señor Presidente, aquí se destroza a la naturaleza de lo que es la Función Judicial, se destroza la naturaleza de los servicios que significan la función notarial y función registral. Hay dos tipos de notariado, como dice aquí, el notariado latino y el notariado anglosajón, que nacen, sí, desde el Derecho romano y desde el Derecho anglosajón, son distintos, porque el uno, el anglosajón es puramente administrativo, el notariado latino que, por ejemplo en los Estados Unidos se practica en casi todos los Estados, a excepción de uno, que es el Estado de Lousiana, porque tiene raíces latinas, raíces francesas... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó su tiempo. ----------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Señor Presidente y culmino con esto. Por favor, rectifiquen, y llamo a los abogados del país a protestar contra esto, rectifiquen y no cometan una barbarie jurídica con la justicia de este país. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Gina Godoy. Asambleísta Lucio-Paredes. ----------

EL ASAMBLEÍSTA LUCIO-PAREDES PABLO. Gracias. ¿Gina Godoy no va a hablar? ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le di la palabra a usted. No, no va a hablar. ----------

EL ASAMBLEÍSTA LUCIO-PAREDES PABLO. Bueno. Creo que todos estamos de acuerdo en el diagnóstico sobre la justicia, creo que todos los ecuatorianos lo sentimos, lo hemos vivido, lo hemos compartido con amigos, con familiares; en consecuencia, yo diría que el diagnóstico es obvio. La pregunta es, yo no soy especialista, pero me hago la pregunta: ¿Será que estos artículos corrigen esos problemas esenciales de la justicia en la vida diaria de los ecuatorianos?, ¿será que los problemas que se han señalado, con razón, de corrupción, de procesos largos, de inatención a la gente, se resuelven con estas propuestas? Yo no sé, solo estoy haciendo la pregunta. Pero de las intervenciones que he oído hasta ahora, cuatro o cinco, y de lo que he conservado con otras personas que van a hacer sus ponencias poco después, yo me quedo, francamente, con la absoluta duda de que si con esto estamos realmente atacando los problemas de la justicia, que van desde la parte alta del sistema, hasta la vida diaria de los ciudadanos. Y ese era un objetivo fundamental de esta Constitución, era cómo lograr que la justicia en el Ecuador funcione mejor en todos sus ámbitos. No voy a dar una respuesta, porque no me gusta hablar de las cosas que no sé, solo me quedó con la absoluta duda, luego de haber escuchado a algunos de los colegas que han hecho su presentación. El tema del que sí quiero hablar, porque no soy especialista, pero sí soy usuario y sí tengo sentido común, es el tema de las notarías, tema de la vida muy frecuente de todos. Frecuentemente las utilizamos para entregar nuestras declaraciones patrimoniales. Pensé inicialmente, que no tenía

derecho a expresarme, porque aquí en su planteamiento, la Mesa dice: "No hay ningún argumento que pueda justificar la situación actual". No hay ningún argumento. Pensé que con eso yo no tenía derecho a expresarme, porque ya está dada la última verdad. Por suerte, Fernando en su intervención, dijo que esta era una propuesta dura, polémica para discusión. Gracias, Fernando, por darnos la oportunidad de discutir, porque parecía que con el texto no podíamos hacerlo. No hay ningún argumento, bueno, resulta que los colegas Vicente, Mae, los que hicieron el informe de minoría han dado cuatro, cinco, seis razones de por qué no hay que ir a la propuesta que ustedes hacen; es decir, sí hay mucha razón en esa dirección. Yo acabo de hablar con mi esposa, hace un momento, persona inteligente, sensible, mucho más inteligente que yo, sin lugar a dudas, como la mayor parte de las mujeres, y cuando me dijo ¿qué están haciendo? Aquí estamos viendo el tema de los notarios, que se quieren convertir en funcionarios públicos. Me dijo, simplemente, qué barbaridad, ¿no tienen nada mejor que hacer en la Asamblea? La razón es muy sencilla, la relación con el notario es una relación de fe y de confianza, ese es el elemento fundamental, y es un servicio que en base a la fe y a la confianza quiero que sea un buen servicio. Yo, por lo menos, a la notaria, porque una vez más reconozco los méritos de las mujeres, a la notaria con la cual yo trabajo, yo le llamo para consultarle cosas, yo le llamo para hacer documentos que para mí son documentos importantes. Mis papás van y le dejan el testamento, que no quieren que sea público y me vayan a entregar a mí ese documento o a quien sea; es una función de servicio, de fe y confianza. ¡Quiero yo, que ese servicio me lo dé un funcionario público en una institución pública? Yo no quiero eso. Si ustedes quieren, es derecho de ustedes, pero yo no quiero eso. Yo quiero ir donde una persona cn la cual yo confíe, igual que confío en mi abogado y casi, casi, sin exageración en ciertos aspectos, igual que confío en mi médico.

Quiero que sea una persona de confianza, yo no quiero que mi información esté ahí botada en un lugar público, donde quién sabe, mañana en qué manos irá a parar, cómo lo manejarán, ni siquiera hablo de servicio, hablo de la fe y de la confianza. ¿Quieren ustedes, que haya empleados públicos? Perfecto, abramos la gama de opciones, entonces, y que el ciudadano decida, que haya notarios públicos empleados del Gobierno, y que haya notarios que sigan ejerciendo funciones privadas, y que el ciudadano escoja dónde quiere ir. Ustedes me dirán que eso genera -es sentido común nada más- ustedes me dirán que eso genera ciudadanos de primera y de segunda. No, si cada uno escoge. Es más, si ustedes creen que el funcionario público notario es mejor que el privado, entonces más bien va a ser al revés. Yo, tontamente, voy a ir al de segunda que es el notario privado, y los demás irán al notario de primera que va a ser el funcionario público. Qué bueno, que vayan los que quieran. Entonces dejemos por lo menos esa libertad a la gente, de escoger. Si ustedes dicen que hay notarios que ganan mucho más que otros. Así es, hay arquitectos que ganan mucho más que otros, hay economistas que ganan más que otros, hay médicos, hay en todas las profesiones. Si, los que hacen mejor su trabajo tienen más confianza y ganan más. Que hay exageraciones, probablemente las hay, corrijamos. Qué tiene que ver eso con el principio general, que los porcentajes en grandes contratos son excesivos, corrijamos, cuál es el problema, corrijamos eso. Que hay un sistema, habla aquí, de cooptación elitista, bueno, entonces cambiemos el sistema, si quieren, de cómo se elijen, como se mantienen, pero tiene que haber esa libertad en un tema de fe y confianza tan profundo, tiene que haber esa libertad. Yo, sinceramente, si mañana me dicen que los notarios donde yo voy a depositar mi confianza son empleados públicos, para mí habrá cambiado el sentido de la libertad en este país, y lo digo claramente, porque mis cosas personales, yo no quiero que estén en

manos de un empleado público. Ya lo vamos a tener que hacer próximamente, con la declaración de bienes patrimoniales al SRI, ya vamos a tener que hacer esas cosas. Déjennos tranquilos en otro espacio de la vida, déjennos escoger a quién queremos dejar nuestra información, nuestra fe y nuestra confianza, me parece un elemento fundamental de la vida en el país. Y quiero aprovechar, señor Presidente, para no molestar en el tiempo, para señalar un pequeño aspecto, y le pido que no me corte porque es para ganar tiempo, más bien. Va a venir en la tarde el tema de las amnistías, como yo lo he dicho varias veces, yo estoy en contra de las amnistías, así que me va a permitir en ese momento retirarme, como lo he hecho en otras oportunidades. No es función de la Asamblea, y quiero dejar en claro, que incluso lo estoy haciendo en una situación en que yo estoy convencido que el doctor Gustavo Noboa es una persona que no ha cometido ningún acto de ilegalidad, es víctima de una persecución política, hubo quizás errores administrativos en la negociación de la deuda, en los bonos que fueron al Banco del Pacífico, son errores administrativos que no merecen el castigo que ha tenido Gustavo. Le tengo, personalmente, un enorme aprecio y una gran estima. Pero eso, la amistad, el aprecio, para mí no cambia los principios de fondo, así sea mi amigo, yo me voy a retirar en el momento de las amnistías, porque mis principios no los cambio ni siquiera por mis amigos. Muchas gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Santiago Correa. ----------

EL ASAMBLEÍSTA CORREA SANTIAGO. Gracias, señor Presidente. Hoy este Pleno está discutiendo asuntos primordiales en la administración de justicia para el país. La sola inclusión en la Constitución, de normas como las garantías jurisdiccionales, justifican la razón de ser de esta

Asamblea Nacional Constituyente. Pero también hay otros temas muy importantes, temas como el de las notarías, el de los registros de la propiedad, y nosotros hemos presentado en la Mesa Ocho, una propuesta, cuyo objetivo principal es el que dichos funcionarios, notarios, registradores y también los funcionarios que trabajan en estas dependencias, sean funcionarios públicos con un sueldo fijo determinado por el Consejo Nacional de la Judicatura. Yo no sé ¿por qué satanizan al funcionario público? Yo soy hijo, y orgullosamente lo digo, de dos funcionarios públicos, honestos y transparentes, que han sabido cumplir a cabalidad con sus actividades. Pero vamos a ver, señor Presidente y compañeros asambleístas, que cuando les conviene a los señores notarios, sí son funcionarios públicos y, precisamente, ante una resolución del Servicio de Rentas Internas, que pretendía obligarles a establecer contabilidad en las actividades de los señores notarios, ellos impugnaron esa resolución del Servicio de Rentas Internas, en la Sala Primera del Tribunal Distrital Fiscal número Uno, y uno de sus argumentos jurídicos, es precisamente el siguiente: El notario, siendo un profesional abogado, es sobre todo un funcionario público designado por la Corte Superior de Justicia, mediante nombramiento que se lo extiende, subordinado a la Función Judicial, conforme lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia en la resolución publicada en el Registro Oficial número quinientos setenta y cuatro del trece de mayo de dos mil dos. Así que son funcionarios públicos por conveniencia, para evadir el control efectivo de la tributación, señor Presidente y compañeros asambleístas. Efectivamente, recogiendo el argumento formulado por el delegado de la Federación Nacional de Notarios, les preguntamos: ¿Estos notarios y registradores de la propiedad, al estar inmersos en el Estatuto de ser funcionarios públicos, por qué no se encuentran bajo la regulación del Mandato cero dos y cero cuatro aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente? Considero que si el espíritu que

motivó la aprobación de este Mandato, fue la de contribuir a erradicar los privilegios de esta casta privilegiada, también debería estar bajo el régimen del Mandato cero dos y cero cuatro. Por favor... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Déjeme ver si es punto de orden, yo soy imparcial. Así es. Tiene la palabra. Espero que sea punto de orden. -----

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Señor Presidente, un punto de información. ¿El Asambleista que está hablando es abogado? Porque si no es abogado, disculpo lo que dice, pero si es abogado no lo disculpo. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Eso no es punto de orden, usted está violando el reglamento. ----------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Como usted, señor Presidente. ----------

EL ASAMBLEÍSTA CORREA SANTIAGO. No es necesario perder el tiempo, compañeros. La propuesta constitucional pretende también avanzar hacia una conceptualización de los servicios notariales y registrales en el país, esto es calificarle como servicio público; es decir, se trata de prestaciones que cubren necesidades públicas o de interés comunitario. Esta especial e importante conceptualización, permitirá un cambio en la forma de ver esos servicios. Pues el Estado en ejercicio de su potestad, deberá prestar el servicio con agilidad, con eficiencia y con capacidad, en donde la veeduría ciudadana, el control social jugará un papel preponderante en el certificación y en la vigilancia de que los servicios públicos en el país, de todas las instituciones, sean eficaces y eficientes. Considero importante también, que se institucionalice un

sistema nacional registrador de la propiedad y de otros negocios jurídicos, que será regulado mediante la ley. Y aquí va el problema, señor Presidente. En lo referente a las remuneraciones, y esto es lo que les preocupa sobre todo a los señores notarios, quienes condicionan su capacidad, quienes condicionan su honestidad, sobre todo su honestidad, a la gran cantidad de dinero que reciben. Nosotros hemos realizado un trabajo serio en las ciudades principales del Ecuador, Guayaquil, Quito y Cuenca, y hemos determinado que el ochenta por ciento de los señores notarios del país, tributan menos que un funcionario de la última jerarquía de la Función Judicial. Un auxiliar de un juzgado tributa más que el ochenta por ciento de los señores notarios de las principales ciudades en donde tienen ingresos cuantiosos, compañeros. Es necesario que estos valores que se recuperen por la prestación de servicios notariales y registrales ingresen a la Función Judicial y al Presupuesto General del Estado. Sólo así cumplirán un rol efectivamente social en la redistribución de la riqueza del país; solo así existirá la capacitación suficiente de los funcionarios judiciales, la creación de más notarias, de más registros de la propiedad. En esta línea de análisis, compañeros, no podemos justificar bajo ninguna circunstancia, la situación actual, de tremenda inequidad en nuestro país, donde un obrero percibe, al menos en la gran mayoría de los casos, doscientos dólares mensuales, en tanto que los notarios y registradores de la propiedad, por la prestación de un servicio público tienen ingresos de trescientos, cuatrocientos y quinientos mil dólares mensuales, en el caso de los señores registradores de las ciudades grandes. Y paradójicamente, mientras tienen ingresos de cinco millones de dólares en el año, paradójicamente, evadiendo y defraudando al Fisco, declaran gastos de cuatro millones novecientos mil dólares en el año. Este es un acto de gran importancia, señores, compañeros asambleístas que tiene que ser considerado por todos nosotros. Creo

que es necesario poner fin a ese sistema capitalista oprobioso, en donde solamente una casta de privilegiados gozan de toda la riqueza y concentran el capital en el país. Abramos, demos oportunidad a jóvenes honestos, a jóvenes capaces, que puedan ocupar con cabalidad, con honestidad y eficiencia, las notarías y los registros de la propiedad del país, y que presten un servicio público y eficaz, porque ese es el verdadero objetivo de las notarias y registros en el país. Muchas gracias, señor Presidente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Rory Regalado.----------

EL ASAMBLEÍSTA REGALADO RORY. Señor Presidente y colegas asambleístas: Quiero empezar mi intervención señalando que en mi afán de desconcentrar y descentralizar el Estado ecuatoriano, he sido y seré uno de los principales ciudadanos en impulsar que mi querida ciudad de Cuenca, la Atenas del Ecuador, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad, sea declarada sede de la Función Judicial, y no solo por razones de índole histórico, sino porque se ha demostrado, se ha demostrado celeridad, transparencia, probidad en la administración de justicia, y eso no solo lo reconocen los cuencanos, los azuayos, sino lo reconoce el pueblo ecuatoriano en general. A manera de ejemplo, señor Presidente, quisiera citarle que en dos países latinoamericanos, ya en Bolivia y en Chile se ha implementado en la actualidad la descentralización y la desconcentración de estos poderes o funciones del Estado. Cito como ejemplo a Bolivia, ya que el Congreso boliviano en la actualidad está en la ciudad de Sucre; y cito también a Chile, ya que el Congreso chileno está en la ciudad de Valparaíso. También quisiera remitirme, señor Presidente y colegas asambleístas, a la historia, y también quisiera hablar un poco sobre la infraestructura que cuenta la ciudad de Cuenca, para ser una seria aspirante a ser la

sede de la Función Judicial que, con su venia, señor Presidente, he realizado un escrito y quisiera dar lectura. Recordemos, colegas asambleístas, que el general Antonio José de Sucre expidió el Decreto de Fundación de la Primera Corte Superior de Justicia, en Cuenca, la Atenas del Ecuador, cuya acta fundacional la suscribió el veinte de marzo de mil ochocientos veintidós. Personalmente posesionó a los Ministros el veintiséis de ese mismo mes y año, según la historia recopilada y contada por Manuel Vallejo, funcionario judicial de carrera. La primera Corte se instaló con los doctores Salvador de la Pedrosa, como Presidente, y Miguel Malo, Miguel Rodríguez y Santiago Bermeo, como conjueces. Estos últimos nombrados, en reemplazo del gran patriota José María Lequerica y Agustín Celis, por hallarse legítimamente impedidos. Esta Corte tenía como jurisdicción, desde los límites de la República del Sur hasta los pueblos hacia Quito que se vayan liberando. Atrás quedaron, señor Presidente, las rudimentarias maneras de trabajo, cuando por ejemplo, de forma manuscrita, utilizando una tinta líquida y plumero, se ponía fe de presentación en los escritos que iban ingresando en la judicaturas, para ser despachados por los jueces, de la misma manera, o en añejas máquinas de escribir. No se cambió, recién desde el año de mil novecientos ochenta y ocho, cuando el Consejo Nacional de la Judicatura y de la Corte Suprema de Justicia, iniciaron un proceso de modernización del sistema judicial. También quisiera manifestar, señor Presidente, sobre la construcción del edificio de la Corte en Cuenca. Este proyecto piloto de modernización se aplicó en los juzgados Primero, Quinto y Octavo de lo Civil, para lo cual se acondicionaron espacios en el edificio central de la institución, en las calles Sucre y Luis Cordero, inmueble con estilo neoclásico, de mármol rojo estriado, que por sus características especiales es parte del patrimonio arquitectónico de la capital azuaya. En sus años, en el año mil novecientos treinta y dos, este edificio sirvió

de asiento de la Universidad de Cuenca, hasta mil novecientos cincuenta y nueve, fecha en que la Corte Superior de Justicia de Cuenca toma posesión de este lugar. En diciembre de mil novecientos noventa y nueve, una vez finalizadas las obras de adecuación del edificio fisico, comenzaron a instalar equipos de computación en los juzgados pilotos. En noviembre del dos mil uno, los juzgados se insertaron en la red, Internet y el correo electrónico. En diciembre del dos mil dos, la delegación distrital del Consejo de la Judicatura del Azuay, recibió formalmente de la Universidad de Cuenca, los planos arquitectónicos para la construcción del nuevo edificio de la Corte. Dos años después; es decir, el diecisiete de junio de dos mil cuatro, se suscribió el tratado que en la actualidad está sumamente avanzado. Por lo que queda demostrado, señor Presidente, que Cuenca tiene la suficiente infraestructura para ser la sede de la Función Judicial. Pero eso sí, quisiera hacer una pregunta, señor Presidente, a manera de curiosidad, al asambleista Abril: ¿Qué pasó señor Asambleísta, por qué se desistió, por qué se dio marcha atrás, qué pasó, eso explique a la ciudadanía, acaso fue más importante recibir órdenes, órdenes de un buró político, que no tiene nada que hacer ni nada que ver en esta Asamblea Nacional Constituyente?, o ¿acaso fue más importante recibir órdenes del Jefe Supremo de Carondelet? ¿Qué pasó, señor Asambleísta?, ¿qué pasó?, ¿por qué dejó de luchar por esa aspiración justa y digna del pueblo azuayo? ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Diríjase a la Presidencia, señor.----------

EL ASAMBLEÍSTA REGALADO RORY. Señor Presidente, eso debe responderlo él, no a Rory Regalado, sino a la ciudadanía, a la ciudadanía que en este momento está viendo este debate. Eso sí, señor Presidente, el pueblo ecuatoriano no es ingenuo, más temprano que

tarde sabrá levantarse y rechazar estos atropellos e injusticias. Eso sí, señor Presidente, sin embargo me mantengo en una posición firme en mi curul, lucharé incansablemente por respaldar esta justa aspiración de mi ciudad, de mi querida ciudad de Cuenca. Por lo tanto, propongo que se modifique el artículo doce, numeral cinco, inciso segundo, que debe decir que la sede de la Corte Suprema de Justicia, no la Corte Nacional, que "la sede de la Corte Suprema de Justicia sea la ciudad de Cuenca". ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Azuay! y ¡Viva Cuenca! Gracias.------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta León Roldós. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ROLDÓS LEÓN. Cuando Fernando Vega iba a concluir su intervención, hizo una glosa que realmente presenta mi preocupación. Él dijo, la Corte Nacional de Justicia queda en la misma condición que la futura Asamblea Nacional. Perdóneme, querido Fernando; sí, queda en la misma condición, subvalorada, subvalorizada, ya son entidades subalternas del poder público, ya no son las funciones del poder público, con gran respeto, eso es lo que yo pienso. Por eso, más allá de lo que usted quiso decir; sí, aquí tenemos que fortalecer la Función Judicial y la Función Legislativa y Fiscalizadora. Sino, lo que tenemos es un Presidente de la República y una Función Legislativa y una Función Judicial desvalorizadas. El tema va más allá de la nominación de Corte Suprema de Justicia o de Corte Nacional de Justicia. Decía, Fernando, es que el cambio ya es importante, simbólico, porque la Corte Suprema y la Función Judicial han estado marcadas por la corrupción, y tiene razón. Pero ¿acaso los Ministerios y acaso los Presidentes en este Ecuador, no han estado marcados por la corrupción? También lo han estado. Cambiémosles los nombres pues, veamos qué nombre le ponemos a los ministros, pongámosles primeros ayudantes, segundos ayudantes, ¿cómo los

llamamos? Aquí no se trata de nombres, aquí se trata de fondo, se trata de instituciones, y yo creo que una Función Judicial debe tener una Corte Suprema respetable. Se hace la división, lo jurisdiccional queda: Corte Nacional de Justicia, Corte de Apelaciones, Juzgados; lo de gobierno, gobierno y administración, pasa al Consejo Nacional de la Judicatura. En los textos no aparece ¿cómo se designa al Consejo Nacional de la Judicatura? Supongo que es bajo el mecanismo este de la Función de Control Social, supongo, no está designado. Pero cuando usted ve la competencia de la Corte Nacional de Justicia; sí, solo son competencias de jueces, son jueces más "venerables" o menos vencrables, como quieran verlo, despachando casos. Pero luego se dice: "El representante legal de la Función Judicial es el Presidente de la Corte Nacional de Justicia". ¿Para qué?, ¡para cocteles?, ¿para banquetes?, ¿para las fotos?, ¿para el cartelito?, sino no tiene ninguna competencia, ninguna competencia dentro de la Función, solo fallar en los casos que le llegue y eventualmente proponer reformas legales como cualquier ciudadano lo puede hacer. Entonces yo creo y demando que haya una revisión, el órgano jurisdiccional, sí en la Corte de Justicia, pero tiene que ser un órgano jurisdiccional que además tenga realmente decisiones dentro de la Función Judicial. Acá se establece la categoría de ponente en las salas de la Corte Nacional de Justicia, ¿Qué es el ponente? Me imagino quc es el que hace el borrador, pero ahí caemos en otra circunstancia, para mí preocupante. La jurisprudencia, reiterada tres veces, es obligatoria. Verdad que hoy día también se habla de la jurisprudencia obligatoria, que no obliga al nivel de la Cortc Suprema de Justicia, sino a niveles inferiores. Pero saben ¿cuál es la diferencia? Tiene que ser jurisprudencia de una sala renovada, porque sino en el mismo año dictan tres fallos iguales, y tres personas, tres personas en las salas especializadas, ya dictaron una ley interpretativa, pues, y ya el criterio de ellos pasa a ser obligatorio para todo el mundo,

y eso no puede ser. La condición debe ser que la tercera jurisprudencia, por lo menos una de las tres tiene que ser una sala renovada. Entonces en ese momento, ya pues, ya hay criterio, ya hay criterio para decidir. Yo creo que está bien la carrera judicial. Pero a mí se sorprende, cuando se dice que salvo los miembros o integrantes de la Corte Nacional y del Consejo de la Judicatura, todos los demás para posesionarse tienen que hacer un curso de formación teórica, práctica, pruebas técnicas y pruebas psicológicas, una vez que ya están designados. Perdónenme, si hay concursos de méritos y oposición, no hay que hacer un cursillo, no hay que hacer un cursillo, ya ganaron el concurso, entonces que se posesionen. Otra cosa es plantear, un cuarto nivel de especialización judicial, y que estaría de acuerdo, es una carrera de postgrado, eso hagamos, una carrera de postgrado. Pero si ganaron el concurso, ¿para qué tienen que hacer un cursillo?, o ¿es que no merecen haber ganado el concurso? Aquí viene una corrección que también es muy importante. Yo quiero, en los pocos minutos que me quedan, referirme al tema Habeas corpus. Ese es un viejo debate, no es primera vez, no es primera vez que se ha dicho que el Habeas corpus no debe ser de los alcaldes. Yo, con gran respeto, creo en el origen del Habeas corpus, creo en la institución política del habeas corpus. Otra cosa es un recurso de amparo judicial, puede haber un hábeas corpus judicial, pero la fuente política que es la ciudadanía yo la defiendo en el habeas corpus, y yo demando que se mantenga la figura del habeas corpus político, que es el alcalde. Otra cosa es que el alcalde responda judicialmente si falla en forma indebida el habeas corpus; eso es otra cosa, eso es otro capítulo, pero tiene que haber esta instancia política social que es fundamental. En cuanto a notarios, registradores, yo, con gran respeto, he escuchado, y he escuchado cosas hoy día. Hoy día los notarios y registradores son de designación del Consejo de la Judicatura, son removibles, y puedo contar algunos casos de remoción.

¿Cuál es la diferencia? Que no son dependientes ni deben ser dependientes, porque el rato que los archivos de un notario o de un registrador respondan al vicerazo de un Consejo de la Judicatura, que puede seguirle un expediente para investigarlo, o respondan al vicerazo de un alcalde, se acabó, se acabó las confianzas notariales y las confianzas registrales. Que haya el procedimiento de designación, que haya el procedimiento de remoción, perdónenme, que haya la auditoria de las cuentas, eso si yo estoy de acuerdo, que haya una auditoría, que todos los meses presente al Consejo de la Judicatura un balance, el notario o registrador, esto gané, esto tiene costos, eso es fundamental...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Un minuto.----------

EL ASAMBLEÍSTA ROLDÓS LEÓN. Pero, por favor, perdónenme una imploración de un hombre que cree en el Derecho, no politicemos los archivos notariales y de registro. Establezcamos las responsabilidades y las sanciones, auditémoslo, obliguemos a balances, pongámosle techos a sus ingresos, pero no politicemos los archivos notariales y de registro. Gracias.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Asambleísta Mauro Andino.----------

EL ASAMBLEÍSTA ANDINO MAURO. Muchisimas gracias, señor Presidente. Los debates son positivos, son saludables, señor Presidente, siempre que se lo haga con respeto y altura. Vamos a recoger las inquietudes, vamos a recoger las sugerencias, pero éstas deben ser con respeto hacia todos y hacia todas las compañeras que conformamos este recinto, señor Presidente. Voy a abordar sobre dos temas que

desarrollan los textos que están a debate, me refiero a la justicia ordinaria y en especial a la necesidad de dotarle de legitimidad y de un proceso de renovación transparente y efectivo. Y en segundo lugar, quiero insistir en algunos aspectos fundamentales y novedosos de las garantías constitucionales y su lugar privilegiado que le quiere dar esta Constitución. Este proceso, señor Presidente, es precisamente el resultado de la grave crisis que abraza a todas las instituciones del Estado, desde que regresamos al orden constitucional, en mil novecientos setenta y nueve, nos hemos visto obligados a soportar gobiernos ineficientes y corruptos. El Congreso no ha sido un verdadero representante de la voluntad popular, sino un espacio de acomodamiento de intereses y de constantes enfrentamientos con el Ejecutivo. Su desprestigio fue su partida de defunción, ahora queremos refundar una Asamblea Nacional que se libre de esta pesada herencia. La administración de justicia no ha sido la excepción. Es conocido y público la ineficacia de la justicia, la infinidad de causas no resueltas, los escándalos de corrupción y las incontables denuncias contra jueces y magistrados que abusan de su potestad de administrar justicia, Y es que en cstc poder del Estado, la corrupción muestra su lado más obscuro y destructor, pues su inoperancia significa impunidad y desesperanza para todo ciudadano. Por ello debemos garantizar que esta Constituyente sea el comienzo de una nueva administración de justicia, con una renovada legitimidad y un proceso de designación transparente, que privilegie la idoneidad, la experiencia y la capacidad, que permita la participación y control ciudadano, en la cual los mejores no tengan que venderse para ocupar el cargo para el cual han demostrado que tienen méritos suficientes para asumir con temperamento y responsabilidad la dura, difícil y a veces incomprendida función de administrar justicia. Sabemos que la actual Corte Suprema de Justicia carece de una legitimidad inexpugnable, su

proceso de selección se hizo sobre el vacío constitucional. Recordemos que el ocho de diciembre de dos mil cinco, el Congreso Nacional con la venia de Lucio Gutiérrez decidió reestructurar la Corte Suprema de Justicia, por cuanto en ese entonces los intereses políticos y económicos de un grupo de la oligarquía ecuatoriana estaban amenazados. La estrategia de estos grupos era que la repudiable "Pichicorte", agilité una serie de juicios en contra de varios de sus socios involucrados en actos de corrupción. Caso Hamrizca, Ana Lucía Armijos, Alejandro Peñafiel, Jamil Mahuad, entre otros más, que son de conocimiento público. En el Congreso corrupto de esa época, entre gallos y media noche se disputaron captar el mayor número de puestos para contar con magistrados serviles a sus intereses. Obviamente, que los nuevos jueces vendrían de las filas del PRE, del PRIAN, Social Cristianos y Sociedad Patriótica. Con la nueva Corte Nacional de Justicia, desea esta Constituyente darle una nueva oportunidad a la justicia. Para ello es imprescindible que después que se apruebe la nueva Carta Política, se proceda inmediatamente a la nueva selección de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, bajo concurso de merecimientos y oposición, con veedurías ciudadanas, fases de impugnación y control social. Esta responsabilidad no la podemos eludir. También es hora de acabar con la engañosa y perversa cooptación. Si me permiten, quiero detenerme un momento sobre este asunto y exponer las razones de posición. Primero, es inadmisible que el mismo órgano escoja a sus propios miembros, con una discrecionalidad que permite la manipulación politica en donde priman oscuros intereses y donde los mejores calificados son ignorados y lanzados al abandono. Segundo, es voluntad de esta Constituyente, establecer un procedimiento donde la legitimidad se basa en un concurso público de méritos y oposición, donde la participación ciudadana esté garantizada. Para esto fue necesario librar al Consejo de la Judicatura, de las

influencias de la actual Corte Suprema de Justicia. Pues era y es ridículo que el órgano que debía evaluar y controlar estuviera conformado en parte por aquellos que debía vigilar. Este nuevo procedimiento debe garantizar que los mejores y las mejores mujeres, los más probos ocupen tan alto cargo. Tercero, la cooptación ha mostrado también sus debilidades, por la imposibilidad de llenar las vacantes; pues como ya se dijo, lo que prima es el interés particular y político. Hemos llegado a la insoportable y repudiable situación, que los magistrados nos llenan las vacantes, con la finalidad de convertir a los conjueces en piezas de ajedrez sujetos a las mayorías que se han conformado en esta importante Función del Estado. Cuarto, preguntémonos, ¿cuántos, sí, cuántos de los mejores calificados fueron designados como magistrados? Pocos, muy pocos, el balance de este procedimiento es miserable. Quinto, Y para terminar, nuestra Mesa fue inundada por una verdadera avalancha de denuncias contra esta administración de justicia, que debe ser renovada desde las raíces y sin compasión, no deben hacerse excepciones por interés personal o político. Por todas estas razones, proponemos una reestructuración radical de la administración de justicia, en una nueva Corte Nacional de Justicia, con legitimidad indiscutible, y terminar con la cooptación como sistema de selección...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ANDINO MAURO. ...por sus efectos negativos y perjudiciales. Señor Presidente, hablar igual, de las garantías constitucionales. La acción de habeas corpus debe salir de las manos de los alcaldes, porque se ha politizado, se ha pervertido, se ha prostituido esta acción que garantiza la libertad, que garantiza los derechos de los seres humanos. Cómo no aplaudir también la garantía

de la acción de amparo, decía, el habeas corpus, la acción extraordinaria del recurso de amparo, entre otras acciones que merecen ser debatidas, no es una camisa de fuerza lo que estamos proponiendo. El debate enriquece, el debate mejora el texto, con el debate vamos nosotros a estructurar un marco constitucional para decir basta a la politización, a la partidización y a la corrupción en la justicia. Juntos podemos cambiar y darle al pueblo ecuatoriano seguridad por hoy, por mañana y por siempre, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. Asambleísta César Rodríguez. -------

EL ASAMBLEÍSTA RODRÍGUEZ CÉSAR. Señor Presidente, ciudadanas y ciudadanos asambleístas: Hoy venimos a debatir en el Pleno de esta Asamblea, sobre la justicia, y lo vamos a hacer sobre las grandes líneas maestras que ha trazado la Mesa Ocho, con un gran trabajo que reconocemos y valoramos. La sola idea de plantear cambios en la administración de justicia, pone a temblar a los grandes grupos de poder que han estado acostumbrados a utilizar la justicia como el brazo armado de la persecución política, o como el celoso guardián de sus grandes negocios. La sola idea del cambio en la justicia, genera recelos, genera suspicacias en algunos sectores tradicionales adoradores de la forma, que no quieren hacer ruido, porque nos dicen que la majestad de la Corte Suprema de Justicia tiene que ser observada, porque ahí están esos grandes y colosos ídolos que tienen pies de barro, que en el Ecuador, en nuestro país han establecido formas perversas en la administración de la justicia, porque tarifan sentencias, porque los vemos defendiendo los intereses particulares y no el bien común de todos los ecuatorianos. En este tiempo de cambio, algunos sectores, cuando se habla de cambio, se ponen cautelosos porque se preocupan de que vayamos a reeditar eso que la historia ecuatoriana ha dejado

como ejemplo de lo que no debemos hacer. Porque nadie olvida la Corte Suprema de Justicia rodeada de soldados y de tanquetas de guerra, en el período de León Febres-Cordero; nadie olvida los hechos recientes de una "PichiCorte" armada por el hermano mayor de la traición al pueblo ecuatoriano, que se llama Lucio Gutiérrez. Eso, en el proceso constituyente lo tenemos que debatir a profundidad. La justicia en el Ecuador, para el pueblo es una pesadilla. El otro día fui al Penal García Moreno, cuando estábamos tratando el tema de indultos, y me decían unos presos a la entrada: "Señor, aquí solo estamos los que robamos poquito, aquí solo estamos los que robamos poquito". Y cuánta razón ese señor, ese ciudadano tenía, y nos hacía recordar lo que escribió una vez Pablo Neruda. En América Latina, yo diría en el Ecuador, el fuero ha sido para el gran ladrón, la cárcel ha sido para el que roba un pan. En el Ecuador están presos los que han sido criminalizados por la pobreza, porque los millonarios, los dueños de los bancos están disfrutando del confort, de la buena vida que esta justicia les ha garantizado impunidad. Y por eso hoy tenemos que entender que el Ecuador tiene que superar esa visión que tenemos de la justicia, como un enjambre de jueces y amanuenses que despachan causas mirando el bolsillo del litigante; tenemos que dejar atrás a los abogados convertidos en intermediarios económicos de sentencias; tenemos que dejar atrás procedimientos interminables, papeles yendo y viniendo. Es que ¿acaso no hemos visto el tiempo que pierden los amanuenses en coser los expedientes, con aguja y con hilo? Esta justicia en el Ecuador, que ha garantizado la impunidad para los delitos de cuello blanco y que goza de buena salud, tiene que ser cambiada, gústele a quien le guste y disgústele a quien le disguste, porque esa es la responsabilidad que tenemos en este momento constituyente. En el Ecuador, en este momento en todos los juzgados de este país hay más de un millón de causas represadas, más de un millón de causas represadas. Solo en la

Corte Suprema de Justicia tenemos cinco mil juicios pendientes en dos salas de lo Laboral, hay cerca de dos mil causas pendientes de resolución en la Corte Suprema. En materia penal, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público, en el año dos mil siete han ingresado ciento noventa y nueve mil cero diecinueve denuncias, de las cuales se han obtenido sentencia apenas el uno punto tres por ciento de esos ingresos; es decir, dos mil setecientas treinta y tres denuncias de las cerca de doscientas mil que ingresaron han tenido sentencia. Nuestra legislación procesal contempla una serie, decenas de procedimientos, con particularidades que tenemos que superar. La falta de control administrativo, de la calidad de servicio, de la evaluación funcional, termina por convertir al Poder Judicial en un poder sin rumbo. Creemos que debemos fortalecer el principio de la oralidad en todos los procesos de la administración de justicia. No podemos cometer el error de la Asamblea Constitucional de mil novecientos noventa y ocho, que estableció este principio, pero diez años después los órganos del Estado, la Corte, el Congreso Nacional, el Consejo de la Judicatura, no hicieron absolutamente nada para poner en vigencia procedimientos simples, orales, en todas las instancias y en todas las materias. Si logramos esto, asambleístas, si logramos que esta Constitución ejecute este principio, permitiremos una justicia ágil, menos propensa a la corrupción, que facilite la contraloría social de la actuación de los jueces. La Corte debe componerse de un mayor número de ministros, sin perjuicio de organizarse en salas únicas, para evacuar con mayor celeridad y agilidad los procesos acumulados como herencia de un sistema procesal formalista, lento y corrupto. Señor Presidente, yo voy a hacer llegar todas las observaciones que sobre este tema hemos venido trabajando, porque el debate de la justicia en este proceso ha sido de constante preocupación de la ciudadanía... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto. ----------

EL ASAMBLEÍSTA RODRÍGUEZ CÉSAR. ...y quiero decir con absoluta claridad, que proponemos en la Transitoria Cuarta, lo siguiente, para que se asusten más los del poder, los viejos dueños del poder que se está acabando: "La Corte Nacional de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura serán organizados de conformidad con los preceptos establecidos en esta Constitución. En consecuencia, declárase terminado el encargo entregado por la Asamblea Constituyente a la Corte Suprema de Justicia y Consejo Nacional de la Judicatura en el artículo nueve del Mandato Constituyente número uno, aprobado el veintinueve de noviembre de dos mil siete, publicado en el Registro Oficial No. dos veintitrés, de treinta de noviembre de dos mil siete. Mientras concluya el proceso de organización definitiva y constitucional de la Corte Nacional de Justicia, en forma provisional, se llama a integrar la Corte Suprema de Justicia a los treinta y un ministros de las Cortes Superiores de Justicia de todos los distritos del país, que ostenten la mayor antigüedad en el ejercicio de sus funciones y no tengan sanciones administrativas o disciplinarias, debiendo incorporarse en tal calidad, un ministro por cada Corte Superior de Justicia, y la diferencia hasta el número requerido, se completará con los ministros que reúnan las mismas condiciones". Esta es la manera de decir que en el Ecuador estamos para lograr una justicia aquí y ahora. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó su tiempo. Asambleísta Julio Logroño. ----------

EL ASAMBLEÍSTA JULIO LOGROÑO. Muchas gracias, señor Presidente. Lo que voy a decir, quiero que sea tomado con el mayor respeto y

consideración por los señores asambleístas. Pero realmente es doloroso leer un texto en el cual se devele que el único objetivo no es cambiar la justicia sino cambiar los jueces; donde el único objetivo no es cambiar la administración de justicia sino simplemente continuar con discursos líricos que no sustentan lo que aquí está escrito, señor Presidente. Yo no voy a perder el tiempo, el valioso tiempo, los diez minutos, en replicar discursos, en replicar motivos políticos, sino más bien en hacer observaciones que creo son muy necesarias para que sea reveído este texto constitucional que, para quienes algo conocemos de Derecho, realmente es muy incómodo poderlos leer y peor poderlos entender. Existen tantas incoherencias en el texto, que de la forma más comedida, sugiero a la Mesa, lo revean, tomando en consideración las muy buenas observaciones que gente de experiencia como el doctor Taiano, el doctor Esteves, la doctora Ayala, Mae Montaño, han dejado dentro de la Mesa y lastimosamente no han sido consideradas. O por último, de ser el caso, contraten dos abogados de su confianza, para que les expliquen lo que debe ser la administración de justicia, y no se pongan como normas constitucionales semejantes barbaridades que están poniendo a consideración del Pleno. Señor Presidente, por otro lado, deben considerar los textos de la Mesa Tres y los textos de la Mesa Ocho, fusionarlos y poner un solo debate a consideraración del Pleno, porque seguramente la Mesa Tres, que es la encargada de Instituciones del Estado, también someterá a consideración a través suyo, el debate sobre la Corte Suprema de Justicia y sobre la organización de la Función Judicial. Entonces estaremos debatiendo dos veces sobre el mismo tema, cuando estamos cortos de tiempo. Las observaciones son: En el artículo uno se está excluyendo a los magistrados y ministros, solamente se incluye a los jueces y servidores públicos de la Función Judicial. En el artículo tres se está excluyendo a los jueces de Familia, que también son jueces especiales y que lastimosamente hasta el

momento no se ha implementado dentro de la justicia ordinaria, están solamente enunciados dentro del Código de la Niñez y de la Adolescencia, en concordancia con el mismo artículo dieciocho de la propuesta en que habla de los jueces de Familia. En el artículo cuatro se establece y se incluye a los magistrados, como debería establecerse e incluirse en el artículo uno. Pero lo más penoso es lo que cuestionan y se quiere imputar a los abogados patrocinadores de la dilatación de los procesos judiciales, tratando de fusionar, como en ningún país del mundo se hace, el criterio del abogado, con la defensa de su defendido. Estas son cosas absolutamente independientes que no pueden cuestionarse. Si es que alguien litiga de mala fe no es el abogado, es el defendido, porque el abogado tiene la obligación jurídica de cumplir con los preceptos judiciales y con las normas jurídicas, en base a la información que le da su cliente entonces él no litiga de mala fe. En el artículo diez, sobre la reorganización y funcionamiento, se establecen los requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema o de la Corte Nacional, quienes son los encargados de administrar justicia. No puede existir una Corte Nacional, señor Presidente, sino una Corte Suprema de Justicia, porque son jueces de última y definitiva instancia, cuyos fallos no pueden ser cuestionados ni tampoco pueden ser impugnados, peor todavía sometidos a decisión de otro órgano de justicia, como es la Corte Constitucional. En segundo lugar, se ponen las cortes de Apelación como otro órgano de justicia. Señor Presidente, las cortes de Apelación no existen. La apelación es una facultad que tienen las cortes superiores de Justicia o cortes de alzada, porque estas cortes no solamente son de apelación, sino que también en ocasiones tienen la facultad de juzgar en primera instancia a quienes tienen fuero de Corte Superior, como el caso de los alcaldes y los prefectos, como el caso de los concejales, y también tienen facultades de ser jueces de ciertos procesos especiales, como los procesos de colusión, en que son

sometidos al juzgamiento del Presidente de la Corte Superior de Justicia. Por tanto, este apelativo de que sean cortes de apelación es totalmente inaplicable e improcedente. No se establece en el artículo once, la autonomía de la Función Judicial. Lo esencial que buscamos en el cambio es la autonomía de los jueces y por ende, de la Función Judicial, y se establece todas las características, menos que son autónomos administrativa, financiera y políticamente. En el articulo doce se pretende crear un sistema de precedentes jurisprudenciales. La jurisprudencia es un concepto, la jurisprudencia en la doctrina jurídica es una fuente del Derecho y, por tanto, no se necesita crear o desarrollar un sistema de precedentes jurisprudenciales, sino que necesitan solamente ser aplicados de manera obligatoria por todos los jueces. En el artículo trece hay que definir claramente, que los asesores jurídicos no pueden estar de la mano de los jueces o de los conjueces. Señor Presidente, al rebajar el número de magistrados, para pretender optimizar el trabajo de la Suprema y otorgarles asesores, se está presumiendo que quienes van a juzgar y quienes van a dictar sentencia son los asesores y no los jueces, y esto realmente es imperdonable. Los asesores están para otra cosa. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son eso, magistrados, y ellos son los únicos que están encargados de juzgar, no otras personas. En el artículo quince se están estableciendo procedimientos y criterios de elaboración de sentencias, lo que no debe existir nunca en una Constitución Política de la República. Estas son normas reglamentarias, de menor jerarquía, que deben constar o en la Ley Orgánica de la Función Judicial o en la Ley de Arreglo de Procesos Judiciales; no puede establecer una Constitución este tipo de normas que son absolutamente reglamentarias, señor Presidente. El articulo dieciocho, en el cual se establece que los ministros de las cortes de Justicia provinciales, que son las cortes de Apelación, tribunales y juzgados, todos estos ministros

provendrán de la carrera judicial. Se está atentando al derecho de trabajo y a varios otros derechos fundamentales, pues se está prohibiendo que los abogados en libre ejercicio profesional, los catedráticos universitarios puedan acceder a ser ministros de las cortes superiores de Justicia o de las mal llamadas cortes de Apelación. No se puede, señor Presidente, permitir estas exclusiones. Lo más preocupante de todo esto, es que textualmente, en el artículo veintitrés: "No se reconoce la existencia de ningún fuero o privilegio especial". Nosotros los asambleístas tenemos fuero de Corte Suprema, señor Presidente, por decisión de esta misma Asamblea, no podemos ser contradictorios y ahora excluir los fueros. El señor Presidente de la República y los altos magistrados de la patria deben ser juzgados por jueces que estén a su nivel jerárquico. Por tanto, ese es el fundamento para el fuero... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Un minuto, señor Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA LOGROÑO JULIO. Gracias, señor Presidente. Se establece aqui, aparte de esta inconsistencia del fuero, una inconsistencia de la prueba. En el aspecto relacionado con las acciones constitucionales, se dispone que el Juez podrá solicitar la prueba en cualquier momento, y se va a crear una comisión, si es necesario. Eso atenta, señor Presidente, contra el principio universal de la prueba. La prueba tiene que ser practicada, tiene que ser dispuesta y tiene que ser solicitada dentro del término especial que en todos los procesos judiciales y constitucionales se establece para aquello. La prueba no puede ser presentada en cualquier momento, esto es atentatorio, y peor todavía crear comisiones para su análisis, cuando lo único que procede es la pericia y el análisis exclusivamente por parte del juez que está a cargo del juzgamiento de la causa. No hagamos este tipo de

aberraciones jurídicas, señor Presidente, que lo único que van a hacer es complicar el desarrollo de los procesos judiciales. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Su tiempo ha terminado. ----------

EL ASAMBLEÍSTA LOGROÑO JULIO. Gracias, señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta María Paula Romo. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ROMO MARÍA PAULA. Gracias, señor Presidente. Algunos colegas que han intervenido en esta mañana, han repetido varias veces que de este tema de la organización de la Función Judicial, solamente deberían hablar los abogados, o que estarían autorizados a hablar con mayor propiedad los abogados. Yo creo que no, la justicia es un tema que tiene que ver con todos nosotros. Todos, ciudadanos, ciudadanas, de cualquier trabajo, naturaleza o experiencia, tenemos derecho a hablar de la justicia y debemos hacerlo, porque todos nosotros nos vemos afectados todos los días por lo que la Función Judicial haga o deje de hacer. De todas formas, señor Presidente, para los que quieran repetir la pregunta, hago la aclaración de que yo sí soy abogada, y he pasado en la universidad la misma cantidad de años que mis colegas compañeros de Acuerdo País y de cualquier otra bancada que sean abogados. En la comparación con algunos casos, me faltan años de experiencia para igualarles, y ofrezco que voy a utilizarlos bien, señor Presidente, pero no es necesario ser abogado para hablar de la justicia. Pero más importante que ser abogada, yo voy a hablar con total franqueza sobre este tema, como siempre lo he hecho, porque yo nunca he dicho en esta sala ni en mi ejercicio como Asambleísta, que ninguna fuerza espiritual irresistible me ha obligado a decir una mentira. Así que voy a hablar con franqueza también sobre

este tema. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Espero que esta vez sea punto de orden, Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Señor Presidente, si es a mí que se refiere, o a mi intervención, y he sido aludido, le pido para debatir, los cinco minutos a que tengo derecho. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Usted no ha sido aludido, de gana se manifiesta. Continúe. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ROMO MARÍA PAULA. Aclaro, señor Presidente, que me refiero a varias intervenciones, porque varios de nuestros colegas han reclamado la necesidad de que sean abogados los que se refieran a este tema, en distintas intervenciones. Y me he referido a todos los colegas y de la forma más respetuosa, solamente para aclarar que no estoy de acuerdo con esa idea, y que creo que todos podemos hablar de la justicia. Le decía, señor Presidente, que yo puedo, además, hablar de este tema, porque me he pronunciado sobre él y he discutido sobre este tema ya durante algún tiempo. Algunos colegas también han dicho que este texto tiene como intención cambiar la Corte, y también, señor Presidente, puedo referirme a este tema, con total autoridad, porque cuando hace algunos meses en la Asamblea se discutió si es que deberíamos o no hacer cambios en la Función Judicial, de forma directa, yo dije públicamente que no estaba de acuerdo con eso. Así que no tengo ningún problema en volver a discutir este tema y decir que este texto respeta la independencia de la Función Judicial, pero también comprende que es necesario hacer cambios radicales. Y como lo defendí en su momento, lo vuelvo a defender hoy. La Justicia necesita

cambios radicales, y esos cambios deben ser resultado de la nueva Constitución, y eso es lo que propone este texto, que no vamos a hacer ningún cambio en la justicia, hasta la nueva Constitución, pero cuando haya nueva Constitución necesitamos cambios en la justicia y vamos a hacerlos. Señor Presidente, como dice la sabiduría popular, no hay que escupir al ciclo, nosotros no somos los que hemos cambiado cortes en este país, nunca. Fue Febres-Cordero el que rodeó con tanques la Corte Suprema de Justicia, para evitar que una Corte se instale; fue el Partido Sociedad Patriótica y el PRIAN, junto con otros partidos, los que destituyeron a la Corte Suprema de Justicia hace un par de años, y no solo la destituyeron, sino que nombraron una nueva Corte, a dedo. Así que repito lo que dice la sabiduría popular, nada más, "no hay que escupir al cielo, compañeros. Yo defiendo que la justicia necesita cambios, y defiendo que debemos ser respetuosos con esa independencia, y por eso los cambios radicales que este texto propone, que yo apoyo, van a transformar la justicia, pero luego de que ganemos el referéndum, respetuosos de la institucionalidad, cosa que no pueden decir muchos en esta sala. ¿Cuál es la Función Judicial que queremos? Queremos una Función Judicial que no tenga el sesenta por ciento de los presos sin sentencia, una Función Judicial que no tenga miles de causas que hacen montañas en cada una de las salas de los juzgados; pero también queremos una Función Judicial que no solamente se cambia desde la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos de nosotros nos veremos algún día encausados por la Corte Suprema de Justicia?, ¿cuántos ciudadanos ecuatorianos comunes y corrientes va a acudir a la Corte Suprema? Muy pocos, señor Presidente. En la Corte Suprema se juegan importantes intereses, pero muy pocos. Nosotros queremos cambiar los pequeños juzgados en donde todos los días se debaten juicios de alimentos, en donde se discute y se persigue a las personas, por rencillas, por venganzas o porque falta un abogado. Esa es la Corte

que ya no queremos, pero también esos son los jueces que queremos cambiar, los que tienen que ver con la justicia en el día a día y en cada rincón del país, no solo en la Corte Suprema de Justicia en donde están grandes intereses. Sobre el texto, y mucho más concreto. La Corte Suprema de Justicia, se llamaba así cuando tenía jerarquía en relación a las otras cortes y a los otros jueces. Yo defiendo y concuerdo con mis colegas que aquí han dicho que no solamente se debe garantizar la independencia de la Función Judicial, en relación con otros poderes. Se debe garantizar también la independencia interna de la Corte de Justicia y de los jueces, y por eso precisamente queremos dar una señal clara de que la Corte Suprema no es Suprema, no porque le quitemos ninguna función, sino porque no manda sobre los otros jueces, porque queremos garantizar que las cortes provinciales y los juzgados de primera instancia puedan actuar con independencia, solamente apegados a la ley. Por eso se justifica el cambio de nombre, porque dice muchas cosas. Dice que ya no es esa Corte la que hoy puede ordenar el sentido de los fallos de los que antes se llamaban sus inferiores. No son sus inferiores, en la Corte ya no puede haber, en la Función Judicial ya no puede haber, ya no hay jerarquías, cada uno tiene funciones diferentes, y por eso crcemos que es importante el rescatar que la denominación refleje la realidad que queremos, la realidad que sería lo deseable. Totalmente de acuerdo con que esa Corte ya no tenga nada qué hacer en los nombramientos y en los temas administrativos, porque ese es precisamente uno de los mecanismos de control de los "inferiores", es el Consejo de la Judicatura el que tiene que manejar los recursos humanos y los recursos económicos de la Función Judicial. También con el objetivo que concuerdo con mis colegas, el objetivo de garantizar la independencia no solo externa, sino también interna de la Función Judicial. ¿Por qué decir que hay magistrados ponentes? Si quieren, busquemos otro nombre, pero que quede claro que de ahora en

adelante tiene que ser transparente, tiene que ser conocido públicamente, quién se responsabiliza por la elaboración de la sentencia, para que no haya sentencias secretas, sentencias escondidas en los cajones de los escritorios, o sentencias que son escritas fuera de los juzgados, fuera de las cortes superiores, fuera de la Corte Suprema de Justicia, porque lamentablemente eso sí ha sucedido en nuestro país. Creo que también es importante, y le sugiero a la Mesa, que revise esta posibilidad, creo que entre las cosas que se deben exigir a los funcionarios judiciales, además de la preparación, además de apoyar la carrera judicial, la escuela judicial, la seguridad, la independencia, hay que pagarles bien a los funcionarios judiciales, porque desempeñan una de las tareas más importantes de la justicia, pero también hay que evaluarlos permanentemente. Creo que también es importante en este caso, poner los máximos de edad no solamente para los magistrados, sino también para ministros de cortes superiores, para jueces y para otros funcionarios judiciales. Esa es una realidad, ya no queremos ministros que se queden dormidos mientras se litiga en las cortes. Eso es lo que pasa hoy en nuestro país, y eso tenemos que decirlo, y creo que hay que ponerlo como un requisito y establecer un máximo de edad permitido para ser funcionario judicial. Estoy de acuerdo y apoyo que se baje el número de los miembros, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y creo que hay que reconocer algo muy importante en este texto, cuando se eliminan los fueros especiales y los privilegios para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Un tema que venimos luchando en el país, desde hace muchos años, y que a pesar que la Constitución del noventa y ocho, lo insinuó, no lo dijo con tanta claridad como este texto, a pesar de que la Constitución del noventa y ocho lo insinuó, no fue posible hacerlo en estos últimos años. Es importante, me parece que es un gran avance que concuerda con la declaración de un Estado constitucional de derechos, que se

contemplen las garantías constitucionales. Estas garantías que están aquí, el habeas corpus, el recurso de acceso a la información, el amparo, son las que van a hacer realidad los derechos. Esto hace posible que cuando esos derechos son violados, podamos reclamar y podamos exigir el cumplimiento de los derechos. Sobre el control constitucional de los fallos judiciales. Este tema ha provocado no solamente polémica en la sala, sino también con la propia Corte Suprema de Justicia y en la opinión pública. Creo que es importante establecer una diferencia... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, tiene un minuto. -------

LA ASAMBLEÍSTA ROMO MARÍA PAULA... el control constitucional de fallos judiciales no es una novelería, no es un invento extraño en este país, en esta Asamblea. El Control constitucional de fallos judiciales, solamente para poner un ejemplo, se hace en España, se hace en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, no es ajeno a nuestra familia del Derecho y a nuestro comportamiento jurídico. Analicemos con sensatez y discutamos si es conveniente para el país, discutamos si es conveniente para nuestro ordenamiento jurídico y discutamos en qué términos. Pero esto no es motivo de escándalo, porque solamente si es que hacemos una pequeña comparación, y me voy a permitir pasarles a los colegas, unos cuadros con esas normas, esto no es ninguna novelería. Creo que también es posible encontrar una fórmula mixta para los notarios, pero no tengo mucho tiempo para explicarme al respecto, voy a proponerlo por escrito. Finalmente, señor Presidente, cuando esta Asamblea debatía si debíamos o no hacer... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó su tiempo. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ROMO MARÍA PAULA. ... algún cambio concreto en la Corte Suprema de Justicia, un periodista, al saber mi opinión, que yo creía que había esperar a la nueva Constitución, un periodista me dijo, y ¿entonces, los magistrados de la Corte pueden dormir tranquilos? Yo le contesté que no, no pueden dormir tranquilos ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ni los ministros jueces ni los jueces ni los secretarios ni nadie en este país, mientras la justicia vaya tan mal como hoy está. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Chacón. ----------

EL ASAMBLEÍSTA CHACÓN SERGIO. Gracias, señor Presidente. Voy a hacer algunos comentarios al proyecto que hemos recibido a último rato para debatirlo aquí en este Pleno. Verdaderamente hoy día sí que es un paquetazo, porque nunca he visto una carpeta de este tamaño, para debatir en una media jornada. Pero en todo caso, lo que se pueda hacer. En el artículo dos, se habla de dar protección a víctimas, testigos y otras personas que intervienen en el proceso penal. La pregunta es: ¿por qué no a aquellos que intervienen en un proceso civil que de pronto puede involucrar intereses económicos de gran envergadura, de gran significación y verse igualmente amenazados o expuestos a determinados riesgos? El tema por ejemplo en el caso que se sigue contra la compañía TEXACO, dice que es el juicio de mayor envergadura de toda la historia judicial ecuatoriana. La Mesa Uno aprobó como una regla del debido proceso, que los casos tratados por la justicia comunitaria a través del derecho consuetudinario, no pueden volver a ser juzgados por la justicia común. Y entre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se está proponiendo que estas comunidades tengan la potestad de crear y de aplicar su propio derecho. Facultades verdaderamente amplias, que desde mi criterio

personal, deberían ser debidamente regladas por la ley. Y la ley debe señalar exactamente, en los pueblos, en las comunidades indígenas, quiénes son las autoridades competentes para aplicar, para discernir sobre la existencia de este derecho consuetudinario, e incluso para crear las normas, porque esto realmente es una facultad amplísima, porque a nivel de los pueblos indígenas va a existir la potestad de decir este hecho es delictivo, este hecho no es delictivo, y siendo delictivo tiene esta o esta otra sanción. Es decir, total discrecionalidad, que para mi modo de ver debe ser normado por ley, determinando autoridades competentes, ámbito de competencias, porque que yo al menos sepa, en ninguna comunidad o pueblo se puede decir que existan reglas claras para juzgar, por ejemplo, homicidios, violaciones, delitos atroces. ¿Por qué razón?, por que el Estado ha ejercido el monopolio, el control de la justicia en materia penal. Y si es que el Estado ha tenido este monopolio hasta ahora, es obvio que ninguna comunidad, a no ser de aquellos grupos o pueblos no contactados, puede preciarse en este momento de la historia, de decir, si, nosotros tenemos reglas y sanciones preestablecidas. Y eso, el principio de legalidad es un principio importantísimo que debe beneficiarnos no solamente a los pueblos mestizos, sino también a las comunidades y pueblos indígenas, donde no pueden quedar expuestos a la arbitrariedad, a la discrecionalidad, a la imaginación, al buen juicio de determinados dirigentes, que en unos casos podrán ser, pues, actuar con conciencia, pero en otros podrían producirse enormes perjuicios, generando el caos y la inseguridad. Nosotros creemos que hemos venido acá, no para entregar al país un desorden jurídico, sino para entregar un nuevo ordenamiento jurídico y un ordenamiento jurídico, obviamente debe ser plenamente delimitado, plenamente definido. ¿Por qué me estoy refiriendo a esto?, porque yo observo que entre los órganos jurisdiccionales que están establecidos o consignados en el artículo diez, no se encuentran los órganos, aquellos

órganos que van a ejercer justicia, de acuerdo con el derecho consuetudinario. Este olvido tiene que ser, creo yo, evitado, y se debe incluir acá a aquellos jueces que van a administrar justicia en los pueblos indígenas, de acuerdo con este derecho consuetudinario, y dentro, vuelvo a señalar, de una delimitación precisa de competencias. Igualmente, coincido con el asambleísta Logroño, quien ha señalado que existe una contradicción dentro del texto propuesto, puesto que el artículo dos señala claramente que es competencia de la Corte Nacional de Justicia, enjuiciar a los funcionarios del Estado, que según la Constitución y la ley gocen de fuero. Pero en el artículo veinte y tres, se proclama que no se reconoce la existencia de ningún fuero o privilegio especial. Habría pues, que dejar muy claro esta contradicción que es evidente. Por último, señor Presidente, compañeros asambleistas, yo debo manifestar mi desacuerdo al artículo catorce del proyecto presentado, que establece la cuarta instancia, el recurso extraordinario, se dice, de amparo contra sentencias o autos definitivos expedidos por la justicia ordinaria. Este recurso va a ser motivo de total discrecionalidad, porque en el segundo inciso se dice que los jueces decidirán prácticamente si lo aceptan o si lo rechazan, porque se habla que si se ha presentado para obstaculizar la justicia, entonces obviamente debe ser rechazado, lo cual a nosotros nos hace entrever que es un recurso que se está planteando únicamente para dilatar, para entorpecer la administración de justicia. Y si es que existe un gran mal hoy en día en la administración de justicia, es la lentitud, es la ninguna agilidad. Hace unos días pude ver yo, cómo al haberse presentado una demanda, una demanda de alimentos, que se entiende que son acciones urgentes, en el mes de mayo, un juez de menores, en la ciudad de Quito, convocaba para audiencia en julio del próximo año, julio de dos mil nueve;; es decir, solo para tener la audiencia en la cual se va a dilucidar respecto de una pensión provisional, más de un año, más de

un año; es decir, que este niño o niña tendrá que hasta eso morirse de hambre. Pero efectivamente tenemos un gran problema en la justicia que tarda, se dice que la justicia que tarda, pues no es justicia. Pero esos proyectos que se están presentando por parte de la Mesa Nueve y por parte de la Mesa Tres, a mi criterio, lejos de acelerar, de permitir una dinámica aceptable en el manejo de los procedimientos judiciales, más bien entorpecen y retrazan la evolución en la administración de justicia. Y concretamente me voy a referir porque tiene plena relación a lo que propone la Mesa Tres, en las competencias de la Corte Constitucional, en el artículo cuatro, perdón, que se dice que si un juez encuentra que de pronto una ley es contraria a la Constitución, en lugar de resolver la causa, se dice que deberá suspender la tramitación de la misma y mandar a la Corte... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA CHACÓN SERGIO. ...Constitucional, para que ésta resuelva, hasta que resuelva si es que es o no es inconstitucional. Igualmente, a nosotros nos parece un error terrible lo que propone la Mesa Tres, en materia de competencias de la Corte Constitucional, al señalar que esta Corte que está integrada solamente por nueve magistrados, va a tener la potestad de conocer y resolver las sentencias, los autos y cualesquier decisión, por ínfima que esta sea, que haya sido pronunciada por la justicia ordinaria. Y lo que es más, a estos jueces se les propone que sean totalmente irresponsables, que no tengan ni siquiera responsabilidad penal o civil; es decir, que pueden prevaricar, pueden fallar contra Derecho, y nadie está por encima de ellos. Claro que la Corte Suprema, no puede ser Suprema, porque... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó su tiempo, Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA CHACÓN SERGIO. ...por encima de esta corte va a estar la Corte Constitucional. Y lo que es más, ustedes ya lo han dicho públicamente, Alianza País será la que nombre la Corte Constitucional, así lo dice el Presidente de la Mesa Tres, en entrevista que se halla publicada el miércoles veinticinco de julio del dos mil ocho... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó su tiempo, Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA CHACÓN SERGIO. ...y por eso el afán precisamente de desmantelar a la justicia en nuestro país. Muchas gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Gina Godoy. ----------

LA ASAMBLEÍSTA GODOY GINA. Gracias, señor Presidente. Solo recordarle al compañero, que estamos en el debate de la Mesa Ocho, no de la Mesa Tres, el debate de las Mesa Tres fue en días anteriores. Como Mesa Ocho, queremos agradecer los comentarios, las críticas, los aportes y las sugerencias, precisamente estamos en un primer debate, y eso es parte del ejercicio. Pedirles también a los compañeros, que sean más prolijos y hagan sus aportes vía escrito, para que la Mesa los pueda procesar. Estamos abiertos a ello, siempre lo hemos dicho. Quiero ser breve en mi intervención, señor Presidente, y quisiera, por favor, la niña señale el artículo veinte y tres, y recordar al Pleno de esta Asamblea, que precisamente los diez primeros artículos que el Pleno ya aprobó y que fueron planteados por la Mesa Ocho a esta Asamblea, de esos diez artículos aprobados, el artículo cuatro, precisamente puso en consideración de esta Asamblea, la unidad jurisdiccional. Si nos ubicamos en el artículo veinte y tres, vemos que precisamente ese texto recoge la propuesta de que se elimine, -nos ubicamos, veinte y tres, perfecto- de que el principio de la unidad jurisdiccional debe prevalecer

al administrar justicia, y que en este primer debate precisamente, repito, entregamos para poner a consideración de este Pleno. Es importante que se concrete una organización clara de justicia ordinaria. Hemos sido testigos permanentemente, de la gran cantidad de leyes que hay sobre diferentes materias y cómo éstas han provocado salvoconductos para quienes han abusado del poder a través de la ley. Vimos la necesidad de una justicia ordinaria que cumpla con el principio de igualdad, donde todos estamos bajo las mismas leyes, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Si antes existieron abusos de una justicia militar y policial, sobre sus propias fuerzas, ahora la justicia ordinaria ampara esos derechos y los trata como iguales. No más fueros que no permitan ejercer los derechos humanos de militares y policías, no más fueros que no permitan la transparencia, la celeridad y la neutralidad. Al inicio de este debate, no se hizo sino evidenciar precisamente la desconfianza de lo público. Yo quisiera invitar a este Pleno a recordar que el atraco más grande, precisamente, que se ha dado en la historia de este país, no es por lo que ha ocurrido en el sector público, sino precisamente por lo que ocurrió en el sector privado. Y hablamos precisamente del gran feriado bancario del que hasta ahora, pese al paso de los años, no se señalan ni cumplen la condena quienes realmente terminaron llevándose los grandes recursos del pueblo ecuatoriano. Otra propuesta que aplaudo, porque precisamente el ejercicio de mi profesión se da atendiendo a grupos de atención prioritaria, como son las madres de familia, madres que permanentemente son usuarias de los juzgados de la Niñez y de la Adolescencia, de los diferentes tribunales, de las diferentes cortes a lo largo del país, el tener que pedir una audiencia de conciliación y que esta sea dada seis meses después, seis meses después, y en algunos rincones de nuestra patria ni siquiera existen los juzgados de la Niñez y de la Adolescencia. Precisamente, el artículo tres de este texto, señala la

responsabilidad que se tiene que poner en cada uno de los cantones de este país, un juzgado de la Niñez y la Adolescencia, para que dé atención a los temas de protección de derechos. Pero también, también un juzgado para la atención de las situaciones de adolescentes infractores. Así como en materia de adultos existen los juzgados civiles y los juzgados penales, es necesario, es oportuno y es urgente que en temas de niñez podamos hacer esta separación. Con respecto al tema de notarías, se cuestiona el que pase a ser responsabilidad del Estado el dar este servicio. Es importante señalar que en países como Venezuela, China y Cuba, el servicio es dado precisamente por el sector público, y los usuarios de estas localidades dan cuenta de una satisfacción en el servicio que reciben. Señalarles a los compañeros que siguen impulsando, de Sociedad Patriótica, que la Corte Suprema tenga su sede en la ciudad de Quito, pues precisamente ese texto, ese texto que fue distribuido a los ciento treinta asambleístas, en el artículo doscientos cuatro, dice y sugiere que la sede de la Corte Suprema de Justicia sea en Quito, así que allí se tiene que quedar. Muchísimas gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Diana Acosta. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ACOSTA DIANA. Gracias, señor Presidente. Bueno, en realidad coincido con las expresiones de varios colegas, en especial de Tito Nilton Mendoza, brillante exposición, de las varias barbaridades que están aquí, por ende, no las voy a repetir. Solo me voy a centrar en algunas que me parecen incomprensibles. El artículo ocho, es en realidad un atentado contra los que ejercemos el libre ejercicio de la profesión. Evidentemente, hay algunos que no concuerdan así y es coherente, porque nunca han ejercido la abogacía, esa noble profesión de justamente defender las causas, de defender a personas que han

sido acusadas. Este artículo que pretende ligarnos a la defensa, a los abogados que ejercemos la profesión, es absolutamente irresponsable, porque además va a dejar en la indefensión a muchísima gente. Lo que los ciudadanos tienen derecho a la defensa, a que sean defendidos por los abogados, para eso estudiamos Derecho, para defenderlos de causas injustas, de tratos injustos, de cuando la función pública, la función administrativa comete actos irregulares, ahí los defendemos. Y ¿nosotros vamos a ser también disculpados por aquello? ¿Vamos a tener demás, sanciones, como lo dice aquí? Además de otras sanciones, ¿qué otra sanción? O sea si una persona es defendida por un tema que involucra su aprehensión, involucra prisión de por medio, ¿también nosotros vamos a ir a la cárcel tras cumplir aquello?, ¿A eso queremos llegar? Se va a dejar en indefensión a muchísima gente. Lo que debe garantizarse es que nadie puede estar sin defensión. Esto va a causar un colapso terrible, y celebro lo que dijo mi colega Tito Nilton Mendoza, ojala que las escuelas de Derecho se pronuncien en esto, ojala que los abogados en libre ejercicio de la profesión, los colegios de abogados, que hay muchísimos, ya lo mencionó también el doctor Esteves, cuántos abogados somos y en qué vamos a quedar, los que sí, por supuesto, ejercemos la profesión. Esto es terrible y no puede constar en una Constitución. En relación a que se pretende bajar el número de magistrados, eso es terrible, deberíamos subirlos. ¿Cómo se los puede bajar? Hay causas represadas justamente por aquello. Conforme con María Paula, hay que remunerarlos mejor. Los magistrados que tienen una función tan importante, que dan justicia, que dictan sentencias, tienen que ser bien remunerados, sino quién va a querer ser aquí magistrado? Ellos tienen una gran responsabilidad, y tienen que ser más, no tienen que ser menos, porque sino se van a seguir colapsando y retrasando. Otro tema que es terrible, es el tema de las acciones constitucionales. El artículo tres, por favor. En las acciones

constitucionales, el tres, que habla en el tres, literal g) "No será indispensable el patrocinio de un abogado para proponer una acción...", refiriéndose a las acciones constitucionales. Eso es terrible, eso es realmente terrible, porque es dejar en la indefensión justamente a las personas que quieren ejercer alguna acción, es más o menos como decirle a un paciente, que se haga el mismo una operación de corazón abierto. Entonces ¿los abogados para qué están?, ¿para qué estudiamos? Una persona que no necesita de un abogado para proponer una demanda de éstas de acción constitucional, no va a poder ejercer libremente su legítimo derecho. ¿Por qué?, porque no lo conoce, cómo lo aplica, cómo se defiende de manera correcta , si justamente no conoce, y para eso están los abogados especializados en estas materias. Eso es terrible, debería quitarse, no puede constar en la Constitución, además que, por supuesto, dejaria a muchísimos profesionales fuera del ejercicio profesional, porque ahora ya todos se pueden defender. Eso es terrible y deja en la indefensión a muchisima gente. Lo que aquí tiene que decir en vez de eso, es que el Estado facilitará la defensa, que el Estado facilitará al abogado, el Estado tiene que facilitar justamente las acciones, para que los ciudadanos se puedan defender de los abusos, de la injusticia. Pero no decir que no necesita un abogado, porque si lo necesita. Porque una persona cuando está enferma necesita un doctor, algún especialista que lo cure. Pues acá también un abogado que ejerza plenamente esas acciones y que conozca de los procedimientos. El tema notarial es absolutamente terrible, por decirlo de alguna manera. No es posible que se quiera hacer a los notarios unos funcionarios públicos, que se les quiera poner una remuneración. ¿Por qué? Esto va a causar serios problemas, un notario lo que hace es dar fe pública, un notario es una persona que da confianza, un notario es una persona que dice sí; así un notario, es una persona que asesora también, el notario aconseja, muchas veces. y ¿a dónde acudimos para un consejo?, a

alguna persona que me da confianza. Ahora, si se lo va a hacer público, para empezar se tiene que crear algún tipo de sala de sorteos para los notarios, de manera que se sortee y ver a qué notario va. ¿Y qué pasa si el notario no me gusta como hace las cosas?, ¿qué pasa si se demora?, ¿si se colapsa?, ¿tengo que volver a resortearlo?, o ¿ya me quedé con aquello? Actualmente tenemos la posibilidad de decir, este notario no me gusta, me voy donde otro, donde lo haga más rápido, más ágil, mejor, donde un notario de nuestra confianza. Ahora ya no se podrá hacer eso. ¿Qué pasa con los bancos que tienen que poner hipotecas todos los días y diferentes trámites?, ¿tendrán que ir al sorteo y ver qué notario le toca? Eso va a ser realmente un problema y va a colapsar eso. ¿Qué pasa con una madre que quiere salir con su hijo menor de edad, del país? Necesita un permiso, ¿tiene que esperar a quc vaya a un sorteo y vea qué notario le toca y luego ir y hablar, y si no se lo hace rápido y si se colapsa? Esto se va a prestar a corrupción. Lo que queremos aquí es justamente eliminar la corrupción, y yo creo que en eso todos coincidimos. Pero ponerlos a los notarios como funcionarios públicos, bajo una remuneración, va hacer que estos trámites se hagan al peso, a quien le de más plata, ese lo hace más rápido, o ¿va a tener un orden en los que se van a sacar los temas? Esto no es correcto, esto es yus imperium, aquí se va a imponer a qué notario tenemos que ir, qué notario nos va a dar la confianza. Este tema notarial va a causar muchos problemas. En Colombia se pretendió hacer lo mismo y fracasó, pero como se lo hizo bien, se lo pudo cambiar. ¿Qué pasa si esto queda así y fracasa y hay corrupción en los notarios, después? Porque va a haber una remuneración, entonces al notario le va a dar igual hacer una que mil cosas, va a ser al peso, ¿qué va a pasar? ¿Tenemos que entonces, ir de nuevo a otra Asamblea que vaya a reformar eso?, ¿van a haber las reformas?, ¿se lo va a reformar inmediatamente? Porquc esto va a ser un serio problema para toda la ciudadanía. Para legalizar una

simple firma, si se necesita una firma urgente para un banco, para un trámite, ¿vamos a tener que ir al sorteo para que se los den a los notarios? Esto es terrible y va a causar muchísima tardanza, va a colapsar este sistema, el sistema de justicia como está aquí concebido, también va a colapsar. Esperemos que ahora se manifiesten las cortes, porque esto es terrible. En el tema de los notarios se les va a quitar la imparcialidad, nadie va a querer ser notario ahora, no va a haber un servicio de calidad. Lo que aquí merecemos es un servicio de calidad, y hay muchos notarios que dan ese servicio. Si se dice que cobran mucho, pues eso se puede regular actualmente, que lo regulen, que pongan tasas y digan que cobre menos el notario. Pero no tenemos que hacerlos públicos, porque eso va a bajar la calidad del notario, se va a prestar a corrupción, va a retardar los trámites, todas las instituciones van a tener problemas. ¿Qué va a pasar cuando se necesite algo de urgencia? Esto en realidad va a causar tantos problemas que van a afectar tanto al buen servicio, a la función impecable que muchos tienen.... ----------

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA AMINTA BUENAÑO, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. ----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ACOSTA DIANA. Gracias, señora Presidenta... y tiene que ser evidentemente cambiado. No cometamos ese error, hagámoslo vía ley, no vía Constitución. Estos artículos son absolutamente reglamentarios. Una Constitución tiene que enumerar los principios, no este tipo de procedimientos a seguir, para eso están las leyes, es para eso. En el tema de los notarios, la Transitoria Segunda es

absolutamente confiscatoria, porque se les quiere quitar su instrumento que son pagados por ellos mismos, son de ellos, ¿por qué se los van a quitar, si actualmente no son del Estado? Yo creo que hay que rever esto. Evidentemente, como lo hicieron notar aquí, yo presentaré estas mismas observaciones por escrito, aquí un impecable informe de minoría, que establece estas razones y muchas más, y esperemos que sean tomadas en cuenta, para que después nos llegue un texto más coherente, que no se contradiga con otros, como está aquí, y que no atente contra la administración de la justicia en el Ecuador, porque ese texto tal como está redactado, atenta... ----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Su tiempo, Asambleista. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ACOSTA DIANA. ...contra la justicia en este país. Gracias, señora Presidenta. ----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Asambleísta Masaquiza. ----------

EL ASAMBLEÍSTA MASAQUIZA VICENTE. Gracias, señorita Presidenta, gracias señor Vicepresidente, César Rodríguez. (Intervención en Kichwa) El trabajo de la Mesa Ocho, ratifica el carácter democrático de todos los sectores, organizaciones y sobre todo el estructurado de esta propuesta, que contiene la justicia ordinaria, garantías jurisdiccionales, sistema notarial y registral. Me voy a referir a los registradores y notarios en el Ecuador, que es una propuesta muy bien trabajada, donde por primera vez en la historia del Ecuador se va a generar un cambio de las estructuras de las dependencias, que históricamente ha estado manejado por determinadas familias, en vía de la sucesión hereditaria que trasmitía en esos puestos, así como la complicidad de altos funcionarios judiciales, quienes organizaban, dirigían, nombraban a

notarios y registradores. Es verdad, compañeros, que tal, en esta vez como estamos cambiando una sociedad democrática y nueva, que tal si un indigena utilizaría esos puestos, sería satisfactoriamente como pueblos indígenas, afroecuatorianos, bueno, montubios, porque hemos sido marginados toda nuestra vida. Por esa situación, esa propuesta coincide en que la forma por el proyecto de la Constitución, de la confederación de los indígenas ecuatorianos, como puede ser y ha visto en ese texto, que han acogido el proyecto de la CONAIE y el proyecto de las organizaciones, instituciones grandes de las provincias, de las parroquias, hemos visto una factibilidad de trabajo. Quisiera leer textualmente, ¿qué hemos pensado en el recogimiento, en los debates que hemos hecho en los cantones de las demás provincias ecuatorianas? Los servicios notariales y registrales son públicos, el Consejo Nacional de la Judicatura determinará la remuneración de los notarios y registradores, de lo personal y auxiliar de estos servicios. De igual modo, fijará las tasas de cobrar por los servicios que presten, establecerá estándares de calidad y evaluará periódicamente el rendimiento de los registradores y notarios. Las tasas cobradas por los servicios notariales y registrales ingresarán a la caja judicial, existirá un sistema de información nacional registral de la propiedad y de otros negocios jurídicos que serán regulados mediante la ley. Esta propuesta constitucional es muy importante, en virtud que permitirá que los servicios notariales y registrales tengan una disminución de sus pagos, que de esa manera se pretende que los sectores sociales, como los campesinos e indígenas, de producto de una reforma agraria excluyente y equitativa, produjo el fraccionamiento de la parcialización forzada de las tierras comunitarias. Hoy, el campesino y una gran parte de mestizos e indígenas tienen pequeños lotes de tierra que no permiten acceder a una institución crediticia como el Banco Nacional de Fomento, para solicitar una línea de crédito, pero no solamente porque

el lote de terreno resulta muy pequeño y no es el objeto de la garantía, sino porque la realidad social de nuestro país, es que no tienen títulos consecutivos de dominio ni escritura pública, consecuencia de los altos costos que generan los servicios notariales y registrales, lo que imposibilita obtener un título de propiedad. Señora Presidenta, es verdad que nosotros, al menos yo, personalmente, en la provincia o el cantón que he trabajado, ¿qué nos han dicho los señores apoyadores que trabajan en el Registro de la propiedad?, o ¿también en las notarías? Si damos una coima, es bienvenido, para gente indígena y campesino y pobre del país. En cambio a los compañeros, que pidamos y que tratamos el consentimiento del ámbito indígena, clase baja, clase media y clase alta. En cambio la clase alta, lo que hace es, por medio del teléfono ya están contactando con el mismo Registrador de la Propiedad, dice bueno, ya está la escritura hecha, mientras que para la gente pobre, en donde si no es con un tiempo de un mes, dos, tres meses hasta años para hacer una escritura. No es condición económica, sino es condición de tiempo. Si fuéramos nosotros como en personal, tuviéramos nuestros títulos o escritura de terreno, como, por cuestión de rapidez, inmediatez, serenidad, compañeros. Esa es la propuesta de nuestros compatriotas ecuatorianos, la gente vulnerable del país, la propuesta que estamos esta vez haciendo una democracia, y el proyecto que hemos estado trabajando con nuestro querido Gobierno, es que venimos desde las campañas, en los sectores campesinos, sectores mestizos, gente pobre que hemos estado diciendo que esta vez va a cambiar la justicia y tiene que cambiar. Por esa situación tengo que hablar a mi pueblo ecuatoriano, en idioma kichwa, también, como merezco compañeros. (Intervención en kichwa). Gracias. ----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Bravo, Asambleísta. Asambleísta Luis Hernández. ----------

EL ASAMBLEÍSTA HERNÁNDEZ LUIS. Señora Presidenta, por lo que dijo, también le felicito, no entendí. Voy a ser muy corto. Realmente a mí también me preocupa, porque aquí tenemos que nosotros demostrar preocupaciones, porque en cada articulado desarrollamos una visión de cómo ese articulado va a estar implementado en la realidad y qué efectos pueda tener. Entonces mientras más nosotros acumulemos las experiencias vividas, con el articulado presentado de cualquier tipo, desarrollamos una visión, y esa visión nos presenta un apoyo, una crítica o un debate. Por eso es que, yo, por ejemplo, hay temas que soy muy preocupado en el desarrollo de esa visión, entre esos la plurinacionalidad, la falta de separación de poderes, la concentración de demasiado poder en el Ejecutivo, etcétera, etcétera. Voy a hablar desde el punto de vista de los fueros. Me parece muy bien que se eliminen los fueros en las Fuerzas Armadas y en la Policía, pero me parece que debe especificarse también, quiénes tienen fuero, quienes tiene fuero de Corte de Justicia, en este caso, de Corte Nacional de Justicia. También hay una parte en la cual por cada cantón se establece un juzgado especializado en la Niñez y en la Juventud, me parece bien, pero creo que también hay que optimizar, porque hay cantones que representan muy poca población, y las cabeceras cantonales están muy cerca una de otra, y tal vez se podría regionalizar, que vaya a tener un solo juzgado, en relación a la población, dependiendo el número y dependiendo la ubicación geográfica. En la parte que corresponde a que un juez decida o no si es un documento confidencial o si es un proceso que es secreto, me parece que deja abiertas mucho las posibilidades. Les digo con franqueza, en algunos casos va el juez y es rodeado de unos cuántos compañeros o ex compañeros uniformados, que le dice si ¿el documento es secreto o reservado?, y se allana a ese punto de vista, normalmente. Entonces yo creo que debe haber un articulado, y voy a presentarle de esa manera,

en el cual se expresa claramente, que la reserva tiene que estar determinada por la Constitución, y su tratamiento y proceso tiene que estar también reglamentado por la ley. Igualmente, tiene que definirse claramente en la ley, una vez abierta esta posibilidad en la Constitución, cómo se trata los documentos. Hay documentos que se incineran, para quitar responsabilidades. A raíz del problema de los ascensos, que había varios y hay varios en las Fuerzas Armadas, yo pedí información sobre las actas de los consejos de generales, y las grabaciones. Han habido reuniones de tres, cuatro, cinco días en que se trata en secreto, en que se trata en secreto donde salen todas las mañas humanas, la vida de un oficial, y cuando pedí las actas y las grabaciones, el Ministro de Defensa me contestó que me manda las actas, que eran dos hojas, de sesiones de cuatro o cinco días, y que lamentablemente, lamentablemente las grabaciones habían sido destruidas. Eso no puede pasar en una democracia, nadie tiene que estar exento de rendir cuentas de sus actos. Sobre el tema de habeas corpus, no podemos eliminar o al menos dar limitaciones al habeas corpus; eso es restringir la libertad. En una sociedad de abusos, en una sociedad de abusos, no podemos hacer nosotros, que quede eso determinado solamente a un juez, tiene que ser el alcalde. Les quiero reseñar algo: Cuando hace trescientos años transportaron a un esclavo, de Estados Unidos a Inglaterra, y se pidió habeas corpus porque el esclavo había sido tratado de una forma que no era legal, y una vez que se resolvió que él tenía derecho al habeas corpus, salió una famosa frase, y me permito decirles: "El aire de Inglaterra ha sido por demasiado tiempo puro para un esclavo, ahora todo hombre que lo respira es libre". Aquí en el Ecuador tenemos que todos respirar libertad y no podemos tener ninguna restricción a esa libertad. Por lo cual estimo que el habeas corpus tiene que mantenerse como es, y claro, sancionar a quien lo violenta. Tal es así, que por ejemplo la Corte

Suprema de Estados Unidos acaba de dictaminar hace unos pocos días, que los que están en Guantánamo tienen que ser sometidos a un habeas corpus. Finalmente, los aires de cambio son buenos, pero yo creo que tenemos que aplicar el arte de cambiar, y no la pasión en el cambio, porque ahí nos quedamos en las coyunturas, y no salen los cambios para el largo plazo, sino para el mediano plazo, y lo que es peor, para el corto plazo, en base muchas veces a buenas intenciones. Pero no nos olvidemos que en el caso, por ejemplo, de la Corte Suprema actual, pasó por un proceso que todos apoyamos, hay que corregirlo. Pero hacer el borra y va de nuevo, no hace sino que alguna vez vuelvan a hacer lo mismo y nunca institucionalizamos nada en el Ecuador. Muchas gracias, señora Presidenta. ----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Asambleísta Lenin Hurtado. ----------

EL ASAMBLEÍSTA HURTADO LENIN. Gracias, compañera Presidenta. Compañeros, compañeras asambleístas: Los problemas de la Función Judicial son de extraordinaria complejidad, muy variados. Nosotros aquí ya aprobamos en alguna oportunidad, la gratuidad de la justicia en todas las materias, sin ninguna excepción; gratuidad que por supuesto está en el orden que se permita a todo ecuatoriano y a toda ecuatoriana tener acceso efectivo a la justicia, sin que su escasez de recursos sea óbice para lograr efectivamente activar el aparato judicial. Pero por supuesto, esa eliminación de las odiosas tasas judiciales, debe tener necesariamente como contrapartida asumir por parte del Estado, la responsabilidad de entregar los recursos suficientes, necesarios y oportunamente a la Función Judicial, para que cumpla con su tan crucial papel, a efectos de lograr que la administración de justicia sea lo que debe ser, y no lo que es actualmente. Hemos también eliminado

concomitantemente con eso, la posibilidad de crear preasignaciones que no sean en salud, en educación; el tema de la región amazónica y, por lo tanto, se impone que desde el Presupuesto General del Estado, se entregue los recursos suficientes a la Función Judicial. Incluso esto va en el orden de aumentar la celeridad, porque podrían aumentar los recursos tecnológicos y los recursos humanos que coadyuven a la celeridad en la administración de justicia. El tema de la designación de los miembros de la Función Judicial, es un tema de crucial importancia también. Si hay algo que reconocerle al ingeniero León Febres Cordero, es que identificó claramente, que del control de la Función Judicial y todo el aparato judicial, allí estribaba realmente en el control del poder. Lo identificó e hizo todo lo necesario para lograr ese control, controló más allá de dieciocho, de treinta y un magistrados, en la Corte Suprema de Justicia, que se nombraba en muchas ocasiones en su propio domicilio; lo propio en las cortes superiores y ni hablar de los jueces de instancia y también, por supuesto de los agentes fiscales. Ese control, por supuesto, no fue él el único que lo controló, sino también hicieron su parte la Izquierda Democrática, la Democracia Cristiana, actual Unión Demócrata Cristiana, para controlar la Función Judicial. Y allí estuvo el principio de la enorme crisis, la grave crisis que agobia aún hoy la Función Judicial y que, por supuesto, a partir de esta Constitución podemos revertir. Sobre lo propuesto, ahora no va en la línea de democratizar la designación de los miembros de la Función Judicial. La actual Corte Suprema de Justicia, que fue designada por una comisión que se le dio el carácter de iluminados, tres ciudadanos, muy respetables, por cierto, pero no dejan de ser tres, frente a la comunidad nacional que vio impávida, cómo tres personas designaban a la supuesta Corte ideal, que no han dejado de avergonzarnos cada vez más con los repetidos escándalos de corrupción, "Borbuvideos", compra de magistrados, fallos ominosos como el caso Filanbanco, el caso

Mahuad, el mismo caso de mi padre, Jaime Hurtado González, que tras casi diez años cn la Función Judicial, no se le ha dado una respuesta oportuna al país. Entonces la propuesta es y sigue siendo, que seamos todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, que podamos elegir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, de suerte que podamos elegir a los mejores hombres, a las mejores mujeres, para que hagan realidad el ideal de justicia que estamos persiguiendo en esta Asamblea y en todo el país. Se ha dicho también, que para efectos de lograr que la Corte Suprema de Justicia cumpla adecuadamente su papel del tribunal de casación y, entre otras cosas, tiene el objetivo de unificar la jurisprudencia, debemos disminuir el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La actual conformación de la Corte Suprema de Justicia, treinta y un magistrados distribuidos en tres salas civiles, dos laborales, tres penales, una contenciosa, una sala fiscal y el Presidente de la Corte Suprema, que de acuerdo a la ley no integra ninguna sala, ha ido justamente en la dirección opuesta a la unificación de la jurisprudencia. Pero disminuir el número de magistrados no es la solución, porque seguirá habiendo contradicciones o fallos contradictorios, cuando en una misma sala se producen fallos contradictorios. Asi que es propuesta de los mismos empleados judiciales de este país, que se haga lo que dice la propia Ley Orgánica de la Función Judicial, para resolver fallos contradictorios, que los miembros de las salas se reúnan y diriman las contradicciones en los fallos que se puedan originar en las diferentes salas. Es una propuesta, estamos en primer debate y hay que debatirla, pero lo cierto es que es la disminución del número de magistrados no va a ser que las cinco mil doscientas veintitrés causas represadas en la Corte Suprema de Justicia, sean despachadas oportunamente, no va a ser que en promedio, las ocho mil ciento cincuenta y dos causas que ingresan a la Función Judicial, a la Corte Suprema de Justicia, en promedio

anualmente sean despachadas oportunamente. Así que hay que encontrar en este debate, y la propuesta de los empleados judiciales, es y debe ser, por supuesto, considerada como parte del debate, para lograr el objetivo, que es un objetivo compartido. Se ha dicho que en el artículo ocho del texto propuesto, es un atentado a aquellos profesionales del Derecho, que por supuesto litigamos. Resulta que ya está sancionado en la ley, en el artículo trece número veintiuno de la Ley Orgánica de la Función Judicial, está establecida la posibilidad de que se suspenda el ejercicio de la profesión a los abogados, por inconductas que cometan en el ejercicio de su profesión. Así mismo, el artículo doscientos dos de la misma Ley Orgánica de la Función Judicial, señala que los abogados podemos ser sancionados cuando litigamos ofensivamente, sobre todo con los que administran justicia. Se pretende ahora, constitucionalizar la sanción del litigio de mala fe. Por supuesto que hay mala fe en el litigio, pero se da esa actitud como consecuencia. La propia ley procesal, el ordenamiento jurídico nacional permite que vía interposición de recursos, que son normalmente dilatorios, se pueda...----------

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA FERNANDO CORDERO CUEVA, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA HURTADO LENIN. ...se pueda articular lo que se denomina el fraude procesal. Por lo tanto, lo que debemos hacer es cambiar la ley, pues no satanizar la actividad de los profesionales en el Derecho. El control constitucional y los fallos, hemos de preguntarlo: ¿Es posible que un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en casación,

viole el debido proceso y viole derechos fundamentales? Por supuesto que se puede dar ese caso. ¿Acaso que la Corte Constitucional revise esos fallos, es la solución? A mi entender, no, compañero Presidente y compañeros y compañeras asambleístas, debemos articular una propucsta que permita defender el debido proceso, defender los derechos fundamentales y también preservar la celeridad procesal y la solidaridad; la buena fe, que debe por supuesto orientar toda la actividad profesional, desde el punto de vista de los abogados y, por supuesto, desde el punto de vista de los que administran justicia. Todas las rcformas, todas las propuestas que se originen en esta Asamblea, también deben preservar algo que es fundamental, la estabilidad de los y las empleadas de la Función Judicial, que no pueden ser afectados de ninguna forma por esta Asamblea Constituyente. Hemos defendido la estabilidad de todos los trabajadores del país, y en este caso no podemos excepcionarlos. Muchas Gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Rosa Elena de la Torre. ----------

LA ASAMBLEÍSTA DE LA TORRE ROSA ELENA. Señor Presidente, en honor de la famosa mucosa gástrica de los compañeros, me voy a reservar para el segundo debate. Gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Jaime Abril. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ABRIL JAIME. Señor Presidente, compañeros y compañeras asambleistas: Concuerdo con mi compañera María Paula Romo, en que todos debemos hablar de la justicia, porque en ese ejercicio también nos permite hablar de democracia. Según la doctrina, al hablar de jurisdicción, hablamos de la potestad que deriva de la soberanía del Estado, de aplicar el Derecho en cada caso concreto,

resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia mediante la participación de jueces autónomos e independientes. Ese es el ideal de justicia a la que debemos propender. Pero veamos un ejemplo de cómo ven la justicia desde adentro sus propios actores, para la cual me permito leer lo que dice la página web de la Función Judicial de Loja, en su saludo de bienvenida. "La Función Judicial y nuestro distrito judicial en particular, tiene la elevada misión de administrar justicia con sujeción a la ley, con honestidad y transparencia, pero como no se cumple con esta elevada misión, se incorpora inmediatamente la justificación. Existen factores externos que con frecuencia impiden el cumplimiento de esta misión, como la injerencia de las otras funciones del Estado, mal que hasta la fecha no se ha erradicado. Falta de presupuesto suficiente con autonomía del Ministerio de Finanzas; funcionamiento del Ministerio Público, cuyas deficiencias se le increpan a la Función Judicial; aplicación de normas legales obsoletas. También tenemos factores internos adversos relacionados con algunos casos de incumplimiento de las funciones encomendadas a cada servidor judicial, y por excepción a algún caso de corrupción. Factores negativos que nos proponemos erradicar. ¿Alguno que otro casito de corrupción? Sí, cada uno de nosotros no aceptamos nuestra responsabilidad en la crisis que vive al momento la administración de justicia del país, esto no va a cambiar. Existe la necesidad de demarcar y exigir al juez o jueza y funcionarios judiciales respetar principios específicos y normas éticas de conducta. Ellos, en primera instancia y luego el resto de los ecuatorianos en nuestras relaciones con ellos, a fin de que la práctica de estos valores contribuyan al fortalecimiento e integridad del poder encargado de administrar justicia. Muchos dirán: ¿Pero si estos valores son obvios y necesarios en todos nuestros actos? Claro que sí, pero nadie puede negar que existe la necesidad de tomar medidas para superar el caos reinante en esa Función del Estado. Cierto es que frente

a soñados casos de corrupción existen honrosas excepciones de jueces probos, correctos incorruptibles, al igual que funcionarios judiciales. Un ejemplo de ello es la administración de justicia en la ciudad de Cuenca, la misma que está considerada como un ejemplo en el Ecuador. La oralidad comenzó a aplicarse hace algunos años y hoy se considera a la ciudad de Cuenca como la única ciudad del país en donde no hay presos sin sentencia y sin que exista detenciones que no hayan sido legalizadas dentro del tiempo que dispone la ley". Es por ello, que yo presenté un Mandato a fin de que se conceda a la ciudad de Cuenca la sede de la Función Judicial, considerando además, que la ciudad de Cuenca fue la primera ciudad del Ecuador donde funcionó la primera Corte Suprema de Justicia, por autorización de Antonio José de Sucre, quien fuera encargado para la creación de ésta por Simón Bolívar, Presidente de la Gran Colombia. Que la ciudad de Cuenca por su ubicación geográfica, por su historia, por su infraestructura, por su gente luchadora, puede con sobra de méritos acoger a esta Función Judicial. Además, señor Presidente, actualmente se está terminando de construir un moderno edificio en el que cuenta tecnología de punta, en el cual puede funcionar cómodamente la Corte Suprema de Justicia y otros órganos de la Función Judicial. Son estas las razones por las que como cuencano presenté este Mandato, me mantengo y me mantendré apoyando a mi querida ciudad, a que Cuenca sea la sede de la Función Judicial, y así proceder a la desconcentración de los poderes del Estado, generando desarrollo y riqueza y ampliando los niveles de participación ciudadana. Aquí estamos, señor Presidente, para actuar con la más alta transparencia en nuestra propuesta, esta Asamblea no es el lugar para hacer protagonismos politiqueros ni oportunismos. No quiero polemizar con el coterráneo Rory Regalado, pero hay que decir la verdad en este recinto. ¿Acaso la Constitución que presentó Sociedad Patriótica, en el artículo doscientos cuatro, no dice lo que plantean, al revés, no dice que

la sede de la Función Judicial será Quito? Es aquí donde presentó Sociedad Patriótica y presentó también el compañero Rory Regalado, la Constitución de ellos. Aquí está, señor Presidente, la razón en por qué la diferencia entre esta Asamblea de la gente seria y proba, aquí está, señor Presidente, por qué le exijo respeto al señor Rory Regalado, porque en esta Asamblea no se puede venir a mentir. La ciudadanía va a juzgar entre la probidad y la falsedad. Son estas... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Asambleísta, diríjase a la Presidencia. A las personas que son aludidas les daré la palabra porque tienen derecho... ----------

EL ASAMBLEÍSTA ABRIL JAIME. ...todos los ecuatorianos queremos solucionar los problemas que actualmente aquejan a esta Función del Estado, ésta cambiará con el cambio de actitudes de los actores internos y también de los externos y, además, con los cambios que con la Constitución que estamos redactando, se tomarán tales como: La administración de justicia experimentará varios cambios; las modificaciones van desde el nombre, Corte Suprema de Justicia, se llamará Corte Nacional de Justicia. En cada provincia existirá una Corte de Apelación; se disminuirá de treinta y uno a dieciocho los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, hoy Corte Suprema de Justicia. Otro de los cambios tiene que ver con el período que durarán los magistrados, de seis a nueve años para ser magistrados. Los candidatos deberán, entre otros requisitos, haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria, por un lapso mínimo de diez años. La designación será una responsabilidad del Consejo dc la Judicatura. Para dar seguridad a la carrera judicial, todos los ministros en el nivel de cortes de apelación, deberán provenir del ejercicio de la judicatura. Se ha incluido una

disposición destinada a frenar los posibles abusos de litigio judicial, ya que a los abogados patrocinadores se les hace solidariamente responsables con sus representados en el pago de costas judiciales, así como también de las indemnizaciones por daños y perjuicios, multas, conforme a la ley. Se incluye también un artículo para garantizar la justicia a los grupos de atención prioritaria para que en cada cantón exista al menos un juzgado especializado en familia, niñez y adolescencia, asi como uno para adolescentes infractores y que, en las localidades donde exista un centro de rehabilitación social, se crea, al menos, un juzgado de garantías penitenciarias. Para acabar, señor Presidente, todos estos cambios están encaminados a mejorar la administración de justicia, pero aún no será suficiente si, como ya dije anteriormente, no hay un cambio de actitudes de los funcionarios judiciales, de las personas, de la sociedad...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ABRIL JAIME. ...para erradicar una vez más por todo aspecto, a la corrupción en esta Función del Estado. Si cada uno de nosotros estamos vigilantes, esto será posible. Gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señores asambleístas, suspendo hasta las cuatro de la tarde la sesión. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Se recuerda a los señores asambleístas, que a las dieciséis horas se reinstala la sesión. Se invita al almuerzo. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE DECLARA EN RECESO A LA SESIÓN

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Acta 076

CUANDO SON LAS TRECE HORAS TREINTA Y NUEVE MINUTOS. ------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas electrónicas se encuentren insertas en sus curules. Se va a verificar la puntualidad de los señores asambleístas. Son las cuatro de la tarde. Señores asistentes, retiren las tarjetas de los señores asambleístas que no se encuentren presentes en la sala. Señor operador, registre la asistencia de los señores asamblcístas. Gracias. Si, señor Presidente, tenemos quórum. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE REINSTALA LA SESIÓN CUANDO SON LAS DIECISÉIS HORAS. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el asambleísta Nelson López. ----------

EL ASAMBLEÍSTA LÓPEZ NELSON. Gracias, señor Presidente. Compañeros y compañeras: Me voy a permitir hacer ciertas reflexiones en torno al articulado presentado por la Mesa, fundamentalmente con lo que tiene que ver con la disposición contemplada en el artículo veinticuatro; es decir, de los Notarios y de los Registros de la Propiedad y Mercantil. Pero antes de hacer ese tipo de reflexiones a los compañeros de la Mesa, vale la pena señalar que el texto presentado es un texto que responde a los intereses nacionales, que responde a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que aspiran cambios en la administración de justicia. Pero cscuchaba por la mañana en el debate, cierto escepticismo, cierta desconfianza, yo diría, cierto asombro, de que hoy se pretenda a través de estas normas contenidas en este texto que se va a aprobar o que se está debatiendo y que será objeto de aprobación, sin duda, de que los notarios, los

registradores de la propiedad pasen a tener otra condición, yo diría, y la condición es la de servidores públicos, funcionarios públicos. Pero ¿por qué ese escepticismo, esa preocupación, si realmente la doctrina del Derecho administrativo contemporánea, la legislación latinoamericana en la que se incluye nuestro país, ya tiene otra concepción de lo que son los servidores públicos? En la actual legislación, los servidores públicos son aquellos que prestan sus servicios remunerados en las instituciones públicas, en los organismos públicos, pero también en las corporaciones y fundaciones y compañías cuyo capital, al menos, sea de un cincuenta por ciento del Estado. ¿Por qué tanto asombro? yo diría, y le digo al pueblo ecuatoriano, que no hay tal asombro, cuando los notarios y registradores de la propiedad prestan un servicio público, manejan información pública, de tal manera que están los presupuestos jurídicos para que ellos tengan la calidad de ser servidores públicos. Es importante precisar, que con su condición de servidores públicos, también están obligados a que sus remuneraciones no excedan los cinco mil dólares, conforme al Mandato dos, no pueden percibir remuneraciones mayores, superiores, y obviamente me he permitido también investigar en el SRI, en el Servicio de Rentas Internas, la declaración del impuesto. En el año dos mil cinco, el Registrador de la Propiedad del cantón Quito, tenía un ingreso de cinco millones ciento cincuenta y cuatro mil dólares por conceptos de ingresos, y está en la página Web, el Registrador de la Propiedad del cantón Quito, en el año dos mil seis, registra ingresos de seis millones ochocientos diez mil dólares, y el dos mil siete, el Registrador de la Propiedad del cantón Quito, registra un ingreso de siete millones trescientos noventa mil dólares, y hoy se habla de que los registradores de la propiedad, de que los notarios son funcionarios con una alta capacidad, con una alta probidad, de lo cual, obviamente, existen buenos funcionarios. Pero también el país conoce de que esa relación laboral que mantienen los

registradores de la propiedad, los notarios, por calificarla así, de precaria, de precaria, yo diría, porque saben los auxiliares, saben los empleados, que dichas personas que laboran ahí en los registradores de la propiedad no perciben ni siquiera las remuneraciones mínimas. A esos auxiliares, a esos empleados es lo que en estos momentos nosotros nos aprestamos a darles estabilidad, a garantizarles sus derechos intangibles. No hay proporción entre los cinco, seis y siete millones de dólares que percibe el Registrador de la Propiedad del cantón Quito versus esas remuneraciones miserables. Pretendemos garantizar la estabilidad, entonces, de esos auxiliares, de las secretarias y de todo ese personal que labora tanto en las notarías como en los registros de la propiedad. No es posible que por la prestación del servicio público, por el manejo de una información pública, perciban ingresos que no van al Presupuesto General del Estado, sino que por el contrario, van a cada uno de los bolsillos de los notarios y registradores de la propiedad y registradores mercantiles. Entonces ¿de qué nos asombramos?, ¿de qué nos asombramos? Hoy va a cambiar la historia. Estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que los notarios y los registradores mercantiles sean nombrados a través de este concurso de merecimientos y oposición, por el Consejo de la Judicatura. Pero en el caso de los registros de la propiedad, voy a demostrar técnicamente, que dichos funcionarios o que esa competencia de los registros de la propiedad corresponde a las municipalidades del país. Pero ¿por qué corresponde a las municipalidades del país? Porque son los municipios del país, aquellos que tienen por responsabilidad exclusiva el ordenamiento territorial, aquellos que han ido edificando, estableciendo una serie de competencias sobre el registro del catastro urbano y el catastro rural, automatizado, y que sobre la base de esa información técnica les ha permitido a las municipalidades, igual, emprender en una información para la determinación tributaria, para saber a través de la Dirección de

Avalúos y Catastros, exactamente dónde está ubicada la propiedad, quién es el dueño de la propiedad, la superficie de esa propiedad, las construcciones de esa propiedad y la valoración de esa propiedad. De tal manera que esa competencia, técnicamente hay que irla articulando para efectos de que el registro inmobiliario corresponda a las municipalidades. A partir del mes de enero, enero del dos mil ocho, presentamos un proyecto de Mandato, presenté un proyecto de Mandato, precisamente para efectos de que las competencias de los registradores de la propiedad sean trasladadas a las municipalidades del país, enero. Esto se lo hizo también con la compañera Marisol Peñafiel, en enero. En mayo del dos mil ocho, con el compañero Gilberto Guamangate y Ximena Bohórquez, nuevamente se elabora un nuevo Mandato, y hoy veo con mucha satisfacción, que las disposiciones contenidas en este trabajo elaborado por la Mesa Ocho, realmente son recogidas. Pero lo importante de todo esto, es que los proyectos de Mandato, de enero a mayo, habrian generado gran expectativa en el pueblo ecuatoriano, gran expectativa en el pueblo ecuatoriano, porque sabe que hoy por hoy esas tasas exageradas, abusivas... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA LÓPEZ NELSON. ...realmente lo que se va a permitir es bajar. Por la mañana escuchaba que los notarios son amigos y que dan fe pública, y que obviamente, ese tipo de amigos que muestran confianza, son aquellos donde el usuario puede llegar con tranquilidad. No, compañeros, no podemos tener ciudadanos de primera, segunda y de tercera clase, mientras que la gente pobre, la gente de pocos recursos económicos no puede inscribir una escritura en el Registro de la Propiedad, por el exceso del costo, no puede. En las municipalidades, cuando se ha emprendido programas, se ha emprendido programas de

legalización de tierras, o cuando el INDA ha entregado o ha adjudicado tierras, la gente de pocos recursos económicos no ha podido tener la posibilidad de ir a la notaría a que le elaboren su escritura pública y peor... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó su tiempo. ----------

EL ASAMBLEÍSTA LÓPEZ NELSON. ...de inscribirla en el Registro de la Propiedad. Esta historia va a cambiar. Hoy lo que se pretende con el trabajo de la Mesa, es guardar equidad y proporcionalidad. Señores notarios, señores registradores de la propiedad, a igual trabajo, igual remuneración. Se terminaron los privilegios. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Ximena Bohórquez. ----------

LA ASAMBLEÍSTA BOHÓRQUEZ XIMENA. Gracias. Voy a abordar un tema puntual, como ya lo dijo el compañero Nelson López. Los notarios son elegidos por el Consejo Nacional de la Judicatura, por tanto, su origen está en la Función Judicial; es decir, que son funcionarios públicos, dan atención al público, pero las ganancias son privadas. Esa es la distorsión que hoy se intenta corregir, mucho más si en la actual Ley Orgánica de la Función Judicial, constan los notarios como jueces civiles, porque dan fe pública de la propiedad de los ecuatorianos; dan fe de los contratos, de los protocolos y de otros actos jurídicos. Se ha dicho que no hay confianza en la función pública, entonces comparemos con el área privada. Y no sé por qué inmediatamente llega a mi memoria el feriado bancario de mil novecientos noventa y nueve, que le costó más de ocho mil millones de dólares de perjuicio al pueblo ecuatoriano. Ese salvataje bancario representa el gran atraco en la historia nacional, por eso no hay confianza en el área privada. Sin

embargo, en el capítulo De los Sectores Estratégicos, vemos que está escrito, que el Estado ecuatoriano que es el mayor accionista, puede delegar parte de la administración a las empresas privadas, inclusive puede constituirse empresas mixtas. Qué concepto más saludable, eso es correcto. Pero de acuerdo a esa tesis, estoy segura que con una normativa idónea se puede permitir el funcionamiento de algunas notarías privadas, para las personas que tienen fe solo cuando pagan dinero. Entonces los que tienen plata pueden acudir a esas instancias. Hoy me doy cuenta del por qué cuando hay un cupo vacante en las notarías, los interesados en ocupar ese cargo público cotizan a esa función, con altas cifras en dólares, de cinco y hasta de seis números. Señor Presidente, hoy tenemos la gran oportunidad de crear una nueva herramienta jurídica que norme las actividades del sector público, del sector privado; que procure una mejor atención del gobierno estatal y, obviamente, esto derivará en una gran calidad de vida para la familia ecuatoriana. Solamente así podríamos estar juntos luchando contra esa lacra inmensa que tiene el Estado y que se llama corrupción. Me embarga una gran duda, que para estos concursos de méritos y de oposición están los requisitos para quienes aspiran a llegar a esos altos niveles de los tribunales de justicia, y esos requisitos son: Ser ecuatoriano en goce de los derechos políticos. Experiencia de diez años, por lo menos, como abogado, en ejercicio profesional con probidad notoria. Y como gran aval, la docencia universitaria. Y aquí nace mi enorme preocupación, porque no consta lo más importante, que es tener una integridad moral, porque solo con abogados honrados, solo ahí el Ecuador tendrá justicia. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Asambleísta Chávez. ¿No está? ----------

EL ASAMBLEÍSTA CHÁVEZ HÓLGER. Señor Presidente, compañeros asambleístas, pueblo del Ecuador: Hoy tocamos uno de los temas más espinosos y preocupantes del acontecer nacional, sobre la administración de justicia o la Función Jurisdiccional. Históricamente, y recuerdo desde cuando niño, joven, adolescente, la administración de justicia ha estado siempre al control y bajo la égida de los partidos políticos tradicionales o de quienes han estado en el ejercicio del Gobierno y el momento político determinado, y esa injerencia de los partidos políticos en la administración de justicia, ha determinado para que aquella esté a las órdenes y disposición de la partidocracia, para quienes de una u otra manera han influenciado para la entrega de las distintas dignidades en toda su jerarquía. Pero ese hecho ha sido justamente para tener una administración de justicia amarrada, para que brille la impunidad en los juicios que han sido de sus intereses que les han sido múltiples y caros, y también para la impunidad, cuando se han dado desapariciones forzadas. Igualmente, para forjar juicios para intimidar a dirigentes y gente que se ha embarcado en procesos de transformación social en el Ecuador. Y esta administración de justicia, a la que tanto se la ha golpeado, creo que es importante encontrar sus causas y dar la solución, ya que esta es parte de la razón de ser de este cuerpo constituyente. La politización es uno de los problemas de preocupación en la administración de justicia. Otro de los temas, es que va conectada a la falta de libertad para actuar conforme a Derecho, por la injerencia y la presión constante de los sectores políticos. Aquí se suma otro factor importante, la falta de una mejor capacitación y la ausencia de recursos económicos por parte del Estado, el que ha incurrido en una irresponsabilidad constante, porque el represamiento de las causas, de lo que el pueblo tanto se ha quejado, sobre todo los profesionales en libre ejercicio, ha sido que en juzgados existen procesos en gran abundancia y que se hace físicamente imposible que

aquellos puedan tramitarlos. Y los recursos económicos son los que ayudan a descongestionar ¿de qué manera?, aumentando los juzgados y tribunales en las distintas circunscripciones o jurisdicciones de las provincias y del país; la implantación de la oralidad, que es una exigencia y una necesidad para el país. Y hoy cuando tratamos este tema, la oposición ha hecho una serie de observaciones a este proyecto que estamos debatiendo en este momento, compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, han hecho observaciones motivadas, y que ese es el motivo y esta es la ocasión que en este cenáculo de la democracia, como es este cuerpo constituyente, donde se debe ir dando paso a observaciones y sugerencias, porque de la discusión sale la luz y el objetivo es encontrar un camino que logre superar este problema de la administración de justicia en el país. Y quiero manifestar, que por razón del tiempo me va a ser un poco difícil poder abordar todos y cada uno de los temas que, en definitiva es una cantidad muy grande, muy numerosa de artículos, y que por fortuna tengo ya hechas las observaciones por escrito, a cada una de las disposiciones legales que a mi concepto y como Asambleísta de la provincia de Bolívar, considero ameritan introducción de correctivos, cambios y modificaciones. Hasta lo que alcance a leer, hasta cuando se me acabe el tiempo, señor Presidente, voy a hacer las siguientes reflexiones sobre los temas a los que me estoy refiriendo. En el artículo cuarto, -de favor, en la pantalla- que dice: "Los magistrados, ministros y jueces administrarán justicia sujetándose a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley". Observación: Insertar al artículo el texto siguiente, en el orden expresado, quedando el artículo así: "Los magistrados, ministros y jueces administrarán justicia sujetándose a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley, en el orden expresado". Debido principalmente a que no deben los magistrados pensar que pueden escoger entre estas tres

opciones, sino que de manera imperativa se pone en un orden de prelación, tal es así, que por encima de todo debe estar primero nuestra Constitución, luego los derechos humanos, internacionalmente aceptados, etcétera. En el artículo tres: "Los magistrados, ministros, jueces y servidores judiciales no podrán ejercer la abogacía ni desempeñar otro empleo público o privado, excepto la docencia universitaria, fuera de horario de trabajo. Hemos hablado del pluriempleo, y aquí mi reflexión es la siguiente: Se debe eliminar, excepto la docencia universitaria fuera de horario de trabajo, porque la calidad de la docencia está dada por la investigación científica de la ciencia jurídica, tanto más, que la docencia universitaria por ser estudios de alto nivel, debería estar ocupada por personas que tengan el suficiente tiempo para estudiar, escribir e investigar los temas de su cátedra. Un magistrado proveniente de cortes saturadas de casos, ¿cómo puede tener tiempo para la cátedra universitaria? He sido estudiante universitario, he tenido destacados profesores, y muchos se han desempeñado en puestos de esta naturaleza, unos que otros han actuado con responsabilidad, han cumplido con su deber en la cátedra, pero otros no han podido cumplir a cabalidad. Los mejores catedráticos que he tenido, son aquellos que le dan a la docencia su razón de ser de vida, y no que los usan como un puesto para rellenar sus ingresos. "Los magistrados, ministros y jueces –en el siguiente inciso- no podrán ejercer funciones de dirección en los partidos políticos, participar como candidatos en procesos de elección popular, ni realizar actividades de proselitismo político ni religioso". La observación es, el artículo debe ser modificado, aumentando el grado de prohibiciones con respecto a los sujetos políticos... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA CHÁVEZ HÓLGER. ...de la siguiente manera: "podrán ser afiliados ni ejercer funciones...", etcétera, etcétera. Por fortuna, tengo el documento, las observaciones hechas por escrito que voy hacer llegar. Recuerdo en este momento a Cicerón, expresaba que: "La historia es la maestra de la vida, el pasado -expresaba que- es la base para el presente y el presente para el futuro". Consecuentemente, este cuerpo constituyente no debe jamás dejar de recordar el pasado negro que ha significado para la administración de justicia en el Ecuador, a fin de que tomando esa experiencia del pasado, podamos proyectarnos en el presente y en el futuro, para tener una administración de justicia, para que la justicia brille para el de arriba y para el de abajo y para que la misma...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó su tiempo. ----------

EL ASAMBLEÍSTA CHÁVEZ HÓLGER....satisfaga a los amplios intereses y frustraciones de la colectividad ecuatoriana. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó su tiempo...----------

LA ASAMBLEÍSTA ROMO MARÍA PAULA. Señor Presidente, yo solo quiero hacerle notar al compañero Chávez, que la frase "pasado negro" es una frase racista, y en esta Asamblea Constituyente esas frases no están permitidas. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Bien. ----------

EL ASAMBLEÍSTA CHÁVEZ HÓLGER. Una aclaración, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Está claro, no lo vuelva a repetir y con eso esta...----------

EL ASAMBLEÍSTA CHÁVEZ HÓLGER. Señor Presidente, yo estoy aquí en el cenáculo de la democracia, tengo toda la libertad de expresar lo que siento y lo que pienso como bolivarense, como ecuatoriano. Cuando yo me refiero al pasado, me refiero a los momentos duros y amargos que le ha tocado vivir al pueblo ecuatoriano. Cuando hablo del presente, me refiero al momento que estamos viviendo y la oportunidad que tenemos para que a través de este cuerpo constituyente reflexionemos en el pasado y sepamos que hoy debemos poner las bases fundamentales para tener un cuerpo constituyente y una administración de justicia que vuele con libertad, sin la injerencia de la partidocracia que tanto daño... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Asambleísta Rosana Alvarado, con usted cerramos el debate. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ALVARADO ROSANA. Gracias, Presidente. Considero que hay algunas preguntas previas que merecen contestarnos ahora que debatimos el tema de justicia, y uno de ellos se refiere a los servicios notariales y ¿si éstos son o no servicios públicos? Porque en el Ecuador esa pregunta tiene que responderse, ¿desde donde ubicamos a la fe pública? y ¿si a ella le hemos dado las características que merece solamente un negocio privado? ¿Vamos a seguir manteniendo a funcionarios privilegiados, que en lugar de recibir un salario reciben utilidades por cada uno de los trámites que tramitan?, ¿vamos a recibir entonces esas utilidades, justificadas en la fe pública y en que se les encuentra a cualquier hora, en cualquier espacio y en cualquier lugar? Como también se les encuentra a fiscales y a jueces penales que

cumplen sus trabajos de acuerdo diferentes turnos establecidos y que no reciben utilidades por aquellos trabajos. Entonces aquí, indudablemente, necesitaríamos establecer un criterio unificado, sobre si en toda institución pública a uno le deberían cobrar una tasa que vaya al titular de esa institución. Cuando estamos consagrando que la justicia es gratuita, y tiene que ser gratuita para todos los ámbitos y en todos los temas, entonces también es hora de justificar ¿cómo vamos a pagar todos esos gastos que la administración de justicia merece recibir? o ¿todos los ingresos que merece recibir? Probablemente, entonces, ahí las tasas notariales encuentran un camino para que lleguen donde deberían llegar, no al bolsillo de los notarios y no al bolsillo de los registradores. Los notarios y registradores tienen entonces que cumplir con sus responsabilidades, no como favor, como dicen que a veces nos hacen, sino por obligación, sea el que sea el salario recibido. A mi me parece un argumento bastante cojo, el decir que por ejemplo cualquiera de los cargos de los notarios podría estar este momento en riesgo cuando no se les reconoce a ellos la misma cantidad de recursos que hasta este momento ellos han venido percibiendo. Entonces también es necesario analizar todos aquellos notarios que desde el reposo y casi agónicos en clínicas y en sus domicilios, continúan heredando cargos o heredando sus puestos y siguen dando la fe pública. También es importante recordar el caso del notario Cabrera, a ver si en esas manos estaba bien asegurada la fe pública, y el ochenta por ciento de casos de notarios que no han pagado, de acuerdo a los informes de Servicios de Rentas, sus impuestos como cualquiera de los ecuatorianos y ecuatorianas que si se obliga con esto. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta, que si bien no todo tiene que estar establecido en la Constitución, no podemos ser tan inocentes de creer que la ley que determine estas regulaciones, se va a dar con absoluta sencillez. Considero también, que en este caso no

debemos obedecer ni a presiones ni mucho menos, pero sí analizar de una manera mucho más objetiva esta situación. Sobre el artículo diez, que considero es una de las garantías, cuando habla de la Desaparición Forzada, y el recurso de habeas corpus. Para este caso, imaginemos así de pronto, un Gobierno como el de Febres Cordero, limitado con este artículo; imaginemos a la familia Restrepo, imaginemos a la familia de Consuelo Benavides, exigiendo la aplicación de este artículo, imaginemos tal vez a esos crímenes de Estado y a esas experticias de canallas, que hubieran podido ser limitadas con este artículo. Y recordemos también lo que dice sobre esto la Corte Interamericana, en sus opiniones consultivas, como la número ocho, por ejemplo. "Es esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes". Este es entonces el sustento para establecer este artículo. Me parece una acertadísima decisión de la Mesa de Justicia. Sobre la Corte Constitucional, dice Alfonso Schelloto, que puede definirse a la Corte Constitucional, como "aquel instrumento que garantiza la Constitución; es decir, el medio por el cual se cerciora el efectivo respeto de aquella por parte de cada función del poder estatal". Desde aquí entonces, y desde estos conceptos es que se encuentra justificación para el recurso extraordinario de amparo, compañeros. Es desde esta concepción y desde esta definición, que tenemos que pelear el recurso extraordinario de amparo. Ya existe, y no es ninguna novedad, ya varios compañeros se pronunciaron, existe en Venezuela, existe en Colombia, existe en Perú, en Bolivia, en Brasil, en España, existe en Alemania, tiene que existir en el Ecuador. Países en donde la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, el Supremo Tribunal Federal, pueden juzgar mediante un recurso extraordinario de amparo,

cuando la decisión o cuando la sentencia viola por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución. Se concede además en un efecto devolutivo. Entonces claramente estamos estableciendo requisitos y límites. De ninguna manera podríamos creer que se considera una cuarta instancia. No estamos hablando de cualquier recurso, no estamos hablando de un recurso que procede en cualquier tiempo, y además se tiene que suponer otra cuestión, que es tal vez la más importante y la que mejor sustenta esta decisión. ¿Nos podríamos, nos podríamos negar a conceder un recurso extraordinario de amparo, cuando lo que se ha violado es un derecho reconocido en la Constitución? Solamente esa idea debería causarnos temor. Si es que se ha violado un derecho reconocido en la Constitución, pues las acciones y las garantías nunca van a ser suficientes. Esa tiene que ser una cuestión dc convicción, y desde la convicción es que tenemos que defender. La Corte Constitucional es garantía constitucional para el Estado ecuatoriano, y en ese sentido, el recurso tiene que ser defendido. Por último y antes de pasar las observaciones por escrito, no me parece una coincidencia que debatamos en el mismo día, de la transformación de la administración de justicia, y en la tarde nos convoquemos para resolver sobre las amnistías y sobre los indultos. No me parece una coincidencia que las dos cuestiones o los dos puntos del orden del día hayan coincidido. La justicia en el Ecuador ha sido injusta, y ha sido injusta, obviamente, con los más débiles. Lo que hoy está sucediendo, lo que hoy va a suceder en los siguientes puntos, cuando reconozcamos la amnistía y cuando resolvamos de indultos y de amnistías, es la negación de la justicia en el Ecuador, que es algo que no puede volver a darse. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Pavón. ----------

EL ASAMBLEÍSTA PAVÓN ANDRÉS. Muchas gracias, señor Presidente. Voy a tener que volver a manifestarles lo que casi en todas las intervenciones les digo, compañeros, que el tiempo que tenemos es muy corto para poder debatir un paquete de artículos que se está dando en cada sesión plenaria y que en estos temas tan transcendentales para nuestro país, en el cual debería estar informado completamente de lo que está pasando, no se lo hace como debería ser. Sin embargo, señor Presidente y compañeros asambleístas, yo quisiera empezar mi intervención, con el artículo número ocho, que ha causado mucha polémica aquí en nuestro país, donde que dice: "Las partes procesales y sus abogados patrocinadores, cuando litiguen maliciosa y temerariamente, generen obstáculos o dilaten de manera innecesaria los procesos, pagarán solidariamente las costas judiciales,...", etcétera, etcétera. No podemos nosotros confundir que el abogado está dando su servicio, y el cliente es la persona que viene a contarle al abogado su problema, el problema que tiene, para poder el abogado empezar a litigarle o a defender. Muchas veces lo que ha pasado es que no queremos verle la figura, no podemos nosotros darle la misma figura a la persona quien está siendo defendida y al abogado, y peor aún hacerle culpable de la responsabilidad que puede tener esa persona. Estamos violando, estamos violando completamente el derecho que tiene el abogado al libre ejercicio, completamente. Entonces yo no veo procedente que se apruebe este artículo, debería eliminarse, por respeto a la profesión de abogado. Y no es solamente el hecho de que se quiera hablar o se quiera decir aquí, que vamos a cambiar o reformar la justicia en nuestro país. Es verdad, yo también he sido quien ha estado en contra de cómo se ha manejado la justicia en el país. Pero no es solo el hecho de cambiar de actores o de poner a otros jueces o conjueces en las salas, y peor aún como se quiere hacer de una forma transitoria, le escuchaba al compañero Rodríguez, que quiere ponerle al final de la

Constitución, en donde los jueces de la sala superior, vayan a pasar a ser jueces y conjueces de la Corte Suprema, sin haber pasado un concurso de merecimiento y oposición para ostentar un cargo tan importante, que es de ser jueces de una sala de la Corte Suprema de Justicia. ¡Qué mal! En vez de despolitizar completamente la justicia, vamos a ser más, todavía más a politizar la justicia. Se quejaban ustedes, de la partidocracia, de los socialcristianos y de otros bloques o partidos políticos que han manipulado a la justicia, y ahora quieren hacer ustedes lo mismo, quieren cambiar a la gente que está ahí en todos los tribunales y juzgados, en las cortes, para poner a gente de ustedes, para ser juez y parte dentro de los procesos. Hoy estamos viviendo en nuestro país, un estado en donde que la Función Legislativa no existe, por lo tanto no hay un ente fiscalizador, no hay un ente que controle y que frene un sinnúmero de irregularidades que se pueden estar dando en este Gobierno, y peor va a ser si es que se cambia la justicia, peor va a ser si es que ponen a gente de ustedes mismo dentro de los procesos judiciales y que estén administrando a una justicia. Pero sin embargo, señor Presidente y compañeros asambleístas, algo que también está dentro del articulado, que manifiesta el artículo diez: "La Corte Nacional de Justicia. Las Cortes de Apelación. Los Tribunales y Jueces que establezca la ley. Los jueces de paz". La Corte Suprema de Justicia es la última instancia procesal, y no debe existir otra instancia de apelación, y tampoco vamos a mejorar o a cambiar la justicia, solo por cambiar de nombre. No, compañeros, piensen bien al momento de redactar estos artículos. Voy a tocar el tema de los notarios y los registradores de la propiedad. Saben que yo compartía mucho de que los notarios y los registradores de la propiedad pasen a ser empleados y servidores públicos, porque sí he visto las irregularidades que se venían dando, y decía qué injusto que es que una sola persona, un solo notario tenga tanta cantidad de ingresos, o un registrador público tenga tanta

cantidad de ingresos al mes. Compartía con ustedes eso, y era una propuesta que en algún momento la realicé también en mi campaña política. Pero revisando el Derecho comparado, revisando completamente lo que ha pasado en otros países, y no nos vayamos tan lejos, en la República de Colombia ya se aplicó esto de pasar las notarías y los registros de la propiedad a ser parte de la entidad pública o del servicio público, y lastimosamente no funcionó. Aprendamos de lo que ya ha pasado en otros Estados, y no queramos vivir o pasar esto, para recién darnos cuenta que no ha funcionado. Los notarios deben regirse completamente a la Ley Notarial, a la Ley del Registro, en las cuales no sería necesario que esté amparado en la Constitución, sino lo que necesitamos nosotros hacer, y como propuesta, reformar la Ley Notarial y reformar la Ley de Registro. ¿De qué forma? Porque aquí lo fundamental es el hecho de los ingresos que tienen los notarios y los registradores de la propiedad, según están ustedes manifestando en el debate, que he escuchado a varios compañeros asambleístas. Por qué no poner que todos los valores por concepto de ingresos vayan a una cuenta notarial individual de cada una de las notarías, para que al final del mes los notarios puedan recibir un porcentaje por el servicio que están dando, sea del veinte, del treinta, del cuarenta por ciento, de acuerdo a como se asigne en la ley. Pero no demos un carácter constitucional, sino solamente hagamos una reforma constitucional, perdón, una reforma a la Ley Notarial y a la Ley de Registro. Ahí sí, utilicen los plenos poderes que supuestamente tienen, utilicen los plenos poderes, pero para reformar la ley, no para hacer atrocidades en una nueva Carta Política, lo cual afecta complemente no solamente a los abogados, sino afecta al Derecho que el Ecuador quiere. Si queremos una Constitución para cien años, empecemos a construir, pero empecémosla a construir completamente bien, y no solamente con cosas líricas que afectan a los ciudadanos y ciudadanas. Gracias, señor

Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Les recuerdo que es un primer debate, puede los que no han logrado intervenir, hacerlo por escrito a la Mesa, que en este caso, está tratando este tema. Pasamos, señor Secretario, al siguiente punto del Orden del Día. Se cierra el debate. ----------

VI

EL SEÑOR SECRETARIO. En este momento, señor Presidente. "3. Conocimiento y resolución de las solicitudes de amnistías e indulto a: Amnistías 3.1 Señor Carlos Alberto Simbaña Romero. 3.2 Coronel (sp) Carlos Arboleda Heredia. 3.3 Varios ciudadanos del Cantón Vinces. 3.4 Doctora Wilma Salgado Tamayo. 3.5 Abogado Luis Villacís Guillén. 3.6 Ex presidente Gustavo Noboa Bejarano. Indulto 3.7 Indulto a las personas que transportan pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas y estupefacientes". Hasta ahí el tercer punto, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Les propongo una mecánica para este tema. Me parece que la Presidenta de la Mesa debe hacer un enfoque integral, global, luego abrimos un debate sobre el punto tres, y cuando se trate de votar, votamos de una en una cada una de las propuestas de la Mesa. Tiene la palabra la Presidenta de la Mesa. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ROMO MARÍA PAULA. Gracias, señor Presidente. Yo quiero empezar diciendo que esta ha sido una gran responsabilidad para la Mesa Diez, que como no le es ajeno a nadie en este pleno, tal vez ese ha sido un tema más polémicos y sobre los que más se ha debatido fuera del debate constitucional, por ejemplo, por supuesto fuera del

debate constitucional, pero ha sido un tema delicado para la Mesa Diez, y nosotros hemos cumplido con la tarea de analizar cada uno de los casos, de hacer un informe sobre estos casos. En la mayoria de los casos, ustedes verán que hay reconsideración, votaciones, nuevas recomendaciones, nuevas resoluciones. Para nosotros ésta ha sido una inmensa responsabilidad, y nosotros lo único que hacemos es recomendarle al Pleno cuál es la decisión que luego de un análisis cuidadoso creemos que corresponde tomar. Es el Pleno el que tiene la última palabra sobre cada uno de estos casos, en el ejercicio de una de las facultades legislativas regulares de cualquiera de los Parlamentos, que es la de otorgar indultos o amnistías. En el caso de las amnistías, estas se justifican, señor Presidente y compañeros de la Asamblea Constituyente, estas se justifican cuando la amnistia, que no es una decisión judicial sino politica, es una decisión que puede traer calma y reconciliación en el país, y es una resolución que nos puede ayudar a buscar la justicia. Este es el análisis que adicionalmente del análisis jurídico, se ha hecho en la Mesa Diez, en cada uno de los casos. Lo que hoy les proponemos son los informes y las resoluciones que recomiendan la amnistía en todos estos casos. Recomendamos la amnistía para los tres ex gerentes de la AGD, recomendamos la amnistía para un grupo de pobladores de Vinces, para el ingeniero Simbaña, para el Ex presidente Gustavo Noboa, y es un indulto general para portadores de pequeñas cantidades de drogas. Voy hablar dos minutos sobre cada uno de esos temas. En el tema de los ex gerentes de la AGD, todos nosotros sabemos que las repercusiones y las consecuencias de lo que fue el feriado bancario aún no tiene ninguna solución concreta en el país, y nos van a seguir pesando durantes años y vamos a seguir buscando justicia. Lo que resulta intolerable, colegas y señor Presidente, es que después de esa crisis, diez años después, los que están presos y los que están encausados son los ex gerentes de la

AGD, y no son los banqueros, y no son los responsables, y no son los que desfalcaron al pueblo ecuatoriano, porque finalmente se socializó la pérdida. Creo que en cada uno de los casos hay consideraciones diferentes, pero todos sabemos que la Gerencia de la AGD y el espacio de la AGD fueron de mucha responsabilidad y particularmente perseguidos, y los ex gerentes amedrentados a raíz de este tipo de presiones políticas para que tomen sus decisiones. En el caso de un grupo de ciudadanos de Vinces, se trata de un caso que tuvo especial repercusión en la sociedad, una lucha contra un evento de corrupción, y luego una serie de dirigentes sociales, presidentes de ligas barriales, profesores, directores de escuela, que fueron identificados como dirigentes de esa marcha y de esa oposición, fueron encausados por delitos de terrorismo. Es una evidente injusticia, y nosotros recomendamos también la amnistía para este caso. El ingeniero Simbaña es un Ingeniero Civil, manabita, en este caso no se trata de ninguna amnistía en donde esté perseguido un político. Es lo contrario, el ingeniero Simbaña fue perseguido por un político. Creemos que también éste es un caso que vale la pena ser analizado, y nosotros hemos recomendado que se le dé la amnistía. En el tema de los indultos, esto es parte de un informe que ya todos conocimos sobre la situación carcelaria en el país y también sobre la desproporción que existe en el castigo de las penas que están establecidas en la Ley de Sustancias de Estupefacientes y Psicotrópicas. En el caso de los indultos, quiero ser muy clara en algunas cosas. En el Ecuador es un delito, está penalizado, y eso no se ha reformado, es un delito comercializar sustancias estupefacientes, es un delito. El problema, colegas y Presidente, es que hay una total desproporción entre el transporte, el tráfico de esas sustancias, y el castigo que se impone. Hemos conocido en la Mesa, casos en donde mujeres, porque la mayoría de quienes están en causados en estos procesos penales son mujeres,

hemos conocido casos de mujeres que por traficar "treinta gramos" de sustancias de estupefacientes, tienen doce años de sentencia. En el indulto no se le está perdonando a nadie el delito, se acepta que hubo un delito, se acepta que cada una de esas personas tiene que pagar, tiene que pagar exactamente por su culpa, por una actividad delictiva; pero solamente lo que se está ordenando es una rebaja en la pena, que pague solamente un porcentaje de su pena. Eso también está completamente explicitado en la resolución, y podremos discutir más adelante los detalles. Finalmente, la recomendación de amnistía para el ex Presidente Noboa. Este es un tema que ha sido especialmente sensible, estamos seguros que va a ser motivo de debate en esta sala esta tarde, no solamente se trata de un caso en donde el denunciante y el denunciado son ambos ex Presidentes de la República, sino que también se trata de un caso que toca un tema especialmente sensible para el país, y es el tema de la deuda pública. Quiero señalar, que la amnistía que se recomienda, no se refiere al proceso de renegociación de la deuda; se refiere exclusivamente a la venta de los excedentes de los Bonos Global que se usó para financiar la operación de dos bancos públicos. En el momento en que se financió esa operación, los bancos ya estaban en poder del Estado. Este es un tema especialmente sensible, luego de que la Mesa hizo su pronunciamiento, recomendó la amnistía y recomendó, sugirió al Pleno una resolución. Nosotros recibimos, como lo hicieron todos nuestros compañeros, todos los miembros de la Asamblea Constituyente, como lo recibió el Presidente de la República, y sobre nuestras Mesas hay copia de esa carta, todos recibimos una comunicación del Grupo Nacional de la Deuda, que expresaba su preocupación, en el sentido de que la amnistía estuviera olvidando y perdonando el proceso de renegociación de la deuda. No es así. Nosotros todos, creo que lo digo sin temor a equivocarme, nosotros todos en la Mesa, cuando recomendamos la amnistía, compartíamos

esa misma preocupación. Y es por eso que intentamos que la resolución sea lo más exacta, al hacer una clara diferencia entre el acto al que se estaba recomendando la amnistía, y el proceso de renegociación de la deuda, dejando salvada la posibilidad de que la Comisión que está estudiando ese caso, y el Estado ecuatoriano, en cualquier momento puedan seguir las acciones que se necesiten para determinar la ilegitimidad de las obligaciones contraídas por el país a partir de esa negociación. A pesar de que la Mesa tuvo ese cuidado, el Grupo Nacional de Deuda, creyó que la resolución no era exacta y que dejaba cabos sueltos. Nosotros hemos asumido esa responsabilidad, hemos revisado las comunicaciones del Grupo Nacional de Deuda, y personalmente he presentado ya y también la tienen todos sobre su Mesa, como parte de las propuestas de resolución. Personalmente he presentado un proyecto de Resolución revisado por varios colegas, del Grupo Nacional de Deuda, para no dejar ningún cabo suelto. El proceso de investigación de la negociación de la deuda y las obligaciones que el Ecuador contrajo a partir de esa investigación, sigue en curso, esa investigación está abierta, y el Estado y la Comisión, pero sobre todo el Estado ecuatoriano podrá determinar y seguir en adelante las acciones necesarias para declarar su ilegitimidad, si es que ese fuera el caso. Solamente estamos recomendando la amnistía para un caso que para nosotros, en la Mesa, y tal vez para una parte del país, fue claramente una persecución política. Más allá de lo sensibles que son estos temas, señor Presidente, cada uno de los compañeros que van a intervenir en esta tarde, muchos asambleístas de la Mesa Diez, que prepararon ellos mismos los informes a los que nos estamos refiriendo, cada uno podrá desarrollar con un poco más de amplitud estos temas. Pero sobre este último, el del ex Presidente Gustavo Noboa, creo que además de la persecución política, además de la

sensibilidad del tema de deuda, además de que nos hemos preocupado claramente por dejar una resolución que no tenga cabos sueltos, yo espero que si es que los compañeros y las compañeras en el Pleno aceptan la recomendación de la Mesa Diez, de otorgar esa amnistía, esto también signifique que en el Ecuador se terminó la era de los perros con hambre, de los que perseguían como perros con hambre. Ojalá ese sea el símbolo de esta tarde, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Martha Roldós. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ROLDÓS MARTHA. Señor Presidente, compañeras asambleístas: Yo quiero hablar hoy día, de la amnistía a un hombre común, de la amnistía al ingeniero Carlos Simbaña. El ingeniero Carlos Simbaña, para la mayor parte de ustedes es un hombre desconocido. No fue gerente de la AGD, no ha sido Presidente de la República, no es parte de un colectivo de perseguidos; sin embargo, es un perseguido político. El ingeniero Carlos Simbaña sufrió la reapertura de un caso de una negociación en la que él ya de por sí había salido perjudicado, cuando por negligencia de funcionarios públicos no se realizó la construcción de la obra de Correos del Ecuador, en la que él era contratista. Pero no fue responsabilidad del ingeniero Simbaña, fue la falta de un informe, fue la falta de un informe que llevó a que se suspendiera una obra, primero por cinco meses, a que la Contraloría pida que se vuelva a hacer el contrato, que la Procuraduría, perdón, diga que se vuelva a firmar el contrato. Diecinueve años de gestiones judiciales y extrajudiciales en que Correos, después de un acto de mediación y acuerdo total terminó ganando. El ingeniero Simbaña perdió la mitad de su dinero, de su inversión, pero decidió acogerse a esta acta de transacción, asumiendo sus pérdidas y prefiriendo

terminar este hecho. Esto fue por la Procuraduría General, y fue un pronunciamiento vinculante de la Procuraduría, que ratifica la validez de esa acta como cosa juzgada de última instancia. Se había acabado el proceso en el dos mil. Sin embargo, en el dos mil uno, el ingeniero Simbaña gana un amparo constitucional contra el Municipio de Quito, contra el Concejo Metropolitano, porque éste había rematado el área comunal de Tanda, como si fuera cualquier cosa, para Rancho San Francisco, y Rancho San Francisco ya la había utilizado. Una pérdida, el ingeniero Simbaña, un hombre de a pie se metió contra grandes poderes en este país y, por tanto, despertó la ira del diputado Carlos González, que decidió reabrir su caso, que decidió a través de la Comisión de Fiscalización de Congreso, iniciarle un juicio por peculado, y esto para todos ustedes, no es noticia que hablamos de una Función Judicial que no solo era propiedad de los socialcristianos, también de la Izquierda Democrática, cada quien tenía ahí su juez que velaba por sus intereses. El ingeniero Simbaña tiene un sobreseimiento provisional, luego un auto de llamamiento de juicio, una sentencia condenatoria que se produce después de una llamada del diputado Carlos González, cuando había antes un proyecto absolutorio. Se pide casar la sentencia; es decir, anular la sentencia. La Ministra Fiscal, Mariana Yépez, dice que ahí no hay un caso y, por tanto, sin acusación fiscal no hay juicio y, sin embargo, al llamado y pedido del diputado Carlos González, la Corte Suprema viola el debido proceso, que le obligaría terminar el juicio, absolviendo como dispone principio dispositivo. La Corte Suprema de Justicia, su Primera Sala de lo Penal, condena por peculado culposo, algo que no está tipificado en la ley, se inventaron un tipo legal para perseguir a este pobre hombre, solo porque se le ocurrió ir contra un Poder Ejecutivo, en este caso municipal. El ingeniero Simbaña tiene cáncer a la próstata. Cuando yo conocí este caso, lo conocí por sus hijas que andaban por los pasillos de esta Asamblea, sin

mayores esperanzas, porque su padre no era un hombre famoso, porque su padre no era un político renombrado, porque su padre y ellos están quebrados. Y lo que más me conmovió, fue que cuando ellas contaban su historia, siempre decían, "nos condenaron, apelamos". Porque esto se volvió una desgracia no solo personal, era una desgracia familiar. Aquí se arruinó económica, personalmente y en su vida, porque este hombre está condenado a muerte, con este cáncer a la próstata. Se ha perseguido a un ciudadano, se ha perseguido a un ciudadano de a pie, de esos que nos trajeron a esta Asamblea Constituyente. Por eso yo quería pedirles como un acto simbólico a todos ustedes, que no solamente le demos oído a los grandes políticos, que escuchemos la voz de ciudadanos como Carlos Simbaña, víctima de la colusión de poderes en este pais, victima de lo que se ha dado en llamar la partidocracia, una tenaza que agarraba y no aflojaba. Desde el Ejecutivo, en este caso, municipal, desde el Legislativo y desde el Judicial, el ingeniero Carlos Simbaña fue atrapado por el solo hecho de haberse atrevido a presentar una demanda en defensa de su comunidad. Creo que ya es el momento que le hagamos también justicia al ciudadano de a pie, y por eso queria, señor Presidente, compañeros asambleístas, pedirles a todos ustedes, que rechacemos esta forma de perseguir; que rechacemos a los poderes implacables que nos destruyen y nos pueden causar la muerte; que digamos un no a este tipo de prácticas, y que apoyemos la recomendación que nos hace la Mesa Diez, y amnistiemos al ingeniero Carlos Simbaña. Muchas gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Lenin Hurtado. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ROSADO GISSEL. Solamente queríamos saber ¿cómo está siendo el proceso? ¿Si es uno por uno?, o ¿si es todo de paquete?,

sobre las amnistías. Para después de eso pedir la palabra. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Se ve que no me atendió. Hace un momento dijimos cual era la mecánica. La Presidenta de la Mesa hacía una exposición global, se abre el debate sobre los siete puntos que están en el ítem tres, y cuando sea el momento de votar, el Secretario leerá las propuestas de la Mesa, una por una. Está abierto el debate sobre el punto tres. Prosiga asambleísta hurtado. ----------

EL ASAMBLEÍSTA HURTADO LENIN. Gracias, señor Presidente. Compañeros, compañeras asambleístas: Por encargo de la Mesa Diez, me cupo el hacer el proyecto de amnistía para el ciudadano Carlos Alberto Simbaña Romero. Este ciudadano, Ingeniero Civil de profesión, tuvo la desgracia de ganar una licitación para la construcción del edificio de Correos del Ecuador, y por un defecto de forma no atribuible a él, se...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Interrumpo, Asambleísta. Tiene la palabra, asambleista Esteves. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Yo alcé el letrero y pedí el uso de la palabra, pero veo que la señorita Presidenta de la sala es la que está tomando aquí los nombres de los que van a intervenir. ¿Cuál mismo va a ser el procedimiento para hacer uso de la palabra? ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Yo soy el que le anoté, está anotado, doctor Esteves. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Eso les decía yo a mis compañeros, pero ellos se han anotado ante la señorita Presidenta.

Entonces hay que enderezar el procedimiento. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Seguramente está recogiendo de su Mesa, de la Mesa Diez, quiénes son los que intervienen, para traerme una sola lista. Usted está registrado, doctor, pierda cuidado. Continúe Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA HURTADO LENIN. Decía, señor Presidente, compañeros y compañeras asambleístas, que a este ciudadano, Carlos Simbaña Romero, al ganar una licitación, al firmar el contrato con Correos del Ecuador, para la construcción de su edificio, empezaron sus desgracias, porque el efecto de forma, no atribuible a él, finalmente se constituyó en el inicio de toda esta odisea que ha tenido que pasar, para enfrentar la manipulación del aparato judicial por parte de los copropietarios de esa tan importante Función del estado, me refiero a la Izquierda Democrática. El defecto de forma causó que el contrato fuera detenido, a pesar de que se le habia entregado el anticipo a él por cumplir con los plazos señalados, consumió el anticipo y aún invirtió su dinero para cumplir con el trabajo al final del cual no le pagó, y se inició un proceso de negociación extrajudicial con Correos del Ecuador, demostrando así, que él quería resolver el problema y no ir a demandar a la empresa, como finalmente tuvo que hacerlo. Al hacerlo, ya finalmente, después de nueve años, al enjuiciar a Correos del Ecuador por el incumplimiento del contrato, el pagarle lo que tenían que pagarle, se ordenó la prohibición de enajenar, de ese edificio, de esa propiedad de Correos del Ecuador. Paralelamente a esto, el ingeniero Simbaña, un líder comunitario, resolvió defender una propiedad de la comuna de Tanda, contra la decisión, la resolución de expropiación, de remate, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, lo hizo mediante un amparo que ganó él en el Tribunal Constitucional, y al mismo tiempo

que el Tribunal Constitucional resuelve a su favor, se inicia por parte del Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional, de entonces, el ex diputado Carlos González, se inicia un proceso por peculado, y después de los avatares que ha señalado hace un momento la asambleísta Roldós, después de eso, llegamos a la paradójica resolución, de que se halla una figura denominada peculado culposo, peculado culposo, donde no hay ni perjuicio para el Estado ni beneficio para el ingeniero Simbaña. Esto que es realmente una novedad, se inventaron en la Corte Suprema de Justicia, pese a quc la Fiscal de entonces, la Fiscal Gencral de entonces, la doctora Mariana Yépez se había abstenido de acusar justamente porque no existe en nuestra legislación ni en ninguna otra, me parece, la figura del pcculado culposo. Y en nuestra legislación penal, que sigue el sistema acusatorio, no hay juicio sin acusación del Fiscal; sin embargo de lo cual, insisto, se llamó a juicio, sc lo sancionó, se lo sentenció a cinco años al ingeniero Simbaña, pese a todo lo que se ha señalado. Esto es una demostración de lo que discutíamos hoy en la mañana, que no es posible permitir que la Función Judicial sea utilizada en ese sentido, para consumar un deseo perverso de persecución, de venganza, frente a una persona que se ha resuelto a enfrentar el poder, y eso es lo que ocurrió en este caso, y eso es lo que ha movido a sus hijas a peregrinar en esta Asamblea Constituyente, a solicitar que aquí se haga justicia, sc ponga en evidencia a aquellos que utilizaron de la forma como lo hicieron, pcrversamentc, su función en el Congreso Nacional, el poder que el pueblo les brindó, y vengarse de que una persona resuelva también defender los intereses de su comunidad, como ocurrió con el ingeniero Simbaña. Lo ha dicho la compañera Roldós, no se trata de un ecuatoriano que podríamos calificar de ilustre por sus funciones, pero sí una persona que ha contribuido con su trabajo, durante toda su vida a enriquecer a la comunidad, no solamente a su familia, sino también a

su comunidad, y que no merecía el trato que el poder, la corrupción en el poder le dio en el Congreso Nacional, y sus acólitos en la Función Judicial. Es por eso que presenté oportunamente a la Mesa de Legislación, el informe, acogiendo la solicitud, recomendando la amnistía, y la Mesa se pronunció de manera unánime por aprobar el informe y recomendar al Pleno de esta Asamblea, que se le conceda la amnistía al ciudadano Carlos Simbaña. Es un acto de justicia que bien le haría a esta Asamblea Constituyente. Muchas gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. La asambleísta Marisol Peñafiel. ----------

LA ASAMBLEÍSTA PEÑAFIEL MARISOL. Muchísimas gracias, señor Presidente. Creo que la Presidenta de la Mesa ha hecho una exposición clara y precisa de cómo la justicia ha estado al servicio de los grandes poderes organizados y de los poderes económicos que han regido en el país. Precisamente en la mañana debatimos, y analizamos parte de la tarde, como esta administración de justicia ha criminalizado a sectores como por ejemplo a aquellas personas que han servido de mulas y no de grandes narcotraficantes, e igualmente, por ejemplo, para ninguno de nosotros, de los y las ecuatorianas es desconocida la crisis económica y financiera que en mil novecientos noventa y nueve se desató en el país y que permitió que los grandes banqueros no quiebren, pero los bancos sí, y que por ende, ese gran salvataje bancario que sufrió el país afecte a la mayoría de los ecuatorianos. Es ahí donde surgen hombres y mujeres que han asumido esa delegación que los y las ciudadanas a través del ejercicio público lo realizan, y así lo hizo la ex Gerenta de la AGD, la doctora Wilma Salgado. ¿Cuál es al delito de Wilma Salgado? Es perseguir precisamente a esos banqueros que adeudaban al Estado ecuatoriano que, por el contrario, no querían pagar esas deudas que

tenían con el país. Y lo más preocupante en ese entonces, era que esas acciones iban a prescribir y por lo tanto la pérdida para el Erario ecuatoriano era grande. Me permito decir que una de las causas de las que se le acusa, es peculado bancario. Se manifiesta a raíz de una comunicación de la Contraloría General del Estado, que la ex Gerenta de la AGD, al realizar su contratación sobre un profesional, para el cobro de coactivas, ha violado la Ley de Contratación pública. Señor Presidente, la Ley expresa de la AGD, en su articulado pertinente, establece cuál es el procedimiento para el cobro de coactivas y que es aplicable a los tres casos que estamos tratando. Ahí establece que la jurisdicción coactiva la ejerce la AGD, en virtud del reglamento que consta en el Registro Oficial dos cuarenta y seis del diecisiete de enero y precisamente establece: "Artículo uno. Ejercicio de coactiva y delegación. La jurisdicción coactiva que por ley tienen las instituciones financieras sometidas a procedimiento de saneamiento para la recaudación de los créditos u otras acreencias a su favor, serán ejercidas por la Gerente General de la Agencia de Garantías Bancarias, quien podrá delegar esta atribución a administradores temporales de instituciones en saneamiento, facultados también para designar un abogado impulsador, alguaciles, depositarios judiciales y peritos avaluadores". En este mismo reglamento, señor Presidente y compañeros, se habla del ejercicio de esa jurisdicción coactiva, y habla, en el caso de los abogados impulsadores, según el artículo dos, y dice: "Tanto el juez, el Secretario del Juzgado y los abogados impulsadores serán abogados en ejercicio profesional que establecerán -precisamente- la delegación que la gerencia lo haga". Con esto estamos demostrando que no se ha violado ningún proceso en la contratación y la prestación de servicios profesionales para el cobro de coactivas. Sin embargo de aquello, también es preciso señalar, que respectivamente el juzgado pertinente estableció que no existía delito de peculado, y

estableció también el sobreseimiento, la instancia pertinente. Con esto estamos demostrando, señor Presidente, que a pesar de que las instancias de administración de justicia también establecieron que no existe responsabilidad ni que tampoco se ha configurado el delito de peculado, sin embargo de aquello, después del tiempo establecido por la ley, se vuelve a establecer y se deja insubsistente el auto de sobreseimiento en la causa. Ahí está la evidente persecución política de la que han hecho efectiva ciertos operadores y administradores de justicia. Señor Presidente también, cabe recalcarles a los y las compañeras asambleístas, que la cartera recuperada en la administración de la ex Gerenta de la AGD, es de ciento sesenta y tres millones de dólares, que le permiten al Ecuador, a los y las ciudadanas haber saneado algunos bancos y devuelto a nosotros, a aquellos que fuimos víctimas del salvataje bancario. Igualmente, me permito leer un documento publicado en El Comercio, en el cual se habla de una recuperación de alrededor de ochocientos mil dólares, en mayo de este año, gracias al impulso que se hizo en ese entonces en la administración de la ex Gerenta de la AGD. Decirles, compañeras y compañeros, que esa administración ha permitido, e igualmente, la de Carlos Arboleda, la de Luis Villacís, recuperar una cartera que al país no le dejó en la quiebra. Se han impulsado alrededor de veinticuatro mil juicios de coactiva, que permitieron recuperar esa cartera. Quiero referirme, igualmente, como la administración de justicia está también en contra de aquellos ciudadanos y ciudadanas comunes, como lo dijo la compañera Martha Roldós, ciudadanos como el ciudadano Simbaña, perseguido políticamente, donde se configura precisamente aquella figura de la amnistía. Por eso, como integrante de la Mesa Diez, aprobamos, impulsamos también esa amnistía. Pero, por otro lado, también existe un grupo de vinceños vinculados a la defensa de aquel principio de participación ciudadana, que precisamente hemos estado

hablando aquí al interior de la Asamblea Constituyente, y hemos debatido y hemos aprobado ya en primer debate, aquello que permite que ese poder ciudadano les permita exigir rendición de cuentas a los alcaldes y a las autoridades de los poderes locales, desde las juntas parroquiales. Ese es el caso que sucedió en Vinces, donde se criminalizó el derecho y el legítimo derecho a la defensa de sus intereses colectivos. Es decir, que se cumplan las obras al servicio de la comunidad, hizo que el alcalde cometa una serie de arbitrariedades contra estos ciudadanos. Por eso consideramos también, que es necesario que nosotros aquí al interior de la Asamblea Constituyente reivindiquemos ese derecho de estos ciudadanos, pero que también vayamos dando muestras al interior de esta Asamblea, que en el nuevo texto constitucional, precisamente estos conceptos equivocados tienen que cambiarse. Por último, hemos vivenciado durante estos siete meses, procesos de cómo la pobreza es sinónimo de persecución, y cómo hombres y mujeres al interior de las cárceles del país son víctimas de la desproporcionalidad de la aplicación de las penas. Es lo mismo robar millones de millones de dólares al pueblo ecuatoriano, con aquellos de cuello blanco, así como también para esta justicia inequívoca es lo mismo que ciudadanas y ciudadanos por la tenencia y servir de mulas de treinta gramos de droga, paguen las mismas penas. Esa desproporcionalidad de la pena creo que es la que debemos cambiar, y apoyamos este indulto también a las mulas. Hemos establecido, y quiero explicarle al país, que se ha desinformado, manifestando que estamos despenalizando el narcotráfico. De ninguna manera y, por el contrario, se ha establecido en la resolución de indulto, requerimientos en que el reincidente o la reincidente no será beneficiada. Eso también hay que decirle al pueblo ecuatoriano, pero que también sea la premisa para que esa Ley de Sustancias Sicotrópicas y Estupefacientes, que no recoge la realidad ecuatoriana, que también tiene que ser cambiada y

que tiene que ser aplicada de acuerdo a la realidad y vivencia de lo que somos los y las ecuatorianas. Decirles, compañeras, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, que si bien es cierto, aquí se ha satanizado de que hemos asumido funciones como las de emitir mandatos, amnistías, indultos, tampoco es menos cierto que podemos vivir dc espaldas a lo que le sucede...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto. ----------

LA ASAMBLEÍSTA PEÑAFIEL MARISOL. ...al pueblo ecuatoriano, y que tampoco podcmos vivir de cspaldas a lo que los verdadcros dcrcchos humanos nos exigen hacerlo, no solamente en la redacción del texto constitucional, sino también en el ejercicio de esos plenos poderes. Finalmente, decirles que aquí se ha manifestado que existen y que estamos haciendo atrocidades. Atrocidades no son las que estamos haciendo, estamos rcdactando un texto constitucional que precisamente recoge el sentimiento de estos sectores y de estos grupos sociales que también siguen siendo afectados por esta mala aplicación de la justicia y que precisamente hoy en esta Asamblea Constituyente, estamos los que antes éramos minoritarios, los campesinos y los que solo la ley era para los de poncho. Gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Rafael Esteves. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Gracias, señor Presidente. Me encuentro un poco preocupado porque se ha venido sosteniendo que debíamos dedicar todo el tiempo de esta Asamblea, al debate sobre el articulado. Hoy día cn la tarde y recién ayer a las siete y media de la noche tenemos todo este paquetc dc más de cien páginas, sobre amnistías e indulto; lo cual, según lo que se venía diciendo, no

debiamos tratar más que articulados, porque tenemos que entregar esto el veinticinco de julio, tal como usted señaló en la rueda de prensa, ya no el veintiséis, por su acertada explicación jurídica. Igualmente, pues, en las anteriores amnistías e indultos se llevó a cabo el siguiente procedimiento. Primero se leía la propuesta de resolución de la Mesa, el caso, y luego se abría el debate. El señor Secretario no ha leído nada de esto, de resoluciones, hemos abierto el debate solamente con la intervención de la Presidenta de la Mesa. Entonces lo único que yo reclamo, es que decidamos, o ¿para cada caso tomamos el mismo procedimiento?, o ¿el procedimiento en el camino se va cambiando? Eso no está bien, tenemos que definir las cosas claras, porque el pueblo nos está escuchando, no en el canal del Estado, nos está escuchando en los canales privados. Ahora vamos sobre lo principal, amnistías. Aquí, señor Presidente vino el Fiscal General del Estado, Washington Pesántez, a la Mesa Diez y a la Mesa Ocho, y el Fiscal General del Estado, no solo a nosotros los asambleístas, sino a medios privados, a esos que están allí, en ECUAVISA, en Telecamazonas, en Canal 10, el señor Ministro Fiscal dijo: "Las amnistías solamente proceden respecto de delitos políticos". Respecto de delitos políticos, las amnistías solamente proceden respecto de delitos políticos, y agregó, ojo, "cuidado vayan en la Asamblea a otorgar amnistías por peculados, porque el peculado no es delito político". Y los periodistas preguntan, bueno, y ¿cuáles son los delitos políticos? Miren que mi intervención es en Derecho, como siempre lo hago, no el discurso político, porque yo no soy politiquero. Los delitos políticos, abrimos este librito, el Diccionario de Cabanellas, vean, dice: "Delito político. El que tiende a quebrantar por hechos ilícitos el orden jurídico y social establecido, atentando contra la seguridad del Estado". El Fiscal General, que se le nombró aquí, Washington Pesántez, dijo, bueno, "los delitos políticos son los delitos que atentan contra la seguridad interna del Estado". Y se

preguntó: ¿y cuáles son los delitos que atentan contra la seguridad del Estado? Los delitos que atentan contra la seguridad del Estado, se encuentran en el Código Penal y van del artículo ciento treinta y siguientes. Y ¿cuáles son esos delitos?, a ver enuméreme, fiscal Pesántez, esos delitos contra la seguridad del Estado, interna, que constituyen delitos políticos mas no el peculado. La respuesta es sencilla, son: a), estoy leyendo el Código Penal, no es elucubración, no es lo que dijo ningún tratadista, las fuentes del Derecho, son: "La ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina". Si la ley es clara no se necesita ingresar al análisis de su espíritu. La ley dice, "delitos políticos", no habla de perseguidos políticos, y esos delitos políticos ¿cuáles son? Vuelvo y repito: Uno,. el alzamiento contra el Gobierno, de desconocer la Constitución de la República. Otro, deponer al Gobierno constituido. Otro, impedir la reunión del Congreso o disolverlo o provocar una guerra civil. Los delitos contra la seguridad interna del Estado, constan desde el artículo 130 hasta el artículo 155 del Código Penal. Entonces para que haya un informe de esta Mesa, para que se pueda amnistiar a determinados caballeros, que yo no los distingo si son ilustres, o no ilustres, para mí todos son iguales ante la ley, el más pobre hasta el que no pueda ser más pobre; el que no haya ocupado ninguna dignidad, hasta el que haya ocupado la más alta dignidad. No puedo como abogado hacer esas distinciones y peor como Asambleísta. La pregunta del millón: ¿En estas propuestas de amnistías de esa Mesa, hay algún delito contra la seguridad interna del Estado? De los que están señalados en los articulo ciento treinta y siguientes del Código, no he visto ninguno, aquí no hay ninguno. Yo he visto por ahí la palabra "peculado", he visto otras cosas. Señores, o ¿nosotros nos apegamos en estricto Derecho a lo que dice la Constitución?, o ¿rifamos la Constitución? Una de dos. No podemos aquí manejar doble discurso porque alguien me cayó simpático, me cayó agradable, porque tengo

compromiso, porque le debo favores. No, así no es ese el Ecuador que quieren nuestros hijos, no les pongamos malos ejemplos. Queremos un Ecuador nuevo, revolucionario, donde la Constitución y la ley imperen. Hay que predicar con el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo, no con el desejemplo. Aquí no vengamos, entonces, que para una amnistía hacemos un procedimiento, para otra otro procedimiento. ¿Dónde está el delito político? Que, como dice Cabanellas, el delito político son los delitos que atentan contra la seguridad interna del Estado. Y lo dice el Fiscal General del Estado, que aquí lo nombró la mayoría. Entonces habría que remover pues al Ministro Fiscal, porque está equivocado. Pero él no está equivocado, ese Ministro Fiscal ha tenido los pantalones suficientes para ir contra la opinión de quienes lo nombraron, y eso hace que yo a este ciudadano Ministro Fiscal le guarde respeto, porque hay que tener mucha valentía para navegar contra la corriente. Es fácil nadar con la corriente a favor, es difícil nadar con la corriente en contra. Tenemos un Fiscal General que, por lo menos en este caso, a mí me complace su actuación. Si la Constitución dice "delitos políticos", y si el Código Penal dice, "los delitos políticos son aquellos que atentan contra la seguridad interna del Estado", y los determina taxativamente, ¿de dónde sacamos que un presunto peculado es un delito político? Aquí no se habla de supuestos perseguidos políticos, que a criterio subjetivo u objetivo de alguno o de otro, puedan aparecer como tales. Que se me rebata entonces, que en la Constitución no dice que la amnistía se otorga solamente por delitos políticos. Ese es el único debate jurídico que yo puedo aceptar en Derecho. Yo no quiero oír discursos, yo sé que esta voz va a perder, porque una golondrina no hace verano, pero una golondrina sí hace conciencia, porque....----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta.----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. ...ahí está el pueblo que nos está escuchando, y el pueblo debe conocer porque sus hijos han de estar estudiando Derecho, y le han de preguntar al hijo, hijo pásame esto, explícame ¿cómo es eso de los delitos políticos?, y ese hijo le sacará al papá, mira papi, dice, aquí está, la Constitución dice, "la amnistía solo por delitos políticos", y el Código Penal dice, "los delitos políticos son aquellos que atentan contra la seguridad interna del Estado". Esto no es cuestión de apreciaciones subjetivas, es cuestión de si nos sometemos a la Constitución y la Ley, o no nos sometemos a ello. El que no esté de acuerdo, que presente proyectos pues de reforma de la ley, de narcotráfico, del Código de Ejecución de Penas, para que se rebaje las penas, pero no nos vayamos...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó su tiempo, Asambleísta.----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. ...contra la Constitución ni contra la ley. Gracias.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Punto de orden, de la asambleísta Roldós. ----

LA ASAMBLEÍSTA ROLDÓS MARTHA. Sí, con todo respeto para todos los compañeros asambleístas, y respetando todas las opiniones en contrario, pero creo que la premisa que nos acaba de dar el doctor Esteves tiene dos partes. La segunda parte, obviamente es irrebatible, él acaba de mostrarnos la definición de delitos políticos, en la Constitución, en Cabanellas, etcétera. Pero la primera parte, yo si, con todo respeto, no creo, francamente, personalmente, ni en la infalibilidad papal, además el Papa solo es infalible para ciertas cosas, y tampoco creo en la infalibilidad del señor Fiscal. Por lo tanto, aquí en esta Constituyente ya se ha manejado en otros momentos, y estamos

hablando, además, de coherencia con lo que ya hemos hecho, lo hicimos cuando dejamos libres a los defensores de derechos humanos, que por una persecución política ya habían sido penalizados por delitos comunes. Pero el origen era una persecución política, la persecución era política, y los delitos comunes imputados, falsos, por eso los amnistíamos. Y en algunos casos, como en el caso del ingeniero Simbaña aquí presente, estamos hasta ante la invención de un tipo. Perdón, me permite un ratito, termino de hablar, compañero. Y entonces yo creo que ya lo hemos hecho, aquí lo hicimos con los defensores de derechos humanos. Consideramos para la amnistía, no solamente los delitos políticos, sino delitos comunes, o a gente acusada por delitos comunes, pero con un origen político en esa acusación, víctimas de persecución política que habían sido acusadas de delitos comunes. Cuando hicimos, justamente, todas las amnistías a la gente de las comunidades que se habían opuesto a la minería, algunos estaban hasta acusados de robo de chanchos, no se qué. Si no me equivoco, Marisol. Eso es lo que quería decir.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta, creo que no era un punto de orden sino de información. Creo que es valiosa su opinión. Doctor Esteves, le vuelvo a dar a usted, la palabra, máximo dos minutos, por favor.----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Un minuto. Todos han escuchado, se ha rebatido pero no se ha señalado ningún artículo de la Constitución, que diga lo contrario a lo que yo he leído. Nada más. Yo sé que voy a perder, pero el perder es la forma más segura de ganar; el perder es la forma más segura dc ganar, porque yo sí estoy acudiendo a la ley y acudiendo a la Constitución, yo no tengo dobles discursos. ------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Vicente Taiano. ----------

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO VICENTE. Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros asambleístas: Yo he solicitado la palabra en este tema, a pesar de que es pública y notoria nuestra posición en relación a los mandatos, a las amnistías y a los indultos que esta Asamblea concede, porque creo que no me puedo quedar callado, y no me puedo quedar callado porque la historia queda escrita en los archivos públicos, y es público también y notorio, que yo fui Legislador y que como Legislador fui Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional, y me correspondió en aquella función, hacer una investigación en relación a la renegociación de la deuda, por la denuncia que en aquel entonces presentara el ingeniero León Febres Cordero, en contra de quien ejerció las funciones de Presidente Constitucional de la República del Ecuador, el señor doctor Gustavo Noboa Bejarano. Después de varios meses de investigación, consta en los archivos del Congreso Nacional, el informe que suscribí en mi calidad de Presidente, con otros legisladores. Me acuerdo inclusive haber ido a investigar a la ciudad de Panamá, porque se acusaba al entonces Ministro de Economía, ingeniero Jorge Gallardo Zavala, de un supuesto enriquecimiento ilícito. Debo decirle al país y a esta Asamblea, que esa investigación no arrojó responsabilidades en contra del señor doctor Gustavo Noboa Bejarano. Que más bien se estableció que, efectivamente, ahí había una denuncia que había presentado y que había logrado mover todo el aparataje político, jurídico del país, de aquel entonces, tampoco se pudo establecer ningún tipo de enriquecimiento ilícito en contra del ingeniero Jorge Gallardo Zavala. Yo creo que el tema de la renegociación de la deuda, de acuerdo a la investigación realizada, fue una decisión soberana del Presidente de la República, de aquel entonces, con la atribución que le dio el artículo

ciento setenta y uno de la Constitución, en su calidad de Primer Mandatario, que tomó esa decisión política el Presidente, porque consideró que lo mejor que le podía pasar en esas circunstancias al Ecuador, era renegociar los bonos, para evitar seguir pagando intereses usureros. Hay que hacer memoria, y en eso también la historia está escrita. Hay que hacer memoria de que el Ecuador estaba a punto de caer en el no pago de la deuda, de que el Ecuador estaba en una situación económica tremendamente difícil después de haber pasado todo lo que pasó con el atraco bancario que sucedió en el país, en el que se les congeló la plata a los ecuatorianos. Y en esas circunstancias, Gustavo Noboa cogió un país quebrado, un país quebrado por el Presidente Mahuad, que Dios lo castigó por haberle robado la Presidencia a Álvaro Noboa, y dejó el país absolutamente en soletas. Por esas circunstancias, señor Presidente y compañeros asambleístas, me he permitido solicitar el uso de la palabra, porque no podía soportar mi conciencia, a pesar de no estar de acuerdo con las amnistías, con los mandatos, con las leyes y con los indultos que hace esta Asamblea, en mi calidad de Asambleísta, quedarme callado ante ese hecho histórico. Gracias, señor Presidente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, asambleísta Taiano. Asambleísta Pedro de la Cruz.----------

EL ASAMBLEÍSTA DE LA CRUZ PEDRO. Gracias, señor Presidente. Compañeros y compañeras asambleístas, pueblo ecuatoriano: En gobiernos pasados han querido criminalizar la lucha del pueblo ecuatoriano. El pueblo no ha tenido ninguna oportunidad, de alguna manera, de expresarse ante las injusticias que vivimos y hemos vivido especialmente en los gobiernos pasados, e incluso esta persona ha sido encarcelada dos veces por salir a las calles a luchar y a reclamar lo que

al pueblo ecuatoriano y a las mayorías les correspondc. En ese sentido, el pueblo vinceño, ante las injusticias y antc la falta de transparencia, la falta de obras, se levanta y también, no primero se levanta, sino que acude ante las autoridades correspondientes, como es la Contraloría, la Comisión Cívica contra la Corrupción, también hace una dcnuncia en contra del alcalde y de su hija que también es concejal. Sin embargo, las autoridades hacen caso omiso, la Comisión Cívica contra la Corrupción, da por conocido y que quiere empezar la investigación, pero tampoco se avanza. Incluso la Contraloría dice que va a hacer el examen especial, tampoco se realiza este examen especial. Por eso el pueblo se levanta, y luego el primero de febrero del año pasado. Pero el señor alcalde, con el poder que tiene y con el respaldo de la oligarquía ecuatoriana, les enjuicia acusándoles de terroristas, a pesar de que en el proceso han tenido que los compañeros demostrar que no hay ningún tipo de terrorismo en el cantón Vinces. La Inteligencia Militar actúa, la Policía actúa y da fe quc no existe ningún indicio, ninguna célula terrorista. Sin embargo, son perseguidos y pedidos que se encarcele a dieciséis compañeros, incluso en el Parte policial dice que actuaron más dc mil personas en el levantamiento del pueblo vinceño, pero ahí está la realidad, cogen a los que son líderes, para aplacar y opacar la lucha popular, y eso no podemos permitir en el país. Felizmente en la Constitución actual estamos legislando, estamos poniendo, estamos analizando la necesidad de que haya una participación ciudadana, una participación de la sociedad civil y un control social para que nunca más en nuestro país pueda suscitarse este tipo dc problemas y corrupción. Compañeros y compañeras asambleístas, por este motivo, el veinte de mayo envié una comunicación a la Mesa Legislativa, adjuntando ciento setenta y ocho páginas del proceso que ha estado en este juicio, y gracias a la Mesa de Legislación y Fiscalización, se ha apoyado para dar amnistía a estos ciudadanos perseguidos. Esto sí es

una persecución, politica, es una persecución, rechazando realmente la lucha social. La lucha, el levantamiento popular se realiza contra las injusticias, y eso tiene que ser garantizado para que las autoridades respondan, las autoridades realicen, trabajen por la mayoría del pueblo ecuatoriano, y no por intereses personales o particulares. Compañeras y compañeros asambleístas, solicito que se apoye a estos luchadores sociales, y que nunca más sean perseguidos por reclamar sus derechos, por hacer cumplir las leyes, por hacer cumplir la Constitución, a las autoridades que se desvían de su interés general, que se desvían de su interés por trabajar por el pueblo. Esto es lo que solicitamos que apoyen, que realmente si estamos pensando en el cambio, hay que apoyar para que realmente tengamos esa garantía y que la justicia, justamente, hoy día hemos estado tratando de la justicia, no sea solamente para el de poncho, la justicia sea para todos, y no los que realmente han sido beneficiados, han sido de la justicia, los de cuello blanco, y eso no debemos permitir. Que la justicia sea equitativa, que la justicia sea para todos los ecuatorianos. Muchas gracias..----------

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA AMINTA BUENAÑO, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, asambleísta. Asambleísta Gissel Rosado.----------

LA ASAMBLEÍSTA ROSADO GISSEL. Buenas tardes, compañeros. Pese a que no hay tiempo para debatir mucho los artículos constitucionales, yo creo que las injusticias en el país se deben de terminar. Como riocense, orgullosamente riocense, quiero hablar del tema que han sufrido los ciudadanos vinceños que forman parte de mi querida

provincia de Los Ríos. Decimos que la política es el arte de servir. Claro que es el arte de servir, pero no todos los políticos lo hacen para servir, sino lo hacen para lucrarse o también para conseguir cosas con fines personales. En el mundo existen políticos responsables, así como también existen políticos irresponsables. En el cantón Vinces, a quien siempre llevo en mi corazón, se levantó, la ciudadanía se levantó porque el señor alcaldc, el señor Ubidio Ludeña no daba actos ni le rendía cuentas al soberano ecuatoriano, al soberano vinceño, que en este caso, el señor Ludeña se debía. Yo creo que con justa razón, los ciudadanos vinceños se levantaron en protesta, ya que no eran atendidos, y los ciudadanos necesitan ser atendidos. Aún vivimos en un país libre y democrático, qué bueno que todavía este Ecuador sea un país libre y democrático. No creemos quc deban existir las persecuciones políticas, estamos totalmente en contra de ello. ¿Cómo es posible que la Policía Nacional, que la Policía haya tirado gases lacrimógenos a estos ciudadanos, simplemente por exigirle al alcalde que se los atienda? Así también como el informe manifiesta, fue incendiada una vivienda, y así también, hubieron infiltrados con armas, con las cuales se los detuvo, pero como aquí la justicia brilla por los suelos, se los dejó libres inmediatamente. Yo creo que con estas injusticias es que tenemos que luchar el día de hoy. Como el alcalde es una persona elegida por el pueblo, tiene la obligación de cumplir y de llevar el progreso a la ciudad que representa. Yo no sé ¿dónde han estado las obras del Alcalde de Vinces?, ¿por qué no atendía a los ciudadanos vinceños?, yo me pregunto. En protesta de eso fue que pacíficamente los ciudadanos se tomaron el municipio. Vinces, también llamado "Paris chiquito", lleno de gente cálida, de gente trabajadora, de gente deportista, una ciudad que realmente vale la pena visitar, está de pie. Hoy está de pie y está atenta, porque hoy por fin yo creo que se va a terminar la injusticia que han sufrido todos ellos. Señor alcalde, ríndale cuentas a sus

ciudadanos vinceños, empiece a hacer obras, empiece a trabajar, usted está ahí y se debe a todos ellos. Yo creo que es hora de que usted, si falló, rectifique, porque yo creo que la gente se está muriendo de hambre, la gente necesita de su atención, y que por favor, no vuelva a cometer más abusos, que escuche a cada uno de los ciudadanos vinceños, que empiece a trabajar por ellos, que empiece a atcndcrlos, porque para eso se lo eligió. Y hoy yo creo que se va a hacer justicia con todos aquellos ciudadanos vinceños que fueron injustamentc puestos una demanda para que sean puestos en prisión preventiva. Yo creo que ellos no tienen derecho a estar con esa demanda de prisión preventiva, ellos deben de ser libres porque su expresión vale, es un país libre. Y, por favor, señor alcalde Ubidio Ludeña, empiece a trabajar por los vinceños, y ciudadanos vinceños, hoy se hace justicia por ustedes. Gracias.----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Punto de información.----------

EL ASAMBLEÍSTA DE LA CRUZ PEDRO. El señor Alcalde Ludeña, asambleísta Rosado, es de su partido, del PRIAN.----------

LA ASAMBLEÍSTA ROSADO GISSEL. Punto de información. En la vida existen buenos y malos políticos, y los malos tienen que ser totalmente excluidos de mi partido, en un partido totalmente en donde se maneja la democracia y se trabaja por el pueblo, no pueden existir unas personas de esta calaña. Por eso fue expulsado de mi partido. Con esa aclaración. ----------

LA SSEÑORA PRESIDENTA. Pamela Falconi----------

LA ASAMBLEÍSTA FALCONÍ PAMELA. Señora Presidcnta, señores y

señoras asambleístas: El noble pueblo vinceño de la provincia de Los Ríos, cuya valentía proviene de los bravos Chapulos y del gran Alfarista, Don Nicolás Infante Díaz, cansados de la mala administración municipal y sobre todo por la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos del alcalde prianista que estaba en funciones, Ovidio Ludeña, en una poderosa asamblea popular que congregaba a diversos representantes de instituciones como: los centros agrícolas, la Unión Nacional de Educadores, la Liga Deportiva Cantonal, el Comité Diocesano de Derechos Humanos, Sindicatos de Trabajadores, Asociaciones Campesinas y varias organizaciones barriales y populares, resuelven expresar su descontento, mediante la toma pacífica de la casa municipal, resolución que fue comunicada al señor gobernador de la provincia, cuya permanencia se realizó respetando las instalaciones y con absoluta tranquilidad, hasta que la Fuerza pública se hizo presente y en forma violenta reprimió al pueblo indefenso, con el ánimo de desalojarlos. Esta acción represiva fue enfrentada por la rebeldía de los que luchan por la justicia y que se mantuvieron firmes en el cabildo, el edificio lo entregaron sin ninguna novedad al señor Gobernador quien a su vez encargó a la Policía la custodia y la casa municipal, la misma que abandonó la vigilancia facilitando el ingreso del alcalde Ludeña a las instalaciones, con la presunción de hacer desaparecer importantes documentos que lo involucraban en actos ilícitos. Esta provocación del personero municipal, indignó a los habitantes, lo que produjo un levantamiento popular. A esta justa protesta se infiltraron personas descalificadas, que pretendieron desacreditar la acción emprendida. La Fiscalía, en forma extremadamente diligente y acogiendo la denuncia presentada por el alcalde Ludeña, involucra a líderes de organizaciones, como comandos terroristas y pidiendo la prisión preventiva. La mal llamada justicia, inicia la instrucción fiscal y una persecución bárbara contra los ciudadanos honestos, con el fin de atemorizar y bajar la

protesta, castigando los derechos a revelarse contra la inmoralidad y la justicia. Es indignante esta indignante acción de la justicia de Los Ríos, que se encuentra atrapada por la partidocracia, que se ha convertido en un instrumento de persecución a líderes comunitarios y sociales, debe terminarse. Por esta razón, la nueva Constitución que estamos elaborando apunta a instalar una verdadera justicia, basada en principios éticos y moralcs y cn valores humanos. Como mujer riosense levanto mi voz para felicitar a todos los compañeros asambleístas de la Mesa Diez, que aportaron en el informe y la resolución, y enarbolando la justicia que resolvió por unanimidad conceder la amnistía a todas las personas involucradas en los hechos violentos ocurridos durante las protestas del uno y cinco de febrero, en el cantón Vinces. Estoy convencida que con la misma sapiencia y trabajo que se está elaborando la Carta Magna para un nuevo Ecuador, libre de la pesadilla neoliberal, hoy afirmarán el nuevo amanecer lleno dc justicia y paz, tal como lo señaló mi amiga la vinceña asambleísta Fanny Sotomayor, en la Mesa Diez. El artículo ciento ocho de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, señala que el Congreso Nacional podrá expedir el Decreto Legislativo, declarando amnistía general por delitos que hubieren tenido motivaciones políticas, y tcniendo la Asamblea los plenos poderes, tiene toda la facultad para asumir las atribuciones y deberes de la Función Legislativa. Por lo que ratifico lo expresado en la Mesa Diez, cuando las asambleístas Fanny Sotomayor y mi persona, fuimos las únicas representantes de la provincia de Los Ríos, que actuamos en la discusión del tema, con voz pero sin voto, tal como lo estipula el Reglamento de la Asamblea Nacional Constituyente, en el cual mencioné: El derecho de la amnistía es un acto jurídico emanado por el Poder Legislativo cuyo efecto es la extinción de la acción penal y la condena, con el propósito de subsanar errores judiciales y sanciones injustas a perseguidos políticos y personas inocentes, justificables en

este momento en la vida política del país, que exigen el restablecimiento de la calma y la concordia social. Ahora les solicito, compañeros y compañeras asambleístas, brindar su apoyo a la amnistía de estos hombres y mujeres, que por luchar por un vivir mejor se encuentran hoy perseguidos, fuera de sus hogares, separados de sus hijos y de su trabajo, hagamos justicia dándoles la amnistía. Gracias, compañeros. --

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA FERNANDO CORDERO CUEVA, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Francisco Cisneros. ----------

EL ASAMBLEÍSTA CISNEROS FRANCISCO. Gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros asambleístas: En este momento intervengo bajo protesta, y luego votaré también bajo protesta, porque no nos corresponde hacer lo que estamos haciendo. Pero si no digo lo que pretendo hacerlo en este momento, me sentiría con un cargo de conciencia. He revisado algunos documentos, señor Presidente, voy a hablar particularmente de lo que tiene relación con el indulto. El Indulto, lo dice Cabanellas, no lo digo yo, es el: "Privilegio, licencia o autorización para hacer lo prohibido. Supresión o disminución de penas, ya por encontrar excesivo el castigo legal, ya ante la personalidad del delincuente y las circunstancias del caso, como por acto de generosidad tradicional o excepcional del Poder público. Conmutación de la pena de muerte por otra privativa de libertad. Excepción de la ley. Liberación de obligación". Señor Presidente, los juristas y el sentido común nos hacen pensar, y en la reflexión afirman que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Y repetiré en este momento, algo que ya he dicho en algunas ocasiones desde mi

curul: "Toda infracción es delito, y no hay delito sin pena". Digo parafraseando a Juan Montalvo. Nada, absolutamente nada, señor Presidente, justifica que nosotros nos vinculemos con el narcotráfico, con la narcoguerrilla y con ningún tipo de delincuentes. El narcotráfico ha destruido a las familias enteras, y creo que el narcotráfico es la más lacerante amenaza en contra de lo que pregonamos, y de lo que propugnamos, y de lo que se ha discutido mucho acá, el concepto aquel del Buen Vivir. Hay cosas, señor Presidente, compañeros, que son sospechosamente sospechosas, como el punto tres, punto siete, que dice: "Indulto a las personas que transportan pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas y estupefacientes". Unos colegas asambleistas hablan en Derecho, yo voy a hablar en gramática. El verbo transportar está conjugado en presente del indicativo, y ahí está lo sospechoso, porque si le damos una interpretación literal, podemos pensar que ahora cualquier persona puede transportar pequeñas cantidades de droga y de estupefacientes, y hacer varios viajes, y como ya hay jurisprudencia, reclamarán en el futuro, a lo mejor la posibilidad del indulto. No soy juzgador, no me corresponde serlo, al fin, señor Presidente, compañeros, nadie absolutamente nadie estamos libres de que nos suceda algo parecido o a alguien cercano a nosotros. Es posible que los compañeros integrantes de la Mesa correspondiente, hayan hecho un buen trabajo de investigación, pero si debemos meditar, señor Presidente, profundamente en la imposibilidad física de leer todo este paquete de artículos, de leyendas, de redacción, para mí, por lo menos, es tremendamente imposible, y si quiero hacer un trabajo serio, no podría hacerlo, señor Presidente. En el caso que me ocupa, cuando se hace la convocatoria, ésta no debería tener la más mínima sospecha. Por eso, desde el origen la convocatoria a lo mejor debió escribirse en tiempo pasado del indicativo, y decir "transportaron", "indulto a las personas que transportaron pequeñas cantidades de sustancias

psicotrópicas y estupefacientes", no que "transportan", reitero, "transportan" es presente. No hay que dejar el mínimo espacio para la duda. Señor Presidente, hagamos las cosas de manera correcta, el pueblo ecuatoriano quiere transparencia en todas las acciones de sus mandatarios, creo que podemos despojarnos un poco, a veces, de la sobradez, del absurdo conocimiento que a veces no es conocimiento, no siempre ustedes van a tener la razón. Demos muestras al pueblo ecuatoriano, que sabemos asimilar y que podemos corregir. Gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. El asambleísta Gabriel Rivera. ----------

EL ASAMBLEÍSTA RIVERA GABRIEL. Señor Presidente y compañeros asambleistas, pueblo de Vinces, que en esta tarde atento sigue este debate constituyente, porque hay que hacer justicia, señor Presidente, en el país no se puede criminalizar a aquellos luchadores populares, porque entonces nosotros, muchos, tal vez yo no me incluyo, deberíamos estar en la cárcel pagando condenas, porque esta Asamblea Constituyente su génesis, su propio inicio, su propia razón de ser, ha sido el levantarse contra las reglas impuestas, contra las reglas escritas por la partidocracia que osó incriminalizar las conductas de los pueblos. Por eso mi saludo al pueblo de Vinces, por eso mi saludo al pueblo ecuatoriano, que nunca se ha rendido, que nunca ha abandonado su lucha y que siempre por ésta ha muerto o ha luchado. También mi saludo a aquellos que a pesar de haber ocupado los más altos cargos, como el doctor Gustavo Noboa Bejarano, fueron incriminados por alguien que incluso se atrevió a decir que los iba a perseguir como perros con hambre. Qué bueno también saber que ahora los propios compañeros del partido aquel que enjuició a los ciudadanos de Vinces, acusándolos de terroristas, de comandos, ahora

lo nieguen públicamente en esta Asamblea Constituyente. Qué bueno saber que eso pase, porque eso entonces nos invita a pensar de que incluso en ciertos partidos donde han tenido a personas que públicamente han explotado a niños en bananeras, etcétera, etcétera, todavía les queda un poquito de vergüenza, señor Presidente. Así mismo, me siento muy contento en saber que se trata la amnistía a personas como la doctora Wilma Salgado. No podía esta Asamblea Constituyente, dejar de lado a una mujer cuya acrisolada vida, en cuya acrisoladísima vida, no se le puede tachar o acusar de haber cometido horrendo delito, pero que realmente se lo ha venido la partidocracia y ciertos sectores interesados, acusando. Pero además, señor Presidente, yo quiero aprovechar, porque esta misma Asamblea Constituyente en debates anteriores ha estado discutiendo la forma como se debe redactar lo que hoy es el numeral quince del artículo ciento treinta de la Constitución Política del Estado, que dice: "Conceder amnistías generales por delitos políticos, e indultos por delitos comunes, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. En ambos casos, la decisión se justificará cuando medien motivos humanitarios. No se concederá el indulto por delitos cometidos contra la administración pública y por delitos mencionados en el inciso Tercero del número dos, del artículo veintitrés". Señor Presidente. Este artículo es vergonzoso, es incompleto, este artículo no tiene sentido, está redactado como lo está. Porque si los indultos nosotros los concedemos por razones principalmente humanitarias, no se debe hacer mención en ellos el delito que se cometió, porque entonces si un hombre está en sus últimos días de vida, ahí por haber cometido cohecho, una concusión, resulta que no hay cómo darle un indulto, resulta que este ciudadano no puede acogerse aunque tenga un cáncer terminal, y esa no es la voluntad que debe primar en el Legislador, ni tampoco la voluntad del pueblo ecuatoriano. Porque el pueblo ecuatoriano no es represor, el

pueblo ecuatoriano es por encima de todas las cosas, independientemente del Gobierno que haya tenido, profundamente humanista, solidario, amante de la libertad y de la democracia, como sentenciaría algún poeta ecuatoriano. También me preocupa, señor Presidente, haber escuchado aquí a viejos abogados, decir que no se puede conceder amnistías, porque éstas solamente se conceden por delitos políticos. Cuánta pena me imagino que debe estar embargando el corazón y la mente de los millones de ecuatorianos que se encuentran allá en las fronteras, por la pobreza a la que nos llevó este sistema que hoy estamos venciendo. En ciertos países se les está dando amnistía migratoria, y ¿acaso estas amnistías migratorias son delitos políticos, señor Presidente? Hay que tener cuidado, compañeros abogados, en hablar de lo que estamos diciendo. En eso sí quiero coincidir con el asambleísta Viteri... Déjeme concluir déjeme concluir, déjeme concluir, doctor Esteves, ya usted tuvo la oportunidad de hablar. Entonces, señor Presidente, me admira escuchar que solamente en esos casos se pueda decir que podemos conceder amnistías. Por lo tanto, esta Asamblea es competente y tiene la legitimidad política y social para conceder esas amnistías. Claro que es competente, duélale a quien le duela, y aunque se venga a gritar sin fundamentos en esta Asamblea Constituyente. Y qué pena que haya personas que quieren hacerle el juego a la oligarquía ecuatoriana. A ellos los vencemos, aunque vengan vestiditos de negro. Gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señores asambleístas, todos pueden pedir la palabra, por favor, pero hágalo ordenadamente, doctor, hágalo, hágalo. ----------

EL ASAMBLEÍSTA RIVERA GABRIEL. Yo no le he nombrado, ni tampoco.... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señores asambleistas, por favor. Asambleista Leonardo Viteri. ----------

EL ASAMBLEÍSTA VITERI LEONARDO. Buenas tardes, compañeros. Esta tarde, esta tarde me voy a referir a un tema que me provoca sentimientos encontrados, y me provoca sentimientos encontrados, porque cuando yo me gradué de médico, fue el doctor Gustavo Noboa quien me puso el birrete en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y teniamos una buena relación. Después él fue Presidente de la República, y tengo que reconocer que se dieron pasos importantes en descentralización hacia los gobiernos seccionales en el país. Sin embargo, en estos sentimientos encontrados, también ha venido a mi memoria el tema del puente sobre el estuario del rio Chone, que siendo Alcalde este servidor, se hizo los estudios con el MOP, y en mi ciudad, que es un deseo de los manabitas, sobre todo del norte de la provincia, también tengo que reconocer que este Gobierno tiene la intención de construir el puente, la buena intención. Pero en aquella época paralizamos la ciudad, y con unos orientales, unos chinos, firmamos la construcción del puente. Esos chinos después aparecieron en un chifa en Quevedo, auténtico, ah, autentico. Inicialmente, pues obviamente yo me sentí frustrado y molesto, pero el tiempo pasa y mc di cucnta de que quien había sido engañado también, así como el alcalde, la provincia, también había sido engañado él, el propio Presidente Gustavo Noboa. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el tema del OCP y en el manejo de la deuda, yo creo que él fue engañado por sus adláteres. Yo no quiero discutir el tema, porque es un tema muy extenso que si lo he estudiado, y hoy día con mucha sorpresa recepto un informe firmado nada menos y nada más que por Ricardo Patiño y Alejandro Olmos Gaona, miembros de una comisión que a través de un Decreto Ejecutivo, el cuatro siete dos, el Gobierno del Ecuador le pide que investigue este

tema a través de una comisión y una auditoria integral del crédito público. Es importante que ustedes lean dicho documento, es muy importante que lo lean. Pero al estudiar este tema de la deuda externa, que es impresionante, porque el Ecuador ha sido, pese a sus déficit de caja, ha sido religiosamente pagador de la deuda externa, pero religiosamente, y algo de lo que me he enterado en esta investigación, es que por ejemplo, claro, él es inversionista, y él tiene derecho, Carlos Slim es el mayor acreedor de deuda pública ecuatoriana. Se dice que él compró quinientos millones de dólares en deuda, depreciada en un ochenta por ciento, ¿qué se pueden imaginar este negocio?; es decir, él, si lo hacemos por un millón, él pagó apenas doscientos mil dólares, y esa deuda le pagamos el doce por ciento de interés, porque una deuda es a doce años, el doce por ciento, y la de treinta años, pagamos el nueve coma cuarenta y siete por ciento de interés. ¿Qué negocio? Imagínense ustedes, Carlos Slim ya recuperó su plata hace tiempo, y le estamos pagando el doce por ciento de interés mensual. A mí también en aquella época me impresionó muchísimo los comentarios de quien era Ministro de Economía y Finanzas, Luiggi Iturralde, acuérdense de los comentarios de él, yo sí tengo buena memoria, acuérdense de los comentarios de Luiggi Iturralde, sobre el tema de la deuda pública. Y en cuanto a la deuda pública, con una facilidad espantosa, también religiosamente este Gobierno ha pagado deuda pública. Acuérdense de los "Pativideos", que fue otra jugada magistral de pago de deuda externa. Entonces cuidado escarbamos mucho, porque hay ropa tendida por todos lados, cuidado con eso. Otro tema que a mí me impresionó sobre esta información que ha sido firmada por Ricardo Patiño, y aspiro, y aspiro que los economistas en este Pleno y en esta tarde, nos den una explicación al país, aspiro que los que tienen conocimiento de economía nos expliquen, antes de tomar una decisión sobre este tema. Yo quiero y exijo una decisión sobre este tema, hasta

del propio Gobierno Nacional. Este documento tiene que ser explicado. Hay un viejo dicho, de que es noble perdonar. Sin embargo, si perdonamos mucho a quienes cometen errores, estamos cometiendo una injusticia con quienes no cometen errores. ¿Por qué nos vamos a abstener, Presidente y asambleístas?, ¿por qué? Porque si ustedes en esta Asamblea a través de un Mandato determinan que Dios ha muerto o determinan que hay vida en Marte, nosotros no podemos votar ni negativa ni positivamente. No estamos de acuerdo con estos temas que se salen de nuestra función principal que es hacer la Constitución. Por supuesto, que ante tamaño dislate, yo tendría que votar No, en el tema de que Dios ha mucrto, pero no, nos tenemos quc abstcner precisamente porque no estamos de acuerdo con salirnos del tema de hacer la Constitución, que esa es nuestra función. Es importante también recalcar esta tarde, Presidente, que me ha sorprendido, siendo yo miembro de la Mesa Tres, que por arte de birlibirloque haya desaparecido un artículo al llegar a discusión de este Pleno. Eso es gravísimo, Presidente, es gravísimo que por arte de birlibirloque haya llegado acá un artículo menos. Tengan mucho cuidado con eso, porque yo considero que es una burla. Quiero la explicación de quienes saben del tema económico, sobre la deuda externa, les pido una explicación a quienes conocen del tema. Gracias, Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Jaime Ruiz. ----------

EL ASAMBLEÍSTA RUIZ JAIME. Compañero Presidente, compañeros asambleístas: La mayoría de nosotros hemos venido a esta Asamblea Constituyente, no a ganar o a perder como personas; hemos venido a ser parte de un proyecto político que el pueblo ecuatoriano lo decidió a través de una votación mayoritaria. Quiero recordarles a todos, que no estamos en una Asamblea Constitucional, estamos cn un proceso

constituyente, que es parte de este gran sueño de la mayoría de ecuatorianos, de transformar este país, que se ha denominado revolución ciudadana. Precisamente por eso creo que en medio de la construcción de la Constitución, es absolutamente pertinente que estas amnistías, mandatos e indultos puedan presentarse al país, pero únicamente como un producto de esa voluntad del pueblo ecuatoriano, que quiere, que anhela que se reparen aquellas acciones cometidas por algunos políticos que se han convertido en verdaderos delincuentes del país. No es posible entender que un dirigente de una comunidad, de un pueblo tradicional y emblemático como el de la parroquia de Nayón y la comunidad de Tanda, el ingeniero Villacís, haya sido perseguido político por cerca de veinte años, por la aristocracia quiteña y el grupo de pelucones de Quito. Yo quiero hablar sobre ese tema, y quiero pedir, quiero explicar a ustedes -ese gráfico que está en la pantalla representa la urbanización "Rancho San Francisco"- el Rancho San Francisco es de las urbanizaciones más lujosas de la capital. Toda la parte inferior donde se encuentra ese círculo, tenemos alrededor de ochenta viviendas, lujosas viviendas, representan cincuenta y siete mil metros cuadrados, que fueron destinadas para área comunitaria, como producto de una regulación municipal, y que de manera ilegal, violentado la Ley de Régimen Municipal, violentando las ordenanzas, se le trasladó a uso privado, violando expresamente disposición de la ley, repito, para beneficiar a una constructora que representa el interés del capital inmobiliario, vinculado a las decisiones del gobierno municipal. En este proceso, y debo decirlo con toda la documentación, de veinte años de lucha, este es un proceso en donde el ingeniero Simbaña y la comunidad de Tanda han venido luchando de manera permanente. Pero aquí existe justamente la acción delincuencial de algunos políticos que justamente destruyeron la imagen de la Función Legislativa, de la primera Función del Estado, y le llevaron a tal desprestigio y tal

colapso, que ahora el pueblo ecuatoriano no quiere saber absolutamente nada del Congreso y de congresistas. Por eso es que aprovechándose de eso algunos miembros de la oposición pretenden con mentiras y engaños, asimilar o asemejar a esta Asamblea Constituyente con lo que fue este proceso. ¿Quién no recuerda las acciones escandalosas y de persecución, del diputado de la Izquierda Democrática, Carlos González? Ese personaje está involucrado en este proceso, es él, el diputado Carlos González, que por congraciarse con el Alcalde de Quito, Paco Moncayo, con Andrés Vallejo Arcos, que están inmiscuidos en este proceso, inició una acción en contra del ingeniero Simbaña, una acción que viola todos los procesos, todas las lógicas razonables, y que en base al poder, desde la Comisión de Fiscalización del Congreso, exigió a la Corte Suprema de Justicia, reabrir un proceso cerrado, para condenar a una persona que venía luchando por un derecho de la comunidad, de Tanda. Este es un proceso que evidencia lo que significa violación de las leyes, violación de derechos humanos, humillación y maltrato a una comunidad, -si le podemos pasar la siguiente lámina- allí encontramos los lugares, cómo se le pretendió conformar al pueblo de Tanda, a cerca de media hora de distancia, se pretendió canjear estos cincuenta y siete mil metros, con otra área supuestamente equivalente, pero que tenía un valor mucho menor, porque en la urbanización Rancho San Francisco, el metro cuadrado se cotizaba a ciento cincuenta dólares el metro, y acá en este lugar en donde se le pretende compensar, para beneficiar exclusivamente a la constructora, apenas el costo del metro cuadrado era de cuatro dólares. Esa permuta ilegal que perpetró el Municipio de Quito, justamente fue el perjuicio que se hizo a la comunidad. Los comuneros de Tanda, la población de Tanda ha luchado infatigablemente porque se repare esta decisión del Municipio de Quito y esta persecución política al dirigente de esa comunidad. Lamentablemente, como siempre, la justicia ha

podido más a partir de las chequeras, de las influencias y de los poderes fácticos de este país. Sin duda, este es un ejemplo emblemático que justifica aquello que en el punto anterior se trató aquí, la necesidad de transformar de manera definitiva la justicia en el país, también justifica la necesidad de transformar el manejo de las notarías y de los registros de la propiedad, porque en este proceso incluso encontramos una falsificación de firmas de un notario, de aquellos que dan fe pública, y que algunos pretenden defenderlos, de aquellas acciones y formas que solo constituyen formas de aprovechamiento, de enriquecimiento, en base al esfuerzo y al sacrificio del pueblo ecuatoriano. Yo quiero felicitar a la Mesa Diez, quiero felicitar a este grupo de asambleístas, que con sensibilidad han sabido escoger casos emblemáticos, precisamente para mostrarle al pueblo ecuatoriano que la revolución constituyente significa poner sobre el tapete estos hechos emblemáticos que nunca más tienen que volver a ocurrir con la vigencia de la nueva Constitución de la República, con la vigencia de ese instrumento legal que va a permitir la transformación del país. Quiero además, decir que en este proceso en donde se realizó una permuta injusta e ilegal, hay un perjuicio al Estado, hay un perjuicio a la Municipalidad de Quito, de cerca de cinco millones de dólares, que también tiene que repararse; hay un perjuicio que indudablemente, con esta amnistía que hoy se da, va a permitir que los actores de las comunidad puedan reiniciar la recuperación de esas áreas que les corresponde a ellos, que les pertenecía por historia, que les pertenecía por ley. Por tanto, respaldo plenamente esta decisión y esta voluntad de dar la amnistía a Carlos Simbaña. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Tito Nilton Mendoza. ----------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Gracias, señor Presidente.

Alguien alguna vez me dijo que los dos mejores negocios que se habían manejado en este país, habían sido la deuda externa y la intermediación en los negocios petroleros, y de eso creo que han medrado políticos, agnados, cognados, amigos, enemigos, adversarios, de todos los regímenes que han administrado este país. Por principio, porque sabemos que esta Asamblea no tiene facultad para aquello, no podemos estar a favor de una amnistía. Pero vamos al fondo, señor Presidente, vamos al fondo. Este país no debería tener deuda externa, alguna vez me acerque al entonces Presidente de la Asamblea, a quien llegué a valorar y a apreciar, más que por su ideología que no comparto, por su don de gente, porque he visto que practica lo que predica, y porque sé que es un ser humano con profundos sentimientos, y me he preocupado de leer sobre su trayectoria, sobre su vida, sobre sus ancestros, sobre su legado, aunque no se haya ido de este mundo todavía, y alguna vez me le acerqué y le dije, señor Presidente, de economía casi no sé nada, me declaro ignorante en este tema, y me dijo, te voy a regalar un libro, me lo entregó, con mucho afecto lo recibí, y algo he leído de ese análisis que hace el economista Alberto Acosta, sobre lo que ha pasado en la economía del país, desde la era colonial, republicana, hasta nuestros días, y le dije, y es una promesa, algún rato le haré llegar por escrito mis comentarios sobre este tema, y confieso que he aprendido, dos cosas me llamaron la atención: Primero, el análisis imparcial que hace sobre la administración del ingeniero Febres-Cordero como Presidente de la República, del ochenta y cuatro al ochenta y ocho, en el aspecto económico, específicamente. Gobernó al país, en mi criterio, administró al país, con un Presupuesto de tres años, para cuatro años, porque entonces se rompió el oleoducto el cinco de marzo del ochenta y siete, y estuvimos siete u ocho meses sin petrólco; el petróleo estuvo a siete dólares por barril, hoy está a ciento cuarenta. Pero hay dos hechos: el salvataje bancario, la sucretización de

la deuda en el Gobierno del doctor Osvaldo Hurtado. Se imaginan ustedes, señores asambleístas, que si esos dos hechos se los hubiera manejado adecuadamente, este país que es rico, no tuviera deuda externa, tuviéramos superávit. Este país que tiene trece millones de habitantes, puede darles de comer a ochenta millones de personas, y no se abastece con trece millones, y hoy día, por esta administración catastrófica que tiene la República, no tenemos comida, la canasta familiar nunca ha estado tal alta, el país se muere de hambre, los pobres son más pobres, y ustedes, la mayoría, denigran y persiguen dizque a los ricos o a los que generan trabajo, empleo, producción riqueza, usan políticas de Estado, para perseguir a los que más tienen, pero no saben que esa política de Estado va a en desmedro de los que menos tienen. Por supuesto que estoy dando un discurso político, pero un discurso político basado en lo que siente el pueblo, porque si hay algo que el pueblo no perdona es el hambre, y hoy día el pueblo ecuatoriano sufre de hambre, señor Presidente, y esa hambre no se la perdona a nadie, a nadie, absolutamente a nadie. Amnistías, olvido; indulto, perdón; efectos, no son los mismos, por eso amnistiaron a aquellos del Taurazo, porque el indulto no les sirvió. Yo quiero recordarle al país, no a esta Asamblea, al país, qué ha hecho, no esta Asamblea, que es un clon del peor Congreso, y algún político dijo alguna vez, el peor Congreso es el actual, y este es un Congreso, entonces este es el peor Congreso, y todos somos parte de aquello. Yo he sido parte de muchos Congresos, señor Presidente, de tres, y con este es el cuarto, pero nunca he visto que se hayan cometido tantas distorsiones como ahora. Le agradezco a Alberto Acosta por haberme regalado esa magistral obra que él se la dedica a las profesoras y a los profesores de la patria, a los educadores. Me instruyó, creo que con la gracia divina, en algún momento también me iluminó y por eso estoy diciendo lo que digo. Me he dado cuenta que las desgracias de este país

hemos sido nosotros mismos, porque no hemos sido capaces de llevarnos entre hermanos y de construir una patria digna, mejor, soberana, altiva, como dicen ustedes, sin ofendernos. Pero, por Dios, no hagan lo que no tienen que hacer. Hagan lo que tienen que hacer, porque ustedes tienen los votos y la mayoria, hagan una Constitución para que el pueblo les diga que Sí, porque como están actuando, están haciendo una Constitución para que el pueblo les diga No, porque con el hambrc dcl pueblo, señor Presidente y señores asambleistas, no se juega. Por eso, no estoy con las amnistías. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Alberto Acosta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ACOSTA ALBERTO. Muy buenas noches, señor Presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Empiezo lamcntando que no tengamos el tiempo suficiente para abordar cada uno de los puntos planteados, y lo digo, porque me habría gustado administrar e intervenir en cada uno de estos temas, señalando los motivos por los cuales voy a apoyar, y en los cuales no voy a apoyar. Me hubiera gustado explicar a los compañeros y compañeras, por qué me voy a abstener, por ejemplo, cn el caso de las mulas, dos kilos me parecc demasiado, yo creo que eso ya no es una mula, no es una persona inocente que simplemente se presta para llevar algo de droga, para llevar luego el pan a su familia. Me habría gustado también hablar más largamente sobre el tema de Wilma Salgado, a quien debemos darle la amnistía porque es una persona que cometió un delito. Tratar de cobrar a quienes no querian devolver la plata de aquel atraco bancario de más de ocho mil millones de dólares, y es una perseguida no solo política, sino de las oligarquías financieras. Pero quiero yo concentrarme el día de hoy, en estos minutos que tengo, en lo que tiene que ver con la cuestión de la deuda externa, que es un ámbito donde

soy un poco menos ignorante que en otros. Conozco algo del caso de la deuda externa, y creo que es muy importante, en primer lugar, ubicar el ámbito en donde se dio, en la época en que se dio la negociación de los bonos Global. El Ecuador vivía una de las peores crisis de su historia, había caído su Producto Interno Bruto, en cerca de un treinta y dos por ciento, medido en dólares, del año noventa y ocho al año dos mil. Se había producido uno de los fenómenos del El Niño, que había devastado la Costa ecuatoriana; teníamos graves problemas en el ámbito productivo, cientos de empresas quebraron, miles de compatriotas se quedaron sin empleo, cientos, miles de esos compatriotas tuvieron que salir del país, los compañeros migrantes son testigos fieles de lo que estoy hablando en este instante. También sabemos muy bien, que en esa época, en el Gobierno de Jamil Mahuad, cuyo Vicepresidente fue Gustavo Noboa Bejarano, llegaron los dos juntos al poder, suspendió por varias épocas el pago de salarios y de sueldos, a los maestros, a las enfermeras, a los médicos, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Se disminuyó la inversión en educación y salud; la pobreza se duplicó, pasó de más o menos un treinta y cinco por ciento, a cerca del setenta por ciento, y la pobreza extrema se duplicó también, de un nueve por ciento, a cerca del dieciocho por ciento; el desempleo bordeaba el veinte por ciento, y todo, a pesar de todo ese sufrimiento del pueblo ecuatoriano, se hizo un esfuerzo enorme para tratar de sostener el servicio de la deuda externa. Y cuando ya fue imposible, se había esquilmado al pueblo ecuatoriano, se había liquidado la economía ecuatoriana, en septiembre del año noventa y nueve, se suspendió el pago de la deuda externa. Y recordemos que en el Gobierno de Mahuad y de Noboa, en marzo del año noventa y nueve, se metió la mano a los bolsillos de nuestros compatriotas, de todos nosotros, con el congelamiento de los depósitos, y empezó el famoso salvataje bancario que ha costado al país más de ocho mil millones de dólares. Ese es el

punto de partida, el mantenimiento del pago de la deuda externa, que era un objetivo nacional. Yo creo que aquí hay que decir con claridad, que la suspensión de dicho pago no fue la causa de la crisis, sino fue ya una medida desesperada frente a la cual el Gobierno no tuvo otra cosa que hacer. Habían tratado de sacrificar a la sociedad para sostener la deuda, y no pudieron hacer más que dejar de pagar la deuda, sacrificando a la sociedad. En ese sentido, nosotros tenemos que recordar también, que participó activamente el Fondo Monetario Internacional, y el Gobierno de Noboa, el cuatro de abril del año dos mil, suscribió una nueva Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, en la que se profundizaba el ajuste estructural, se abría la puerta para las privatizaciones y por supuesto se insistía en la necesidad de renegociar la deuda externa. ¿Para qué?, para cambiar los bonos Brady por bonos Global, y el Gobierno hizo este canje rápidamente, vertiginosamente lo presentó como un gran logro, en algún momento se dijo que había ahorrado en el servicio de la deuda externa como mil quinientos millones de dólares, en los primeros cinco años, trescientos millones de promedio anual, y se dijo también, que esta había sido la única opción que tenía el país. Pero no se nos dijo, cuál era la realidad, porque tanta maravilla no se sostiene en la práctica. Si nosotros vemos cuáles fueron los objetivos de la oferta de canje coordinada por la firma Salomon Smith & Barney, y presentada a fines de julio del año dos mil, se decía que había que aliviar las presiones sobre el flujo de la caja del Estado; definir un perfil de servicio de la deuda, acorde con la capacidad de pago; disminuir las presiones fiscales. Pero también se dijo, textualmente, compañeras y compañeros asambleístas, "maximizar los pagos por adelantado, y el flujo a los inversionistas durante la vida de los bonos". Mientras la vida del pueblo ecuatoriano estaba sufriendo una de sus peores crisis, este Gobierno hizo todos los esfuerzos posibles para reintegrarnos al mercado

financiero internacional, sacrificando la sociedad y sacrificando el aparato productivo. Y también hay que señalar algunos detallitos de esta renegociación, porque no se puede abstraer el uso de los bonos Global, que fueron un banco, sino que es parte de una totalidad de renegociación de la deuda externa, compañeras y compañeros. ¿Qué es lo que se hizo, entre otros detalles? Se entregó antes de su vencimiento, los bonos cupón cero, del Tesoro norteamericano, por un valor estimado de setecientos veintidós millones de dólares, que debían haber recibido los acreedores, los acreedores de los bonos Brady, recién en el año dos mil veinticinco. Y recordemos que esos bonos los compramos con nueva deuda externa, con la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo, se pagaron puntualmente, cuando no se entregaba a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, a la Policía, a las Fuerzas Armadas, recursos para su sostenimiento diario, se pagaron puntualmente ciento sesenta y un millones de dólares, que fueron entregados, cancelados de inmediato a los acreedores. Nos comprometieron a adquirir deuda en valores de mercado, puntualmente, año a año, tres por ciento para los bonos Global, a treinta años, y diez por ciento para los bonos Global, a doce años. O sea, que nosotros comprábamos nuestros papeles, para mantener elevada la cotización de los bonos de deuda. Y ahí recordaba el compañero, la intervención de uno de los que negociaron papeles de deuda externa, este señor Sleem, la empresa telefónica de México, TELMEX, había adquirido seiscientos setenta y cinco millones de bonos Brady, con un descuento del ochenta por ciento; el once por ciento de la deuda comercial ecuatoriana tenía una sola persona, y se benefició con el incremento de la cotización que esto representó. Además, se establecieron tasas de interés elevadísimas, que empezó por los bonos Global, a treinta años, en el cuatro por ciento hasta llegar al diez por ciento y los bonos Global a doce años, se pactó en doce por ciento,

cuando las tasas de interés habían caído a niveles inferiores a cuatro y tres por ciento a nivel internacional, las más bajas de los cuarenta y seis años anteriores, a nosotros nos hicieron contratar deuda al doce por ciento. Pero no terminaron ahí los regalos para los acreedores de la deuda externa. El Gobierno del doctor Gustavo Noboa Bejarano, al que pretendemos darle una amnistía, hizo y deshizo lo que quiso con los bonos que fueron adquiridos, que fueron entregados por el Estado para canjearlos con los bonos Brady. Parte de estos bonos, en contra de las disposiciones legales, ahí podía haber la figura del peculado, se destinaron para otros fines. Recordemos, que en el Decreto seiscientos dieciocho, publicado el veintiocho de junio del año dos mil, en el Registro Oficial, se estableció que los bonos Global servirían -textualmente- "exclusivamente para la reestructuración de la deuda externa". Esos bonos Global eran solo para canjearlos con bonos Brady, esa era la operación y nada más que eso. Y ¿qué se hicieron con esos bonos? Parte de esos bonos se los vendieron en el mercado, ciento veintiséis punto cuatro millones de dólares, que se convirtieron en cincuenta y dos punto siete millones de dólares, y se los destinó para financiar dos bancos privados intervenidos por el Estado, porque eran bancos privados intervenidos por el Estado. Este es el punto medular, no eran bancos estatales. Recuerden, compañeras y compañeros, que no hemos podido entregar a la CATEG, por ejemplo, directamente los recursos para invertir en electricidad en Guayaquil, porque es una entidad privada, una fundación...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ACOSTA ALBERTO. Sí, señor Presidente, termino. En ese contexto, estos no dejaban de ser bancos privados, que arrastraban las consecuencias de los malos manejos de las

administraciones que respondían intereses privados. Y ¿quién era el Presidente de la Comisión Renegociadora de Deuda Externa?, quien había sido el último Presidente del Banco del Pacífico, Jorge Gallardo. Hay que decir las cosas con nombres y apellidos en este instante. En ese sentido, yo creo que no es el momento dc la calma y la reconciliación, con una amnistia. Es el momento de la justicia, compañeras y compañeros. No podemos echar tierra en un pedazo pequeño, cuando el asunto es la totalidad. Les invito, entonces, compañeros y compañeras, a que entendamos ¿qué tenemos entre manos? Tenemos que cumplir con la patria, nuestro compromiso es con la patria y no con los amigos ni los amigos de los amigos, por más importantes que sean éstos. Lcs digo, compañeros, pensando en el legado de Alfaro, que nos está viendo. Con este libro que les distribuí y tuve el gusto de que todos ustedes tengan, la "Deuda Gordiana". Quiero leer, señor Presidente, el párrafo final. "Por desgracia, -decía Alfaro, en la edición de mil ochocientos noventa y seis, la primera fue de mil ochocientos noventa y dos- "hasta hoy, la impunidad ha sido la piedra angular que ha sostenido en pie la famosa escuela de vicios y depravación que dejó establecido el general Flores, -se refería al general Juan José Flores- sus vástagos aprovechan el tiempo y hacen su agosto sin ruborizarse ni detenerse ante el día de la fiscalización inexorable que se aproxima, y ojalá así sea, con tal de quedar millonarios y poder escapar, lo demás, poco les importa". Pero este Gobierno, este Gobierno que pidió la amnistia, también está llevando adelante la auditoría de la deuda extcrna, y los compañeros, de la auditoría de la deuda externa, también nos recomiendan no dar esta amnistía. La patria es primero, los compromisos personales no cuentan. Muchas gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Jorge Escala. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ESCALA JORGE. Compañero Presidente, compañeras, compañeros asambleístas: Esta Asamblea ha concedido amnistía a los luchadores sociales, populares, a los defensores de la naturaleza, de la vida, a la juventud rebelde, que se ha levantado contra los intereses de las transnacionales. Eso explica la esencia, la naturaleza de esta Asamblea Constituyente, y que no hubiera sido posible reconocer este derecho a la protesta, a todos aquellos que se han beneficiado de esta amnistía, si esta Asamblea Constituyente tuviera una mayoría de la derecha, que son opuestos a la lucha social y popular, que persiguieron inclusive a aquellos que pensaban diferente, cuando combatieron gobiernos reaccionarios. Por eso es que esta Asamblea Constituyente, en contra de la criminalización de la lucha, ha planteado, pues, ahora, la resistencia popular en algunos de sus artículos. Se habla, señor Presidente, compañero Presidente, se argumenta que hay persecución de Febres Cordero hacia Noboa. Para la izquierda revolucionaria, para el Movimiento Popular Democrático, que hemos enfrentado en las plazas y calles del país, a estos dos gobiernos de la oligarquía, decimos que aquí hay pelea entre compadres que se dicen las verdades, y en esa pelea no están representados los intereses populares, los intereses de la patria. Ahí están representados los intereses de la oligarquía que se beneficiaron con la deuda externa aquí en el Ecuador. Gustavo Noboa perjudicó al país y a nuestro pueblo, al negociar los bonos Brady por bonos Global; es decir, cuando retomó los bonos Brady, ya viciados, para cambiarlos por bonos Global, en el encaje se pagaron valores muy por encima del precio del mercado, perjudicando al país, por más de dos mil trescientos setenta y cinco millones de dólares, tres veces más que todo el presupuesto para educación; seis veces más que lo asignado a salud; ocho veces más que lo destinado en un año a la vialidad. ¿Cuántas escuelas?, ¿cuántos hospitales?, ¿cuántos créditos se hubiera beneficiado, entonces, el país?

Por eso, la izquierda revolucionaria no puede olvidarse de este negociado que hizo Gustavo Noboa, en el poder. Vean ustedes, junto con Febres Cordero, con sus diputados, crearon el FEIREP, para seguir pagando deuda externa, de los fondos del petróleo, condenando al pueblo, al atraso, la angustia, la desesperación. Es que fue Febres Cordero, que no sacó candidato para beneficiar al binomio Mahuad Noboa, y juntos hicieron la famosa Ley Trole, que permitía llevarse a todo el territorio nacional y convertir en colonia a nuestro país, para que saqueen las grandes transnacionales. Por eso, la izquierda revolucionaria votará en contra de esta amnistía para Gustavo Noboa. Hay razones también más que suficientes, que no podemos olvidar. ¿Acaso no recordamos, compañeras y compañeros, la represión contra nuestros hermanos indígenas en el levantamiento del dos mil uno. Acaso no nos podemos olvidar del encarcelamiento a varios dirigentes de la CONAIE, del Frente Popular, del asesinato de un joven que luchaba por la patria nueva, como Damián Peña, estudiante del colegio César Dávila, de Cuenca, asesinado por ese Gobierno de Gustavo Noboa, igual que Febres Cordero, su compadre? No hay diferencia, y por eso no puede concedérsele la amnistía a quien asesina al pueblo y a quien lo condena al atraso y al hambre. ¿Cómo no recordar que a mi compañera Aracely Moreno la sacaron a rastras de la UNE, y diez días presa en las mazmorras de la Penitenciaría, allá en Quito, precisamente porque combatíamos esta política reaccionaria de Gustavo Noboa? Por lo tanto, nuestro partido condena, y Acuerdo País tendrá que explicarle al Ecuador entero, ¿por qué es que ahora vota a favor de este verdugo de los pobres en el Ecuador? Por eso creemos también, vamos a votar a favor de Wilma Salgado, en contra de Carlos Arboleda y Luis Villacís Guillén, porque ahí el país perdió, y ellos continuaron protegiendo a la banca, y defenderemos y otorgaremos a mis compañeros de Vinces, que se levantaron también contra el PRIAN, contra el alcalde Ovidio Ludeña

Dueñas, que los acusa de terrorismo, cuando ahora persigue a una mujer embarazada, y las providas, nada dicen frente a este atentado al derecho a la vida a la mujer, y a la vida que está siendo afectada ahora por esta persecución. Por eso votaremos a favor de todos los luchadores populares que se levantaron contra la alcaldía del PRIAN. Por más que lo nieguen ahora, es la práctica, la política represiva, o sino que nos digan, y no hay cómo olvidar lo que hizo el PRIAN en la hacienda Los Álamos, a ochenta trabajadores los metieron en un camión, les dieron palo, garrote y bala, e iban a desaparecerlos y botarlos al río. Eso mismo quisieron hacer con los pobladores de Vinces, que se levantaron contra la corrupción. Por eso el MPD reivindica esa lucha, y tienen el voto de la izquierda revolucionaria, por la amnistía de estos luchadores populares. Muchas gracias, recordándoles que hay otros luchadores que se han quedado para la amnistía, aquellos luchadores que todavía están peleando contra las mineras en Azuay, y por lo tanto, llamo a la reflexión, para que a estos auténticos hijos del pueblo, que defienden la naturaleza y la vida, sean más adelante también beneficiados por este derecho de la amnistía. Muchas gracias, compañero Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le voy a dar la palabra al PRIAN, justamente, al Asambleísta que me ha pedido la palabra antes que todos ustedes, al asambleísta Pavón. Luego, enseguida seguiré dando la palabra. Ya le llegará el turno a usted. ----------

EL ASAMBLEÍSTA PAVÓN ANDRÉS. Muchas gracias, señor Presidente. Dejaré que mis compañeros se encarguen del tema y que aclaren. Yo voy a referirme a la vil mentira que ustedes están queriendo hacer en este día. Se violaron los derechos humanos en varias partes del país, en este proceso de los siete meses, y ahora quieren hacerse los héroes

haciendo mandatos, hacerse los héroes dando amnistías e indultos. Ustedes, lastimosamente, son lobos disfrazados de corderos, y ahora se quiere decir, sin ofenderle, señor Presidente, ahora se quiere decir en este Mandato, voy a referirme específicamente a la amnistía del doctor Gustavo Noboa. Mire, lo que se quiere hacer es una burla completa al doctor Gustavo Noboa, ex Presidente, y al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué?, porque en la resolución de amnistía que ustedes están mandando no contempla lo que dice las otras amnistías. En el artículo dos, por ejemplo: "Disponer el archivo definitivo de todas indagaciones previas, procesos y causas penales y/o administrativos abiertos en contra de todos los amnistiados". Solamente se quiere dar la amnistía en un solo proceso, y eso no es ayudar, y olvidar algo que sucedió. Si se quiere dar amnistía, se tiene que dar en todos los procesos, y no lc mientan al país utilizando a hombres o nombres de figuras políticas, para tratar de ser héroes. Así que yo les pediría, si van a dar la amnistía pongan el artículo número dos, como está en los otros mandatos, y no dé amnistías a unas personas, de una forma, y a otras personas, dirigidas de otra forma. Muchas gracias, Presidente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Mónica Chuji. Antes de que tome la palabra, tiene un punto de orden, el asambleísta Ponce.----------

EL ASAMBLEÍSTA PONCE ROBERTO. Muchas gracias, Presidente. Yo quiero aclarar a este jovencito del MPD, vividor de todos los gobiernos, que el PRIAN expulsó al Alcalde de Vinces, por sinvergüenza, Comenzando por allí, no tiene por que nombrar nuestro partido político, y usted lo sabe señor Escala, con rcspeto se lo digo, y usted sabe también, que en Álamos, el abogado Álvaro Noboa, lo que hace es dar educación y trabajo, para que se entere, y no viva de todos los gobiernos, porque ha estado en todos. Muchas gracias, Presidente.------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Realmente no es un punto de orden, es apenas un punto de información. Seamos más precisos, para no tomar indebidamente la palabra. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ESCALA JORGE. He sido aludido, compañero Presidente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le doy la palabra luego, por favor. Permítame, está esperando, ya le di la palabra a Mónica Chuji.----------

EL ASAMBLEÍSTA ESCALA JORGE. Bueno, en honor al tiempo y para avanzar en la Constituyente y no contestarle a la derecha reaccionaria, avancemos.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Mónica Chuji, por favor.----------

LA ASAMBLEÍSTA CHUJI MÓNICA. Buenas noches, señor Presidente. Buenas noches compañeros y compañeras:... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señores asambleístas, por favor, escúchenle a la asambleísta Chuji que va hablar. Por favor.----------

LA ASAMBLEISTAS CHUJI MÓNICA. Bien. Gracias, Presidente. Un saludo fraterno a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Yo creo que muchos compañeros que me anteccdieron en la palabra, lo han dicho todo. Yo quisiera decir tres cuestiones puntuales. En primer lugar, sí estoy de acuerdo con las amnistías, pero creo que cada caso tiene un tratamiento diferente. Pero hay unos casos en los que no estoy de acuerdo. Y yo quiero decirle al pueblo ecuatoriano, recordarle, en primer lugar, que el doctor Gustavo Noboa llegó a la Presidencia en el

año dos mil, llegó a la Presidencia después de que un levantamiento indígena sacará, echará al Gobierno de Mahuad. Allí se comprometió el doctor Gustavo Noboa, a cumplir con el mandato del pueblo. No lo hizo, porque lo traicionó. Los hechos y los casos ya lo han dicho aquí los compañeros asambleístas que me antecedieron en la palabra. Creo que estos antecedentes, creo que su actitud, la represión que sufrimos los luchadores populares, no puede borrarse con una amnistía. Además, como ya lo denunció el economista Acosta, con la negociación que hizo con la deuda externa, y ha significado un atraco para el país. Con esto, señor Presidente, no se puede, o no puede tener el estatus de perseguido político. Pero por supuesto sabemos quién le persigue, León Febres Cordero, otro ex Presidente que ha tenido muchos crímenes de Estado que, por cierto, deberíamos... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta, por favor, le interrumpo. Señores asambleístas, por favor usen la cabeza, yo les pido a todos. Por favor, señores asambleístas, les vuelvo a llamar a la cordura, al respeto, creo que hay cómo contradecirse, hay cómo discrepar, hay cómo opinar con libertad si es que nos respetamos. Los otros es incalificable. Pero con la palabra y con la cabeza, por favor. Bien. Siga Mónica, por favor, Disculpe la interrupción.----------

LA ASAMBLEÍSTA CHUJI MÓNICA. Gracias, Presidente. Decía entonces, quien les habla, es víctima de aquellas bombas, de aquella represión del Gobierno de Gustavo Noboa. Por tanto, no puede tener un estatus de perseguido político. Decía también, ¿quién le está persiguiendo? León Febres Cordero. Recordemos quién es León Febres Cordero, pues, cuánto daño le ha hecho a este país. O sino recordemos que ponía precio a la vida y que, por cierto, hay que recordarles, que ahora dicen defender la vida. Esas cosas el pueblo tiene que

recordarlas, esas cosas hay que decirle al pueblo ecuatoriano, la verdad. Aquí no estamos hablando de politiquería, estamos diciéndole la verdad al pueblo ecuatoriano. Por tanto, señor Presidente, quiero decir que por los luchadores populares, por las mujeres, votaré a favor de la amnistía. Por Gustavo Noboa, no, porque le ha hecho daño a este país. Muchas gracias.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra, asambleísta Tito Nilton Mendoza.----------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Señor Presidente: Nosotros debatimos con altura, con ideas, con tesis, con fundamentos y con argumentos, pero no vamos a soportar un vejamen más al abogado Álvaro Noboa, un vejamen más no lo vamos a soportar, venga de quién venga.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Eso no es un punto de orden. ----------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Es un punto de orden.-----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Discúlpeme usted, no es un punto de orden, no vamos a discrepar. Respétense, para que todos tengamos la satisfacción de poder discrepar con libertad. Así es, pero no se hagan alusiones personales de ninguna parte, y vamos a ir por el camino del respeto. Estoy llamando siempre la atención a todos, yo no hago discrimen de ninguna naturaleza. Todos aquí tenemos oídos suficientemente desarrollados, no somos sordos, no griten, y vamos a poder entendernos de mejor manera. Esto se llama ofensa, lo que usted están diciendo. Si quiere que le respeten, respete. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ..... Estoy solicitando, el uso de la palabra, señor Presidente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Les voy a dar la palabra en el orden en que están inscritos. A ver, tiene la palabra el asambleista Gustavo Darquea. ----------

EL ASAMBLEÍSTA DARQUEA GUSTAVO. Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros asambleistas: Voy a hacer referencia al caso de la amnistía de Wilma Salgado. La famosa Agencia de Garantía de Depósitos, justamente crcada inicialmente como una forma de garantizar supuestamente a los acreedores, a la gente que fue perjudicada por todos estos hechos de la quiebra bancaria, entró en una situación de prácticamente absoluta incredibilidad, porque realmente no había posibilidad de recuperar los valores que esta banca quebrada se había enbolsicado. En esas condiciones, llega la doctora Wilma Salgado a la Agencia de Garantía de Depósitos, y luego de nueve meses de su gestión, logra recuperar para todos los cucntaahorristas perjudicados, ciento sesenta y cuatro millones de dólares. Es decir, logra recuperar la credibilidad de la administración pública. Justamente, la Contraloría, frente a este hecho, la acusa dc peculado; es decir, de abuso de dincros públicos, cuando muy bien dice el informe de la Comisión, elaborado, y de la Mesa Diez, que no se ocasionó ningún pcrjuicio al Estado y, sin embargo a parte de esta acusación, tuvo cuatro juicios adicionales que fueron sobreseidos o archivados. Es evidente, señor Presidente y compañeros y compañeras asambleístas, que los banqueros corruptos usaron la figura del delito común, como un instrumento dc la persecución politica, porque es evidente que no van a usar la figura de atentar a la seguridad del Estado, ni mucho menos. Para la persecución política se usa la figura del delito común.

Es evidente, por tanto, que Wilma Salgado fue objeto de persecución política, como dice textualmente el informe de la Mesa Diez. Por tanto, no existió infracción, no hubo delito, el proceso fue creado, ideado voluntariamente, para perseguir políticamente a la doctora Wilma Salgado, quien fue una mujer valerosa que se jugó por el país, que creyó utópicamente en el imperio de la justicia, de esa justicia que hoy por la mañana ha sido objeto de debate, para poder inaugurarla alguna vez en el país. Justamente merece, por tanto, que hoy hagamos justicia, por lo menos después de tantos años de persecución de una valerosa, de una patriota como Wilma Salgado. Por lo cual yo pido el apoyo y pido que apoyemos fuertemente este acto de justicia, esta amnistía a favor de Wilma Salgado. Muchas gracias.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Julio Logroño.----------

EL ASAMBLEÍTA LOGROÑO JULIO. Muchas gracias, señor Presidente. En honor al tiempo, en consideración a que hemos tomado una tarde valerosa que podíamos estar discutiendo asuntos constitucionales, estamos debatiendo amnistías que no es una facultad de la Asamblea. Y digo que no es una facultad de la Asamblea, porque nosotros siempre hemos manifestado el criterio de que el mandato del pueblo ecuatoriano, únicamente fue que los asambleístas elaboren la nueva Constitución que será sometida a referéndum, y hagan la transformación del marco institucional del Estado, no más allá de eso, y hay que respetar el mandato del pueblo. Por tanto, se ha sometido a consideración del Pleno, amnistías e indultos. En este caso lo que cabe, señor Presidente, en vez de concentrar los debates en insultos mutuos e increpaciones, debe concentrarse el debate en identificar si el caso procede y está encasillado dentro de lo que se denomina el delito político para que proceda la amnistía, e identificar si cada uno de los

casos corresponde a un delito común, para que proceda el indulto. No hace falta debatir aquí sobre la inocencia o la culpabilidad de quienes están sujetos a esto. Porque eso es materia del juzgamiento ordinario, es materia de resolución del juez, y nosotros no somos jueces, tampoco es juez el Parlamento, que tiene la facultad de conceder las amnistías y los indultos. Esto se concede exclusivamente por razones humanitarias; es decir, cuando la justicia ordinaria ha dado ya su veredicto, pero considera el Parlamento, que es necesario cambiar la situación jurídica de quien está siendo procesado o de quien ha sido condenado, por razones que median la humanidad. Es decir, una enfermedad grave; es decir, una enfermedad incurable, o condiciones deplorables de quien está siendo sometido a prisión. En este caso, como bien han manifestado algunos asambleístas que conocen de Derecho, el delito político es de aquellos encasillados en el Código Penal, a partir del artículo ciento treinta y siguientes, donde se identifica los hechos constitutivos de la infracción, como actos propendientes a afectar un bien jurídico protegido, que se llama el Estado, pero en aquellos órganos que representan la ejecución y la administración política del país; es decir, contra el Congreso, deponer al Ejecutivo, y los otros hechos constitutivos que se enmarcan en aquellos articulados. No cualquier cosa que se ponga a conocimiento, por el hecho de que ha sido ejecutado por un político, corresponde ya a presumir que son delitos políticos. Los actos de un político pueden estar encasillados también en delitos comunes, y ahí es donde se pueden cometer gravísimos errores. Con respecto al indulto que se pretende dar, en el tres punto siete del Orden del Día, se establece: "Indulto a las personas que transportan pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas y estupefacientes". Al tenor literal de esta frase, señor Presidente, se desprende que estamos despenalizando el transporte de pequeñas cantidades de sustancias. Por la conjugación del verbo, quiere decir que

de hoy en adelante cualquier persona, porque dice, "personas que transportan pequeñas cantidades de droga", ya no van a ser sujetos de enjuiciamiento penal, o automáticamente se les ha dado un indulto adelantado. Si es que pretenden dar el indulto a las personas consideradas mulas, aunque con dos kilos de droga aparecerían trailers, debería más bien cambiarse por lo menos la conjugación del verbo, y decir, "para las personas que estén siendo juzgadas por haber transportado hasta", cierta cantidad de droga. Ahí procedería indulto, aunque es de manera general, generalísima, lo que nunca en materia penal procede. Porque aquí ameritaba el estudio individual de cada una de las personas. Debe ser individual, no colectivo, y aquí establecer si procede o no esta gracia con respecto a ellos. Por último, señor Presidente, veo que la intención de indultar a quienes transportan drogas en pequeñas cantidades, es por considerar que eso no es un delito. Pero déjeme decirle, señor Presidente, que el delito es un acto, un hecho, con voluntad y conciencia, definido por la doctrina, como socialmente dañoso y moralmente punible. Es decir, algo que hace daño a la sociedad, se ve tipificado como delito, en el Código Penal o en la Ley Penal, en este caso, en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Si es que ustedes consideran indultar subjetivamente, por considerar que no hay delito, están contrariando la Ley Penal. Pero si la intención es despenalizar esto, más fácil es, señor Presidente, y sobre todo más justo, que se haga una reforma penal a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Spicotrópicas, y se establezca una cantidad tope para que las personas puedan transportar o puedan mantener en su poder. Así cualquier persona será juzgada de la misma manera. Porque tan injusto sería este indulto que si más tarde, a las ocho de la noche, luego de que se ha votado y se ha conseguido el indulto, una persona en la calle es tomada prisionera por la Policía, con un kilo de droga, entraría nuevamente a prisión, y de hoy en adelante, a

todas las personas que vuelvan a ser tomadas prisioneras por ese delito, volverán a llenar las cárceles del país. Es decir, no se ha cumplido con el objetivo final, que es no juzgar a estas personas, por considerarlas delitos de miseria. Hasta hoy las personas que son juzgadas por estos delitos denominados de miseria, serán puestas en libertad. Pero ¿qué pasa con las personas que después de hoy vuelvan a estar llenas las cárceles por estos mismos delitos? ¿Acaso en un año volveremos a conceder amnistías o indultos generales para todos ellos? No me parece procedente, merecería una reforma de la Ley de Sustancias Estupefacientes, para lograr la finalidad de la ley, que es la igualdad y la aplicación para todos. Gracias, señor Presidente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta López.----------

EL ASAMBLEÍSTA LÓPEZ FERNANDO. Señor Presidente, compañeros y compañeras: Yo me voy a referir al tema de los indultos, y también al tema de las amnistias, de manera muy particular y muy precisa. En el tema de los indultos, o a la resolución para el indulto de las personas que habrian transportado pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, voy a comenzar manifestando la definición que ya lo manifestó el asambleísta Cisneros, y que precisa con claridad las razones, las circunstancias que motivan al indulto. El indulto es el perdón de la pena, y el asambleísta Cisneros, con mucha precisión citaba a Cabanellas, y decía, se otorga este perdón, este indulto, por el exceso castigo de la ley. El asambleísta Cisneros, al igual que Cabanellas, tienen toda la razón. Yo voy a demostrar en esta noche al pueblo ecuatoriano, que esta Ley de Estupefacientes, realmente es una ley desproporcionada, entre la cantidad de la droga versus al castigo. Y aquí tengo todas las sentencias, para demostrar y, en forma particular, de acuerdo a la investigación que había hecho en el Tribunal

Penal del Carchi, y con la autorización de los internos del Centro de Rehabilitación dc Tulcán, me voy a permitir justificar, en honor a esos internos, a esa gente olvidada. Caso número uno, María Antonieta Enríquez y Gloria Amparo Chuga, detenidas en la ciudad de Tulcán, con veinticinco gramos de marihuana, y una planta de marihuana, con un peso bruto de ciento sesenta gramos; dicha planta fue pesada con tierra y maseta; Condena, ocho años de reclusión. Costo de veinticinco gramos de marihuana en el mercado, diez dólares. Si esto hubiese pasado en el caso de los grandes narcotraficantes de toneladas de drogas, en donde en el mercado tenía un precio, tiene un precio de miles y millones de dólares, hubiese significado igual condena, ocho años. Caso segundo, Luis Alfonso Valencia Ramírez, veinte gramos de marihuana, dos gramos de base de cocaína; condena ocho años de reclusión. Caso tres, Wilfrido Moreno Imbañez, setenta gramos; ocho años de reclusión. Caso cuatro, Julio César Cangas Luna, veintidós gramos de base de cocaína; condenado a ocho años de reclusión. Tomamos en cuenta que en el Centro de Rehabilitación de Tulcán, el noventa y cinco por ciento de la población carcelaria es por estos delitos de narcotráfico. Caso cinco, condenado Omar Sánchez, peso cien gramos; condena, ocho años. Caso seis, interno Diego Camilo Roberto, cien gramos de marihuana; ocho años de reclusión. Caso siete, ciento setenta y tres gramos de cocaína; ocho años. Igual, sesenta gramos, ocho años, y podemos toda esta noche demostrar, demostrar que en esta ley impuesta, esta ley externa, no hay proporcionalidad entre la cantidad de droga versus a la sanción penal. No podemos, señores, permitir que esta ley sea excesiva en el castigo, para aquellas personas. La única conclusión que en esta noche podemos decir en honor al tiempo, es de que la pobrcza se habría criminalizado, por un costo de diez dólares, por una cantidad ínfima, como son, en el caso citado, una planta de marihuana, veinticinco gramos de marihuana, cuyo costo en

el consumo, está entre diez, veinte, treinta dólares no puede caber en cstos momentos; se ha criminalizado la pobreza. Realmente, en honor al tiempo, y con estos ejemplos demuestro que no hay, no hay razón para no otorgar estos indultos a todos los internos que nos están mirando en estos momentos. Y aquí están las sentencias, están las sentencias, y me he permitido traerlas, a efectos de que puedan leer las personas que estén interesadas. En el caso, en el caso de los ex Gerentes de la AGD, voy a ser preciso en el caso, no existe delito, jamás cometieron delito alguno. Lo que se pretendía es establecer que Wilma Salgado y el coronel Arboleda, habrían contratado un abogado, en contra de las disposiciones de la Ley de Contratación Pública. Absurdo más grande, absurdo más grande, porque a ese momento, o en ese momento estaba vigente la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, que le facultaba, no al Gerente, sino al Directorio de la AGD, que era el ente de Gobierno, de la AGD, tomar las decisiones para contratar servicios especializados para la recuperación de la cartera vencida. Efectivamente, lo que se logró es recuperar aproximadamente más de ciento sesenta y tres millones de dólares, en el caso de la doctora Wilma Salgado, y en el caso del coronel Arboleda, que habría contratado igual, habría contratado igual un profesional en el Derecho, para ejercer la defensa en contra de Aspiazu, cuya sentencia habría favorecido al pueblo ecuatoriano, en una recuperación de cuatrocientos cuarenta y dos millones. ¿Donde está el peculado?, ¿cuál es el perjuicio al Estado? Ninguno. ¿Cuál es el presunto delito? haber violentado el procedimiento de la Ley de Contratación, para supuestamente haber beneficiado a un abogado, que entre los honorarios de los dos casos, tres millones de dólares, hay recuperación, en el caso de Arboleda, de cuatrocientos cuarenta y dos millones; y, en el caso de la doctora Wilma Salgado, de más de ciento setenta millones de dólares. No hay delito, no hay delito, es una verdadera injusticia. Lo que sí se puede evidenciar en los dos

casos, es una persecución política de los grupos de poder enquistados en la Función Judicial y en el Ministerio Público. Igual circunstancia, para el doctor, abogado Villacís. Todas las decisiones de la AGD, la AGD es una persona jurídica de derecho público con autonomía y con un gobierno de un Directorio que era el que tomaba las decisiones. La fusión del Filanbanco con La Previsora, no se da en una decisión unilateral del abogado Villacís, sino por disposiciones y dentro del marco legal vigente a esa fecha y, adicionalmente, porque contó con todos los informes técnicos, jurídicos, financieros de la Junta Bancaria. ¿Quién tomó la decisión amparado en la ley?, El Directorio dc la AGD, y no a título personal, del abogado Luis Villacís. Por estas circunstancias, por estas precisiones, yo quiero pedirles a todos los compañeros aquí presentes, de que esta nochc se haga justicias a favor de los tres ex gerentes de la AGD, por considerarlos unos perseguidos políticos por la justicia y por los grupos de poder económico. Gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Chávez Hólger. ----------

EL ASAMBLEÍSTA CHÁVEZ HÓLGER. Señor Presidente, compañeros asambleístas, pueblo del Ecuador, y en estos momentos, la provincia Bolívar, también está siguiendo los pasos de lo que sucede en este cuerpo Constituyente. Como hombre identificado en las luchas por los movimientos sociales, como defensor de trabajadores, maestros, grupos sociales, se ha planteado hoy algunos pedidos de amnistía a este cuerpo Constituyente. No me cansaré en repetir, de la facultad y la atribución que tiene este cuerpo Constituyente para abordar este tipo de aspectos que son de interés colectivo, sobre todo de gente identificada con la lucha junto al pueblo. La palabra amnistía, ya lo han dicho los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. La misma

raíz, que proviene de amnesia, que significa olvido, implica necesariamente, que todas las partes involucradas deben por fuerza olvidar esos hechos. Y me quiero referir en esta noche, señor Presidente, compañeros de la Mesa Diez, he presentado hace algunos meses, dos pedidos de amnistía para luchadores sociales de la provincia Bolívar, del cantón Chillanes y del cantón Las Naves. Ellos estaban convencidos que se iba a tomar en cuenta el pedido de amnistía de los amigos y hermanos de la provincia Bolívar, y que en una delegación se encuentran en la parte de afuera, convencidos que la amnistía se abordaría. Pero la sorpresa, que no se ha tratado el tema de la amnistía de la provincia Bolívar. En el caso específico de Las Naves, un grupo de integrantes de la Junta Cívica, los concejales, indignados por actos de corrupción en el gobierno municipal, atraco de los recursos del pueblo. El pueblo espontáneamente se toma el municipio y se paralizan las actividades, y el alcalde inicia una acción penal contra ellos, y están con orden de captura, y pedimos la amnistía, y quiero dar en esta noche, nombre y apellido. La Asambleísta de la provincia Bolívar, María Pazmiño, cabildeando, ha hecho y está haciendo todo lo posible para boicotear e impedir que las amnistías se traten en la Mesa Diez. Yo estoy identificado con el proceso constituyente de cambio, pero ella está defendiendo a un alcalde socialcristiano, a dos alcaldes socialcristianos, están en comunión, señor Presidente, boicoteando las amnistías de la provincia Bolívar...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta, le pido que acepte, la Presidente de la Mesa está pidiendo un punto de orden, para su información, o un punto de información. ----------

LA ASAMBLEÍSTA. ROMO MARÍA PAULA. Sí, señor Presidente, Ambos. Como punto de información, la Mesa aún ni ha tratado ni ha votado ese

informe ni ese caso, mal podríamos estarlo tratando aquí. Lamento si es que hay personas que así lo esperaban pero talvez es una mala información que les dio el Asambleísta. Y como punto de orden, no se puede referir a otro tema que no esté puesto en la agenda, y ese tema ni siquiera ha sido puesto en la agenda de la Mesa diez, tampoco en la de este Pleno. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Espero que usted pueda retomar y ser preciso, por favor. ----------

EL ASAMBLEÍSTA CHÁVEZ HÓLGER. ...señor Presidente, de los luchadores sociales y de los pedidos de amnistía... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Pero está en trámite eso. ----------

EL ASAMBLEÍSTA CHÁVEZ HÓLGER. Señor Presidente, yo voy a concluir. Está firmado por los asambleístas Lenin Hurtado y Guamangate, pero hay el deliberado propósito de frenar este pedido de amnistía para el cantón Las Naves y el cantón Chillanes. Están protegiendo y favoreciendo contra quienes existen indicios de corrupción, con documentos debidamente probados. Y qué absurdo, y hoy en día en la mañana tratamos sobre la administración de justicia. Ellos, gente honesta y trabajadora, con orden de captura, señor Presidente, y el alcalde, contra quien hay acciones de carácter legal por peculado, no ha pasado absolutamente nada, y se quiere que reine y se imponga la impunidad, para que estos luchadores sociales que están afuera, vayan a la cárcel, señor Presidente. Yo estoy apoyando las amnistías en los casos de los luchadores sociales, de la gente honrada y de la gente honesta, en este sentido estoy apoyando. Pero no está bien que la Asambleísta de la provincia Bolívar, María Pazmiño, está

boicoteando a toda costa, para que aquello no sea realidad. Y lo confieso, ellos se van a declarar en huelga de hambre, y si ellos se declaran en huelga de hambre, al obstruirse el proceso de las amnistías en la Mesa Diez, y no llega al Pleno, me sumaré a ellos, señor Presidente y compañeros asambleístas, porque soy un hombre que se indigna de los actos de injusticia, y ellos el único error que han cometido, es querer purificar una institución plagada de corrupción. Y posteriormente, señor Presidente, iremos dialogando con los compañeros de la Mesa Diez, algunos están apoyando, y otros se están oponiendo, y prepararemos acciones. Eso no es una amenaza, es una sentencia, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Por favor, le voy a tener que suspender la palabra, usted no se ha referido al punto que está en trámite. Se ha referido a las amnistías, a algo que está en proceso. Deje para que intervenga cuando eso se produzca... ----------

EL ASAMBLEÍSTA CHÁVEZ HÓLGER. Es que me adelanto, porque hay el deliberado propósito de no dar el trámite, y proteger a dos alcaldes contra quienes existe...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. No usted no puede suponer. Le retiro la palabra, disculpe, señor. Tiene la palabra la asambleísta Alvarado. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ALVARADO ROSANA. Gracias, Presidente. Hay mucha diferencia entre adornarse las carnes con arrebol y colonia, y hacerlo con tatuajes, que después nadie ha de borrar ya. Al escribir, "La Familia de Pascual Duarte", Camilo José Cela habla de una historia tremendista de marginación, de incultura, de dolor y de angustia; habla

de un hombre en la cárcel. No podría yo hablar de memoria, de artículos, textos y normas legales que hayan sido injustas, desproporcionadas, exageradas y antisoberanas, sin referirme a una Ley como la de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Sin embargo, voy a mencionar algunos criterios, como los de Natalia Rivas Mateo y Alexandra Martínez, que son españolas, que han hecho un estudio bastante profundo acerca de las mulas y los correos del narcotráfico. Allí se justifica y se ve necesario el indulto a los denominados correos del narcotráfico. Penaliza la pobreza, esta ley penaliza la pobreza. Un alto porcentaje de los correos del narcotráfico son mujeres de escasos recursos económicos, cabezas de familia, de varios hijos a cargo. En la organización del narcotráfico, existe una división del trabajo, y quienes realizan esta actividad, la de mulas o correos, ocupan las últimas posiciones en esa división, y son las tareas peor remuneradas. Estas personas conocidas de diferentes maneras, aunque el término más frecuente es el de "mulas"; es decir, correos humanos que utilizan su cuerpo para el tráfico ilegal de sustancias. Su nombre procede desde los años setenta, cuando los narcotraficantes utilizaban estos animales, para el contrabando de drogas. Sobre las cantidades que se transportan. Solo por poner ejemplos, en las ciudades más grandes, como Quito y Guayaquil, parten cada semana como mínimo ciento cuarenta personas que actúan como mulas, cada una de ellas portadora como promedio, entre un kilo y un kilo y medio de sustancia estupefaciente, al interior de su cuerpo, que no es la única forma de transportar. Las personas que actúan como correos humanos, apenas reciben por este malévolo trabajo, apenas las migajas, apenas trescientos dólares o cuatrocientos dólares en promedio. Cuando se lleva en la maleta, en la valija y en paquetes, en general, el peso sobrepasa los dos kilos, que hoy proponemos al Pleno. La sanción, en cambio, cuatro años, seis años, ocho, doce o hasta dieciséis años, lo

mismo que por haber matado a una persona. ¿Quiénes son los correos?, ¿quiénes son las mulas?, ¿qué causas les llevan a prestarse para este delito?, porque sigue siendo un delito. Son diversas las causas, aunque la más común, la obvia, es la necesidad de un sustento. Suelen ser, dicen estas mismas tratadistas, sobre todo personas sin antecedentes penales, con hojas de vida completamente limpias. Las mujeres que actúan como mulas, en muchos casos sirven como señuelo para confundir a las autoridades y poder pasar un cargamento mayor de drogas. Son utilizadas por las redes del narcotráfico, para seguir engordando espectacularmente sus bolsillos. Son detenidas y condenadas a penas desproporcionadas, por el sistema penal. Son estigmatizadas por la sociedad. Una carga demasiado dura, terrible, para personas que en muchos casos no encontraron otro camino para seguir sobreviviendo. Las personas que hacen de mulas son contactadas por amistades directas o indirectas que ya están en este "negocio", y que se llevan una comisión por cada nuevo contacto, por cada nueva persona que actúe así, y que generalmente ocupan lugares bajos dentro de esta jerarquía de la organización. Muchos caen también por esos anuncios que todos los días aparecen en la prensa, obligando siempre a acceder por esta forma de dinero fácil y seguro. Son también las personas que denuncian a las mulas para distraer la atención policial con ellas, y en cambio pasar los grandes contenedores, los grandes contrabandos. Las formas de transportar la droga son variadas: introducidas en el cuerpo, en bolsas de silicona, en la suela de los zapatos, impregnadas en las prendas de vestir, en las maletas con doble fondo y, en fin, una cantidad de formas mañosas, que logran desviar la atención. En muchos casos se procede con la ingestión de la droga. Para los narcotraficantes, este sistema humano del transporte de la droga viene a ser el más efectivo, porque se burla asi de los perros y los sistemas de control. Varios testimonios indican, varios testimonios

de personas que han sido detenidas, indican que primero les enseñan a tragar sin masticar, trozos de productos sólidos, para acostumbrar el esófago y así evitar luego los vómitos. La persona tiene que suspender la ingestión de alimentos sólidos, cualquiera que éste sea, y tomar solamente agua. Más adelante, se empaqueta la droga en cápsulas, aunque el riesgo de morir signifique un riesgo muy alto, muy elevado. Envuelta la droga, se amarran las capas con seda dental y se sumergen en cera dc abejas. Para poder resistir un viaje de doce o de quince horas en avión, estas personas toman medicamentos que retardan los movimientos digestivos y que actúan como tranquilizantes. Nadie puede asegurar que una persona que trabaja como mula, tenga posibilidades de culminar su tarea con éxito. Cada vez que llenan su cuerpo de droga y vuelan lejos de sus países de origen, están enfrentándose a la posibilidad real de ser detenidas, de tener problemas fatales o incluso morir a causa de la droga que portan, sus sueños se acaban estrellando contra los muros de una prisión lejana o contra el estallido de una sola de las cápsulas que llevan en sus entrañas. Sobre el indulto general o sobre esta resolución que contiene la aplicación de un indulto general, no es la primera vez que en el Ecuador así se procede. No necesariamente tenemos que mencionar los nombres de todas las personas beneficiadas, y prueba de ello es que en el Registro Oficial del diez de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, en el que se incluye lo resuelto en la sesión del diez de agosto de ese mismo año, la Cámara Nacional de Representantes del Ecuador, declaró la amnistía general para supuestos delitos políticos, y el indulto colectivo a todas las personas que estén perseguidas, a todas las personas que estén encarceladas o enjuiciadas, o las que hayan sido sentenciadas por su discrepancia, por la dictadura. En esta declaración, también quedaron comprendidos, añade luego la resolución, los profesores de la UNE y los dirigentes obreros y estudiantiles. Así que no estamos descubriendo

nada que no se haya hecho antes, en el año setenta y nueve, y plenamente justificado. El indulto o la necesidad del indulto no es más que la consecuencia de una ley antisoberana, a cambio de preferencias arancelarias, de visas, de altares y de premios, con los que se ha jugado con varios jueces. El sistema penal establece figuras delictivas para las actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes. No obstante, quienes realmente resultan más vulnerables, son aquellos que constituyen el eslabón más frágil y visible de este negocio ilegal, y quienes en último término son susceptibles de un mayor control punitivo; son los pobres, son los débiles, gran parte de ellos son las mujeres. Una ley como la que tenemos, que sanciona y penaliza ser pobre, ser pobre, y no penaliza el narcotráfico; una ley que no establece ninguna distinción ni diferencia entre quien es un consumidor y quien es el verdadero narcotraficante; una ley que no establece ninguna diferencia entre las cantidades de las drogas con las que se les ha encontrado a las mulas. Ningún correo de drogas, casi ninguno no ha tenido siquiera la posibilidad de pagar un solo abogado defensor. Ellos también, recogiendo las palabras de Martha Roldós, son ciudadanos de a pie, no tienen un nombre, sino un número, como dice "Los Nadie", de Eduardo Galeano. Rosa Elena de la Torre, me decía: trato de imaginar ¿cuáles serían los miedos del Legislador al momento de aprobar una ley de drogas como ésta con tanta desproporción entre delito y pena, y en relación a los delitos del Código Penal? ¿Qué sería?, decía ella. ¿Imposición de un imperio? ¿de las mafias, de las drogas?, ¿cuál sería la razón? La desproporción de la pena, que ya habíamos dicho, no existe aquí ninguna diferenciación en la ley sobre la cantidad que se está transportando, pero son diferenciaciones que nosotros desde la Mesa Legislativa sí las hemos establecido, y creo que por lógica y por sentido común no debemos mantenerlos en lo que dice el Orden del Día, sino lo que se establece en la resolución. Porque entonces ahí sí, de

acuerdo a lo que dicen los asambleístas Cisneros y Logroño, tenemos que tomar en cuenta el verbo que se está aquí estableciendo. Si nadie dice quienes transportan, lo que se establece con claridad es todo un artículo que...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ALVARADO ROSANA. ...establece los requisitos. Es por vez única, no es este un derecho, sino es una excepción, y se sostiene que necesitamos haber recibido sentencia, las personas para beneficiarse de esto tienen que tener una sentencia, no pueden llevar más de dos kilos, y tampoco se concede esto a quienes hayan reincidido. Finalmente, al asambleísta Logroño, estoy de acuerdo, lo que se necesita es una nueva ley. Ojalá para cuando haya posibilidades de tramitar esa ley, no se olvide que fue parte de su tesis. Muchas gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Rolando Panchana. ----------

EL ASAMBLEÍSTA PANCHANA ROLANDO. Gracias, señor Presidente. Compañeros y compañeras asambleístas: "Voy a perseguirlo como perro con hambre", "voy a perseguirlo como perro con hambre". Hago referencia a esta frase, porque esa es la frase que marca lo que estamos decidiendo esta noche aquí, señor Presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Esa frase que para los guayaquileños y para los ecuatorianos que la escuchamos y la leimos, anticipaba cuál sería el siguiente capítulo de una vieja rencilla política entre dos ex presidentes de la República. Y así fue, a raíz de esa frase, cuando el Presidente Gustavo Noboa Bejarano toma la decisión, toma la decisión de inyectarle liquidez al Filanbanco y al Banco del Pacífico, que estaban en

riesgo de quiebra, y no lo digo yo, lo dice en un informe actualizado, hoy, León Roldós Aguilera, que no es de este partido, pero a quien respeto por su conocimiento de la materia. De no dársele liquidez al Banco del Pacífico, éste seguramente quebraba y se acrecentaba la crisis bancaria y sus secuelas sociales y económicas. Y ¿qué hubiera pasado, señor Presidente, señores y señoras asambleístas?, quinientas mil familias, por lo menos, quinientas mil, las más pobres que estaban con sus depósitos en esos bancos, de menos de trescientos dólares, hubieran pasado a la larga lista de perjudicados de la crisis bancaria de esa época. Aquí no estamos juzgando una administración política, aquí no estamos juzgando la renegociación de la deuda externa ejecutada en el Gobierno de Gustavo Noboa. Aquí estamos juzgando las consecuencias de una frase que, por esta decisión, y solo por ésta movilizó todo el poder sobre la justicia ecuatoriana, en fiscales, jueces y adláteres, que muy diligentes empezaron un proceso récord, récord, para cumplir las consecuencias de esa frase. Después de los años que han transcurrido, ya son cinco y más, el resultado frio, ¿cuál es, señor Presidente? Y le agradezco al asambleísta Taiano el haber hecho referencia a lo que él investigó cuando fue Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. ¿Encontró delito? No. ¿Han encontrado delito los jueces en este proceso para el que se pide la amnistía, en éste? La respuesta es no. Pero sí encontraron, aún el año pasado, a un encubridor. Y yo me pregunto, porque no soy graduado de abogado aunque estudié derecho, y no soy economista tampoco, pero entiendo bien de cómo debo contar esta historia, que simplemente decirles la misma verdad que durante diecisiete años le he dicho a la gente en el ejercicio de mi profesión. ¿Qué entiendo?, ¿cómo puede haber encubrimiento si no hay delito?, ¿cómo puede encubrirse algo que no es delito? Pero no, en la maravilla de la justicia ecuatoriana existe esa realidad, y hoy el ex presidente Gustavo Noboa y sus colaboradores son

juzgados como encubridores de un delito que no existe. Es esa la verdad. Y como aquí se ha citado al grupo de la deuda, en un informe que diligentemente se repartió, y está bien, a todos los asambleistas, un informe del quince de mayo, hay que decirlo claro, y sino que me desmienta la Presidenta de la Mesa Diez. Lo que dice en ese informe, es que tal como estaba redactado se podía malinterpretar el tema, se podría concluir que se estaba amnistiando el procedimiento de renegociación de los bonos de la deuda. Y por eso, con fecha dos de julio, María Paula Romo, dice claramente aquí, que "acoge la Mesa, la preocupación del grupo nacional de la deuda, y propone para su conocimiento y de los miembros de la Asamblea, una redacción que despeja cualquier duda". Y aquí dice en el artículo cuatro: "La decisión adoptada no significará, en ningún caso, extinguir cualquier acción derivada de las medidas económicas y políticas llevadas a cabo durante la gestión del doctor Gustavo Noboa Bejarano, en especial todo el proceso de renegociación de la deuda pública y la consecuente emisión de bonos Global que son materia de investigación". Y yo voy más allá, señor Presidente, compañeros y compañeras asambleístas, no sé donde me lleve la vida después del veintiséis de julio, no sé, porque soy creyente y solo Dios sabe qué pasará después del veintiséis de julio. Pero hoy digo que apoyaré esa investigación a la renegociación de esa deuda y de toda la deuda cxterna, y la voy a suscribir, porque es justo que se investigue y que se sancione por eso. Y si a Noboa y sus colaboradores se los tiene que sancionar por eso, que se lo haga, pero por una justicia que nazca de aquí, una justicia nueva, independiente, absolutamente consecuente con las aspiraciones del pueblo, y no por una justicia servil, muñequeada, que sirvió nada más para cumplir la consigna de esa frase. Eso es lo que se está juzgando esta noche, y por eso digo que si se tiene que juzgar a ese Presidente, a esos negociadores y a todos lo que estuvieron en esa historia triste para el pueblo

ecuatoriano, que se lo haga, pero con nuevas reglas, las reglas que estamos construyendo aquí y que le van a garantizar al pueblo, que no más persecuciones politicas, que no más judicialización de la política ecuatoriana, porque para esto estamos trabajando. Esa es la realidad, y que no nos confundamos, aquí no está en tela de duda ni la investigación del grupo de la deuda, que la formó este presidente Rafael Correa, coherente con su pensamiento, ni ninguna renegociación de la deuda. Aquí de lo que se trata es de corregir un renglón torcido de la historia, tal y cual lo hicimos cuando amnistiamos a los comandos de Taura. Esa es la verdad, esa es la realidad que hay que decirla con valentía al país. Termino, señor Presidente, pidiéndoles a los asambleistas, que haciendo un acto absoluto de justicia, perdón, porque por primera vez voy a leer algo, nos acordemos, nos acordemos de la frase de otro ex Presidente guayaquileño... ----------

EL SEÑORE PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA PANCHANA ROLANDO. Gracias, señor Presidente. "El momento de la pasión enceguecida tendrá que pasar, pasará. La acción emponzoñada tendrá que hundirse, y se hundirá en la noche de remordimicntos de muchas conciencias, y entonces, solo entonces es posible que la verdad sea canción entonada por labios juveniles y luz encendida por pensamientos nuevos". Señor Presidente, compañeros y compañeras asambleistas, encerremos para siempre en la celda del olvido de la historia, a los perros hambrientos, encerremos la voracidad que significó judicializar la política ecuatoriana hace unos años, y abramos el camino de la nueva justicia y de la reconciliación nacional, que a raíz de esta Constitución que estamos construyendo en Montecristi, tiene que salir para beneficio del pueblo. Buenas noches, muchas gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señores asambleístas, suspendo...----------

EL ASAMBLEÍSTA ACOSTA ALBERTO. Me gustaría, señor Presidente, que se nos indique ¿quiénes firmaron la resolución del dos de julio? La del once de abril está firmada por los miembros de la Mesa, ésta solo está firmada por la Presidenta de la Mesa. A mí me gustaría que me informe ¿quién firmó esta resolución del dos de julio? que creo que no se ajusta a los reglamentos. Gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta María Paula Romo, por favor. ----

LA ASAMBLEÍSTA ROMO MARÍA PAULA. Señor Presidente, como se ha hecho en otros casos, la Mesa analiza el informe y recomienda otorgar o no otorgar la amnistía, y solamente envía un proyecto de Resolución. Es el Pleno el que redacta la Resolución y le hace cualquier reforma. De esa manera, cualquier miembro de esta sala, podría en los papeles, en los documentos que nosotros tenemos para aportar, presentar en la Secretaría una reforma a cualquier Resolución u otro proyecto de Resolución, y es el Pleno el que decide cuál es la Resolución que se vota. La Mesa solamente hace una propuesta, la carta que se ha entregado hoy es mi propuesta, como redacción para la Resolución, y es una propuesta que precisamente responde a las cartas enviadas por el grupo nacional de deuda. Es solo una propuesta, y es el Pleno el que debe considerarla y someterla a votación, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Suspendo veinte minutos, la sesión, para que tomen un refrigerio. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señores asambleistas, hoy café con bolones. Gracias. ----------

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Acta 076

EL SEÑOR PRESIDENTE DECLARA EN RECESO A LA SESIÓN CUANDO SON LAS VEINTE HORAS DIEZ MINUTOS. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, se reinicia la sesión. -------

EL SEÑOR SECRETARIO. Sí tenemos quórum señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE REINSTALA LA SESIÓN CUANDO SON LAS VEINTIÚN HORAS DOS MINUTOS. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tal como habíamos señalado, al comenzar el debate del punto tres, el tratamiento del punto tres, se ha cerrado el debate. De uno en uno, en el orden que está previsto en el Orden del Día, usted lee las propuestas existentes de Resolución, y si no hay modificación de ningún Asambleísta, pues procederemos a votar de una en una. Empezamos por la de Carlos Alberto Simbaña. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. En este momento, señor Presidente. "La Asamblea Constituyente. Considerando. Que, el Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente de 11 de diciembre de 2007, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.236 de 20 de diciembre de 2007, expresa en el artículo 1: "La Asamblea Constituyente representa la soberanía popular que radica en el pueblo ecuatoriano, y por su propia naturaleza está dotada de plenos poderes"; Que, de conformidad al Mandato Constituyente No.1, artículo 7, la Asamblea Constituyente asume las atribuciones y deberes de la Función Legislativa, entre otras, la de conocer amnistías e indultos; Que, el ingeniero Carlos Simbaña Romero, en su calidad de representante legal del Consorcio Constructor Condhor Herdoíza Meneses Asociados, suscribió un contrato de construcción del Edificio

de Correos Nacionales, luego de ganar una licitación internacional examinada por la Contraloría. En la ejecución del contrato, se evidenció la negligencia, de distintos funcionarios estatales y Entidades Públicas: La Empresa Nacional de Correos, previa la firma del contrato no solicitó el informe al Ministerio de Finanzas. La Procuraduría General del Estado, tampoco se percató de esta falencia y emitió dictamen favorable para la firma del contrato. El Ministerio de Finanzas al desembolsar el anticipo, permitió que los Constructores iniciaran la obra, invirtieran el anticipo entregado y su propio capital para cumplir con el cronograma; Que, la Constitución Política reconoce al arbitraje, la medicación y otros procedimientos alternativos para la resolución de conflictos como procedimientos de última instancia. El ingeniero Carlos Simbaña y el representante legal de la Empresa Nacional de Correos (hoy Correos Nacionales del Ecuador), suscribieron el Acta de Mediación y Acuerdo Total 2000-15 en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado; Que, el Procurador del Estado en Oficio 24292 emitió pronunciamiento vinculante ratificando la validez del Acta de Medicación y Acuerdo Total 2000-15 suscrita en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado: "tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada por lo que cualquiera de las partes podrá pedir a los jueces ordinarios que ordenen su ejecución"; Que, la sentencia condenatoria expresa que no hubo perjuicio económico al Estado, cuando conforme al artículo 11 del Código Penal, solo el perjuicio da origen a la existencia del delito. Dice además que no hubo malicia sino culpa por desconocimiento de la ley, cuando solo es posible consumar el peculado con la intensión dolosa, de causar daño, según los artículos 14, 32 y 33 del Código Penal. Según la jurisprudencia, no hay peculado, si el hecho carece de uno de dos requisitos: dolo y perjuicio. En este caso la ausencia de ambos, destruye la existencia del peculado; Que, ni el Acta de Mediación ni el contrato de obra fueron

declarados nulos ni la acción fue declarada prescrita por juez civil competente; existiendo un claro caso de prejudicialidad que no fue evacuado; Que, el ingeniero Carlos Simbaña es un defensor de los derechos comunitarios, por cuanto en el año 2001, propuso y ganó un Recurso de Amparo Constitucional, en favor de la comuna de Tanda, en contra de un acto ilegítimo del Concejo Metropolitano de Quito que autorizaba rematar un bien público en beneficio de la Urbanización Rancho San Francisco. Pocos días después de esta resolución, la Comisión de Fiscalización presidida por el Diputado Carlos González, de la Izquierda Democrática, determinó el inicio de una acusación por peculado en contra del ingeniero Carlos Simbaña; Que, la persecución política y la manipulación a la justicia, se pone de manifiesto en la carta dirigida al Presidente de la Corte Suprema el -17 de septiembre de 2004- con oficio No. 258-CGA-DPA, en papel membretado del Congreso Nacional por parte del mismo señor Carlos González en su calidad de Diputado en Funciones, sugiriendo los términos en los que se debía dictar la sentencia y condenar al solicitante; Que, median motivos humanitarios por encontrarse el ingeniero Carlos Simbaña enfermo de cáncer terminal e insuficiencia renal terminal; siendo además que su estado de salud ha empeorado; Que, la amnistía también se puede conceder después de la condena, según lo dispone el artículo 109 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, título V del indulto y la amnistía: que en su parte pertinente dice: "Decretada la amnistía, no podrán ejercerse, acciones penales por tales delitos, ni iniciarse proceso penal alguno. Si con anterioridad se hubiere iniciado, la presunción punitiva en él prohibida se extinguirá mediante el auto dictado por el Juez competente que no admitirá consulta ni recurso alguno. Si se hubiere dictado sentencia condenatoria, se entenderá como no impuesta la pena, quedando cancelados todos los efectos de tal sentencia, inclusive los civiles". En ejercicio de sus atribuciones y

facultades, Resuelve. Artículo 1.- Conferir amnistía general a favor de Carlos Alberto Simabaña Romero, con cédula de ciudadanía número 1701288191. En consecuencia se extinguen todas las acciones penales y civiles, iniciadas, que pudieran iniciarse o que estén concluidas en su contra, relacionadas con el contrato de construcción del Edificio de Correos suscrito el 19 de junio de 1981 y con la transacción contenida en el Acta de Mediación y Acuerdo Total No. 2000-15 suscrita en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado el 25 de agosto del 2000. Artículo 2.- Ordenar el archivo definitivo de todos los procesos judiciales en contra de Carlos Alberto Simbaña Romero relacionados con el contrato de construcción suscrito el 19 de junio de 1981, con el Acta de Mediación y Acuerdo Total No. 2000-15, y con el pago de las indemnizaciones que la Empresa de Correos le realizó en el Acta de Mediación. Artículo 3.- La Corte Suprema de Justicia, el Tercer Tribunal Penal de Pichincha, el Ministerio de Justicia, y demás juzgados e instituciones competentes, ejecutarán de forma inmediata la presente resolución. Artículo 4.- Notifíquese el contenido de la presente resolución al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, al Ministro de Gobierno y Policía y al Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Disposición Final. Única.- La presente Resolución entra en vigencia de forma inmediata, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial". Hasta ahí el texto del proyecto de Resolución puesto a consideración por la Mesa Diez, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Si no hay otro texto presentado en la Secretaría, pida que se active el sistema de votación. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Señores asambleístas, está a consideración de todos ustedes, el proyecto de Resolución para otorgar, para conferir

amnistía general a favor del señor Carlos Alberto Simbaña Romero, en el contenido que ha sido leído. Continúe, señor operador. Quienes estén de acuerdo con la Resolución, votan afirmativamente. Caso contrario, puede votar negativo, blanco o abstención. Señores asambleístas, voten. Presente los resultados. Ochenta y seis votos afirmativos; cero negativos; cero blancos; cuatro abstenciones. Gracias, señor operador. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. El siguiente punto, señor Secretario. ---------

EL SEÑOR SECRETARIO. Procedemos a dar lectura a la Resolución respecto a la amnistía del coronel en servicio pasivo, Carlos Arboleda Heredia. "La Asamblea Constituyente. Considerando: Que la Asamblea Constituyente, de acuerdo al Mandato Constituyen No. 1, de 29 de noviembre del 2007, asumió los plenos poderes. Que, el Código Penal ecuatoriano expresa en el artículo 98, "La acción penal se extingue por amnistía, o por remisión de la parte ofendida en los delitos de acción privada, o por prescripción", Y el artículo 99 señala que "La amnistía no solamente hará cesar la acción penal sino también la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones civiles". Que, el Coronel Carlos Arboleda Heredia ejerció la función de Gerente General de la AGD dentro del período comprendido entre el 6 de septiembre del 2004 hasta el 20 de abril del 2005. Que, el Coronel Carlos Arboleda, ha sido enjuiciado penalmente por el presunto delito de peculado por haber contratado un profesional del derecho al margen de la Ley de Contratación Pública, cuando en realidad correspondía sujetarse a la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, que creó la AGD, consecuentemente, no era aplicable para el efecto la Ley de Contratación Pública, evidenciando con ello una instrumentalización, coordinación y enlace del Ministerio Público, con la función Judicial

para perseguirlo políticamente. Que, la politización de la justicia en materia procesal penal afecta gravemente a la seguridad jurídica, al debido proceso y al derecho humano a la libertad cuya privación se ordena ilegítimamente. En ejercicio de los plenos poderes de que se encuentra investida. Resuelve: Artículo 1.- Conceder Amnistía a favor del Coronel Carlos Arboleda, por la evidente persecución política. Artículo 2.- Ordenar el archivo definitivo de todos los procesos judiciales penales, que se hubieren iniciado o se encuentran sustanciándose en contra del Coronel Carlos Arboleda Heredia, relacionados con su gestión en calidad de Gerente de la AGD. Artículo 3.- La Función Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia cumplan con lo dispuesto en esta resolución. Disposición Final. Única.- La presente resolución entrará en vigencia de forma inmediata, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial". Hasta ahí el texto presentado por la Mesa Diez, y que está a su consideración. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Ochenta y siete asambleístas presentes. Esta a consideración de ustedes, el proyecto de Resolución que ha sido leído, para otorgar amnistía a favor del Coronel Carlos Arboleda Heredia. Señores asambleistas, pueden votar. Quienes estén de acuerdo con la Resolución, votan afirmativamente. Caso contrario, pueden votar negativo, blanco o abstención. Voten, señores asambleístas. Presente los resultados, por favor. Setenta votos afirmativos; siete negativos; un blanco; nueve abstenciones. Gracias, señor operador. "3.3. Varios ciudadanos del Cantón Vinces". Procedo a dar lectura el proyecto de Resolución. "La Asamblea Constituyente. Considerando: Que, fue de conocimiento público el levantamiento de la Comunidad del Cantón Vinces, de la provincia de Los Ríos, del 1 al 5 de febrero del 2007, contra sus autoridades municipales, reclamando incumplimientos de sus fines establecidos en la ley. Que, de la revisión del auto Instructivo del Fiscal se evidencia que se ha seguido una acción amparada en el

artículo 160 del Código Penal, que tipifica y sanciona actos de agrupaciones guerrilleras, de comandos y terroristas, sin que en las que la reclamación de las comunidades de Vínces, suscitadas del 1 al 5 de febrero del año 2007 pueda considerarse como tal y por otro lado del estudio realizado no existen informes que sostengan que se actuó con tácticas militares de atacas breves, repentinos, con voladuras de instalaciones, puentes, con secuestro de armas y provisiones ni se trata, se trató de un grupo de soldados armados y entrenados en un ejército regular o irregular para que se considerasen comandos, ni se ha utilizado medios explosivos, químicos, biológicos, secuestros con ánimo de causar terror en una población civil, de tal manera que puedan encuadrarse los actos de protesta, en tal tipicidad. Que, es obligación de todos, especialmente del Estado guardar la proporcionalidad de sus actos, sanciones y defensa de sus derechos, por lo que resulta un exceso el inicio de acciones a título de guerrilla, comando y terrorismo, que atenta a los derechos humanos y jurídicos de los acusados. Que, el diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas recoge la definición de que la amnistía es "acto de poder soberano que cubre con el velo del olvido las infracciones penales de cierta clase, dando por conclusos los procesos comenzados, declarando que no deben iniciarse los pendientes o bien declarando automáticamente cumplidas las condenas pronunciadas o en vías de cumplimiento". Que, en la Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja se expresa: "La amnistía entraña el olvido de la infracción, la eliminación de la acción penal y la condenación de la pena". Además señala que es "un perdón a favor de todos los que hubieren participado en la comisión de un delito político, es decir, de un número de personas que puede ser indeterminado, por lo cual requiere una norma de carácter general". Explica también que las motivaciones de la amnistía suelen ser de dos clases: la reparación total o parcial de una injusticia a favor de quien ha sido indebida o

excesivamente castigado, o la conveniencia de reconciliar y devolver la paz a una sociedad desgarrada por determinados acontecimientos políticos". Que, el Código Penal ecuatoriano coincide con la doctrina y expresa en el artículo 98 "La acción penal se extingue por amnistía, o por remisión de la parte ofendida de los delitos de acción privada, o por prescripción", y el artículo 99 señala que "La amnistía no solamente hará cesar la acción penal sino también la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones civiles". Que, de acuerdo con el Mandato Constituyente No. 1, artículo 2, incisos segundo y tercero, "Las decisiones de la Asamblea son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma del orden jurídico y de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales, jurídicas y demás poderes públicos, sin excepción alguna. Ninguna decisión de la Asamblea Constituyente será susceptible de control o impugnación por parte de alguno de los poderes constituidos. Los jueces y tribunales que tramiten cualquier acción contraria a las decisiones de la Asamblea Constituyente serán destituidos de su cargo y sometidos al enjuiciamiento correspondiente. De igual manera, serán sancionados los funcionarios públicos que *incurran o promuevan, por acción u omisión*, el desacato o desconocimiento de las disposiciones de la Asamblea Constituyente". Por lo que, en uso de sus facultades contempladas en el Mandato Constituyente Número 1 y en el Reglamento de la Asamblea Constituyente; Resuelve: Artículo 1 Conceder Amnistía General a todas las personas detenidas, indiciadas, acusadas, bajo investigación o por investigarse por las causas y los hechos violentos ocurridos durante las protestas del 1 al 5 de febrero del 2007, en los alrededores de la Municipalidad del Cantón Vinces de la provincia de Los Ríos. Artículo 2 Ordenar el archivo definitivo de todos los procesos penales que se hubiesen iniciado o desarrollado por las causas y los hechos violentos ocurridos durante las protestas del 1 al 5 de febrero del 2007, en los

alrededores de la Municipalidad del Cantón Vínces, de la provincia de Los Ríos. Artículo 3 Exhortar a la población civil del Cantón Vínces y a la sociedad en general a no repetir los actos contra las personas y bienes que ocasionaron los daños y paralización de actividades del Municipio de Vinces, debiendo presentar sus protestas de manera cívica, pacífica y utilizando los mecanismos legales, en procura de justicia y equidad. Articulo 4 Comunicar y encargar a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio de Justicia, al Ministerio Público, al Ministerio de Gobierno y Policía, y a las instituciones competentes, la ejecución inmediata de la presente resolución. Disposición Final. Única.- La presente resolución entrará en vigencia de forma inmediata, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial". Hasta ahí el proyecto de Resolución. Señor operador... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta... Perdón, señor Secretario, me está pidiendo la palabra la asambleísta Sotomayor. ----------

LA ASAMBLEÍSTA SOTOMAYOR FANNY. Gracias, señor Presidente, Compañeros compañeras: Como vinceña y Asambleísta de la provincia de Los Ríos, gestora de esta amnistía, les puedo informar con pleno conocimiento de causa lo ocurrido en mi ciudad, durante el primero al cinco de febrero del dos mil siete, y sobre la humillación y persecución que han sufrido dieciséis conciudadanos vinceños, y con ellos toda su familia. Vinces, los últimos años ha sufrido la desatención de nuestro gobierno municipal, con escándalos de nepotismo, denuncias de corrupción, de falta de contrapartidas físicas en obras municipales; faltas de servicios básicos, que justifiquen los más de ocho millones de dólares recibidos durante dos años de administración, en aquella época, todo lo cual consta en los expedientes de la propuesta de amnistía de mis conciudadanos. Como vinceña, me consta que durante todo el

año, todo el mes de enero del 2007, la ciudad permaneció casi, literalmente, sin agua potable, los botaderos de basura estaban cerrados, la insalubridad en los barrios periféricos trajo el dengue hemorrágico... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta, le interrumpo. Hay una propuesta en consideración. ¿Usted tiene una alternativa? o ¿está apoyando? ----------

LA ASAMBLEÍSTA SOTOMAYOR FANNY. Sí, yo la estoy apoyando, y como gestora yo pedí la palabra y quería indicar, más o menos los... ---

EL SEÑOR PRESIDENTE. Sí, pero ya cerramos el debate. ----------

LA ASAMBLEÍSTA SOTOMATOR FANNY. Bueno. Entonces déjeme pedirles que me apoyen, este es mi tiempo propuesto por mi, porque yo soy vinceña, y como vinceña, entonces fui a la Mesa Diez, a gestionar. Entonces les dio la palabra a todos los contrarios, y no me dio a mí que fui la gestora. O sea, le dio la palabra a mi compañera Gissel Rosado, que es de mi provincia, y yo que soy de Vínces, no me da la palabra. Entonces por eso estoy pidiendo la palabra, y quiero hablar lo que quería decir por mis compañeros de Vinces. Con esto culmino. Les voy a pedir a todos ustedes, compañeros y compañeras, que se acojan al pronunciamiento de la Mesa Diez de Legislación y Fiscalización, que por unanimidad de los asambleístas presentes en la votación de la Mesa, aprueba y acoge la propuesta del proyecto de Resolución de amnistía que presenté, como vinceña y asambleísta de Los Ríos. Y se conceda la amnistía de todas las personas acusadas y perseguidas por los actos de protesta ocurridos entre el uno al cinco de febrero del 2007, en las inmediaciones de la Municipalidad de Vinces, y se disponga que

archiven definitivamente tan desproporcionados procesos. Quiero dejar constancia hoy día, que no se me dio la palabra, siendo yo la gestora de esta amnistía, señor Presidente. Quiero dejar mi voz de protesta, porque yo como gestora tenía que haber tenido la palabra primero que mis compañeros, y siempre les dan la oportunidad a los compañeros de la derecha, y esto lo quiero dejar plasmado en esta sala y en este Pleno. Muchas gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, active la votación. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas electrónicas se encuentren insertas en sus curules. Noventa y seis asambleístas presentes. Se pone a consideración de ustedes, el proyecto de Resolución para conceder amnistía general a todas las personas detenidas, indiciadas, acusadas o bajo investigación, respecto a los hechos violentos ocurridos durante las protestas en el Cantón Vinces. Quienes estén de acuerdo, voten afirmativamente. Caso contrario, pueden votar no, blanco o abstención. Señores asambleístas, voten. Presente los resultados, por favor. Ochenta y cuatro votos afirmativos; cero negativos; dos blancos; diez abstenciones. "3.4 Doctora Wilma Salgado Tamayo". Procedo a dar lectura al proyecto de Resolución presentado. "La Asamblea Nacional Constituyente. Considerando: Que, la Asamblea Constituyente, de acuerdo al Mandato Constituyente No. 1, de 29 de noviembre del 2007, asumió los plenos poderes. Que, el Código Penal ecuatoriano expresa en el artículo 98 "La acción penal se extingue por amnistía, o por remisión de la parte ofendida en los delitos de acción privada, o por prescripción", y el artículo 99 señala que "La amnistía no solamente hará cesar la acción penal sino también la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones

civiles". Que, la doctora Wilma Salgado Tamayo, ha sido enjuiciada penalmente por el presunto delito de peculado por haber contratado a un profesional del Derecho, sin haber presuntamente observado los procedimientos precontractuales previstos en la Ley de Contratación Pública. Que, de la investigación realizada por la Comisión de la Mesa de Legislación y Fiscalización y de la presentación del Defensor del Pueblo de 3 de junio del 2008, sobre el pedido de amnistía a favor de la doctora Wilma Salgado Tamayo, es evidente que en la causa se produjo una persecución política porque ejecutoriado por el ministerio de la ley lo resuelto por el Juez Cuarto de lo Penal de Pichincha, sobre su no responsabilidad penal en lo actuado por ella, en el ejercicio de la Gerencia General de la Agencia de Garantía de Depósitos, en virtud del silencio de la Segunda Sala de lo Penal de Pichincha, esta última revocó lo ya ejecutoriado. Que, la politización de la justicia en materia procesal penal afecta gravemente a la seguridad jurídica, al debido proceso y al derecho humano a la libertad cuya privación se ordena ilegítimamente. En ejercicio de los plenos poderes que se encuentra investida. Resuelve: 1.- Conceder amnistía a favor de la doctora Wilma Salgado Tamayo, ex gerente de la AGD, por la persecución política por la cual ha sido objeto. 2.- Ordenar el archivo definitivo de todos los procesos judiciales penales, que se hubieren iniciado o se encuentren sustanciándose en contra de la doctora Wilma Salgado Tamayo por sus acciones como gerente de la AGD. 3.- La Función Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia cumplan con lo dispuesto en esta resolución. Disposición Final. Única.-La presente resolución entrará en vigencia de forma inmediata, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial". Hasta ahí el texto de la Resolución, señor Presidente. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Está a consideración de ustedes, el proyecto de Resolución para otorgar amnistía a la doctora Wilma Salgado Tamayo. Noventa y cinco asambleístas presentes.

Continué, señor operador. Quienes estén de acuerdo con el proyecto de Resolución, voten afirmativamente; caso contrario, pueden votar no, blanco o abstención. Voten, señores asambleístas. Presente los resultados, por favor. Ochenta y un votos afirmativos; cero negativos; cero blancos, catorce abstenciones. "3.5. Abogado Luis Villacís Guillén". "La Asamblea Constituyente. Considerando: Que, la Asamblea Constituyente, de acuerdo al Mandato No. 1, de 29 de noviembre del 2007, asumió los plenos poderes. Que, el Código Penal ecuatoriano expresa en el artículo 98 "La acción penal se extingue por amnistía, o por remisión de la parte ofendida en los delitos de acción privada, o por prescripción" y el artículo 99 señala que "La amnistía no solamente hará cesar la acción penal sino también la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones civiles". Que, el abogado Luis Villacís Guillén, dentro del proceso de fusión de los bancos Filanbanco S.A. y la Previsora S.A., contó con los informes previos favorables de la Superintendencia de Bancos, Junta Bancaria, Intendente Nacional de Supervisión de Entidades Financieras, y otros, por tanto, actúo a nombre de la Agencia de Garantía de Depósitos, A.G.D, cumpliendo las decisiones del Directorio de esa entidad. Por ello, la responsabilidad penal es exclusiva de las autoridades de ese entonces, puesto que, en estas decisiones el Gerente no tiene voto o capacidad de resolver personalmente, solo tiene la obligación de ejecutar lo resuelto por el Directorio. Que, la politización de la justicia en materia procesal penal afecta gravemente a la seguridad jurídica, al debido proceso, a los derechos humanos, a la libertad individual, y a los principios universales del Derecho. En ejercicio de los plenos poderes de que se encuentra investida. Resuelve: Artículo 1.- Conceder amnistía a favor del Abogado Luis Villacís Guillén, por la evidente persecución política. Artículo 2.- Ordenar el archivo definitivo de todos los procesos judiciales penales, que se hubieren iniciado o se encuentran sustanciándose en

contra del Abogado Luis Villacís Guillén, relacionados con su gestión en calidad de Gerente de la A.G.D. Artículo 3.- La Función Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia cumplan con lo dispuesto en esta resolución. Disposición Final. Única.- La presente resolución entrará en vigencia de forma inmediata, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial". Hasta ahí el proyecto de Resolución puesto a consideración. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Si no hay ninguna intervención, proceda a votar, señor Secretario. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Noventa y cinco asambleístas presentes. Se pone a consideración de los señores asambleístas, la amnistía a favor del abogado, noventa y seis, perdón, a favor del abogado Luis Villacís Guillén. Quienes estén de acuerdo voten afirmativamente; caso contrario, negativo, blanco o abstención. Señores asambleístas, voten. Presente los resultados. Sesenta y cinco votos afirmativos; cuatro negativos; blancos dos; abstenciones veinticinco. Gracias, señor operador. ----------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Señor Presidente, pido rectificación de la votación. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Repita la votación, señor Secretario. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Volvemos a poner a consideración de todos los asambleístas, la Resolución para conceder amnistía a favor del abogado Luis Villacís Guillén. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Noventa y seis asambleístas. Se vuelve a votar

la Resolución para conceder amnistía a favor del abogado Luis Villacís Guillén. Quienes estén a favor, votan afirmativamente; caso contrario; no, blanco o abstención. Voten, señores asambleístas. Presente los resultados. Sesenta y ocho votos afirmativos; cuatro negativos; un blanco, y veintitrés abstenciones. Gracias, señor operador. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. La siguiente, señor Secretario. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. "3.6. Ex presidente Gustavo Noboa Bejarano". "La Asamblea Nacional Constituyente. Considerando. Que, el día 21 de mayo del año 2003, el entonces diputado León Febres Cordero Ribadeneira, efectuó en el Congreso Nacional una denuncia contra el ex Presidente de la República, doctor Gustavo Noboa Bejarano, por la renegociación de la deuda externa de la Nación. Que, debido a la referida denuncia, con fecha 22 de mayo de 2003, la Fiscalía General del Estado realizó una indagación previa y dos instrucciones fiscales, sobre la base de la presentación efectuada en el Congreso Nacional. Que tal denuncia derivó en una causa penal, actualmente en trámite por ante los tribunales de la República, por la disposición de 126.4 millones de dólares en Bonos Globales, en la que el doctor Gustavo Noboa Bejarano ha sido imputado del delito de encubrimiento de peculado, sin que esa denuncia involucrara a la consultora Salomón Smith Barney, ni a las autoridades de los bancos estatales involucrados, ni al Ministro de Economía Luis Iturralde. Que, el contrato de honorarios celebrado con Salomón Smith Barney en 1999, fue anterior a la gestión del Presidente de la República del doctor Gustavo Noboa Bejarano, limitándose éste a complementar lo que se había pactado oportunamente. Que, el informe oportunamente emitido por la Contraloría General del Estado, y de los que obran en la causa penal actualmente en trámite, surge que la disposición de los 126.4 millones de dólares en Bonos Global fue

destinado a través de los trámites administrativos correspondientes, a los bancos Pacífico y Filanbanco que estaban intervenidos por el Estado, teniendo este el ciento por ciento de las acciones de los mismos. Que, si bien las instituciones bancarias mencionadas en el punto precedente eran instituciones de derecho privado sometidas a ese régimen jurídico, no es posible desconocer que estaban manejadas por el Estado, y los fondos públicos que se destinaron como resultado de la venta de los Bonos Globales, fueron a bancos controlados por el Estado, no tratándose de una disposición del dinero del Estado para favorecer a bancos privados, ya que habían dejado de serlo. Que, si bien el Código de Procedimientos en lo Penal establece que la indagación previa no puede durar más de dos años, el trámite de indagatoria de las actuaciones ha excedido en más del doble del plazo, lo que significa una manifiesta ilegalidad. Que, sin entrar a considerar si hubo o no violación de los Decretos Ejecutivos que autorizaron la emisión de Bonos Globales y su destino específico, resulta evidente, que los fondos fueron depositados en bancos que eran del Estado, y no hubo en tal disposición el más mínimo beneficio patrimonial para el doctor Gustavo Noboa Bejarano. Que, resulta indudable que la prosecución del proceso penal, no evidencia el propósito de hacer justicia, sino de efectuar un tipo de persecución, que no se ajusta a las consecuencias de la causa penal, y muchos menos, a que haya existido algún tipo de beneficio personal para el ex Presidente Gustavo Noboa Bejarano, cuando se dispuso la asignación de fondos públicos a bancos que ya estaban intervenidos, sin que en su administración tuvieran injerencia sus anteriores accionistas. Que, la amnistía, significa borrar el delito, extinguir la acción penal derivada de cualquier hecho presuntamente ilícito, y generalmente se funda en la necesidad de reparar algún procedimiento injusto o de situaciones de orden político, que puedan afectar la armonía institucional, ante la perpetuación de un proceso

judicial que no responde al orden jurídico sino a motivaciones claramente políticas, que es necesario enfatizar. Que, al no existir en toda la documentación que sirve de sustento al proceso, la menor evidencia, de que a través de su gestión como Presidente del Ecuador, el doctor Gustavo Noboa Bejarano se haya beneficiado con esa negociación de fondos públicos, destinados a capitalizar a bancos del Estado, resulta inadmisible la continuación de un proceso arbitrario, que no responde a las normas correspondientes a la instrucción penal. Que, si bien la decisión de disponer de esos fondos puede ser cuestionada políticamente, no puede de manera alguna ser fundamento para una acción judicial, carente de los mínimos fundamentos para ser sustentada, pudiendo entenderse que la prosecución de la misma, obedece a una clara intencionalidad política, y no al esclarecimiento de un delito. En virtud de lo expuesto, se Resuelve. Artículo 1.- Amnistiar al ex Presidente de la República, doctor Gustavo Noboa Bejarano, y a todos aquellos intervinientes en los hechos que fueran materia de la imputación penal, por la utilización del remanente de Bonos Globales en proveer liquidez a los bancos Pacífico y Filanbanco, mediante transferencia de fondos a favor de los mismos. Artículo 2.- La amnistía que se decreta en este acto, se refiere en forma exclusiva al hecho enunciado en el artículo precedente, sin que la misma tenga relación alguna con todo lo referido a la renegociación de la deuda externa llevado a cabo durante la gestión del doctor Gustavo Noboa Bejarano, ya que se trata de dos hechos absolutamente diferentes. Artículo 3.- Que, debido a la amnistía decretada, ante la inexistencia de delito alguno como consecuencia de la misma, comuníquese al Poder Judicial a los efectos de que tome nota de lo dispuesto en la presente resolución. Artículo 4.- La decisión adoptada, no significará en ningún caso, extinguir cualquier acción derivada de las medidas económicas y políticas llevadas a cabo durante la gestión del doctor Gustavo Noboa

Bejarano, en especial todo el proceso de renegociación de la deuda pública y la consecuente emisión de Bonos Globales, que son materia de investigación por la Comisión de Auditoria Integral del Crédito Público, creada por Decreto Ejecutivo No. 472 el 9 de julio de 2007". Hasta ahí el texto del proyecto de Resolución que se pone a consideración de ustedes. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Hay otra propuesta, señor Secretario, pida que activen el sistema de votación. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Verifiquen que sus tarjetas electrónicas se encuentren insertas en sus curules. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleistas. Noventa y seis asambleístas. Está a consideración de ustedes, la propuesta de Resolución para amnistiar al doctor Gustavo Noboa Bejarano. Quienes estén de acuerdo voten afirmativamente; caso contrario, negativo, blanco o abstención. Presente los resultados. Sesenta y seis votos afirmativos; doce negativos; cero blancos; dieciocho abstenciones. Gracias, señor operador. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Rectifique la votación. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señores asambleístas, se va a volver a votar el proyecto de Resolución de amnistía para el ex Presidente de la República, doctor Gustavo Noboa Bejarano. Verifique señor operador, la presencia de los señores asambleístas. Noventa y seis asambleístas. Quienes estén de acuerdo, voten afirmativamente; caso contrario, no, blanco o abstención. Presente los resultados. Sesenta y siete votos sí; doce no; cero blancos; diecisiete abstenciones. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Vamos al indulto, señor Secretario. Continúe, Yo haré reconsiderar cuando crea procedente. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. "3.7. Indulto a las personas que transportan pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas y estupefacientes". "Considerando: Que, la Asamblea Constituyente, de acuerdo al Mandato Constituyente No. 1 aprobado el 11 de diciembre del 2007, asumió los Plenos Poderes. Que, en el mencionado Mandato de la Asamblea Constituyente asumió las atribuciones y deberes de la Función Legislativa. Que, respetar y hacer respetar los Derechos Humanos es el más alto deber del Estado. Que, es necesaria una reforma integral al sistema penitenciario en el Ecuador que se encuentra en emergencia por el hacinamiento de internos, la ausencia de verdaderos programas de reinserción social, el mal estado de sus instalaciones, produciendo una crisis humanitaria para todas las personas que se encucntran en los Centros de Rehabilitación Social. Que, varios artículos de la Ley de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, establecen para la tenencia, posesión ilícitas y transporte de sustancias sicotrópicas y estupefacientes sanciones con penas de doce a dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria y con multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales, sin distinguir el peso de las sustancias sujetas a fiscalización, por lo que no existe proporción en la determinación de la pena en relación a los hechos juzgados. Que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha considerado que las disposiciones de la Ley de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, ha provocado perjuicios indebidos a las personas. Que, es deber del Estado cumplir con el principio internacional de los Derechos Humanos de no discriminación y atender el carácter humanitario de las personas privadas de la libertad, quienes tienen derecho a vivir en condiciones de

detención compatibles con su dignidad personal. Que, en el caso concreto de las personas que transportan pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, denominadas "mulas", o que se dedican al pequeño comercio de las mismas, han recibido sentencias desproporcionadas entre el ilícito cometido y la sentencia, sin que exista la debida proporcionalidad entre el daño causado y la pena impuesta. Que, la pérdida de la libertad, origina la desintegración, desestabilización social y económica de las familias, en especial, en el caso de las hijas e hijos de las mujeres infractoras que permanecen en los Centros de Rehabilitación Social. Que, de acuerdo con el Mandato Constituyente 1, artículo 2, incisos segundo y tercero, "Las decisiones de la Asamblea son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma del orden jurídico y de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales, jurídicas y demás poderes públicos sin excepción alguna. Ninguna decisión de la Asamblea Constituyente será susceptible de control o impugnación por parte de alguno de los podcres constituidos. Los jueces y tribunales que tramiten cualquier acción contraria a las decisiones de la Asamblea Constituyente serán destituidos de su cargo y sometidos al enjuiciamiento correspondiente. De igual manera, serán sancionados los funcionarios públicos que incurran o promuevan, por acción u omisión, el desacato o desconocimiento de las disposiciones de la Asamblea Constituyente". Por lo que en uso de sus facultades contempladas en el Mandato Constituyente 1 y en el Reglamento de la Asamblea Constituyente; expide la siguiente Resolución para el Indulto de las Personas que Transportan Pequeñas Cantidades de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes. Artículo 1.- Indúltese a toda persona que estuviere sentenciada a pena privativa de libertad por los delitos de tráfico ilícito, transporte, tenencia y posesión ilícitas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, de acuerdo con los siguientes requisitos: a) Haber recibido sentencia condenatoria, al momento de la

publicación de la presente Resolución, en cualquiera de los delitos previstos en este artículo y no haber reincidido en ellos. b) El peso neto de la sustancia estupefaciente y psicotrópica por la que fue sentenciado, debió ser equivalente o menor a 2 kilogramos, de acuerdo con la pericia que consta en el proceso correspondiente; y, c) La persona solicitante deberá haber cumplido el 10% de la sentencia impuesta con un mínimo de un año, aunque este requisito se cumpla con posterioridad a la expedición de esta resolución. Artículo 2.- El presente indulto también beneficiará a aquellas personas sentenciadas por los Tribunales Penales, cuyas causas se encuentren en consulta o casación, siempre que se cumplan los requisitos del artículo anterior. Artículo 3.- Los Tribunales Penales, Salas Penales de la Corte Superior y Salas Penales de la Corte Suprema, según sea el caso, de oficio o a petición de parte, una vez que se cumplan los requisitos establecidos en esta resolución, en el plazo máximo de treinta días, dictarán la orden de excarcelación. Artículo 4.- Los extranjeros, que no estén regularizados en el Ecuador y que obtengan la libertad por efecto de esta resolución, serán deportados de conformidad con las normas legales pertinentes, para lo cual se notificará a las Embajadas o Consulados de sus respectivos países. Artículo 5.- Para los casos de adolescentes infractores que estén cumpliendo internamiento preventivo por los delitos establecidos en la presente resolución, se dictará la revocatoria del mismo por parte de los jueces competentes. Disposiciones generales.- Primera.- Para los casos de indulto, el retardo de los jueces o magistrados en el cumplimiento de esta Resolución será causal de destitución de los mismos por parte del Consejo Nacional de la Judicatura o del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de las acciones penales, civiles y administrativas en contra de los Magistrados, Jueces, autoridades administrativas o policiales que no cumplan con el procedimiento o con la orden de excarcelación. Segunda.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

les dará todas las facilidades para que esta resolución sea cumplida eficazmente". Hasta ahí el texto de Resolución que se pone a consideración del Pleno, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Procedemos a votar. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Ochenta y cinco asambleístas. Está a consideración de ustedes, la Resolución para el indulto de las personas que transportan pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Quienes estén de acuerdo, voten afirmativamente; caso contrario, pueden votar no, blanco o abstención. Presente los resultados. Setenta y seis votos afirmativos; cero negativos; cero blancos; nueve abstenciones. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente punto, señor Secretario. ----------

VII

EL SEÑOR SECRETARIO. "4. Designación de un miembro del Directorio del Banco Central". ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Proceda, señor Secretario. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. "Señor Arquitecto. Fernando Cordero Cueva. Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Ciudad Alfaro. De mi consideración: Contesto al oficio No. PAC-2008-0058 de 10 de enero de 2008, suscrito por el economista Alberto Acosta, e ingresado a la Presidencia de la República el 11 de los mismos mes y año, con el cual, me remite copia de la comunicación del señor Eduardo Cabezas Molina,

mediante la cual presenta su renuncia irrevocable al cargo de Presidente y miembro del Directorio del Banco Central del Ecuador. Al respecto, le hago saber, que de conformidad con lo que establecen los artículos 262 de la Constitución Política de la República y 58 de la Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado, propongo a la Economista Karina de Lourdes Sáenz Quintuña, para ocupar el cargo de Miembro del Directorio del Banco Central del Ecuador. Acompaño, para el efecto, la calificación previa de la referida candidata, expedida por la Superintendenta de Bancos y Seguros, que la habilita a ejercer tal función, conforme lo establece el artículo 59 de la ley ibidem, conjuntamente con su hoja de vida. Para lo cual solicito se efectúe la designación correspondiente, en el plazo establecido en la Carta Magna. Atentamente, Dios, Patria y Libertad. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República". Hasta ahí el texto, señor Presidente. ---

EL SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a tomar la decisión sobre este nombramiento. Active el sistema de votación. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Se pone a consideración de ustedes, la comunicación del Presidente de la República, en el sentido de que se designe como miembro del Directorio del Banco Central, a la economista Karina de Lourdes Sáenz Quintuña. Ochenta y dos asambleistas presentes. Continúe, señor operador. Quienes estén de acuerdo, voten afirmativamente; caso contrario, negativo, blanco o abstención. Señores asambleístas, voten. Presente los resultados, por favor. Setenta y cuatro votos afirmativos; cero negativos; tres blancos; cinco abstenciones. Gracias, señor operador. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente punto, señor Secretario. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. "5. Votación de los textos constitucionales presentados para Segundo Debate, referentes a: 5.1 De la naturaleza y el Ambiente. 5.2 De la Función Ejecutiva". Continuamos, señor Presidente. "Título VI: Régimen de Desarrollo. Capítulo II. El Buen vivir. Sección IV: La Naturaleza y Ambiente. Artículos aprobados por la subcomisión de segundo debate, para votación en el Pleno de la Asamblea". Los textos están... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, perdón. Tiene que el ponente intervenir, tiene diez minutos. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. La subcomisión está conformada por los asambleístas Jorge Aguirre Torres, Félix Alcivar, Manuel Mendoza. ------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra, asambleísta Aguirre. ---------

EL ASAMBLEÍSTA AGUIRRE JORGE. Gracias, compañero Presidente. Voy a ser muy breve en la exposición, voy a indicar directamente, cómo se ha procedido con este articulado. Nuevamente cabe indicar que se ha procedido a cambiar el artículo primero, en el literal a), el término "sustentable" con el de "sustentabilidad". Eso, con el fin de que tenga concordancia con el resto de principios y que de esta manera quede establecido como un principio y no como un sistema de gobierno. En el artículo segundo hemos unificado el literal a), b) y parte del c), con el fin de darle claridad a la redacción y de esta manera no caer en redundancias innecesarias. En el literal f) y el g), de igual manera, se lo ha unificado para no caer en discordancia en presentación de los artículos. En el caso de los artículos cuatro, cinco y seis, se ha tomado

en cuenta que la Mesa Tres de Estructura del Estado, es la que tendría que regular las funciones de lo que significaría el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, (SNDGA), la Superintendencia del Ambiente, y la Defensoría del Ambiente y la Naturaleza. Por lo que hemos suprimido los artículos cinco y seis, y hemos procedido a establecer con literales, el anuncio de su creación, indicando que "la ley regulará el funcionamiento de cada organismo". La Comisión ha permitido unificar y dar una mejor redacción al presente articulado, permitiendo que en el artículo primero, perdón, en el artículo uno, se suprima un literal; en el artículo segundo se supriman dos literales, y en el total del articulado, se han suprimido dos artículos. De esta manera quedan establecidos cinco artículos y una Transitoria, que da un plazo de ciento ochenta días para crear una Ley Orgánica del Ambiente, la misma que se manejará bajo principios y normativas ambientales de protección y de sustentabilidad, en armonía con la naturaleza. De ahora en adelante, podemos decir, compañeros y compañeras asambleistas, que ya no se establecerán criterios de consulta a través de grandes empresas trasnacionales, las mismas que a través de un vaso de cola y un pan tomaban sus criterios respectivos y engañaban a las poblaciones de los lugares. Hoy el Estado se encargará de manejar esa actividad y directamente podremos decir que hemos instaurado principios, garantías e instancias superiores que hagan cumplir con estos parámetros de defensa de la pachamama o de nuestra madre naturaleza. Gracias, compañero Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Señor Secretario, procedemos a votar artículo por artículo. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. En este momento, señor Presidente. "Artículo 1. Principios ambientales: La presente Constitución garantiza el

cumplimiento de los siguientes principios ambientales: a) Sustentabilidad: El Estado garantiza un modelo de desarrollo ambientalmente sustentable equilibrado, respetuoso de la diversidad cultural, conservando la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, asegurando la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. b) Precaución: En caso de dudas sobre el impacto o las consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. c) Prevención: El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. d) Transversalidad: Las políticas de gestión ambiental respetarán este principio y serán de obligatorio cumplimiento del Estado, los gobiernos seccionales autónomos y en general todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. e) Participación: El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectados, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. f) Responsabilidad: Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado y de mantener un sistema de control ambiental permanente. La responsabilidad también recaerá sobre las autoridades y/o funcionarios encargados o responsables de realizar el control ambiental. g) Reparación: Todo daño al ambiente además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de reparar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. h) Prevalencia: En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. i) Imprescriptibilidad: Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales son imprescriptibles. La ley regulará la aplicación de los principios ambientales precedentes". Hasta ahí el artículo uno. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleistas. Está a consideración de ustedes, el articulo uno de la Sección Cuarta: La Naturaleza y Ambiente. El artículo uno correspondc a los Principios Ambientales. Quien esté de acuerdo, votará afirmativamente; caso contrario, no, blanco o abstención. Hay ochenta asambleístas presentes. Señores asambleístas, voten. Presente los resultados, por favor. Setenta y ocho votos afirmativos; cero negativos; un blanco; una abstención. "Artículo 2.- Garantías.- El Estado..."----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siga. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Gracias, señor operador. Señor operador, permítanos ver el articulo en la pantalla. "Gracias. Articulo 2 Garantías.- El Estado garantizará el derecho de sus habitantes de mancra individual y colectiva a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a través de: a) El acceso a los órganos jurisdiccionales y administrativos, por parte de cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, sin perjuicio de su interés directo y a obtener de ellos la tutela en materia ambiental, incluyendo las medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia del litigio para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o una decisión administrativa, sin que sea necesario el cumplimiento de requisito alguno. La carga de la prueba sobre el daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. b) Toda persona natural o juridica debidamente facultada para acudir ante un juez, tribunal o autoridad. c) La prevención y control de la

contaminación ambiental, la recuperación de espacios naturales degradados y el manejo sustentable de los recursos naturales, a través del desarrollo y la aplicación de la legislación pertinente. d) La regulación de la producción, importación, distribución, uso y disposición final de sustancias tóxicas y peligrosas para las personas y el ambiente. e) La prohibición del desarrollo, producción, importación, transporte, almacenamiento y uso de: armas químicas, biológicas y nucleares; contaminantes orgánicos persistentes, agroquímicos internacionalmente prohibidos; y, organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana, que atenten contra la soberanía alimentaria y/o los ecosistemas. Y la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. f) La intangibilidad de las Áreas Naturales Protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas, cuyo manejo y administración estará a cargo del Estado. g) El establecimiento de un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales basados en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad". Hasta ahí el artículo dos. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Está a consideración de los señores asambleistas, el artículo dos de la Sección Cuarta: La Naturaleza y el Ambiente. El artículo dos corresponde a Garantías. Ochenta y dos asambleístas presentes. Quienes estén de acuerdo, votarán afirmativamente; caso contrario, voten no, blanco o abstención. Señores asambleistas, voten. Señor operador, presente los resultados. Setenta y nueve votos afirmativos; cero negativos; dos blancos; una abstención. Gracias, señor operador. Presente la pantalla, por favor, para el articulado. "Artículo 3 De la Consulta Previa e Informada: Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y

oportunamente. El sujeto consultante es el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad en virtud de los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales sobre derechos fundamentales. Si del referido proceso de consulta, resultare una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será tomada, solo a través de resolución debidamente motivada por la instancia superior administrativa correspondiente de acuerdo a la ley". Hasta ahi el artículo tres. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Está a consideración de ustedes, el artículo tres, De la consulta previa e informada. Ochenta y dos asambleístas. Quienes estén de acuerdo con el articulo tres, voten afirmativamente; caso contrario, pueden votar no, blanco o abstención. Señores asambleístas, voten. Señor operador, presente los resultados. Setenta y dos votos afirmativos; cero negativos; dos blancos; ocho abstenciones. Gracias, señor operador. Por favor, presente la pantalla para el articulado. "Artículo 4 Para el ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de los ciudadanos en su preservación, se establece: a.- El sistema nacional descentralizado de gestión ambiental (SNDGA). b.- Superintendencia del Ambiente. c.- La defensoría del ambiente y la naturaleza. La Constitución y la Ley regulará el funcionamiento de cada organismo". Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas electrónicas se encuentren insertas en sus curules. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Ochenta y dos asambleístas presentes. Está a consideración de ustedes, el articulo cuatro. Quienes estén de acuerdo, voten afirmativamente; caso contrario, no, blanco o abstención. Señores asambleístas, voten. Presente los resultados, por favor. Setenta y siete

votos afirmativos; cero negativos; cuatro blancos; una abstención. Gracias, señor operador. Presente la pantalla para el artículo, por favor. "Artículo 5 Las políticas, normas y decisiones administrativas de los gobiernos seccionales autónomos relativas a la gestión ambiental se subordinarán a los principios ambientales y a la planificación nacional establecida en esta Constitución". Hasta ahí el artículo cinco. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Está a consideración de ustedes, el artículo cinco. Ochenta y dos asambleístas presentes. Quienes estén de acuerdo con el artículo cinco, voten afirmativamente; caso contrario, no, blanco o abstención. Señores asambleístas, voten. Presente los resultados. Ochenta votos afirmativos; cero negativos; dos blancos; cero abstenciones. Gracias, señor operador. Disposición Transitoria. De la Sección Cuarta: La naturaleza y ambiente. "La Función Legislativa en el plazo de 180 días a partir de su instalación, expedirá la Ley Orgánica del Ambiente, bajo los principios ambientales y la planificación nacional establecida en esta Constitución". Está a consideración de ustedes, la Disposición Transitoria que acaba de ser leída. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Ochenta y uno. Quienes estén de acuerdo con la Disposición Transitoria, voten afirmativamente; caso contrario, no, blanco o abstención. Señores asambleístas, voten. Señor operador, presente los resultados. Ochenta votos afirmativos; cero negativos; un blanco; cero abstenciones. Gracias, señor operador. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Pasamos a los artículos de la Función Ejecutiva, señor Secretario. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Corresponde la intervención del ponente, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra, Gustavo Darquca. ----------

EL ASAMBLEÍSTA DARQUEA GUSTAVO. Gracias, señor Prcsidente. Compañeras y compañeros asambleístas: Lamentablemente, ya es una hora bastante complicada; sin embargo, creo que nuestra decisión de poder avanzar en la aprobación de textos, pues hace que agradezcamos la presencia de todos los compañeros y compañeras que nos mantenemos a esta hora de la noche. Básicamente hemos entregado a todos ustedes, el informe de la subcomisión, donde se indican todos los cambios que se hicieron luego de recibir dieciocho observaciones de los asambleístas, y enumeraré brevemente los cambios más importantes. En el articulo uno, el primer inciso, -no sé si puede proyectar, por favor el articulado- en el artículo uno, en el primer inciso se eliminó la frase "representante del Estado ecuatoriano" para evitar confusiones con las funciones del Procurador General del Estado, ya que la denominación de "Jefe de Estado y de Gobierno" es suficiente. El artículo dos, sobre el período de gobierno, pasó a ser el artículo cuatro, a fin de establecer un ordenamiento secuencial más lógico. En el artículo tres, se eliminó la frase "mediante sufragio universal directo y secreto", porque esto ya se encuentra descrito en otra parte de la Constitución. En el artículo cinco numeral tres, respecto de las razones por las cuales dejará vacante el cargo el Presidente, se eliminó la frase "previo cnjuiciamicnto político", dejando solamente "por destitución, de acuerdo a lo dispuesto por esta Constitución", a fin de establecer coherencia con la disposición correspondiente de la Función Legislativa. Quizás el cambio más importante es del artículo siete, -pase al artículo siete, por favor- en el caso de falta simultánea y definitiva del Presidente o Vicepresidente, -es el segundo inciso- a fin de evitar un desfase con el período de los miembros de la Asamblea Nacional, lo cual sería realmente complicado, se eliminó la frasc "por un nuevo período de cuatro años" y se puso en

su lugar "hasta completar el período", y se añadió además, el inciso final que dice: "en el caso que faltare un año o menos, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional asumirá la Presidencia de la República por el resto del período". Claro, que estos son insucesos que hasta ahora en ciento cincuenta años de la vida republicana del país, creo que no han sucedido y espero que no sucedan. Luego, el resto de artículos, simplemente se hizo una mejora de la redacción, a fin de mejorar la comprensión. En el artículo dieciséis, por ejemplo, en lugar de "áreas" se sustituyó por la palabra "competencias" con relación a los ministros de Estado. Y en el artículo diecisiete numeral tres, se sustituyó la frase "Fuerza Pública" por "Fuerzas Armadas y Policía Nacional" para establecer concordancia con el texto relativo a este tema elaborado por nuestra Mesa. Así que esos son los cambios fundamentales que se han hecho, y queremos agradecer a todos y todas, por las importantes contribuciones que hicieron tanto en el primero y en el segundo debate, y especialmente a todos los compañeros de la Mesa Tres, que trabajaron arduamente para poder tener un texto adecuado en este tema tan importante, señor Presidente, Muchas gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a ir votando artículo por artículo. -----

EL SEÑOR SECRETARIO. En este momento, señor Presidente. "Articulado Final sobre Función Ejecutiva. Propuesta de Articulado Final. Título IV. La Organización del Poder. Capítulo 3. De las Funciones del Estado. Sección Tercera. De la Función Ejecutiva. Artículo 1.- La Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública. La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado

y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación dc las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas". Hasta ahí el artículo uno, de la Función Ejecutiva. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Ochenta asambleístas. Quienes estén de acuerdo con el artículo uno, voten afirmativamente; caso contrario, no, blanco o abstención. Señores asambleístas, voten. Presente los resultados, por favor. Setenta y tres votos afirmativos; cero negativos; siete blancos; cero abstención. ----------

EL ASAMBLEÍSTA..... Presidente, reconsideración de la votación, Presidente. Rectificación, perdón. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, proceda a rectificar la votación. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señores asambleistas, se vuelve a poner a consideración de ustedes, el artículo uno, de la Función Ejecutiva. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Ochenta y un asambleístas presentes. Está a consideración de ustedes, el artículo uno. Señores asambleístas, voten. Presente los resultados, por favor. Ochenta votos afirmativos; cero negativos; un blanco; cero abstenciones. "Articulo dos. -señor operador, permítanos la pantalla, por favor- La Presidenta o Presidcnte de la República... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Un momento, señor Secretario. No hay cómo rectificar dos veces una votación, dice el Reglamento. Lea el Reglamento exactamente en la parte pertinente. No le oigo. Por favor, María Cristina, si puedes conectar el micrófono. ----------

LA ASAMBLEÍSTA KRONFLE MARÍA CRISTINA. Yo voté, señor Presidente, mi voto salió confirmado, y salió en blanco en la pantalla. Si realmente mi voto no sirve, digame nomás y yo me retiro en este momento. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. No, de ninguna manera, María Cristina, debe ser algún problema electrónico. Revise, por favor, el aparato que esté adecuadamente instalada la tarjeta. No se registra el voto cuando no está con buen contacto la tarjeta. Por favor, que en la revisión se verifique quc esté como presente la Asambleísta. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor operador, volvemos a votar el articulo uno. Verifique la presencia de los señores asambleístas. Presente en la pantalla, por favor. Se vuelve a someter a consideración de ustedes, el artículo uno, de la Función Ejecutiva. Ochenta y un asambleístas presentes. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Vuelva a hacer funcionar el sistema. Voten, por favor, señores asambleístas----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señores asambleistas voten, por favor. Ya está en buenas condiciones la curul ciento dieciséis. Presente los resultados, por favor. Ochenta votos afirmativos; un blanco. Gracias, señor operador. "Artículo 2.- La Presidenta o Presidente de la República debe ser ecuatoriana o ecuatoriano por nacimiento, haber cumplido treinta y cinco años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura, estar en goce de los derechos politicos y no encontrarse incursa ni incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones prescritas en esta Constitución". Hasta ahí el artículo dos. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Se pone a

consideración de ustedes, el artículo dos. Ochenta y un asambleístas presentes. Señores asambleistas, voten. Presente los resultados, por favor. Por el artículo dos, ochenta y un votos afirmativos; cero negativos; cero blancos; cero abstenciones. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente artículo, señor Secretario. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. "Artículo 3. -Los nombres de los candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República, constarán en la misma papeleta. La Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta o el Vicepresidente serán elegidos por mayoría absoluta de votos válidos emitidos. Si en la primera votación ningún binomio hubiere logrado mayoría absoluta, se realizará una segunda vuelta electoral dentro de los siguientes cuarenta y cinco dias, y en ella participarán los dos binomios más votados en la primera vuelta. No será necesaria la segunda votación, si el binomio que consiguió el primer lugar, obtuvo al menos el cuarenta por ciento de los votos válidos y una diferencia mayor de diez puntos porcentualcs sobre la votación lograda por el binomio ubicado en el segundo lugar". Hasta ahí el artículo tres. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Ochenta y un asambleístas presentes. Está a consideración de ustedes, el artículo tres. Señores asambleistas, voten. Presente los resultados, por favor. Setenta y siete votos afirmativos; cero negativos; tres blancos; una abstención. "Artículo 4.- El período de gobierno de la Presidenta o del Presidente de la República se iniciará dentro de los diez dias posteriores a la instalación de la Asamblea Nacional, ante la cual prestará juramento. En caso de que la Asamblea Nacional se encuentre instalada, el periodo de gobierno se iniciará dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la proclamación de los resultados electorales. La Presidenta o Presidente de la República durará cuatro años en sus

funciones y podrá ser reelecta o reelecto por una sola vez". Hasta ahí el artículo cuatro. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Ochenta y un asambleístas. Está a consideración de ustedes, el artículo cuatro. Señores asambleístas, voten. Presente los resultados, por favor. Setenta y nueve votos afirmativos; uno negativo; un blanco; cero abstenciones. "Artículo 5.- La Presidenta o el Presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los casos siguientes: 1. Por terminación del período para el cual fue elegida o elegido; 2. Por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional; 3. Por destitución, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución; 4. Por incapacidad física o mental permanente, que le impida ejercer el cargo, certificada de acuerdo con la ley, por un comité de médicos especializados, y declarada por la Asamblea Nacional con los votos de las dos terceras partes de sus integrantes; 5. Por abandono del cargo, comprobado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional con los votos de las dos terceras partes de sus integrantes; y, 6. Por revocatoria del mandato, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución". Artículo 5. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Ochenta y un asambleístas presentes. Está a consideración de ustedes, el artículo cinco. Señores asambleístas, voten. Presente los resultados, por favor. Setenta y seis votos afirmativos; cero negativos; cero blancos; cinco abstenciones. "Artículo 6.- En caso de ausencia temporal de la Presidenta o del Presidente de la República, la reemplazará o lo reemplazará la Vicepresidenta o el Vicepresidente. Serán causas de ausencia temporal de la Presidenta o del Presidente de la República, la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un periodo máximo de tres meses o la licencia concedida por la Asamblea Nacional". Hasta ahí el artículo seis. Ochenta y un asambleístas presentes. Está a consideración de ustedes,

el articulo seis. Señores asambleístas, voten. Presente los resultados, por favor. Ochenta y un votos afirmativos; cero negativos; cero blancos; cero abstenciones. "Articulo 7.- En caso de falta definitiva de la Presidenta o del Presidente de la República, lo reemplazará la Vicepresidenta o el Vicepresidente por el tiempo que reste para completar el correspondiente periodo presidencial. Si faltare simultánea y definitivamente la Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta o el Vicepresidente de la República, la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional asumirá temporalmente la Presidencia, y en el término de cuarenta y ocho horas el Consejo Nacional Electoral convocará a elección para dichas dignidades. Las elegidas o los elegidos ejercerán sus funciones hasta completar el periodo. En el caso de que faltare un año o menos, la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional asumirá la Presidencia de la República por el resto del período". Hasta ahí el artículo siete. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Ochenta y un asambleistas presentes. Está a consideración de ustedes, el artículo siete. Señores asambleístas, voten. Presente los resultados, por favor. Setenta y siete votos afirmativos; cero negativos; cuatro blancos; cero abstenciones. "Artículo 8.- La Presidenta o el Presidente de la República, durante su mandato y hasta un año después de haber cesado en sus funciones, deberá comunicar a la Asamblea Nacional, con antelación a su salida, el período y las razones de su ausencia del país". Hasta ahi el articulo ocho. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Está a consideración de ustedes, el artículo ocho. Ochenta asambleistas. Señores asambleistas, voten. Presente los resultados, por favor. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Rectifique la votación, señor Secretario. ------

EL SEÑOR·SECRETARIO. Señores asambleístas, volvemos a votar el artículo ocho. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Ochenta asambleístas presentes. Está a consideración de ustedes, nuevamente el artículo ocho. Señores asambleístas, voten. Presente los resultados, por favor. Ochenta votos afirmativos; cero negativos; cero blancos; cero abstención. "Artículo 9.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o del Presidente de la República: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados y convenios internacionales y demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia; 2. Presentar al momento de su posesión ante la Asamblea Nacional los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará durante su ejercicio; 3. Definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva; 4. Presentar al Consejo Nacional de Planificación la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo para su aprobación; 5. Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control; 6. Crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades de instancias de coordinación; 7. Presentar anualmente a la Asamblea Nacional, el informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno se proponga alcanzar durante el año siguiente; 8. Enviar la proforma del Presupuesto General del Estado a la Asamblea Nacional, para su aprobación; 9. Nombrar y remover a los ministros de Estado y a los demás funcionarios cuya nominación le corresponda; 10. Definir la política exterior, suscribir los tratados y convenios internacionales, nombrar y remover a embajadores y jefes de misión, de conformidad con la Constitución y la ley; 11. Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de las leyes, en la forma prevista en la Constitución; 12. Sancionar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional y ordenar su promulgación en el Registro Oficial; 13.

Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración; 14. Convocar a consulta popular en los casos y con los requisitos previstos en la Constitución y la ley; 15. Convocar a la Asamblea Nacional a períodos extraordinarios de sesiones, determinando los asuntos específicos que se conocerán durante tales períodos; 16. Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial, de acuerdo con la Constitución y la ley; 17. Velar por el mantenimiento de la Soberanía e independencia del Estado, del orden interno y de la seguridad pública, y ejercer la dirección política de la defensa nacional; 18. Indultar, rebajar o conmutar las penas, de conformidad con la ley; 19. Los demás deberes y atribuciones que le confiera la Constitución y las leyes". Hasta ahí el artículo nueve. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Ochenta y uno. Está a consideración de ustedes, el artículo nueve, que acaba de ser leído. Señores asambleístas, voten. Presente los resultados, por favor. Ochenta votos afirmativos; cero negativos; un blanco; cero abstenciones. "Artículo 10.- La Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional, cuando a su juicio ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruya la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez, durante su mandato, en los tres primeros años del mismo y conlleva también la convocatoria a elecciones presidenciales. En un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los

respectivos períodos. Para estas elecciones se aplicará lo dispuesto en la Constitución y la ley. Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la Presidenta o el Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de constitucionalidad de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo". Hasta ahí el artículo diez. Señor operador, verifique la presencia dc los señores asambleístas. Ochenta y un asambleístas. Está a consideración de ustedes, el artículo diez. Señores asambleístas, voten. Señor operador, presente los resultados. Setenta y tres votos afirmativos; un negativo; un blanco; seis abstenciones. Gracias, señor operador. "Artículo 11.- La Vicepresidenta o el Viccprcsidcntc de la República cumplirá los mismos requisitos y estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones que la Presidenta o el Presidente de la República y desempeñará sus funciones por igual período". Hasta ahí el artículo once. Ochenta y un asambleístas presentes. Está a consideración de ustedes, el artículo once. Señores asambleístas, voten. Presente los resultados, por favor. Setenta y sicte votos afirmativos; cero negativos; cuatro blancos; cero abstención. "Artículo 12.- La Vicepresidenta o el Vicepresidente de la República, cuando no reemplace a la Presidenta o al Presidente de la República, ejercerá las funciones que ésta o éste le asigne". Hasta ahí el artículo doce. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Ochenta y un asambleístas presentes. Artículo doce. Está a consideración de ustedes, el artículo docc. Voten, señores asambleístas. Presente los resultados, por favor. Setenta y nueve votos afirmativos; cero negativos; cero blancos; dos abstenciones. "Artículo 13.- En caso de ausencia temporal de la Vicepresidenta o del Vicepresidente de la República, la reemplazará o lo reemplazará en sus funciones la Ministra o el Ministro de Estado que sea designada o designado por la Presidenta o el Presidente de la República. Serán

causas de ausencia temporal de la Vicepresidenta o del Vicepresidente de la República, la enfermedad debidamente demostrada u otra circunstancia que le impida ejercer su función durante un periodo máximo de tres meses o la licencia concedida por la Asamblea Nacional". Hasta ahí el artículo trece. Verifique la presencia de los señores asambleístas, señor operador. Está a consideración de ustedes, el artículo trece. Ochenta y un asambleístas presentes. Señores asambleístas, voten. Está a consideración el artículo trece. Presente los resultados, por favor. Setenta y nueve votos afirmativos; cero negativos; dos blancos; cero abstenciones. "Artículo 14.- En caso de falta definitiva de la Vicepresidenta o del Vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional elegirá su reemplazo, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, de una terna que será presentada por la Presidenta o el Presidente de la República. La Vicepresidenta elegida o el Vicepresidente elegido ejercerán sus funciones por el tiempo que falte para completar el período de Gobierno. Si la Asamblea Nacional omite pronunciarse en el plazo de treinta días de notificada la petición, se entenderá elegida o elegido la primera o el primero de la terna enviada por la Presidenta o el Presidente de la República". Hasta ahí el artículo catorce. Verifique la presencia, señor operador. Ochenta y un asambleístas presentes. Está a consideración de ustedes, el artículo catorce, que acaba de ser leído. Señores asambleístas, voten. Resultados, por favor, señor operador. Ochenta votos afirmativos; cero negativos; un blanco; cero abstenciones. "Artículo 15.- Las ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción por la Presidenta o Presidente de la República, y lo representarán en los asuntos propios del ministerio a su cargo. Serán responsables política, civil y penalmente por los actos y contratos que realicen en el ejercicio de sus funciones, con independencia de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado". Hasta ahí el artículo quince. Señor operador,

verifique la presencia de los señores asambleístas. Ochenta y un asambleístas presentes. Está a consideración de ustedes, el artículo quince. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Vuelva a repetir. Reactive el sistema, se apagaron. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señores asambleístas, está a consideración de ustedes, el artículo quince. Voten, por favor. Presente los resultados, por favor. Setenta y nueve votos afirmativos; cero negativos; dos blancos; cero abstenciones. "Artículo 16.- Para ser designada ministra o ser designado ministro de Estado se requiere tener la nacionalidad ecuatoriana, estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse en ninguno de los casos de inhabilidad o incompatibilidad previstos en la Constitución o en la ley. El número de o ministras y ministros de Estado... La letra o está en exceso. "El número de ministras y ministros de Estado, su denominación y las competencias que se les asigne serán establecidos mediante decreto expedido por la Presidenta o el Presidente de la República". Hasta ahí el artículo dieciséis. Verifique la presencia de los señores asambleístas, por favor. Ochenta y un asambleístas presentes. Está a consideración de ustedes, el artículo dieciséis. Presente los resultados, por favor. Por el artículo dieciséis, setenta y siete votos afirmativos; cero negativos; tres blancos; una abstención. "Artículo 17.- No podrán ser ministras o ministros: 1. Los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de la Presidenta o del Presidente o de la Vicepresidenta o del Vicepresidente de la República; 2. Las personas naturales, propietarias, miembros del directorio, representantes o apoderadas de personas jurídicas nacionales o extranjeras, que mantengan contrato con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o

explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual; 3. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo; y, 4. Las personas que se hallen en alguno de los casos de inhabilidad o incompatibilidad previstos en la Constitución o en la Ley". Hasta ahí el artículo diecisiete. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Ochenta y un asambleístas presentes. Está a consideración de ustedes, el artículo diecisiete. Señores asambleístas, voten. Presente los resultados, por favor. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, rectificamos el voto del artículo dieciocho. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Volvemos a votar el artículo diecisiete. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Se vuelve a poner a consideración de ustedes, el artículo diecisiete. Ochenta y un asambleístas presentes. Volvemos a votar el artículo diecisiete. Señores asambleístas, voten. Presente los resultados, por favor. Setenta y siete votos afirmativos; Cero negativos; cuatro blancos; cero abstenciones. "Artículo 18.- Las ministras o ministros de Estado y las funcionarias y los funcionarios públicos de nivel jerárquico superior definidos por la ley, una vez que hayan cesado en su cargo y durante los siguientes dos años no podrán formar parte del directorio o del equipo de dirección, o ser representantes legales o apoderadas o apoderados de personas jurídicas nacionales o extranjeras que celebren contrato con el Estado, para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual, o ser funcionarias o funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país". Hasta ahí el artículo dieciocho. Verifique la presencia, señor operador.

Ochenta y un asambleístas presentes. Está a consideración de ustedes, el artículo dieciocho. Señores asambleístas, voten. Presente los resultados, por favor. Setenta y nueve votos afirmativos; cero negativos; un blanco; una abstención. "Artículo 19.- A las ministras y a los ministros de Estado les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión; 2. Presentar ante la Asamblea Nacional los informes que le sean requeridos y que estén relacionados con las áreas bajo su responsabilidad, y comparecer cuando sean convocadas y convocados o sometidas y sometidos a enjuiciamiento político; y, 3. Ejercer las demás atribuciones y obligaciones establecidas en esta Constitución y en la ley". Está a consideración de ustedes, el artículo diecinueve. Verifique la presencia, señor operador. Ochenta y un asambleístas presentes. Está a consideración de ustedes, el artículo diecinueve. Voten, señores asambleístas. Presente los resultados, por favor. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Les pido que permanezcan dos minutos en la sala, necesito darles una información importante. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Ochenta votos afirmativos; cero negativos; un blanco; cero abstenciones. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tengan la bondad, señores asambleístas. Este es un tema importante que necesito que me escuchen dos minutos. No pueden haber malos entendidos en el Pleno. El artículo veintinueve dice, no les voy a cansar leyéndoles, pero en la parte pertinente dice que cerrada una discusión, un debate, ningún Asambleísta puede tomar la palabra. Ustedes tienen al frente, a un compañero de los que somos de Acuerdo País, a un compañero de los

que no son de Acuerdo País. Yo tengo que ser absolutamente imparcial cuando manejo el Reglamento, no puedo ver a unos de una manera y a otros de otra manera. En mí, en lo personal no puede haber ningún intento de discriminación con ningún Asambleísta, peor con una compañera como Fanny Sotomayor. Si ella, por un malentendido del manejo del reglamento, cree que yo le he discriminado, le pido públicas disculpas, pero era por el manejo estricto del reglamento. Fanny, así es que te ruego que aceptes las disculpas, yo no tengo nada que pueda excluirte a ti. Compañeros, yo les pido un voto de aplauso para una mujer excepcional, que se queda hasta este rato, para Cristina. Recuerden, ocho y media mañana. Disculpen, me equivoqué, me equivoqué, a la hora que esté convocada, no sé a qué horas es. ----------

IX

El señor Presidente clausura la sesión, cuando son las veintitrés horas quince minutos. ----------

FERNANDO CORDERO CUEVA
Presidente de la Asamblea Constituyente

FRANCISCO VERGARA ORTIZ
Secretario de la Asamblea Constituyente

GOB/.